

Rafael del Riego

Una vida por la Constitución

CLARA ÁLVAREZ ALONSO



RAFAEL DEL RIEGO
Una vida por la Constitución

The Figuerola Institute
Programme: Legal History

The Programme "Legal History" of the Figuerola Institute of Social Science History –a part of the Carlos III University of Madrid– is devoted to improve the overall knowledge on the history of law from different points of view –academically, culturally, socially, and institutionally– covering both ancient and modern eras. A number of experts from several countries have participated in the Programme, bringing in their specialized knowledge and dedication to the subject of their expertise.

To give a better visibility of its activities, the Programme has published in its Book Series a number of monographs on the different aspects of its academic discipline.

Publisher:
Carlos III University of Madrid

Book Series:
Legal History

Editorial Committee:
Manuel Ángel Bermejo Castrillo, *Universidad Carlos III de Madrid*
Catherine Fillon, *Université Jean Moulin Lyon 3*
Manuel Martínez Neira, *Universidad Carlos III de Madrid*
Carlos Petit, *Universidad de Huelva*
Cristina Vano, *Università degli studi di Napoli Federico II*

More information at www.uc3m.es/legal_history

RAFAEL DEL RIEGO
Una vida por la Constitución

Clara Álvarez Alonso

DYKINSON
2021

Motivo de cubierta:
Hippolyte Lecomte, retrato de Rafael Riego (1820)

Historia del derecho, 103
ISSN: 2255-5137

© 2021 Clara Álvarez Alonso

Editorial Dykinson
c/ Meléndez Valdés, 61 – 28015 Madrid
Tlf. (+34) 91 544 28 46
E-mail: info@dykinson.com
<http://www.dykinson.com>

Preimpresión: TALLERONCE

ISBN: 978-84-1377-986-7
Depósito legal: M-34753-2021

Versión electrónica disponible en e-Archivo
<http://hdl.handle.net/10016/33721>



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España

A Carlos Petit e
Ignacio Fernández Sarasola
Amici fideles, medicamentum vitae

“Todos saben que yo no puedo vivir en España sin Constitución”.

Del diputado Rafael del Riego a las Cortes, sesión de 28 de abril de 1823.

ÍNDICE

1. El valor simbólico de Riego para el constitucionalismo moderno	15
2. El punto de partida: el borrador de la representación a las Cortes de 1823. Crítica a los gobiernos y a las Cortes	21
3. La crisis política y constitucional del Trienio desde la perspectiva de este trabajo	27
1. La visión pactista del rey	34
2. Las percepciones constitucionales de los liberalismos	38
3. El “parlamentarismo” triennista	43
4. Riego diputado en Cortes. Las legislaturas de 1822 y 1823: ruptura y recuperación de las relaciones ejecutivo-legislativo	49
1. Consideraciones generales	49
2. La difícil singladura de la legislatura ordinaria de 1822	62
3. Los sucesos de julio de 1822 y la actuación de los poderes constitucionales: rey, gobierno, diputación permanente de Cortes y Consejo de Estado. El dictamen de Consejo de Estado: primera inhabilitación del rey	72
4. La legislatura extraordinaria de 1822-23. Recuperación de las relaciones ejecutivo-legislativo e intervención internacional en la sedición	83
5. Prolegómenos del fin: las Cortes ordinarias de 1823. Madrid-Sevilla-Cádiz	94
5. Cuestiones de inconstitucionalidad e infracciones a la Constitución en los casos de Rafael del Riego	107
1. La abolición del nombramiento para la Capitanía general de Galicia	108
a. Los hechos	108
b. El debate en Cortes. Primera versión del gobierno	114

c. La reapertura del debate en Cortes	117
d. Segunda versión del gobierno	122
e. Análisis jurídico-constitucional	127
2. La destitución como capitán general de Aragón	132
a. Precedentes	134
b. Los hechos	135
c. El contexto y las causas inmediatas: la crisis de gobierno y las elecciones de 1821	144
d. El <i>iter</i> procesal y calificación jurídica	153
e. La influencia de la censura al gobierno de 15 de diciembre de 1821 y de la condición de diputado en la marcha del proceso	161
f. Modificación de la calificación jurídica introducida por el gobierno	164
g. La causa ante los tribunales de imprenta	166
h. Incoación del expediente de responsabilidad al secretario del despacho de Gobernación de la Península e Islas Adyacentes en las Cortes. Características	167
i. Análisis jurídico-constitucional.	170
3. Los sucesos del 7 de julio	184
4. El borrador de representación de 1823	192
a. Los hechos	195
b. Examen de los fundamentos de derecho	197
c. Análisis político constitucional	199
A modo de recapitulación	205
Fuentes	217
Bibliografía	227

¡Venturoso momento, amigo mío, en que la dulce calma pueda sustituir a las pasiones que las circunstancias agitan! ¡Cuan felices debiéramos creernos si llegásemos a decir a nuestros hijos ahí tenéis una libertad que nunca fue manchada con sangre!

(Carta de Juan Mac-Crohon al general Riego)

El punto de partida y principales referencias de este libro son los casos jurídicos y procedimientos judiciales que afectaron al general Rafael del Riego en la segunda etapa constitucional, quedando por tanto fuera el relativo al enjuiciamiento que concluyó con su condena a muerte. No se trata, por consiguiente, de una aproximación a la vida pública de esta figura histórica sobre la que existe una abundantísima bibliografía con contribuciones excelentes. Es, más bien, el intento de indagar las causas que llevaron a la caída de un régimen constitucional y su sustitución por otro de naturaleza despótica.

En este sentido, las circunstancias que rodean y los sucesos en que se vio involucrado, las más de las veces de forma involuntaria, un personaje que defendió siempre la aplicación de la Constitución intacta se presentan como un referente de altísima importancia no solo para comprobar la caída en desgracia de un texto que tan solo ocho años antes había sido mayoritariamente contemplado como signo de esperanza y modernización, sino también como observatorio extraordinario del nacimiento de prácticas espurias de la vida política de los dos últimos siglos.

Riego fue testigo de excepción y víctima directa de la confrontación de las ideas acerca de la Constitución, del choque de dos modelos constitucionales de los que solo uno podía salir triunfante y no fue el que él defendía. Sus procesos, ocurridos en todos y cada uno de los años de aquel Trienio, originados en buena medida por la notoriedad que había alcanzado que hizo de él un símbolo, pero asimismo lo convirtió en el centro de la diana de quienes se oponían a la Constitución de 1812 o defendían un modelo considerablemente más restrictivo, muestran con claridad que fue entonces cuando se sentaron las bases de la deriva y peculiaridades que revistió el constitucionalismo moderno en España y surgió la intolerancia irracional hacia el adversario político.

La elaboración de este libro, por diversas razones, generó un sufrimiento añadido causado por la sensación de frustración que se extiende a los momentos de nuestra historia reciente en que los avances se vieron malogrados por la presencia de elementos e intervenciones anticonstitucionales en una suerte de déjà vu doloroso e insoportable. Por ello, nunca podré agradecer lo suficiente a mi familia y amigos, todos los cuales soportaron con paciencia y entereza mis conversaciones sobre el tema, y el inapreciable apoyo y ayuda del querido profesor Carlos Petit Calvo en la realización del mismo y la extraordinaria dedicación y profesionalidad del profesor Manuel Martínez Neira, director de la colección.

EL VALOR SIMBÓLICO DE RIEGO PARA EL CONSTITUCIONALISMO MODERNO

En su obra de madurez *El Hombre y sus símbolos*, Jung adelanta una definición de símbolo expresando que es “un término, un nombre o una imagen que puede ser conocido en la vida diaria aunque posea connotaciones específicas además de su significado corriente y obvio”. Para el psiquiatra y ensayista suizo, “una palabra solo es simbólica cuando representa algo más que su significado inmediato y obvio”; es decir, cuando abarca un campo que va más allá del alcance de la razón porque no se puede definir y comprender completamente¹.

En ese preciso sentido, el primer apellido de Rafael del Riego y Flores Valdés (Tuña 7 de abril de 1784-Madrid 7 de noviembre de 1823) se ha convertido en un símbolo y como tal ha trascendido su época. La palabra Riego, en efecto, va vinculada a la idea de lealtad constitucional y al término libertad², entendiendo ésta como principio y un valor irrenunciables y absolutos y, por esto mismo, acreedora de los mayores sacrificios, pero también y sobre todo como derechos plasmados en textos constitucionales. O, por expresarlo en los términos del constitucionalismo anglosajón coetáneo que él, al igual que otros compañeros diputados, conocía sobradamente, de *Liberty* y *freedom*. Para bien y para mal, fue, en su época, el referente de la misma dentro y fuera de España, como asimismo lo fue de patriotismo, esa palabra nueva que se erigió como signo de identidad y se extendió con rapidez inusitada entre los revolucionarios que aspiraban a modernizar sus países. Este es el significado que interesa destacar y que, para lo que aquí importa, es más relevante que el mito y arquetipo heroico construido sobre la interpretación de un proceso

1 Jung, Carl Gustav, *El hombre y sus símbolos*. Madrid, Paidós Ibérica, 1995, p. 14.

2 Gil Novales, Alberto, “Rafael del Riego personificación de la libertad”, en *Clío: Revista de historia*, nº 18, 2003, p. 85 ss. No se puede pasar por alto la ocasión de agradecer al profesor Gil Novales, uno de los mayores expertos en el tema, y su equipo, la labor de estudio de una etapa tan fundamental como el Trienio Liberal a través de sus monografías, artículos, congresos y la Revista Trienio. Entre ellos *Ejército, pueblo y Constitución. Homenaje al general Rafael del Riego. Actas del Coloquio Internacional celebrado en la Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid, los días 9, 10 y 11 de abril de 1984. Anejo a Trienio: Ilustración y liberalismo*, 1987.

temporalmente delimitado: el que se inicia con la proclamación de la Constitución de 1812 en Cabezas de San Juan el primero de enero de 1820 y se consuma con su ejecución en la Plaza de la Cebada de Madrid el 7 de noviembre de 1823.

Aunque ya desde el siglo XIX no ha faltado quien –entre otros, Pi i Margall o el mismísimo Galdós³– le han cuestionado como persona y militar, minusvalorando la importancia de su actuación en una etapa fundamental del constitucionalismo español y hasta haciéndolo responsable directo de la pér-

3 Pi i Margall, Francisco, “Rafael del Riego condenado a la horca, Mina se exilia en Inglaterra” en <https://elobrero.es/cultura/historia/43099-el-final-de-rafael-del-riego-o-la-furia>; Pérez Galdós, Benito. *Episodios Nacionales. El Terror de 1824*. Madrid, 1877. Cap. V. Desconozco las fuentes de ambos autores (se dice que en el caso de Galdós fue Alcalá Galiano) cuya visión profundamente negativa de Riego va vinculada a la ejecución del mismo, sobre la que existen diversas versiones contradictorias. Aunque Ramón Mesonero Romanos en *Memorias de un sesentón y vecino de Madrid escritas por El Curioso Parlante (1º) 1808-1823*. Madrid, 1881, critica los festejos con motivo de la entrada en Madrid de Fernando VII (“y hacía seis días que habían hecho morir a Riego en afrentoso patíbulo, para lo cual dilató Fernando su entrada en Madrid”, p. 377), vierte asimismo un duro juicio sobre “don Rafael del Riego” al hablar del año 1820, pp. 244 ss. Desde luego, los datos que proporcionan no se recogen en los documentos de su juicio publicados por el hijo de su abogado defensor y las versiones –incluso francesas, donde su proceso aparece duramente criticado si bien tratando de exonerar la intervención francesa, en la colección de *Causes célèbres*– coetáneas publicadas en el extranjero, como en *Procès du Général Raphael del Riego précédé d’une notice biographique*. Paris, Ponthieu, 1823. Vid: *Causa del general don Rafael del Riego, publicada por don Vicente de Santos, hijo del defensor del expresado general y destina su producto líquido para los gastos de la presente guerra. Causa formada en octubre de 1823 a virtud de orden de la Regencia por el Señor Alcalde don Alfonso de Cavia contra don Rafael del Riego*. 2ª ed. Madrid, Imprenta de don M. de Burgos, 1835. Ambos autores –Pi i Margall y Galdós– parecen influidos por una historiografía y un proceso de desinformación que arraigó en el siglo XIX y que alcanzó incluso al ámbito del Derecho como pone de manifiesto el “Proceso del general don Rafael del Riego” recogido en *Colección de las causas más célebres e interesantes de los mejores modelos de alegatos, acusaciones fiscales, interrogatorios y las más elocuentes defensas en lo civil y lo criminal del foro español, francés e inglés por una sociedad de jurisconsultos, parte española*. T. I. Madrid, Librería de don Leocadio López Editor, 1863, pp. 217 ss. Sobre el tema, Gil Novales, Alberto, “Prisión y muerte de Riego”, en *Trienio: Ilustración y liberalismo*, nº 27, 1996, pp. 27 ss. Un análisis peculiar acerca de su figura como líder lo lleva a cabo recientemente Salinas Guirao, Miriam, “El liderazgo de Rafael del Riego en el Trienio Liberal: símbolo y trascendencia”, en *Revista internacional de Historia de la Comunicación*, nº 16, 2021, pp. 300-32.

dida de las colonias americanas⁴, es asimismo innegable que, en el imaginario colectivo, Riego fue reconocido como la referencia por excelencia “de la lucha contra la tiranía y el despotismo” y, en consecuencia, de la defensa a ultranza de los principios y valores que representaba el constitucionalismo moderno desde el Trienio Liberal. Y como tal fue invocado en momentos clave de nuestra historia política y constitucional de los dos últimos siglos. En particular hasta la II República, que le homenajeó y reconoció expresa y tácitamente este valor simbólico al declarar oficial el himno que lleva su nombre⁵.

Ciertamente no faltaban motivos para ello porque, si en su época, en el interior fue ensalzado hasta el paroxismo, durante al menos un cierto tiempo, por las masas y, en especial, por los liberales así llamados exaltados, de aquel segundo convulso periodo de nuestra historia constitucional, fue también calumniado por adversarios políticos que, desacreditándole, pretendían limpiar su propio pasado y acosado y humillado por un rey que le concedió los más altos honores (ayudante de campo, capitanías generales de Galicia y Aragón, mariscal de campo) para retirárselos casi inmediatamente, en el exterior su

4 Ramos Oliver, Francisco, “La trayectoria militar de Rafael del Riego”, en *Revista de historia militar*, nº 112, 2012, pp. 297 ss., p. 322.

5 Y no sólo, sino que a la petición cursada a las Cortes Constituyentes el 28 de noviembre de 1931 por el alcalde de Cabezas de San Juan para elevar un monumento a Riego, responde el 15 de diciembre el secretario de la comisión de gobierno interior de las mismas comprometiéndose a contribuir materialmente en el proyecto. Archivo Congreso de los Diputados (ACD), *Unidad Documental compleja*, A-02-000126-0142, leg. 142-2. Se daba curso así a una petición que ya había sido presentada por Ayuso y otros diputados en 1919 para conmemorar el centenario de la proclamación Constitucional de 1820 y que fue rechazada por el gobierno, presidido entonces por el conservador Sánchez de Toca, el 15 de agosto de ese año. ACD, sig. A-02-000126-0142, leg. 20-1. El himno ya se había declarado oficial en la segunda legislatura del Trienio por el Decreto XIV de 7 de abril de 1822. *Colección de decretos y órdenes expedidos por las Cortes*, T. IX p. 54. Por otro lado, a lo largo del ochocientos, en particular durante la primera mitad del siglo, su figura fue utilizada tanto por progresistas como por los absolutistas y moderados. Vid. a este respecto Dufour, Gérard, “Rafael del Riego dans la poésie de circonstance du Triennat libéral”, en *Bulletin d'Historire Contemporaine de l'Espagne*, nº 54, 2020, en línea. En este sentido, no es casual que los documentos del proceso fueran publicados por el hijo de su abogado en 1835, recién reinstaurado el sistema constitucional y que en 1854, durante el bienio progresista, apareciera *Don Rafael de Riego. Drama popular, en cinco jornadas y en prosa, original de D. Ramón de Valladares y Saavedra*. Madrid, Imprenta de G. González, 1854, publicado recientemente por Gloria Sanz Testón en *Trienio: Ilustración y Liberalismo*, nº 74, 2019, pp. 9-73.

fama no fue menos intensa. De hecho, es uno de los pocos españoles que salen bien parados en la obra –escrita no sin un cierto sectarismo como, con acierto, se ha señalado⁶– que Charles Le Brun publicaba en Filadelfia en 1826. En realidad, el principal reproche que le dirige es “el de no haber sabido cumplir bien con su papel de héroe”⁷, opinión ésta en clara disonancia con la que, tiempo después y ya como reconocido líder de los moderados tras realizar un giro copernicano sin precedentes, le merecía a Antonio Alcalá Galiano, quien reiteradamente insiste en atribuirle vanidad, prepotencia y corta inteligencia⁸.

En el extranjero, su fama se extendió por todas partes, desde Francia y Alemania⁹ hasta Estados Unidos, donde todavía pocos años atrás se le rei-

6 Alvargonzález, Manuel, “El pensamiento político de Rafael del Riego y su ruptura con los moderados”, en *El Cuaderno*, febrero 2020, en línea. Una primera versión de este artículo fue divulgada en 2017 por la *Revista Historia Autónoma* y ha sido ampliada y modificada por el autor para su publicación en *El Cuaderno*.

7 Le Brun, Carlos, *Retratos políticos de la revolución de España* cuyo subtítulo es altamente ilustrativo “ó de los principales personajes que han jugado en ella, muchos de los cuales están sacados en caricatura por el ridículo en que ellos se habían puesto [...] con unas observaciones políticas al fin sobre la misma y la resolución de la cuestión de porqué se malogró esta y no la de los Estados Unidos publicados en castellano”. Filadelfia, 1826. El de Riego, que comienza “Nombre de gloria y oprobrio para la España que lo produjo y lo mató. Es el apellido de la libertad de la ultima epoca del año de 1820 en que la proclamó y se va a hacer en la historia tan glorioso y memorable, como el de Padilla, y en la posteridad tan lisongero y dulce, como la palabra libertad”, pp. 46 ss.

8 *Memorias de don Antonio Alcalá Galiano dadas a conocer por su hijo*. Prólogo y edición de don Jorge Campos. Madrid, Atlas, 1955. Vid., sobre todo, capítulos XXXII y XXXIV de la primera parte; I a V, VII a IX, XI, XIII, XVII y XVIII de la segunda parte, por poner un ejemplo que no alcanza a la descripción tendenciosa de su ejecución. Riego publicó en *El Espectador* de 1 de enero de 1823 una carta –en la que, por cierto, concluía declarándose enemigo de desórdenes y calumnias y que no quería “más que Constitución, orden y justicia”– en defensa de este hábil y oportunista político que pudo desempeñar altos cargos en el Trienio y durante el reinado de Isabel II.

9 La ejecución de Riego y su cruel forma de llevarse a cabo conmocionó a los liberales de toda Europa. Como ejemplo, *Don Raphael del Riego's Leben und Hinrichtung. Eine Biographische Skizze für Freunde der Geschichte*. Augsburg Engelbrecht, 1824. Es reseñable asimismo su relación con Ugo Foscolo y los liberales franceses e italianos. Incluso el poeta alemán Wilhem Müller, cuyas poesías musicó Schubert y formó parte del grupo de poetas románticos y nacionalistas comandados por von Arnim y Brentano, cerraba su obra de canciones para los griegos que luchaban por su independencia con un himno a Rafael del Riego. Vid. Müller, Wilhem, “Hymne auf den Tod Raphael del Riego's” en *Griechen-*

vindicaba como una de las grandes figuras europeas que lucharon y dieron su vida por la modernización del país a través de la defensa del orden constitucional¹⁰. La influencia de su aura legendaria alcanzó incluso a los “decembristas” rusos en 1825 y es notoria hasta por lo menos 1880 en toda Europa¹¹. Con todo, donde más admiración despertó fue en la hispanófila Gran Bretaña de aquel tiempo, en particular en sectores del partido whig, y no sólo entre los radicales¹². Un testimonio elocuente es la carta fechada apenas un mes más tarde de la ejecución de Riego, el 10 de diciembre de 1823, en la que en nombre de una de estas sociedades, en concreto la del *Ward of Bishopgate*, E. White dirigía a su exiliada viuda en Londres. En ella, tras expresarle “el dolor por la irreparable pérdida y la admiración por el sobresaliente patriotismo de su asesinado marido”, le ruega acepte la suma de cincuenta guineas como testimonio de la “simpatía universal de la nación británica hacia el valiente General”, cuya memoria, añade, inspira a los que luchan por recuperar el espíritu de libertad en España, ahora reprimido pero no desaparecido¹³.

lieder. Leipzig, Brockhaus, 1844. pp. 165-70 (la primera edic. *Neue Lieder der Griechen*. Dessau, C.G. Ackermann, 1823).

10 Stites, Richard, *The Four Horsemen: Riding to Liberty in Post-Napoleonic Europe*. Oxford/New York, Oxford U. P., 2014. El coronel don Rafael del Riego es uno de los cuatro europeos que, según este historiador, luchó por la libertad a principios del siglo XIX, y su caída supuso una época de corrupción marcada por el rechazo de los valores liberales.

11 Ferro Botas, F. G., “Significado del general Rafael del Riego en la primera revolución rusa: la “decembrista” de 1825” en *Boletín del Instituto de Estudios Asturianos*, n° 128, 1988, pp. 911-18 y el documentado y reciente artículo de Cañas de Pablos, Alberto, “Riego después de Riego: la pervivencia póstuma de un mito heroico liberal en España, Reino Unido, Francia y Rusia (1823-1880)”, en *Historia y Política*, n° 45, 2021, pp. 143-173.

12 A partir de 1824 se publican en Gran Bretaña una serie de obras tendentes a glorificar al mito. Vid., solo a título de ejemplo, Mattewes, George, *The Last Military Operation of General Riego: Also the Manner in which he was Betrayed and Treated Until Imprisoned, a Narrative of the Sufferings of the Author in Prison*. London, Sinipkine and Rodwell and Co, 1824; *Memoirs of the Life of Don Rafael del Riego By a Spanish Officer*. Reed. Anderite Press, 2015. También tragedias sobre su vida y muerte como la exitosa de John Robertson, *Riego or the Spanish Martyr: a Tragedy in Five Acts*. Richmond P.D. Bernard con varias ediciones, 1850-1980, 1872, 1857.

13 White, B./Windus, B. G., *Letter, 1823 Dec. 10, Ward of Bishopsgate* [London], to Madame Riego Biblioteca Nacional, MSS/20270/164. También en Biblioteca Digital Hispánica.

Desde luego, la imagen de aquel general que, con 36 años y como teniente coronel, en lugar de embarcar para América decidió al frente de su columna móvil restaurar la Constitución y su aterradora ejecución tres años más tarde, casaba muy bien con el espíritu romántico en pleno esplendor por entonces. Sin embargo, no es ésta la aproximación que se pretende hacer aquí y ahora. Se trata, más bien, de poner de relieve su protagonismo no buscado en defensa del orden constitucional vigente a través del sumario análisis de cuestiones constitucionales que le afectaron directamente a causa de su posición como restaurador de la Constitución y como representante de la Nación, y hacerlo a partir de los parámetros que él mismo estableció.

Es decir, de las dos facetas que desarrollan su actividad profesional como proyección de una personalidad muy definida y que se cuidó de conjugar en varios de sus más relevantes, desde el punto de vista que aquí se sigue, escritos. En particular en el que servirá de hilo conductor de este trabajo: la *Representación* que redactó para elevar a las Cortes en 1823, donde deliberadamente se mueve en dos planos, el de ciudadano y el militar. Para Riego eran dos posiciones distintas aunque complementarias porque desde ambas, como dejó escrito, se podía servir y hacer el mejor trabajo por la Patria tal y como demostraba George Washington, a quien, según algunos historiadores, admiraba hasta el extremo de adoptar su nombre como miembro de una de las sociedades tan comunes durante el Trienio¹⁴.

14 Aunque en su documentadísima y lúcida tesis doctoral dirigida por Emilio La Parra, *Rafael del Riego. Símbolo de la Revolución Liberal*. Universidad de Alicante, 2016, Víctor Sánchez Martín presenta con serios argumentos el debate acerca de su pertenencia a ciertas sociedades secretas, Evaristo San Miguel se refiere a Riego como el Washington español en la narración de los sucesos del 7 de julio de 1822 en Madrid en *El Espectador* del día siguiente.

EL PUNTO DE PARTIDA:
EL BORRADOR DE LA REPRESENTACIÓN A LAS CORTES DE 1823.
CRÍTICA A LOS GOBIERNOS Y A LAS CORTES

Se trata de un borrador que debió redactar en algún momento del mes de mayo de 1823 y no tengo constancia de que exista un documento final elevado a las Cortes¹. Es un manuscrito de varios folios deteriorados en la parte inferior, pero que Riego, salvo en alguno, usó aprovechando hasta el último trozo de papel utilizable. La escritura es cuidada, pero contiene palabras y párrafos tachados, generalmente sustituidos por frases breves de caracteres más reducidos y de fácil lectura. Su estilo, casi en igual medida que su contenido, muestra a un hombre profundamente decepcionado con el desarrollo de los acontecimientos, impotente ante la actitud del gobierno y las Cortes, confrontadas ya desde el inicio en divisiones irreconciliables, e indignado por la invasión del ejército de Angulema y las defecciones nacionales. Más allá de eso destaca su inquebrantable confianza en “la Constitución sancionada por la Nación y que es seguro garante de su prosperidad y de su grandeza”, como había dejado escrito en la carta que dirigió a Fernando VII en marzo de 1820², y a la que con-

1 Rafael del Riego, *Exposición dirigida a las Cortes con motivo de la petición de su incorporación al ejército*. BN, Mss/20270/175. Vid. Sánchez Martín, *Rafael el Riego*, pp. 860 ss. y Gil Novales, *Rafael del Riego y la revolución*, pp. 190 ss., que utilizan el manuscrito desde otra perspectiva a la que propone este trabajo. No es posible conocer si Riego la llegó a elevar a las Cortes debido a la pérdida de documentación en el traslado de Sevilla a Cádiz. En todo caso, no existen referencias a la misma ni en el Archivo del Congreso ni en el Diario de Sesiones. Las referencias entrecomilladas de este epígrafe se remiten al manuscrito.

2 “El Código Sagrado, objeto del amor de los buenos españoles, recibió de la boca de V. M. aquella sanción tan suspirada a que se habían opuesto los que no tienen más patria que su interés [...] La Nación que había levantado este monumento de sabiduría escuchó los juramentos de V.M. llena de alborozo [...] Un Rey unido a la Nación, un Rey jurando la Constitución que le quita el triste poder de hacerla desgraciada [...] ¿Quién no se conmueve, Señor, al ver la brillante perspectiva que ofrece una resolución tan noble y generosa...”. Rafael del Riego, *Carta al Rey de 21 de marzo de 1820*. Resulta ilustrativo que se publicara antecedida por una pastoral del Obispo de Salamanca, Gerardo Vázquez, del Consejo de SM, en la que indica a sus feligreses que el juramento a la Constitución no supone un ataque a la Religión y la fe, y asimismo resulta revelador que alguien escribiera a mano al final de la misma “Este es Persa”. BN, VE/1223/26(2).

templa como portadora de libertad y como instrumento de traer la felicidad a un *pueblo* –el término es suyo– que no ha visto cumplidas sus expectativas por rivalidades políticas y la traición urdida desde la Corte.

Aunque, como hace constar en el texto, es el ciudadano quien escribe, la visión del militar a la que expresamente alude en varios momentos, de un militar profundamente respetuoso con el orden constitucional, sirve de auxilio inestimable e inexcusable tanto para dotar de base sólida a los argumentos como para expresarlos de forma concisa y sin adornos estilísticos. En este sentido, interesa destacar, además de la certera descripción de la situación y un razonable –aunque voluntariamente formulado de modo incompleto– conocimiento de los conflictos políticos y sus causas, su rigurosa crítica a la labor ejercida durante aquellos tres años. En un tono respetuoso y directo, como, en sus palabras, corresponde a un soldado, no oculta la profunda frustración derivada de la ocasión perdida. Expone: “Se intentaron y se hicieron efectivamente grandes y útiles reformas ¿Pero ha llegado el pueblo a tocar sus efectos?”. He ahí, expresada con llaneza, la principal cuestión de fondo: el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, una falta de sintonía que afectaba a la esencia de un gobierno constitucional.

Con el rigor propio de quien ha comprendido y asumido los principios más característicos del nuevo modelo político-constitucional y los fundamentos del liberalismo incipiente disecciona los aspectos más importantes, las causas de la no solución de asuntos perentorios que continuarán pendientes durante buena parte del XIX y sus consecuencias. Se trata, en concreto, de los problemas impositivos pero sobre todo hacendísticos y de los relativos a la administración de justicia, en especial la organización de los tribunales, tema que no se resolvería de manera efectiva hasta 1870, ya durante el Sexenio Democrático.

Identifica desde el comienzo el origen del problema: la falta de implementación de las medidas acordadas en Cortes por los gobiernos o el nulo cuando no contraproducente efecto producido por su aplicación, bien por desinterés, improvisación o por la tardanza. Existe a lo largo del texto una implícita imputación general de perderse en formalidades sin entrar en el fondo. Si con relación a las medidas impositivas la crítica se centra en la falta de previsión de las consecuencias y los perjuicios derivados para un sector de la población poniendo el ejemplo, tanto más elocuente cuanto su condición de presunto miembro de una sociedad anticlerical, de la abolición de impuestos de esta naturaleza –“Se le alivió (al pueblo) ... del medio diezmo, pero en cambio ha

visto en la miseria más cruel sus sacerdotes”—, en lo relativo a la Hacienda se explaya poniendo el dedo en la llaga. De hecho, quizá por su proximidad a Canga Argüelles, la autoridad coetánea indiscutible en este campo entre los liberales, señala con lucidez los puntos débiles de las medidas adoptadas para la aplicación de las disposiciones con las que, en principio, está de acuerdo. Como las relativas a la desamortización, exponiendo al respecto sus fallos en la misma línea que, tiempo más tarde, seguirá Flórez Estrada, otro asturiano bien poco sospechoso de sectarismo y como él acusado de radicalidad³.

Es, en este extremo, extraordinariamente relevante por su perspicacia un argumento en especial. Porque para Riego, el no llevar a cabo, tal y como se había acordado en 1820, la redención efectiva de los censos al quitar o un justo reparto en lotes de las tierras, no solo eliminó la posibilidad de crear más de trescientos mil propietarios (los nuevos sujetos políticos del sistema) y más de cuatrocientos mil defensores y simpatizantes que ahora, entrado 1823 y con el enemigo en territorio nacional, mostraban su desafección, oposición o, en el mejor de los casos, indiferencia, sino que se perdió una ocasión excepcional de restablecer y consolidar el crédito público porque, señala, se impidió la entrada de ingentes cantidades que disminuyeran la deuda pública y sanear una Hacienda sobre la que los algunos gobiernos del Trienio adoptaron medidas desastrosas al aceptar empréstitos impagables. Con su actuación, o más bien ausencia de ésta, gobernantes y representantes, escribe textualmente, “han dado más valor al papel que la representa” que a la propia deuda. Esta visión extremadamente negativa se extiende asimismo a la política económica seguida durante los tres años de referencia. Abundando en esta línea, denuncia abiertamente el proteccionismo practicado, tanto por los perjuicios causados a la industria y a un comercio que luchaba por rehacerse cómo, de manera especial, por la reducción de ingresos para el erario que suponían las tasas aduaneras⁴.

3 Para este tema me remito a las inteligentes aportaciones de Varela Suanzes, Joaquín: “Álvaro Flórez Estrada. Un liberal de izquierda”, en *Progresistas. Biografías de reformistas españoles (1808-1939)*, ed. Javier Moreno Luzón, Madrid: Taurus, 2006, pp. 15-58; “Retrato de un liberal de izquierda”, en *Historia Constitucional*, 5 (2004), así como a la obra de la que fue coordinador, *Álvaro Flórez Estrada (1766-1853). Política, economía, sociedad*, Oviedo, Junta general del Principado de Asturias, 2004 y a las aportaciones recogidas en el número monográfico de *Historia Constitucional*, 5 (2004), “150 Aniversario de Álvaro Flórez Estrada”.

4 Los problemas relativos a la organización de la Hacienda, el impulso de la economía y el comercio, los empréstitos, la deuda y hasta la adopción de medidas proteccionistas

Resulta significativo el hecho de que, reiteradamente, casi al inicio de cada párrafo, Riego manifiesta que no le impulsa una intención revanchista ni adopta la función de acusación frente a las Cortes –“ No es mi animo mortificar al congreso con la enumeración de las medidas que desde 1820 nos agobian”– ni ante los sucesivos gobiernos –“No me presento, Señor, en clase de acusador de los diferentes ministerios que por espacio de tres años han disipado las riendas del estado, sus desaciertos como hombres públicos”–. Ni siquiera se recrea en la inútil posición de señalar la debilidad extrema del ministerio –“hallándose el heroico pueblo que representamos sin un gobierno fuerte y organizado que le dirija, que se electrice y que le sostenga”– sino el ánimo de hacer frente a una situación devastadora antes de que sea demasiado tarde.

Desde mi punto de vista, aunque la raíz del escrito se encuentra en un asunto que le afecta directamente, sería un error considerarlo una manifestación de oportunismo por el momento en que se redacta o de desquite. Es, más bien, la expresión de la decepción provocada por el enfoque y tratamiento de los temas, en especial los más graves y perentorios, por los órganos –el ministerio sobre todo, pero también las Cortes–, en los que recaía el gobierno. Una rendición de cuentas, en resumen, de una actuación en la que él había participado durante las tres últimas legislaturas que pone de relieve la frustración por las oportunidades perdidas a las que habían sido inducidas las Cortes por presiones internas y externas. En este sentido, también es un valioso testimonio de la aplicación de la Constitución.

conformaron uno de los más recurrentes objetos de debate en las Cortes –que en la legislatura ordinaria de 1822 crearon la segunda comisión de Hacienda, a añadir a la Primera– como ponen de manifiesto el Diario de Sesiones y el gran número de disposiciones aprobadas desde el inicio del Trienio y, en particular, desde la legislatura ordinaria de 1822 hasta el final. Citarlas sería abrumador, por lo que me remito a esas fuentes, sobre todo *Colección de decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes desde el 1º de marzo hasta el 30 de junio de 1822 impresa por orden de las mismas* (CD). T. IX. Madrid, Imprenta Nacional, 1822 y T. X (desde el 3 de octubre de 1822 hasta el 23 de abril de 1823). Madrid, Imprenta de don Tomás Albán y Compañía, 1823. Por lo demás, de las posiciones encontradas en las Cortes acerca de tales asuntos y el interés público en los mismos es testimonio elocuente Martín Haasse, José, *Juicio imparcial y preventivo de la opinión del Señor Moreno Guerra sobre prohibiciones*. Madrid, Imprenta de Espinosa, 1821. Un ilustrativo ejemplo de la preocupación que suscitaba la gestión de la Hacienda por los gobiernos, incluso entre sus partidarios, puede verse en el artículo “Hacienda Pública” de un periódico simpatizante del mismo: *El Imparcial*, nº 2 de 11 de septiembre de 1821, p. 8.

Por otra parte, es la suya, como se observa, una denuncia en toda regla de lo que se hizo mal, no sólo en las materias aludidas, sino, como ya se ha expuesto, en otros aspectos definitivamente relevantes. Muy en particular en “la escandalosa administración de justicia de que todos se quejan ni en la organización de los tribunales”, en la falta de seguridad general, incluso en las grandes poblaciones, o en el lamentable estado de los servidores públicos y familias de militares, entre otros casos. Sin embargo, es asimismo de la mayor importancia subrayar que en esta denuncia, que el propio autor admite que se basa en informaciones y análisis personales realizados en sus desplazamientos a lo largo y ancho del territorio peninsular –“un Soldado que en dos años por obedecer al gobierno ha recorrido quasi (todas las) direcciones tiene el honor de presentar al congreso el resultado de sus propias observaciones”–, hay asimismo mucho de autocrítica⁵.

En la autorizada diagnosis de Riego la principal responsabilidad recae, desde luego, en los gobiernos y el rey, que abusó de la prerrogativa de designar libremente a los ministros, pero no exime de la misma a los representantes de la Nación, entre los que se encuentra. Al menos una parte de los mismos contribuyeron de manera sobresaliente a la gravedad de la situación, generada inicialmente por una conspiración palaciega en alianza con sectores sociales privilegiados que no supieron abortar a tiempo ni prever su efecto más directo y desolador: la desafección popular, particularmente dolorosa en un momento de invasión de tropas extranjeras. Ciertamente, el reconocimiento explícito de su ignorancia para proponer remedios eficaces –manifiesta literalmente que “no tiene los conocimientos políticos ni la ciencia de estado que se necesita para poder presentar como quisiera los remedios aplicables a males de tanta monta”–, que debemos interpretar más bien como

5 “No es mi animo mortificar al congreso con la enumeración de las medidas que desde 1820 nos agobian, y assi no me detendré en la escandalosa administración de justicia de que todos se quejan ni en la organización de los tribunales, no traere a la memoria el numero y situación lamentable de los cesantes, ni la miseria en que yacen los esforzados militares cubiertos de heridas honrosas y de las viudas y huérfanos de los que fallecieron. Tampoco hablare de la falta de seguridad que han ofrecido los caminos y aun las poblaciones. Lo dicho basta para manifestar que aunque en sus legislaturas lo han intentado no han hecho la felicidad que los pueblos nos avian encomendado y que este es, sin duda, el principal pretexto de que nuestros enemigos interiores y exteriores se prevalen para seducir al incauto pueblo y no solo adormecerle en su letargo, sino servirse de sus brazos y de su grito para asesinar a su salud la libertad, la igualdad delante de la ley y todos los bienes que el gobierno constitucional ofrecio al pueblo”.

un recurso estilístico dados sus estudios de latinidad, artes y leyes en Oviedo y sus estancias en Francia e Inglaterra donde aprendió directamente los fundamentos del constitucionalismo moderno, y, sobre todo, esta asunción de responsabilidad, le singularizan entre sus congéneres políticos de todas las épocas. Pero asimismo obligan a indagar el verdadero motivo que le llevó a redactar tales acusaciones.

Prima facie no es otro que el que figura en el texto de referencia, esto es, la negativa de las Cortes a su petición cursada a finales de abril de 1823, con una España ocupada por las fuerzas de francesas con la colaboración de relevantes absolutistas, los propios jefes militares españoles y amplios sectores de la población, para que le autorizaran a tomar las armas en defensa del orden constitucional. Sin embargo, desde la perspectiva que aquí interesa principalmente, nos encontramos ante un asunto de la mayor importancia en relación a la interpretación, e incluso al uso político, de la propia Constitución, que afecta sobremanera a su aplicación, aspectos ambos cuyo entendimiento precisa una necesaria contextualización.

LA CRISIS POLÍTICA Y CONSTITUCIONAL DEL TRIENIO DESDE LA PERSPECTIVA DE ESTE TRABAJO

La razón por la que se ha elegido el anterior borrador de la *Representación* de 1823 como punto de partida, y en cierto modo hilo conductor, de este trabajo estriba en que supone una descarnada descripción del conflicto por antonomasia del periodo, esto es, la confrontación de dos modelos constitucionales. En su borrador, aparece reflejada en la descripción de uno de sus efectos más evidentes e inmediatos, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, manifestado no sólo en la falta de ejecución por el primero de disposiciones de Cortes destinadas a promover el cambio social, económico y político, sino en la independencia de actuación del mismo y, en última instancia, su frecuente elusión de aspectos esenciales de la Constitución. Fue así como se frustró el principal objetivo de la “revolución de 1820” porque, a la postre, las Cortes “aunque en sus legislaturas lo han intentado no han hecho la felicidad que los pueblos nos avian encomendado”. En este sentido, transmite una razonable exposición de las, por así decir, “deficiencias” que, desde la perspectiva del tiempo, ofrece esa etapa en cuestiones sustanciales y que, en su momento, fueron oportunamente magnificadas por los realistas a la caída del Trienio¹.

En este sentido, el borrador es, en efecto, un testimonio cabal de la sumisión, en un periodo particularmente complejo, de la acción de gobierno y la gestión eficaz al servicio del interés general o, por utilizar los términos de la propia Constitución, de “la recta administración y gobierno” a los requerimientos partidistas, entendiendo partido tanto con el significado –similar a facción– que se le asignaba entonces como el que se le concede por la Ciencia

1 Al margen de los escritos y de los libelos oportunistas y demagógicos que proliferan a la caída de cualquier régimen, hubo algunos que no carecían de cierta solidez y, aparentemente, escribían por propia confesión “sin ánimo de venganza”. Como el anónimo *Vida y milagros, muerte, entierro y honras de todos los ministerios que habido en España, desde que resucitó la Constitución en el año de 1820 / lo escribió un amante de su patria, religión y rey*. Madrid, Imprenta de Rita Ribas, viuda de Aznar, 1823, cuya demoledora crítica a todos los gobiernos del Trienio participa en algunos aspectos de los hechos señalados por Riego en su borrador.

política y el Derecho político y constitucional². O, por expresarlo en palabras de una autoridad indiscutible para, al menos, un determinado sector liberal, B. Constant, “una reunión de hombres que profesan la misma doctrina política”³.

Desde el mismísimo momento de su restauración, la Constitución se convirtió en un centro de imputación tanto en el plano internacional, donde se consideró por las potencias del *Concierto* un peligro real para el *Equilibrio* europeo surgido del Congreso de Viena, como en el ámbito doméstico. En éste, en efecto, no sólo los movimientos sediciosos absolutistas organizados desde principios del Trienio con el auxilio de Francia, la más beligerante de aquellas Potencias, sino, sobre todo, la escisión del liberalismo, supuso, como es sobradamente conocido, uno de los principales escollos para el arraigo del sistema constitucional. Aunque este cisma liberal que, sin error, es susceptible de ser calificado como el motor de una auténtica ruptura con el orden constitucional existente, es, en el plano de la teoría, anterior al nacimiento de esta segunda etapa de nuestro constitucionalismo moderno, por cuanto algunas opciones ya aparecen a finales de la anterior (1813-14)⁴ a través de

2 Para este tema me remito a las lúcidas observaciones de Fernández Sarasola, Ignacio, “Los partidos políticos en el pensamiento español (1783-1855)”, *Historia Constitucional*, nº 1, 2000, pp. 97-163. También a Artola Gallego, Miguel, *Partidos y programas políticos*, 1808-1936. Madrid, Alianza Editorial, 1991.

3 Constant, Benjamin, “De la doctrine politique qui peut réunir les partis en France”, en *Écrits et discours politiques*. Presentation, notes et commentaires par O. Pozzo di Borgo. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1964, T. II, p. 31. Está escrito en septiembre de 1816, por tanto, durante la Restauración Borbónica y, al parecer, como respuesta a Chateaubriand.

4 Así el autor anónimo de *Opinión sobre la Constitución política de la Monarquía española hecha en Cadix a principios del año 1812. Escribala un jurisconsulto español en Valencia en enero de 1813*, en el que en nota manuscrita escribe al editor que “Desde 1814 a 1820 fue inútil la discusión que en el se agita. En los tres últimos años he tenido el valor para ver quemado mi escrito en la plaza pública por mano del Verdugo a pesar de la libertad de imprenta” por lo que debió publicarse entre 1823 y 24. Destinada a describir los vicios de la misma y “así también enmendarán algunos su desengaño si todavía existe quien mira aquella época con favorable preocupación”. Está firmada en París en la ilustrativa fecha de 20 de junio. Para su autor “Sus autores han errado, á mi modo de ver, completamente la constitucion del poder supremo”, “La Constitución de Cádiz no establece como anuncia haberse propuesto una monarquía”, confunde los principios sobre los poderes y sobre todo ataca al legislativo. En su redacción hay sin duda elementos doctrinarios y conservadores. De ser cierto, como escribe el autor anónimo al editor, que la redactó en 1813, ya entonces concluye que si se aplica, el resultado será la guerra civil.

la crítica despiadada a la Constitución que venía a sumarse a las posiciones realistas y a la realizada por los disidentes defensores del modelo británico⁵, lo cierto es que en el Trienio afloran abierta o subrepticamente. En conjunto, las diferentes posiciones se muestran como teselas de un complejo mosaico que no siempre fue visible en su integridad para los coetáneos, ni siquiera los más interesados.

Desde el punto de vista que aquí más interesa, es decir, el constitucional, la etapa, por consiguiente, presenta una complejidad específica agravada por las nuevas corrientes y teorías que profesaban y defendían algunos de los otrora más relevantes doceañistas. Se pone inmediatamente de manifiesto a través de las luchas entabladas en el bando liberal en el plano político que trascendieron desde las tertulias y periódicos a los debates parlamentarios en un círculo vicioso que se retroalimentaba ininterrumpidamente⁶.

En todo caso, desde el jacobinismo y republicanismos con que fueron identificados, al menos una parte de ellos, los entonces así llamados exaltados⁷, hasta el doctrinarismo que profesaba un muy –probablemente el más– influyente grupo político o el modelo de la *Charte*, la influencia francesa era la dominante. Como expone recientemente en excelente síntesis Fernández Sarasola⁸, la autoridad de Guizot, Constant y hasta Destutt de Tracy, entre otros notables iuspublicistas, inspiraba proyectos contradictorios entre sí⁹. Y

5 A este respecto es ineludible la consulta de Varela Suanzes, Joaquín, “El debate sobre el sistema británico de gobierno en España durante el primer tercio del siglo XIX”, en José María Iñurrategui y José María Portillo (eds.), *Constitución en España, orígenes y destinos*, Madrid, CEPC, 1998, pp. 79-108 y, del mismo, *La monarquía doceañista (1810-1837)*. Madrid, Marcial Pons, 2013.

6 Sobre el tema, Gil Novales, Alberto, *Las sociedades patrióticas (1820-23). Las libertades de expresión y reunión en el origen de los partidos políticos*. Madrid, Tecnos, 1975; Del mismo, *La sociedad patriótica del café de Lorencini*. Madrid, Maestre, 1971.

7 A este respecto, el libro de referencia es Ruiz Jiménez, Marta, *El Liberalismo exaltado: La confederación de comuneros españoles durante el trienio liberal*. Madrid, Editorial Fundamentos, 2007 y de Gil Novales, Alberto, *Textos exaltados del Trienio Liberal*. Madrid, Júcar, 1979. Sobre las inexactas acusaciones, de este último, “Exaltación liberal y republicanismos en España”, en *Revista de Historia Moderna*, nº 12, 1993, pp. 249-58, en especial, 252 ss.

8 Fernández Sarasola, Ignacio, “El diseño de un parlamento alternativo durante el Trienio constitucional”, en *Revista de las Cortes Generales*, nº 108, 2020, pp. 41 ss., en particular, 45-46.

9 Desde inicios del Trienio existe un amplio movimiento editorial destinado a dar a conocer la obra de los más ilustres iuspublicistas extranjeros, que muchos diputados ya

no era solo el fondo lo que los diferenciaba, era también, y de manera esencial, la forma. Porque mientras los primeros, a veces ciertamente a través de interpretaciones un tanto forzadas, siempre se movieron dentro de los límites marcados por el texto constitucional, los demás buscaron, abierta u oculta-mente, bien la abolición de la Constitución o bien su reforma soslayando lo preceptuado por los artículos 375 y siguientes de la misma, mediante actuaciones más o menos encubiertas o clandestinas.

A grandes rasgos, el escenario de aquellos tres años venía, en consecuencia, marcado por el telón de fondo que representaban quienes, en la prensa, tertulias y hasta en las Cortes se calificaban de “los enemigos internos y externos del sistema constitucional”, ninguno de los cuales está exento de culpabilidad por atentar e infringir el orden jurídico. Aunque se trata de un tema

habían leído en lengua original y que recuerda en muchos aspectos al que existió entre nosotros a comienzos de la II República. A modo de ejemplo y entre las más notables, además de las conocidas traducciones de Constant llevada a cabo por Marcial Antonio López y la obra de Bentham, ya difundida durante el periodo gaditano, como *Consejos que dirige a las Cortes y al pueblo español don Jeremias Benthán* traducidos del inglés por José Joaquín Mora. Madrid, imprenta de Repullés, 1820; *Carta que el célebre jurisconsulto y hábil publicista Jeremías Bentham dirigió a los españoles en el año de 1822, sobre la reforma proyectada en nuestra Constitución para establecer una Cámara alta* (puede consultarse en la edición de Cádiz, Campe, 1837: Precedida de un artículo en que se demuestran sus graves inconvenientes, por un español constitucional) o las traducciones de Toribio Núñez, *Obras ordenadas conforme al sistema del autor original y aplicadas a la Constitución española*, 1820-1821; *Sistema de la ciencia social*, 1820; *Principios de la ciencia social*, 1821, pueden mencionarse otras que responden a las distintas inclinaciones políticas. Así, Bolingbroke, Henry St John, *Idea de un rey patriota*. Barcelona, Busquets, 1820 (edición CEPC, Madrid, 2014). Bolingbroke sería expresamente citado por Salvá durante el debate sobre el asunto Palarea. DSC, sesión del 27 de noviembre de 1822. También Destutt de Tracy (Antoine Louis Claude Destutt, comte de Tracy), *Comentario sobre el Espíritu de las Leyes de Montesquieu por Destutt de Tracy con las observaciones inéditas de Condorcet* traducido del francés al español por el doctor D. Ramón Salas. Burdeos en la imprenta de Lawalle joven, 1821 (incluye el opúsculo *Cuales son los medios de fundar la moral de un pueblo*, pp. 457 ss.) y Bonald, Louis-Gabriel, *Ensayo analítico acerca de las leyes naturales del orden social o del poder, del ministro y del súbdito en la sociedad*, traducido del francés al castellano por D. Juan Pérez Villaamil. Madrid, Imprenta Real 1823. Incluso se publica a principios del Trienio una traducción del fisiócrata Lemerciere de la Rivière, Pierre-Paul, (*L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques*, 1767, 2 volumes avec une table détaillée pour chacun). *El orden natural y esencial de las sociedades políticas* traducido con notas por D. Justo Linda Calle y Zócrar. 2 ts. Valencia, Imprenta de don Benito Monfort, 1820.

frecuentado por la historiografía¹⁰, no es superfluo recordar que, en el caso de los últimos, la infracción se manifiesta en la intervención en los asuntos internos llevada a cabo, sobre todo, por Francia desde los mismos inicios del Trienio¹¹, que llegó a la exasperación con la flagrante vulneración del Derecho Internacional o de Gentes de la época que supuso la invasión capitaneada por el Duque de Angulema en 1823, realizada sin la preceptiva previa declaración de guerra¹². A pesar de que contaba con la oposición británica, la invasión disponía de la aquiescencia, bien que no el soporte directo, de Austria, Rusia y Prusia, es decir, la mayoría de países del *Concierto*¹³, y, desde luego, con el

10 Vid., entre otros, Carantoña Álvarez, Francisco, “El difícil camino hacia la monarquía constitucional: 1820, del pronunciamiento a la revolución”, en Marieta Cantos Casenave, Alberto Ramos Santana (eds), *Conspiraciones y pronunciamientos: el rescate de la libertad (1814-1820)*. Universidad de Cádiz, 2019, pp. 113-147; Del mismo, “1820, una revolución mediterránea. El impacto en España de los acontecimientos de Portugal, Italia y Grecia”, en *Spagna contemporanea*, n^o 46, 2014.

11 En febrero de 1820, Chateaubriand publicaba en *Le Conservateur* un artículo “De la Espagne” en la que criticaba la Constitución, defendía la antigua Constitución castellana, exponía que “la paz de España importa para la paz del mundo” y abogaba por la “solidaridad entre los tronos”. Concluía que “Las relaciones entre los individuos de las dos naciones, Francia y España, están hoy mejor que nunca y esta armonía se debe a la caritativa acogida que hemos dado a los prisioneros españoles”, es decir, a los conspiradores y contrarios al sistema constitucional. Fue entendido como una amenaza más o menos velada y, desde esta perspectiva, contestado en *Impugnación del discurso del vizconde de Chateaubriand sobre la revolución en España* por D. S. M., Madrid, en la imprenta que fue de Fontenebro, 1820. Tres años más tarde, a la caída del Trienio, se publicaba *Observaciones varias sobre la Revolución de España, la intervención de la Francia y las actuales y antiguas Cortes*, obra escrita en francés por Clausel de Cousseuges, traducida al español por un Amigo de la Religión y del Rey. Perpiñan, 1823 (por J. Alzine), en la que el autor justificaba la intervención francesa en la línea de Chateaubriand.

12 Tanto el secretario del Despacho de la Gobernación de la Península e Islas Adyacentes como el de la Guerra confirmaron, tras ser interpelados al respecto, que no existía una declaración formal de Guerra por parte de Francia ni de ninguna otra potencia. DSC, sesión del 24 de abril de 1823. Resulta a estos efectos elocuente la opinión crítica sobre la guerra pública como expresión del derecho a la guerra cuando una Nación ve afectados sus derechos, que sostiene a principios del Trienio Eudaldo Jaumandreu, *Curso elemental de Derecho Público*. Barcelona, en la imprenta del Gobierno Político Superior, 1820, Libro III.

13 Sobre este tema, es de importancia capital consultar Chateaubriand, François-René, vicomte de, *Congrès de Vérone: guerre d'Espagne: negociations, colonies espagnoles*. Paris-Leipzig, chez Brockhaus et Avenarius, 1838 y del mismo *Mémoires d'Outre-tombe*, Paris, Garnier frères, 1910, 3. L.27 capítulos II, 7, 8 y 11, especialmente, así como las lúcidas obser-

apoyo de los realistas que a través de sus agentes desarrollaron un intenso trabajo ante la Corte francesa con este fin recordando, *mutatis mutandis*, las renunciaciones de 1808, este hecho se consideraba como una de las faltas más graves por la legislación internacional y era inaceptable entre “países civilizados”. Aun así, no acarreó ninguna consecuencia: la *realpolitik* se impuso y España, como en tantas otras ocasiones a lo largo de la Historia, sufrió las consecuencias que ésta reserva a quienes se adelantan a su tiempo¹⁴.

Con respecto a los “enemigos internos” la situación, muy diferente a la existente en 1810, adolecía de una complicación intrínseca que se mostró insalvable. Desde el mismo momento de la en absoluto fácil proclamación del 1 de enero de 1820 aparecieron movimientos contrarios a la misma en las provincias, integrados por absolutistas organizados que se levantaron en armas contra el orden Constitucional. Con posterioridad acabarían por afectar a todo el territorio peninsular y fueron particularmente intensos en Aragón, Cataluña, Navarra, apoyados por la Francia de la Restauración¹⁵ y en Valen-

vaciones de Antonio Martínez de la Rosa, *Breves observaciones de la nota pasada a varios gabinetes por los de Austria, Rusia y Prusia de resultados del congreso de Troppau*. Madrid, imprenta del Universal, 1821 contra el acuerdo de intervención de las potencias recogido en ese Tratado. Vid. también Torre del Río, Rosario de la, “El falso tratado de Verona de 1822”, en *Cuadernos de Historia Contemporánea*, 2011, vol. 33, 277-293; Pelosi, Hebe Carmen: “La política exterior de España en el Trienio Constitucional, 1820-1823”, en *Cuadernos de Historia de España*, n.º XLIX-L (1969), pp. 214-293 y LI-LII, pp. 316-443. También Romeo Mateo, María Cruz, “Del principio de legitimidad a la defensa de la libertad de la Nación: la revolución de 1820 y las relaciones internacionales”, en *Hispania*, 48-168, 1988, pp. 201-226.

14 Como expone lúcidamente Gil Novales, “El Trienio liberal es en gran parte la historia de este intento revisionista (de la CE de 1812) y de la eliminación sistemática del pueblo. Y también naturalmente de las resistencias que ésta encontró”. Gil Novales, Alberto, *El Trienio Liberal*. Madrid, Siglo XXI, 1980, p. 62.

15 En el Diario de Sesiones abundan las referencias a tales movimientos, así como a Valencia, que se intensifican a partir de marzo de 1822. En Cataluña algunos relacionaban la vinculación a los movimientos realistas a la “falta de trabajo” y responsabilizaban directamente al clero por su activa participación, y por alentar, en las revueltas contrarrevolucionarias. Vid., Botton, Emilio, *Causas y remedios de los males de Cataluña*. Barcelona, Imprenta de Narciso Dorca, 1822. Una reciente exposición de este concreto tema y su evolución a lo largo del Trienio en el lúcido estudio de Arnabat Mata, Ramón, “La prensa del Trienio Liberal en Cataluña (1820-23)”, en *Cuadernos de la Ilustración y el liberalismo*, n.º 26, 2020 pp. 641 ss. Para una visión de la época desde diferentes puntos de vista es necesario consultar Romero Alpuente, Juan, “Historia de la revolución de España en los años 1820 a 1823, o sea, explicación de las causas por las que se perdió la libertad constitucio-

cia. Tales movimientos, detrás de alguno de los cuales estaba el propio rey como más tarde se puso de manifiesto, llegaron a ser tan perturbadores y estar tan extendidos que en las Cortes, a partir de 1821¹⁶, se habla directamente de guerra civil. Frente a ellos, resultaron ineficaces y hasta contraproducentes no solo las amnistías y perdones, sino incluso las diferentes disposiciones normativas y otras medidas adoptadas contra los *facciosos* ya desde 1820¹⁷.

No obstante, para el objetivo de este trabajo es más relevante prestar atención, siquiera sumariamente, a la posición de Fernando VII y a las aludidas corrientes en el seno del liberalismo. Dejando al margen los intentos republicanos de los años 20-21 rápidamente sofocados¹⁸, se observa *a priori* una

nal, publicada en del mismo, *Historia de la revolución española y otros escritos*, edición a cargo de Alberto Gil Novales, vol. II, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985; Miñano, Sebastián, *Examen crítico, de las revoluciones de España de 1820 a 1823 y de 1836*. París, Librería de Delaunay, 1837; Pando Fernández de Pinedo, Manuel (Marqués de Miraflores), *Apuntes historicocríticos para escribir la historia de la revolución de España, desde el año 1820 hasta 1823*. Londres, Oficina de Ricardo Taylor, 1834, así como la obra de Agustín de Argüelles *De 1820 a 1824 por – , con una noticia biográfica del autor por José de Olózaga y un prólogo por Ángel Fernández de los Ríos*. Madrid, A. de S. Martín, 1864.

16 En 1821 Flórez Estrada acusa a Bardají de tener “harto preparada la guerra civil”. DSC, sesión 26 de noviembre de 1821, 1195-1198. Vid., p.e., Orden de las Cortes de 30 abril de 1821 sobre medidas contra eclesiásticos que abusando de sus funciones intentan sumir al país en una guerra civil. CD T. VIII, p. 60. A partir de 1822, las alusiones a la misma son relativamente frecuentes en los debates en Cortes.

17 Vid., entre otros, D. XIX de 15 de mayo de 1821. Reglas para la formación de causas y amnistía para los facciosos de Salvatierra y otros puntos y D. XLIV 18 junio de 1821. Se hace extensivo a otras partes en decreto de formación de causa de los facciosos de Salvatierra. Las disposiciones sobre conspiración fueron frecuentes y se agravaron a partir de ese año. Cfr. D. 17 de abril, penas que habrán de imponerse a los conspiradores contra la Constitución e infractores de ella. ; O. 16 de mayo se comunica al gobierno para que se proceda a la promulgación de la ley que antecede sancionada el 16 por SM y publicada hoy en las Cortes. ; O. VII de 17 de abril. Sobre el conocimiento y modo de proceder en las causas de conspiración. CD. T. VIII, pp. 94. 167, 37 y 45 ss., respectivamente. Ya Riego como capitán general de Aragón, en la felicitación que envió a las Cortes en 1821 por la apertura de la legislatura, manifestaba la poca efectividad de los indultos y recomendaba medidas más duras. La suavidad con relación al tratamiento de conspiradores e incluso a los “persas” había insuflado, a juicio de Moreno Guerra, energías a todos los *contrarevolucionarios* en sus movimientos conspirativos. En la sesión del 10 de abril de 1821, el propio Martínez de la Rosa se expresaba en términos aún más contundentes: “el tiempo de la indulgencia ha pasado”, argumentado que tales medidas llevaban a confundir la “moderación con flaqueza”. DSC, sesión 10 de abril de 1821.

18 En este sentido, no parece que en aquel momento se especificase con exactitud lo

primera *summa divisio* representada por los partidarios de la “constitución intacta”, entre los que se encontraba Riego, y los que defendían su sustitución por un texto completamente distinto.

1. *La visión pactista del rey*

En relación a Fernando VII, no es, desde luego, una tarea sencilla determinar su postura en este tema en atención a la calculada ambigüedad que caracteriza su actuación durante el periodo. Es claro que su inclinación absolutista se vio reforzada por el círculo de los “consejeros privados” que mantenía en palacio, cuya desaparición reclaman vehementemente y constantemente las Cortes, las instituciones constitucionales y la prensa, con particular intensidad a partir de los graves sucesos de julio de 1822 por considerarles instigadores de los mismos. Y es asimismo obvio el sórdido juego que llevó a cabo con un sector de los moderados a quienes tan pronto respaldaba –el ejemplo por antonomasia es Martínez de la Rosa– en su conspiración para derogar la Constitución y sustituirla por otra, como rechazaba con contundencia su “plan de las Cámaras”¹⁹. Para lo que ahora importa, resulta

que se entendía por republicano más allá de la deposición de un monarca, toda vez que “la palabra republicano es muy vaga y comprende una multitud de gobiernos prodigiosamente diferentes unos de otros”, como con razón exponía Destutt de Tracy, *Comentarios*, p. 34, aunque algunos periódicos, como p. e., *El Eco de Padilla*, desde sus primeros números, precisamente a mediados de 1821, se esforzaran por aclarar el concepto.

19 En sus controvertidas memorias (entre otras cosas, retrata a los exaltados como alborotadores, duelistas, pendencieros y cobardes, describe el asesinato de Landáburu como una inevitable consecuencia del sistema constitucional y afirma que el ejército realista sublevado el 7 de julio quería formar un gobierno moderado respetuoso de las libertades y que de ningún modo era absolutista), Fernández de Córdova expone literalmente que “El rey y los Ministros (el gobierno Martínez de la Rosa) decidieron de común acuerdo sustituir la Constitución de 1812 con otra que encerrara principios conservadores y autoritarios, encargando su elaboración a Martínez de la Rosa *el cual secretamente la elaboraba para imponerla un día por un golpe de fuerza* (cursiva mía) y el rey estaba resuelto a convocar después Cortes que la sancionaran. Pero el proyecto fracasó porque, en el nuevo código figuraba, además del Congreso de los Diputados un segundo cuerpo deliberante, especie de senado o estamento de próceres... ¿Dos cámaras cuando no podemos con una? Jamás. No admito tu Constitución, le dijo a Martínez de la Rosa, desde aquel momento derrotado de su favor y confianza y el monarca solo se ocupó desde entonces de tramitar conspiraciones con la guardia real, esperando el momento anhelado de destruir todo el edificio de aquellas libertades”. *Mis Memorias íntimas* por el teniente general don Fernando Fernández de

más relevante prestar atención a un aspecto concreto: sus referencias a la Constitución como pacto.

Existen, en efecto, alusiones al pacto constitucional en diversas ocasiones de singular importancia. En particular en varios de sus discursos de apertura y cierre de las Cortes y, de manera sobresaliente, en la consulta que le dirige al Consejo de Estado en 3 de julio de 1822. Si los primeros pueden ser contemplados como una expresión de su juego político torticero y de una inexcusable obligación constitucional, la intimidación que conlleva una de las cuestiones planteadas al Consejo en esa fecha merece una cierta atención. Porque amparándose en una situación extremosa que él mismo había desencadenado, exigió, como se verá más adelante, unas condiciones totalmente inaceptables en un sistema constitucional con el claro propósito de desligarse del juramento prestado en marzo de 1820. Es decir, de declarar la nulidad del que, ilustrativamente, Prodi denomina “sacramento del poder” y que, como expresaba en 1820 el catedrático de Constitución Jaumandreu, sólo se exige en circunstancias excepcionales de ahí que, aunque supone de hecho un acto de desconfianza, su violación es jurídicamente inadmisibles, salvo que esté viciado *ab origine*²⁰.

A este respecto resulta definitivamente elocuente que Fernando VII utilice precisamente el término de pacto en lugar de Constitución. Es superfluo, a este respecto, añadir que la explícita y terminante amenaza de “romper el pacto” no es más que la manifestación de la no aceptación del social entendido como “la expresión auténtica de las reglas y condiciones con que un pueblo quiere ser gobernado”, como defendía Salas²¹, implícito en una

Córdoba, Marqués de Mendigorría. T. I. Madrid, Establecimiento tipográfico Ribadeneyra, 1886, pp. 30, 40, 41 y 43. Fernández de Córdoba coincide con otras fuentes y significativamente con Estanilao de Kotska Bayo, *Historia de la vida y reinado de Fernando VII de España: con documentos justificativos, ordenes reservadas. Y numerosas cartas del mismo monarca, Pio VII, Carlos IV, María Luisa, Napoleón, Luis XVIII, el infante don Carlos y otros personajes*. 3 Tomos. Madrid, Imprenta de Repullés, 1842. A este respecto no deja de ser altamente ilustrativo que estas fuentes próximas a los moderados reivindicquen el hecho como elemento positivo de cordura ante las “exageraciones y desmanes” de los exaltados lo que, en realidad, era una conspiración y traición fraguada y emprendida por y desde el propio gobierno.

20 Jaumandreu, Eudaldo, *Curso elemental* p. 154. Agradezco a Carlos Petit sus sugerencias respecto al interés de este autor.

21 “Código constitucional, carta constitucional, constitución política, ley fundamental, pacto social, son expresiones que expresan la misma idea”. Salas, Ramón, *Lecciones*

Constitución elaborada en unas Cortes que, basándose en la fuente *esencial* de la soberanía, habían formalizado así el contrato social como expresión del consentimiento entre los poderes de la sociedad y que sólo podía ser modificado y alterado siguiendo unas reglas establecidas en la misma. O, como se decía en un periódico en octubre de 1822, es aquel en el que “está el ecuador político por donde han de medirse y contarse los grados de latitud liberal que corresponde a cada uno de los gobiernos”²². De hecho, su percepción ni siquiera se acomodaba al acuerdo subyacente a los gobiernos excepcionales o especiales en que las partes se tratan como si fueran “potencias extranjeras o independientes”²³.

Su postura, al contrario de la sostenida por el más notable de los legitimistas franceses, Bonald, quien, por esas fechas, rechazaba la teoría del contrato social para defender que el poder (en su caso, monárquico) es preexistente a cualquier pacto²⁴, encuentra justificación en otro tipo de pactismo. Esto es, en un histórico *pactum subiectionis*²⁵ suscrito entre el rey y el Reino, que los defensores de Fernando VII interpretaban como el auténtico y único que existía entre él y sus súbditos, es decir, en la más genuina línea de constitu-

de Derecho Público Constitucional. Madrid, CEPC, 1982, con introducción de José Luis Bermejo p. 32.

22 “Variedades”, en *El Espectador*, 11 de octubre de 1822.

23 Destutt de Tracy, *Comentario*, pp. 38-39.

24 “El poder ¿es instituido por los súbditos y entre éstos y el poder hay contrato social? No hay contrato social en la sociedad política 1º no hay lugar para el contrato antes de la institución del poder, porque sería menester para esto que la institución del poder fuera cosa arbitraria. Más el poder es necesario y no depende de la sociedad admitirle o rehusarle, pues sin él ninguna puede existir; 2º Después de la institución del poder no hay lugar para el contrato porque entonces ya no hay entre las partes la igualdad que es necesaria para su valor ni otra relación necesaria entre el poder y súbdito que la de dependencia de éste porque los súbditos están obligados al poder, pero este solo lo está al soberano para bien de los súbditos. Así es que la razón de los deberes solo se halla en el poder. Preexiste pues el poder a toda sociedad y ninguna podrá sin algún poder o sin alguna ley constituirse jamás”. Bonald, Louis-Gabriel, *Ensayo analítico acerca de las leyes naturales del orden social o del poder, del ministro y del súbdito en la sociedad*, traducido del francés al castellano por D. Juan Pérez Villamil. Madrid, Imprenta Real 1823.

25 Sobre este pacto, vinculado a los regímenes monárquicos y aristocráticos no representativos, vid. Bobbio, Norberto, *Estudios de Historia de la Filosofía: de Hobbes a Gramsci*. Barcelona, Debate, 1991 y Rawls, John, *El Liberalismo político*. Barcelona, Crítica, 1996. Es asimismo interesante, Fernández Díaz, Andrés, “John Rawls y el contractualismo”, *Revista española de control externo*, pp. 159 ss., en línea.

cionalismo antiguo e incluso entroncando con las teorías altomodernas del poder y la *lex regia*.

Desde esta perspectiva, como expresamente se recogía en un escrito coetáneo destinado a demostrar la nulidad del juramento constitucional, él era, simplemente, “heredero legítimo de nuestros antiguos reyes, colocado por centro de la unidad del pueblo español, *juris consensu*, por derecho fundamental de la monarquía hereditaria, confirmado con el juramento y reconocimiento de los pueblos [...] y asegurado por la posesión de tantos años”. En otras palabras, su legitimidad, a diferencia de la que, por esas mismas fechas, defendía Guizot para la monarquía de la *Carta* basada asimismo en la antigüedad²⁶, se fundaba en la sucesión y la posesión ininterrumpida, en tanto que el pacto se había formalizado a través de ese “consentimiento jurídico” originario que le situaba como el único centro de la unidad del pueblo y único legislador, en consecuencia, único depositario del poder. Puesto que era rey por la gracia de Dios y por la herencia y no por una Constitución elaborada, además, con posterioridad a su nacimiento, no solo no tenía que acatarla, sino que, según las prescripciones del derecho natural, únicamente estaba obligado a cumplimentar la *vis directiva* de las leyes que dictaba exclusivamente él en su condición de cabeza del Reino²⁷.

En este sentido, es evidente que a lo largo de su reinado, y en particular durante el Trienio, nunca se vio como poder constituido, sino que se ubicaba en

26 “La legitimidad de los tronos es una institución excelente y para esta institución la legitimidad debe ser antigua”. Guizot, *Du gouvernement de la France depuis la restauration, et du ministère actuel*. París, Librairie Française de Ladvocat, 1820, p. 206. Una opinión realizada por razones más bien pragmáticas pues, como había afirmado previamente en la misma obra, en el capítulo “De la legitimidad”, “yo no creo ni en la soberanía del pueblo ni en la ley divina. Creo en la soberanía de la razón, de la justicia, del derecho, ahí reside el legítimo soberano que busca el mundo y que buscará siempre pues la razón, la verdad y la justicia no residen completamente en ninguna parte. Es la mejor virtud del gobierno representativo”. Ibi, p. 201.

27 Este último argumento fue elaborado por la doctrina durante los siglos XVI y XVII para sustentar la capacidad normativa de los reyes durante la Monarquía. Las frases entrecorridas en *Discurso sobre el juramento prestado por Su Magestad en la sesión de 9 de julio de 1820*. Manresa, Imprenta de Martín Trullás, 1823 pp. 12 y 13. Al margen de que comienza exponiendo que la restauración de la Constitución fue llevada a cabo por unos “militares borrachos”, no deja de tener interés el que añade que el juramento era, de hecho y de derecho, un acto de destronar al rey y situarle en una condición inferior a la de sus súbditos, para concluir “¿de dónde le ha venido al pueblo la autoridad para deponer y destronar a su rey e imponerle leyes?”. Ibi, p. 30.

una posición preeminente que rechazaba incluso la posibilidad de una carta otorgada, por otra parte, rechazada por el liberalismo avanzado al identificar como “el último grado del impudor y del descaró” el pacto –entre un rey otorgante y la nación– en que aquella se fundaba²⁸. Estos característicos rasgos del *princeps legibus solutus* (*absolutus*), radicalmente incompatibles con los requerimientos del constitucionalismo moderno, se muestran con claridad en la coda que sigue a la amenaza, profesada por cierto cuando el triunfo de los constitucionalistas era incierto: recuperación de sus derechos legítimos, esto es, la soberanía exclusiva.

2. Las percepciones constitucionales de los liberalismos

En lo que respecta a la ruptura liberal, es de la mayor importancia señalar que los escindidos no conformaban una unidad sino que sostenían posturas diversas, algunas de las cuales lograron plasmar en proyectos, en ocasiones elaborados con anterioridad a la instauración del Trienio²⁹. Tampoco doctrinalmente presentan uniformidad, ya que los más notorios estaban auspicados por personajes entre los que figuran doceañistas tan relevantes como el Conde de Toreno o Martínez de la Rosa fuertemente influenciados por el doctrinarismo de Guizot, si bien el último, a mi parecer, presenta además rasgos típicos del conservadurismo de Chateaubriand, en tanto que afrancesados como Javier de Burgos eran claramente partidarios de Constant, como no dejó de proclamar de manera exquisita en *El Imparcial*, periódico que entonces dirigía y, con anterioridad, en la *Miscelánea de Comercio, Política y Literatura*. Ni siquiera compartían la unidad de acción, fundamentalmente por el desprecio que aquellos, y otros, mostraron hacia los josefinos, a pesar de que Constant es, sin duda, uno de los más influyentes iuspublicistas entre la intelectualidad literaria y los juristas coetáneos, como ponen de relieve su

28 Como dejaba claro entre nosotros un autor contemporáneo: “Luis XVIII concede y otorga, palabras que suponen la facultad de no otorgar ni conceder. Con tan estraña locución, un pacto político entre una gran nación y un monarca, es el último grado del impudor y del descaró. Como si la soberanía del pueblo fuese una doctrina disputable, y no un dogma inconcuso, como si el contrato social fuese el delirio de un cerebro acalorado y no la historia de todos los gobiernos”. Ruiz del Cerro, Manuel, *La carta francesa con notas españolas*. Madrid imp. Calle de los abades, 1822, p. 14.

29 Fernández Sarasola, Ignacio, *Proyectos constitucionales de España (1786-1824)*. Madrid, CEPC, 2004; Morange, Claude, *Una conspiración fallida y una constitución non nata (1819)*. Madrid, CEPC, 2006.

traductor López o Salas y la línea editorial de *El Censor*, probablemente, con *El Cetro Constitucional*, la más sólida, desde el punto de vista científico, publicación periódica del momento en los asuntos relacionados con el tema de este trabajo³⁰.

Todos ellos, sin embargo, formaban el grupo de los por entonces denominados *moderados* estableciéndose así una separación basada en modelos constitucionales profundamente diferentes, cuya incompatibilidad no solo afectó a la aplicación de la Constitución y la pacífica articulación política, sino que influyó de manera decisiva en la caída del Trienio. Dado que la historiografía de especialidad se ha ocupado de estos extremos³¹, en este trabajo he optado por señalar sus rasgos básicos a través de las opiniones y actuación de dos genuinos representantes de ambas corrientes: José Moreno Guerra y Antonio de los Ríos Rosas.

En febrero de 1821 Moreno Guerra definía el moderantismo político como “una especie de secta que nace de las revoluciones” caracterizada por su insolencia e intolerancia hacia los demás. Lo exponía en un *Manifiesto* en el que señalaba el “estado crítico” al que la los gobiernos que habían sido hasta ese momento desde 1820 habían llevado a la Nación por una pésima gestión y Administración. Y entre las causas señalaba la ruina que suponía la firma de empréstitos desastrosos, el nepotismo en la distribución de empleos públicos incluso a desafectos al nuevo sistema agravada por la creación de la

30 Vid., a este respecto, Martínez de las Heras, Agustín, “La prensa liberal del ‘Trienio’ vista desde El Universal”, *Historia y Comunicación Social*, nº 5, 2000, pp. 91-101; Del mismo, “La práctica periodística a través de El Universal (1820-1823)”, en Alberto Gil Novales (ed.), *La revolución liberal*. Madrid, Ediciones del Orto, 2001, pp. 401-418 y Morange, Claude, *En los orígenes del moderantismo decimonónico. El Censor (1820-1822). Promotores, doctrina e índice*. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2019.

31 Me refiero de manera particular a la labor desempeñada en este terreno por Joaquín Varela Suanzes e Ignacio Fernández Sarasola a través de una amplia y coherente producción de necesaria consulta. Exclusivamente como referencias en esta nota, vid. del primero su clásico *La teoría del Estado en las Cortes de Cádiz. Orígenes del constitucionalismo hispánico*. Madrid, CEPC, 2ª edic., 2011; *La monarquía doceañista (1810-1837)*. Madrid, Marcial Pons, 2013 y los estudios recogidos en *Política y Constitución en España (1808-1978)*. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014, (2ª edición corregida y aumentada). Del segundo, además de las aportaciones que se recogerán a lo largo de este texto, *Los primeros parlamentos modernos de España (1780-1823)*. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales o su aportación más reciente “El diseño de un parlamento alternativo durante el Trienio constitucional” en *Revista de las Cortes Generales*, nº 108, 2020, pp. 41-69.

categoría de *cesantes*, la pésima elección de los secretarios del Despacho, la ceguera política en los asuntos de América e independencia de las colonias. Pero, por encima de todas, estaba “la inobservancia de la Constitución” con el respaldo de unas Cortes sumisas que, con esta actitud, no solo fomentaron una interpretación arbitraria de la misma sino la aparición de un “despotismo de facción”. Es decir, gobiernos subyugados por el “espíritu de partido”, que, por ignorancia unos y mala fe otros, estaban dominados por un *fanatismo* que solo “produce una guerra de personas por la cual vemos continuamente despedazarse a los hombres”. Una tan negativa acción de gobierno, determinada exclusivamente por una específica orientación política que despreciaba la Constitución, había convertido a este moderantismo “hoy en la vanguardia del servilismo”.

Moreno Guerra firmaba su *Manifiesto*, dirigido a la Nación y a las futuras Cortes, el 16 de febrero de 1821³², esto es, justamente el día en que cerraban sus sesiones las Cortes en las que había sido diputado por Granada. Su durísima crítica, en la que coincidían personas que no necesariamente eran como él beligerantes partidarios de la “intacta”³³, a los gobiernos aparece fundamentada en casos reales que relata y un “abuso” de competencias por el Ejecutivo, incluido el rey. Ignoraba, por consiguiente, lo que estaba por venir, sobre todo con el gobierno presidido por Martínez de la Rosa, con el que la confrontación entre los dos primeros poderes, a los que la Constitución confiaba el gobierno, que caracteriza la etapa se recrudeció de manera sobresaliente.

Miembro el más destacado de la selecta Sociedad Constitucional, más conocida como Sociedad del Anillo de Oro, integrada por un centenar de individuos –todos ellos relevantes figuras de la política, las finanzas y la intelectualidad, incluso algunos grandes de España³⁴–, Martínez de la Rosa, que

32 Moreno Guerra, José, *Manifiesto a la nación española y particularmente a las futuras Cortes de 22 y 23 sobre las causas que han paralizado la revolución y la marcha de las Cortes de 20 y 21 por el ciudadano* –. Cádiz, Imprenta de la Sincera Unión del ciudadano J. G. de la Maza, 1822. Las frases entrecomilladas pp. 11, 20-21, 27, 28 y 29.

33 P. e., Carnicero, José Clemente, *Causas de la división de ánimos y escasez de dineros que hay en España y medios eficaces de repararlas*. Madrid, Imprenta de José del Collado, 1822 o, *España triunfante del ocio, del lujo y de ciertas preocupaciones, bajo el gobierno de la constitución política de la monarquía* por un español amante de su patria. Madrid, 1820, en la Imprenta que fue de Fuentenebro, 1820, que se confiesa no seguidor de ningún partido.

34 Asociados en una corporación, hecho en absoluto insólito en la etapa de esplendor de las “sociedades patrióticas” ya en 1821, el 31 diciembre de ese año, aprobaban sus esta-

representa una posición diametralmente opuesta a Moreno Guerra, interesa ahora tanto por su labor como diputado y gestión al frente del gobierno como, muy en particular, por su participación en los sucesos de julio de 1822 y por ser responsable directo del único Proyecto destinado a tener éxito de cuantos se redactaron, bien que no en esa etapa sino en 1834.

Haciendo suya la máxima de Vattel de que “una nación si se halla mal con su constitución tiene derecho a mudarla”³⁵, que adaptó a sus intereses confundiendo Nación con partido, en el primer caso, como dejó sentado a lo largo de sus intervenciones en las Cortes –entre otras, en el caso de Riego en 1821 que se analizará en epígrafes posteriores– su principal objetivo es la defensa del Ejecutivo frente al Legislativo a través de reforzamiento de sus facultades, yendo más allá de lo que disponía el propio texto Constitucional e incluso defendiendo un innegable blindaje del mismo ante la Cámara. Es cierto que se trataba de una idea que era compartida más allá del círculo de los anilleros³⁶,

tutos con el nombre de *Sociedad Constitucional*, que se publicaron inmediatamente con la lista de los ciento un miembros y con la firma de su primer presidente, el poeta Quintana (liberal militante desde 1810 y por ello enjuiciado por el tribunal de la Inquisición de Logroño) y su secretario. Es decir, Martín de los Heros, quien tras la muerte de Fernando VII sería un destacado colaborador y miembro del ministerio Mendizábal en uno de los primeros gobiernos progresistas con la reina gobernadora M^a Cristina de Borbón. Más conocida en la época como *Sociedad del anillo de oro*, por el distintivo que al parecer portaban sus miembros –de ahí el nombre de *anilleros* que les otorgó la prensa exaltada– sus integrantes actuaron vigorosamente contra el orden constitucional vigente desde los mismos principios del Trienio. Desde los gobiernos que presidieron con clara actitud hostil en y hacia la Cámara, sobre todo, con la redacción de un proyecto de Constitución bicameral que reconocía el veto absoluto del rey y y que con ligeras adaptaciones sería promulgado en 1834 con el nombre de *Estatuto Real* –redactado, por cierto, desde antes, pero sobre todo durante la invasión y concluido el 18 de mayo de 1823, es decir, pocos días antes de la instauración de la regencia absolutista por el duque de Angulema. El pretexto, o la excusa, era la habitual en estos casos entre nosotros, es decir, presentarse de redentores ante una situación caótica que, por lo demás, ellos mismos contribuyeron a crear. Para un mayor conocimiento Álvarez Alonso, Clara, “Las bases constitucionales del moderantismo español: El Fuero Real de España”, en Ignacio Fernández Sarasola, *Constituciones en la sombra*. In Itinere, Universidad de Oviedo/CEPC, 2014.

35 Que expresó ya en su brillante crítica al tratado de Troppau donde se había mostrado contra “el derecho incontestable de las potencias a intervenir en los asuntos internos de las Naciones”, cfr. Martínez de la Rosa, *Breves observaciones de la nota pasada a varios gabinetes por los de Austria, Rusia y Prusia de resultas del congreso de Troppau*. Madrid, imprenta del Universal, 1821. La frase entrecomillada en p. 16.

36 Vid. a este respecto, p. e., las reflexiones contenidas en “Ligeras indicaciones sobre

pero para éstos se trataba de un objetivo primordial que trataron de implementar en todos los ministerios de los que formaron parte desde 1821 –año de conformación de la sociedad– y que él, al frente del gobierno desde el 28 de febrero al 5 de agosto de 1822, aplicó de manera beligerante.

En lo sustancial, su programa se basaba en la restricción de derechos, limitación de la libertad de prensa, el bicameralismo y la iniciativa legislativa y reivindicación del veto absoluto para el rey, aspectos todos que atacaban la columna vertebral de la Constitución de 1812 y, en consecuencia, fueron combatidos con contundencia por los defensores de la *intacta*³⁷. Fuertemente influenciados por una visión cuasi aristocrática del doctrinarismo expresado por Guizot, para quien “el régimen representativo tiene por objeto prevenir las grandes sacudidas políticas reduciendo a cuestiones ministeriales los diversos sistemas de gobierno” situando “al trono” por encima de los partidos³⁸, el rey salía tan reforzado con su derecho propio al gobierno por encima del Legislativo y Ejecutivo que, no sin razón, se ha afirmado que existe ahí una confusión del “poder moderador” de Constant y el “conservador” de Destutt de Tracy³⁹. En todo caso, estos presupuestos se contemplaban como requisitos *sine quae non* de la Constitución, a la que ciertamente veían como un “acto de desconfianza”.

lo que debe llamar con preferencia la atención de los nuevos señores diputados” en *El Censor* de 2 de marzo de 1822, pp. 365 ss.

37 Desde el principio, los exaltados y partidarios de la aplicación íntegra de la Constitución identificaron acertadamente su proyecto como una adaptación de la *Carta* francesa de 1814 y, además del bicameralismo y restricción de derechos, consideraban especialmente peligrosa la iniciativa regia, como pone manifiesto Ruiz del Cerro en su comentario al artículo 16 de aquel texto donde aparece recogida: “La iniciativa en la proposición, de las leyes vinculada exclusivamente en la persona del Rey es un arma formidable con la que se destruyen fácilmente todos los bienes que puede traer consigo la Constitución mas liberal que adoptase tan maléfico principio. No hay libertad que resista de la voluntad de un Rey que está seguro del poder legislativo, puesto que éste no puede obrar sino es cuando y como el quiera: ¿Qué sería de la España si, como es indudable, esta innovación fuese una de las que con mas empeño tomaran sus representantes?”. Ruiz del Cerro, *La carta francesa*, p. 18.

38 Y añade “arraiga a los partidos, los disciplina y sitúa el trono por encima de sus combates”. Guizot, *Du gouvernement*, p. 213.

39 Me remito para estas cuestiones al excelente artículo de Fernández Sarasola, Ignacio, “Dirección política y acción de gobierno en la Historia Constitucional”, *Historia Constitucional*, nº 4, 2003, p. 151-195, en línea, donde analiza el tema desde la teoría e historia constitucional comparada.

3. El “parlamentarismo” triennista

En realidad, las posiciones que acaban de describirse tan sucintamente testimonian la abierta confrontación entre el modelo monista y legicentrista cuyo indiscutible protagonista era el Legislativo, egregiamente implícito en la Constitución de 1812, y el posrevolucionario, que defendía una total autonomía del Ejecutivo como precedente de ese “poder administrativo” tan característico de la época isabelina. El enfrentamiento se percibe con nitidez durante todo el periodo, pero con especial intensidad a partir de la cuarta legislatura inaugurada en febrero de 1822, coincidiendo con el nombramiento del gobierno Martínez de la Rosa, cuya actitud hostil hacia la Cámara de mayoría exaltada se manifestó desde el primer momento. Se materializó así una mutua desconfianza que fue *in crescendo* hasta llegar al culmen con las jornadas de julio de ese año, donde se demostró la tibieza inicial, y posterior comisión por omisión y hasta intervención, del Ejecutivo en pleno.

Es, a estos efectos, innegable que aquellas Cortes en particular fueron concienzudas en el cumplimiento del axioma revolucionario de “un gobierno de las leyes y no de los hombres” y aplicaron escrupulosamente las prescripciones constitucionales en sus relaciones con el Ejecutivo, lo que podía dar lugar a una situación formal y materialmente muy específica, hasta el punto de que, para algunos modernos tratadistas, se trataba de un “gobierno casi asambleario”⁴⁰. Pero lo es asimismo que los ministerios, como también entonces se decía, actuaron en muchas ocasiones al margen de la Cámara y que esas Cortes se mostraron generosas en la concesión de autorizaciones y cesiones a los mismos. Incluso cuando eran notoriamente desfavorables a los intereses de la mayoría, como ponen de relieve la última sesión de las ordinarias, precisamente el 30 de junio de 1822, y los decretos y órdenes aprobados en ese día y los precedentes.

En este sentido, los exaltados comprendieron y aceptaron que, por su naturaleza, el gobierno tenía que adoptar medidas más allá de las reconocidas expresamente por la Constitución y las atribuidas a la necesaria y natural, como diría Tocqueville, potestad reglamentaria recogida explícitamente en el artículo 171-1^a de la misma para realizar actos justificables en razones “po-

40 En este sentido, Varela Suanzes, Joaquín, “La Monarquía imposible: La Constitución de Cádiz durante el Trienio”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, 1996, n^o LXVI, pp. 653 ss., epígrafe 3 y también en del mismo, *La Monarquía doceañista (1810-1837)*. Madrid, Marcial Pons, 2013, pp. 274 ss.

líticas”, como de hecho sucedió, por ejemplo, en el “caso Palarea”; es decir, una por así decir, actuación política discrecional complementaria de la acción de ejecución *sensu stricto*. Igualmente asumieron que cualquier disposición emanada del Legislativo, incluidas las leyes, podían ser erróneas, en cuyo caso se imponía una rectificación o subsanación⁴¹; presupuestos todos que cumplieran los requisitos característicos del parlamentarismo inicial. Como asimismo lo cumplía su defensa de que tal reconocimiento en modo alguno les eximía de la rendición de cuentas considerada, por otro lado, un elemento inexcusable de la existencia de una Constitución⁴².

A este respecto, Fernández Sarasola acierta al denominarlo “monista”⁴³ ya que, formalmente, se ajustaba a los parámetros establecidos por la Constitución, que atribuía a las Cortes competencias específicas en este sentido, aunque en la práctica este modelo fracasó las más de las veces por la acción de los gobiernos que actuaron al margen de las mismas y hasta, como se verá en caso de Capitanía General de Galicia de Riego, mintiendo abiertamente en la Cámara o sustrayendo información. Con todo, lo que a la mayoría exaltada le resultaba inconcebible e inadmisibile era el incumplimiento de la Constitución –por más que en algunos supuestos se produjeran excepciones sometidas a una previa votación de la Cámara, como ocurría en 1823 con Riego, precisamente– y, desde luego, consideraban cualquier ataque a la misma, como la reforma sin seguir lo preceptuado en el texto constitucional, un crimen de “lesa Nación”.

Como es obvio, esta concepción, agravada por el artículo 188 del Código Penal, aprobado el 8 de junio de 1822 y que entraría en vigor el 1 de enero del año siguiente, que tipificaba como traición y castigaba con la pena de muerte a cualquier persona que trabajase “directamente o de hecho a trastornar o destruir o alterar la Constitución política de la Monarquía Española”, obligaba a ocultar cualquier intento en este sentido. Ciertamente, en virtud del valor concedido a la opinión pública en el constitucionalismo moderno⁴⁴, par-

41 Moreno Guerra, *Manifiesto*, p. 14.

42 Dippel, Horst, *Constitucionalismo moderno*. Madrid, Marcial Pons, 2009, *passim*.

43 Fernández Sarasola, *Poder y libertad*, p. 603-4. La concepción parlamentarista la defiende sobre todo Blanco Valdés, Roberto, “Rey, Cortes y fuerza armada en el Trienio Liberal: hacia una progresiva parlamentarización de la Monarquía constitucional”, en J. Cano Bueso, *Materiales para el estudio de la Constitución de 1812*. Madrid, Tecnos, 1989, pp. 75 ss.

44 Tema sobre el que incidieron con particular vehemencia los periódicos más solventes y cuya importancia constitucional reclamaron, sobre todo, los diputados Flórez Es-

ticularmente efectiva como mecanismo eficiente de control de poder en aquellos momentos como subrayaba Romero Alpuente, la prensa, amparada por la abundante legislación sobre imprenta de las que son testimonio ilustrativo las tres leyes aprobadas en el Trienio⁴⁵, abundaba en explicaciones e interpretaciones diversas sobre la Constitución o los aspectos más relevantes de la misma, como se desprende de la lectura de publicaciones solventes como, entre otras, *El Imparcial*, *El Universal*, *El Censor*, en las que colaboraban los propios diputados a quienes se les aplicaba un régimen especial en caso de infracción⁴⁶. Y es, asimismo, conocido que se publicaron modelos alternativos, pero más allá de esos extremos, toda actuación tendente a abolir el texto constitucional recurriendo a la fuerza o por cualquier otro medio ilegal, se consideraba una conspiración, sobre la que asimismo existe abundante legislación en el Trienio.

Este era, justamente, el objetivo perseguido por un determinado proyecto constitucional que los exaltados consideraron especialmente peligroso, probablemente por la posición –y también cualificación– de quienes lo auspiciaban, y denunciaron de manera insistente a través de todos los medios a su alcance. Y es que, a pesar de todos los intentos de ocultamiento y negación bien a través de la prensa afín o con actos sociales públicos de adhesión a la Constitución, el llamado “plan de las cámaras que pretende dividir la representación nacional” propiciado, en conformidad a la calificación otorgada por las leyes anticonspiración de abril de 1821 y el Código Penal, por los conspiradores de la Sociedad del Anillo de Oro era de dominio público y llegó a las Cortes, pre-

trada y Romero Alpuente. Vid. a este respecto el clásico de Habermas, Jürgen, *Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública*. Barcelona, Gustavo Gili, 1981 (2ª edic.), en especial capítulos III a VII. Para la época y momento que se analizan, Fernández Sarasola, Ignacio, “‘Opinión pública’ y ‘libertades de expresión’ en el constitucionalismo español (1726-1845)”, en *Historia Constitucional*, nº 7, 2006 (en línea).

45 Ley de 22 de octubre de 1820 de Libertad de imprenta. CD, T. VI, pp. 234 ss.; Ley 12 de febrero de 1822. Ley adicional a la de 22 de octubre de 1820. CD T. VIII, pp. 265 ss.; Ley decretada por las Cortes adicional á la de 22 de octubre de 1820 sobre la libertad de imprenta. *Gaceta Española*: núm. 142, de 29/08/1823, pp. 527 a 528 a las que deben añadirse los RD y órdenes complementarias.

46 Real decreto expedido por el Rey: las Cortes han decretado que en los delitos que cometan los diputados de Cortes por abuso de libertad de imprenta se procederá según los trámites prescritos en la ley de 12 de noviembre de 1820, relativa á esta materia, con las modificaciones siguientes, y más que expresa. *Gaceta de Madrid*, nº 175 de 22/06/1821, página 952.

sididas a la sazón por Riego, a finales de marzo de 1822. Inexplicablemente, apenas generó reacción en ese foro y no produjo inmediato efecto alguno⁴⁷.

Aunque existieron otros proyectos e incluso relevantes diputados ya por entonces no veían con malos ojos una reforma de la Constitución en ciertos extremos coincidentes con los anilleros⁴⁸, los constitucionalistas, como demostraría el tiempo, no carecían de razón para temer este *plan*. Y para desconfiar de una sociedad de naturaleza filoaristocrática, por sus contactos con las potencias extranjeras, su cercanía a la corte y al rey, por su influencia y po-

47 Es significativo señalar que mientras desde algunas sociedades patrióticas y la prensa exaltada, en particular *El Zurriago*, se venía denunciando desde finales de 1821 a la sociedad como autora del “plan de las cámaras”, sus integrantes y simpatizantes pretendieron acallar las noticias al respecto con el auxilio de periódicos afines que sistemáticamente lo negaba con contundencia e incluso con actos públicos. Como el celebrado, con concierto incluido y “presencia de damas”, el 19 de marzo de 1822 en la sede social, momento en la que el movimiento conspirador estaba muy activo y contaba ya con el apoyo de la Corte, donde su presidente a la sazón, el príncipe de Anglona, pronunció un discurso de ferviente adhesión a la Constitución en su aniversario y, entre otras, llegó a decir “no faltarán hombres que quieran entorpecer la marcha de nuestra regeneración política y que con odiosas sospechas y acriminaciones provoquen la discordia entre los patriotas y conviertan el escenario de la opinión pública donde debieran discutirse los asuntos del bien, seguridad y adelantamiento general en una arena destinada solamente a la lucha de intereses personales o de mezquinas pasiones [...] seamos justos y benéficos que son las dos reglas que nuestra sabia Constitución prescribe a los españoles y cuya observancia es la piedra de toque para para juzgar de los que la aman o persiguen”. *Discurso pronunciado por el Príncipe de Anglona Presidente de la Sociedad Constitucional celebrando el aniversario del restablecimiento de la Constitución Política de esta Monarquía en el día 19 de marzo de 1822*. Madrid, Imprenta de don Leon Amarita, 1822, pp. 7-8. Una semana más tarde el diputado Ferrer la presentó en las Cortes señalando su peligro. Asombra la poca credulidad que las mismas le otorgaron, quizá porque, como expuso Argüelles, no simpatizante de los exaltados, en su largo discurso, para los diputados no implicados “el plan” era un despropósito y, por ello mismo, no tenía posibilidad de prosperar. *Diario de Sesiones de las Cortes (DSC). legislatura ordinaria 1822*, sesiones del 26 y 27 de marzo de 1822.

48 Entre ellos Argüelles, cuyas intervenciones, en especial desde 1821, permiten atisbar una posición que maduraría en su segundo exilio y que expondría en 1837, en relación a la exclusión de los secretarios del Despacho – ministros de las Cortes. Incluso Canga Argüelles, al igual que otros exiliados, modificaría su postura al respecto que expresó a través de la publicación mensual *Ocios de los españoles emigrados*, editada en Londres desde 1824. Ninguno de ellos, sin embargo, formó parte, que se sepa hasta el momento, de los movimientos conspiradores; por el contrario, mostraron una inquebrantable adhesión y una impecable actuación en los momentos más aciagos en la primavera y el verano de 1823.

der político y económico y, sobre todo, por el hecho de que, desde el principio hasta el final del Trienio –con la excepción del gobierno San Miguel– siempre estuvo activamente presente en el núcleo del poder a través de los relevantes miembros que ocuparon Secretarías del Despacho desde donde intentaron, y consiguieron, aplicar su modelo aunque fuera de una manera sectorial. Por lo demás, es evidente que desempeñó una singular participación en la marcha y caída del Trienio y no puede exonerarse su responsabilidad en la crispación e inestabilidad que caracterizan la época desde 1822, en particular desde los sucesos de los primeros siete días de julio de ese año, con unas Cortes de mayoría exaltada.

Al margen de los temas programáticos que los separaban⁴⁹, en lo que aquí interesa, la cuestión principal, por consiguiente, se reducía a la colisión de dos modelos constitucionales y políticos: el revolucionario monista y legicentrista de la Constitución y el post, e incluso anti, revolucionario, de naturaleza claramente ejecutivo-administrativa que se quería imponer, una lucha entonces común a la Europa continental. Y el Trienio fue el escenario privilegiado y excepcional donde se consumó la derrota del primero. En este sentido, la opinión de Argüelles –de cuya buena fe no cabe dudar dada su indudable integridad moral, celebrada hasta por un personaje tan caustico como Alcalá-Galiano– acerca de que “la diferencia entre los que se llamaban exaltados y moderados en las Cortes no estaba en los principios constitutivos del orden establecido, sino en la elección de los medios para sostenerle”⁵⁰, es mucho más que cuestionable⁵¹.

49 Vid., entre otros, Varela Suanzes, Joaquín, “El primer constitucionalismo español y portugués (un estudio comparado)”, en *Historia Constitucional*, 13 (2012); Fernández Sarasola, Ignacio, “El primer liberalismo en España (1808-1833)”, en *Historia Contemporánea*, n° 43, 2011, pp. 547-583; Del mismo, “Las primeras teorías del senado en España” en *Teoría y realidad Constitucional*, n° 17, 2006, pp. 169 ss.; Fernández Sebastián, Javier, “Liberalismo en España (1810-1850). La construcción de un concepto y la forja de una identidad política”, en *La aurora de la libertad. Los primeros liberalismos en el mundo iberoamericano*. Madrid, Marcial Pons, 2012; Ruiz Jiménez, Marta, *El liberalismo exaltado*; Elorza, Antonio, “La ideología moderada en el Trienio Liberal”, en *Cuadernos Hispanoamericanos*, n° 288, 1974.

50 Y, lo que no deja de ser sorprendente, añade “en ninguna de las cuestiones que se promovieron el primer año de la nueva diputación (legislaturas de 1822) se oyó jamás la alusión más remota a reformas constitucionales antes del tiempo señalado por la ley. En este punto reinó constantemente la más perfecta unanimidad”. Argüelles, *De 1820 a 1824*, p. 85.

51 Naturalmente las posteriores visiones de la etapa escritas sobre el periodo por rele-

Es, a este respecto, indudable que hubo divergencias, algunas de fondo, en el seno de los dos grandes grupos que permiten constatar la existencia, ya en la época, de extremismos representados por los *anilleros* entre los moderados y los comúnmente denominados *anarquistas* entre los exaltados. Sin embargo, dejando a un lado estas diferencias y los desafíos llevados a cabo o potenciados a través de la prensa y sociedades, secretas o no, con el ánimo de influir en la opinión pública, lo cierto es que los enfrentamientos en el seno de las Cortes, presentes desde el inicio de la etapa, se recrudecieron notablemente a partir de la legislatura ordinaria de 1822 y uno de los más constantes motivos eran las extralimitaciones del Ejecutivo. La sensación que se proyectaba a los ciudadanos era muy diversa, pero no faltaba quien, sin pertenecer a ninguno de los “partidos”, reclamara energía y unidad de acción entre moderados y exaltados “no anarquistas” para eliminar a los enemigos de la Constitución que, con la división y la debilidad e inercia mostrada al respecto por los gobiernos, proliferaban en cargos de responsabilidad, en especial entre la magistratura y jefaturas políticas⁵².

vantes figuras y protagonistas del mismo difieren notablemente según su inclinación política. Vid., por ejemplo, Miñano, Sebastián, *Examen crítico, de las revoluciones de España de 1820 a 1823 y de 1836*. Paris, Librería de Delaunay, 1837. Pando Fernández de Pinedo, Manuel (Marqués de Miraflores). *Apuntes históricocríticos para escribir la historia de la revolución de España, desde el año 1820 hasta 1823*. Londres, Oficina de Ricardo Taylor, 1834; Romero Alpuente, Juan, “Historia de la revolución de España en los años 1820 a 1823, o sea, explicación de las causas por las que se perdió la libertad constitucional”, publicada en del mismo, *Historia de la revolución española y otros escritos*, edición a cargo de Alberto Gil Novales, vol. II, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989.

⁵² Tal es el caso, ya en 1821, del jubilado C de P. y V. *No hay moderados ni exaltados en España. Hay pícaros como siempre. Verdades que todos conocen y nadie ha dicho hasta ahora*. Dedicado a los verdaderos amantes de la Patria por un Jubilado. Madrid, Imprenta de don J. Ramos y compañía, 1821.

RIEGO DIPUTADO EN CORTES. LAS LEGISLATURAS DE 1822 Y 1823:
RUPTURA Y RECUPERACIÓN DE LAS RELACIONES
EJECUTIVO-LEGISLATIVO

1. *Consideraciones generales*

La sucinta relación expuesta en el epígrafe precedente puede facilitar un acercamiento a lo vivido en el ámbito liberal, pero apenas representa una faceta de la realidad de un país cuya situación se volvió particularmente difícil a partir de 1822, cuando, además del recrudecimiento de la confrontación que acaba de señalarse, se extendieron e intensificaron los movimientos sediciosos absolutistas y se agravó la posición de España en el contexto internacional. Fue ese el año de una nueva legislatura, en la que Riego fue diputado por Asturias¹ tras las elecciones a Cortes celebradas en diciembre de 1821. Y el 25 de febrero de 1822, “por escrutinio secreto y a pluralidad absoluta de votos”, también fue elegido presidente de las mismas, con las que se abre la cuarta legislatura, y es ilustrativo que de los cargos electos (presidente y cuatro secretarios) no fue el que obtuvo mayor número de votos (72).

Es conveniente resaltar a los efectos que aquí se persiguen que el cargo, que tenía una duración mensual, no llevaba aparejado, más allá de los aspectos protocolarios y el tratamiento de excelentísimo, privilegios específicos,

1 Fue, en efecto, elegido el 3 de diciembre de ese año 1821 representante por Asturias en las elecciones a Cortes celebradas ese día con nombres tan ilustres como Argüelles, los hermanos Valdés y Canga Argüelles. Todos juraron su cargo el 25 de febrero de 1822 (adquirió los poderes el 5 de diciembre. *Archivo del Congreso de los Diputados*, Serie documentación Electoral: sig. 8 n^o 3) y es, a mi parecer, significativo que lo haga en compañía de los últimos. Fundamentalmente porque, si nos atenemos a lo transmitido por el Diario de Sesiones, se establece una estrecha relación con Canga con el que coincide en todas las votaciones en que participó con anterioridad a las extraordinarias de 1823, casi siempre en oposición a Argüelles con el que no demuestra tener afinidad, probablemente a causa de los ataques que éste le había dirigido en las Cortes en septiembre de 1821. Una aproximación a su labor como diputado puede verse en Sánchez Martín, Víctor, “El héroe revolucionario en el Parlamento. La labor como diputado de Rafael del Riego (1822-23)”, en Repeto García, Diana (coord.), *Las Cortes de Cádiz y la Historia Parlamentaria*. Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2012.

sobre todo en orden a los asuntos que se trataban en la Cámara. De hecho, además de la imposibilidad de reelección durante la misma legislatura, no tenía voto decisivo y tampoco preferencia en el uso de la palabra, debiendo pedirla y aguardar su turno².

Como partidario inconvencible de la “intacta”, desde el mismo momento de prestar juramento dejó clara su lealtad inquebrantable a la Constitución que, por lo demás, ya había expresado públicamente en diversas ocasiones con anterioridad y que se hace especialmente patente en el conocido breve discurso de Contestación al que había pronunciado Fernando VII en el acto oficial de apertura de las Cortes. En él, entre otras cosas, le recuerda lacónicamente que el verdadero poder y la grandeza de un rey radica en el seguimiento de la Constitución y las leyes³. En exquisito seguimiento de lo

2 En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución y los respectivos preceptos del recién aprobado Reglamento Interior de Cortes de 29 de junio de 1821. Desempeñó la presidencia por el periodo previsto en el Reglamento que, en su caso, por ser el primero de la legislatura, se extendió del 25 de febrero al 1 de abril (art. 35), es decir, tres días más que sus sucesores, que lo fueron por un mes como prescribía esa disposición. En realidad, las competencias del presidente estaban estrictamente delimitadas en el Reglamento de la Cámara y eran, salvo dos que adquirirán extrema importancia durante el periodo, básicamente de naturaleza procedimental. Así era, durante el mandato, miembro nato y director de la comisión de orden y gobierno interior del edificio de las Cortes integrada por el secretario más antiguo y cinco diputados electos, responsable de la redacción e impresión de los Diarios de sesiones y tenía bajo sus órdenes a todos los subalternos que allí prestaban servicio. Pero asimismo podía establecer la sucesión de los asuntos a tratar, decretar la detención de los autores de desórdenes, a quienes en el plazo de veinticuatro horas debía poner a disposición judicial, y determinar el número y distribución de la guardia del edificio, procedente exclusivamente “de los cuerpos que sirvan en el palacio del rey”, quienes debían rendir cuentas y obedecer exclusivamente al presidente de las Cortes. Tales competencias, sobre todo la última, no tardarían en ser invocadas tras los acontecimientos de principios de julio de 1822 (arts. 193 a 197 y 209-210). “Reglamento interior de Cortes”, Decreto LXXXVII de 29 de junio de 1821. CD. T. VII, 1821. También en Fernández Sarasola, Ignacio, *Reglamentos Parlamentarios* (1810-1977). Madrid, Iustel, 2012.

3 A la halagüeña descripción de Fernando VII del estado de la Nación Riego contraponen la situación real y añade “Las difíciles circunstancias que nos rodean, las maquinaciones repetidas de los enemigos de la libertad y la resistencia que constantemente se encuentra todo cambio de cosas aun de los que no odian la reformas, reclaman imperiosamente el mayor tesón y energía para consolidar el actual sistema político. Para llevar a efecto las mejoras establecidas, es necesario apartar con mano fuerte los obstáculos que puedan oponérseles. Las Cortes, Señor, sin excederse en sus atribuciones, trabajarán incesantemente en vencer todas estas dificultades y, además, se ocupa-

que para él era un principio incuestionable e irrenunciable que debía aplicarse en todas las ocasiones, esto es, “el gobierno de las leyes”, a lo largo de su mandato y como representante demostró no sólo conocer a la perfección la Constitución, el ordenamiento jurídico y las normas de la Cámara sino que aplicó con rigor y tolerancia la disciplina parlamentaria hasta el extremo de poder llegar a mostrarse extraordinariamente reglamentista⁴. Sobre todo, entendió el valor de la publicidad de los debates parlamentarios y la necesidad de su traslación íntegra y transparente. A él se debe la creación del Diario Sesiones, entonces “Diario de Cortes”, tal y como lo conocemos, determinando que era el único oficial para los diputados, acostumbrados a enterarse por los periódicos afines de las noticias oficiales y la creación de tribunas para la prensa con el fin evitar los frecuentes errores, conminando a los periodistas para que publicasen correcta y fidedignamente lo discutido en el palacio de Cortes⁵.

Por otra parte, resulta en extremo significativo que, no obstante haber manifestado, cuando era capitán general de Aragón, sus efectos contraproducentes en escrito elevado a las Cortes en 1821, entre las primeras intervenciones de Riego como presidente de las mismas una fue, precisamente, para solicitar a las Cámara una amnistía general para “los conspiradores contra el sistema constitucional”, incluidos los que se habían levantado en Cádiz el 10 de marzo de 1820, de los que únicamente excluye a los opositores en “las Cabezas”⁶. Como dato anecdótico cabe señalar que “el divino” Argüelles, quien se había mos-

rán en tomar en consideración todo cuanto SM les proponga”. DSC, sesión 1 de marzo de 1822, p. 54.

4 Expresiones elocuentes acerca de la aplicación del Reglamento se manifiestan bajo la presidencia de su sucesor, Cayetano Valdés, cuando le recuerda el mismo ante un incidente no previsto por aquel relativo al tiempo de duración de los debates que, finalmente no se prorrogó, o la queja que presenta con Canga de que las legaciones extranjeras presentes en la Cámara durante el discurso del Rey no habían mostrado el debido decoro. Pero también se muestra como un hábil conciliador en los debates, algunos muy enconados, que se presentan. Como el que se llevaba a cabo el 25 de marzo tras la intervención del diputado Ferrer que atajó con un “basta Señores, eso puede ser una equivocación fácil de rectificarse”. DSC, sesiones del 18 de abril de 1822, p. 908 y 25 de marzo de 1822, p. 554.

5 La propuesta en este sentido había sido presentada por Oliver y él mismo. DSC, sesión 25 de marzo de 1822; Orden de 29 de marzo de 1822. CD, T. IX, p. 39.

6 DSC, sesión del 9 de marzo de 1822.

trado especialmente duro con Riego en las Cortes pocos meses antes⁷, apenas tomó la palabra durante su presidencia⁸.

7 Se trata de los acontecimientos acaecidos con la llegada a Madrid de Riego en 1821. Vid. el penúltimo epígrafe de este trabajo.

8 A pesar de las duras acusaciones vertidas sobre su presidencia, en particular por Alcalá Galiano en sus *Recuerdos*, ejerció su cargo con una dignidad, coherencia y hasta elegancia no muy frecuentes. Así al menos lo pone de manifiesto el hecho de que no presentó su caso relacionado con el cese de la Capitanía General de Aragón ante las Cortes hasta el 11 de junio de 1822 y también el, posteriormente muy resaltado por sus seguidores, de ceder, tras haber solicitado la autorización de la Cámara, la presidencia cuando el segundo batallón del Regimiento Asturias, con el que había proclamado en 1820 la Constitución en Cabezas de San Juan, pasaba por Madrid para dirigirse a su nuevo destino y las Cortes quisieron recibirlo con honores. Tras el desfile, su comandante al mando entregó a las mismas el sable que llevaba Riego el 1 de enero de aquel año— hoy en el Congreso tras un sinnúmero de vicisitudes— en el que posteriormente se gravó esa fecha y su nombre, pero fue el Vicepresidente quien lo recibió. Vid. *DSC*, sesiones del 17 de marzo y 8 de junio.; y Órdenes de las Cortes del 15 y 16 de marzo de 1822. CD, T. IX, pp. 21 y 22. Por otro lado, su aureola de persona íntegra, reconocida hasta por sus enemigos, se incrementó con la negativa, que presentó infructuosamente en varias ocasiones, entre otras el de 3 de abril de 1822, a aceptar los ochenta mil reales que las Cortes le concedieron como premio en 1821—obviamente como compensación por el cese de la Capitanía de Galicia—, petición que fue vigorosamente rechazada por Argüelles en un discurso ante las Cortes, aunque nunca llegó a percibir tal cantidad. También la proposición de que, ante la prohibición cursada por algunos jefes políticos y autoridades del grito “Viva Riego” y los graves acontecimientos que durante ese mes habían desencadenado los realistas, sobre todo en Pamplona y Valencia, presentó a las Cortes siendo presidente para que éstas prohibieran oficialmente el mismo y que fue rechazada. *DSC*. 26 de marzo de 1822, así como su reticencia a aceptar los actos de ensalzamiento personal y otros abundantes homenajes, que recibió en contadas ocasiones. Sin embargo, es interesante señalar la carta de agradecimiento por el nombramiento de “Maestro de Artes y Doctor en Leyes” que le había concedido el Claustro de la Universidad de Granada que se formalizó el 17 de septiembre de 1822 con un encendido y retórico discurso de José Vicente Alonso en el que le define como “astro brillante de la libertad; por tan inmensurables espacios, tendría que discurrir mi pluma si había de presentar el cúmulo de males que afligió á la infeliz Iberia , y de que la ha libertado ese genio extraordinario con que hoy redoblas tu poder, ese ángel exterminador que el Omnipotente envió para espanto de liberticidas, para apoyo de buenos, para sosten del trono constitucional de la Monarquía española, para escudo de las libertades patrias, y para restaurador de nuestros santos, antiguos, respetables y perdidos fueros”. La *Oratio*, fue publicada: Alonso, José Vicente, *Oración pronunciada el día 17 de septiembre de 1822 en el acto de recibir los grados de Maestro en Artes y Doctor en leyes el ilustre ciudadano general Don Rafael del Riego por el Doctor Don José Vicente Alonso*. Granada, Imprenta del ciudadano Bena-

Sin embargo, la crudísima realidad a la que se ha hecho referencia en los epígrafes anteriores, se manifestó abiertamente desde el mismo momento en que echó a andar la legislatura, a pesar de que la nueva mayoría dio desde el inicio unos signos de moderación y conciliación incontestables (entre ellos la renuncia a una cuarta parte de su sueldo, que los diputados adoptaron por unanimidad a principios de marzo ante las dificultades del erario público)⁹ y llevaba un programa orientado a concluir la codificación, renovación del ejército y reformas en campos sensibles como la judicatura o la instrucción pública. También la firme resolución de que los cargos públicos, al contrario de lo que había sucedido durante los gobiernos anteriores, fueran desempeñados por verdaderos adeptos a la Constitución.

Desde el mismo momento de constituirse las Cortes, la prensa moderada más solvente mostró desconfianza o al menos suspicacia hacia las mismas. *El Imparcial* manifestaba una cierta discreción al respecto y, astutamente, rela-

vides, 1822, incluyendo un breve currículum de Riego en el que se exponían sus méritos “literarios”. El párrafo en p. 4.

La aceptación de este nombramiento de entre los muchos honores que se le ofrecieron es importante en la medida que expone la relevancia que para el primer liberalismo adquiriría la instrucción pública, asunto sobre el que existe preocupación, interesantes debates en la Cámara y se emiten diversas disposiciones en el Trienio, aunque, precisamente en marzo de 1822, tuvieron que suspenderse algunas de las medidas aprobadas por cuestiones hacendísticas. Este interés está directamente relacionado con la formación de ciudadanos y la obligatoriedad que la propia Constitución establecía de saber escribir y leer para ejercer los derechos de ciudadanía, como deja claro en el siguiente párrafo: “Íntimamente penetrado del interés que todos debemos tomar en la educación de los que han de ser los árbitros del destino de la sociedad, aun prescindiendo de los sentimientos de la muy profunda gratitud y de mis deberes como individuo, siempre será para mi una de las mayores satisfacciones contribuir a restablecer todo el antiguo esplendor de esa muy ilustre universidad que no podrá menos de producir talentos que algún día serán el ornamento de las Españas”. La carta de aceptación, fechada el 19 de noviembre de 1822, en BN, Mss 20270/176. Aparece también referenciada en Gil Novales, Alberto, *Rafael del Riego. La revolución de 1820 día a día: Cartas, escritos y discursos*. Madrid, Tecnos, 1976, pp. 182-3. Por lo demás, para una aproximación a su persona y pensamiento pueden consultarse, además de los ya referenciados, Fuentes, Juan Francisco, “‘Yo nada valgo’. Rafael del Riego y la revolución liberal española”, en Manuel Pérez Ledesma e Isabel Burdiel (eds), *Liberales eminentes*. Madrid, Marcial Pons, 2013, pp. 25 ss.; Cañas de Pablos, Alberto, “Riego. Imagen pública y mito”, en *VI simposium internacional de hispanistas del siglo XIX*, en línea.

9 DSC, sesión 4 de marzo de 1822, p. 95; Orden del 5 de marzo de 1822. CD, T. IX, p. 17.

taba puntualmente las sediciones en curso o los altercados provocados por las Milicias Nacionales. Por su parte, *El Universal*, más ecuánime, aunque en su número correspondiente al 27 de febrero censuraba a los críticos que aventuraban que jamás llegaría a conformarse la legislatura y atacaba duramente a los “ultras” extranjeros que denigraban el sistema español, en el del 2 de marzo, apuntaba una posible deriva hacia una “guerra de partidos” como preludio de la civil, al tiempo que dedicaba un amplio artículo a denigrar la publicación de Moreno Guerra que se ha comentado en este trabajo¹⁰. Con todo, era el moderado y siempre sólido *El Censor* quien, obviando la lectura política, centraba el asunto en lo que, realmente, era el problema por antonomasia: la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y con su habitual estilo sosegado y elegante reivindicaba un mayor poder para el primero, aconsejaba a las Cortes a no poner trabas al gobierno, a concederle amplias facultades, argumentando que “esto no es incrementar su poder” sino su trabajo para concluir con la advertencia de que, de no hacerlo así, la consecuencia sería la caída del sistema¹¹.

10 Vid. los números correspondientes a los días 2 a 5 de *El Imparcial*. Por su parte, las opiniones recogidas en el texto las incluyen los redactores de *El Universal* en un artículo titulado “Papel encontrado en la cartera de un extranjero” donde aparecen párrafos como el que sigue “En la fuerza del entusiasmo será fácil hacer que los exaltados tengan a los moderados por serviles y que aquellos sean mirados como anarquistas y demagogos... Escítese en los unos el deseo de vengarse, y avívese en los otros el temor de ser perseguidos: finjanse planes subversivos en los segundos, y proyectos hostiles en los primeros: hágase que parezca insuficiente el auxilio de las leyes, y persuádase á los q u e teman verse castigados que no hay salvación para ellos sino arrancan el poder de las manos de sus .enemigos”. *El Universal*, 2 de marzo de 1822, p. 3. En su número correspondiente al 27 de febrero incluye un artículo en defensa del sistema español frente a las opiniones de los periodistas *ultras*, en especial del *Monitor*, p. 3.

11 “Una de las manías más peligrosas de que es indispensable huir, es la de considerarse en un estado de guerra habitual con el poder ejecutivo; pues no son menos fatales ni menos ciertas las resultas de esta perpetua lucha que las que se seguirían de una condescendencia habitual con todas sus peticiones. La Constitución ha demarcado perfectamente las atribuciones de los poderes del estado; pero guárdese ninguno de ellos de creerse mas indispensable que el otro, porque toda la fuerza de que despoje á cualquiera de ellos pierde para todos los tres. El poder legislativo puede auxiliar poderosísimamente al ejecutivo y al judicial; pero si se ponen trabas injustas al uno y al otro, estas mismas trabas derribarán al primero. Este es un principio demostrado por la razón y por la historia con el auxilio de la experiencia. Debe contentarse el congreso con mirar este negocio en grande y de un modo verdaderamente legislativo, esto es, sentando las principales bases y los

De esto, en efecto, se trataba, como se patentizó desde las primeras sesiones. En una Cámara profundamente dividida, las propuestas que presentaron los exaltados, por lo general razonables y siempre en el marco determinado por la Constitución, chocaron con la intransigencia de los moderados. Se pusieron inmediatamente de manifiesto a través de episodios muy concretos, todos los cuales testimonian la irrefutable postura del “partido” y el gobierno Martínez de la Rosa.

El primero de ellos tuvo lugar en la también primera sesión efectiva de las Cortes tras la protocolaria del día anterior, esto es, el 2 de marzo. En ella el diputado Gómez Becerra presentó la proposición de creación inmediata de una “comisión de tranquilidad pública para entender en los negocios de este ramo por ser una cosa importantísima para el afianzamiento del sistema Constitucional”. En una situación verdaderamente excepcional, el diputado, ante las insuficiencias del texto constitucional y la legislación en las cuestiones de orden público¹² y la proliferación y agravamiento de los movimientos sediciosos, pedía asimismo que se exceptuara la aplicación del artículo 100 del Reglamento –conforme al cual las proposiciones efectuadas por un representante debían pasar a la preceptiva comisión– y se sometiese directamente a debate y posterior votación en el pleno. Aunque fue respaldada con sólidos argumentos por varios correligionarios, en especial Salvato que invocaba en su auxilio los principios de la legislación, fue duramente atacada por los moderados, quienes denunciaron su inconstitucionalidad por suponer una intromisión en las facultades del Ejecutivo. Para ellos “la mayor garantía de la libertad estaba en la separación de poderes”, que se alteraría de prosperar la proposición, y, además, “siempre quedaba el recurso a pedir la responsabilidad”. Así las cosas, ni siquiera la petición de Argüelles de que se retrasara su conformación hasta la lectura de las obligatorias Memorias de los secretarios del Despacho se aceptó.

No obstante, probablemente preocupados por el resultado de la votación

principios generales con que debe regirse la administración, y abandonando al cuidado del poder ejecutivo todos los pormenores accesorios y reglamentarios que tan frecuentemente complican y llegan á inutilizar las mas sabias resoluciones. No se crea equivocadamente que esto es aumentar el influjo ni la autoridad del poder ejecutivo, sino que al contrario es aumentarle el trabajo y buscar acaso el único medio seguro para que no se queden sin ejecución las providencias benéficas de las Cortes”, *Ligeras indicaciones*, pp. 370-371.

12 Vid., sobre las cuestiones relativas a orden público y su cobertura legal, el esclarecedor artículo de Fernández Sospedra, Manuel, “El camino a la guerra civil. La política de orden público”, en *Historia constitucional*, nº 21, 2020, pp. 27-62.

y el peso de la “opinión pública”, o cualquiera que fuera la causa, propusieron como alternativa la creación de una “comisión que examine el estado político del Reino”. Con ello “se declaró no haber lugar á votar sobre ella (la de Gómez Becerra), quedando leída por primera vez la del Sr. Gil de la Cuadra”¹³. Es definitivamente relevante señalar que era la primera vez que se aplicaba en aquella legislatura la técnica seguida por los moderados en casos similares. Su estrategia –desde luego exitosa, como se demostró en otras ocasiones, entre ellas en el asunto de la abolición del nombramiento de Riego para la Capitanía General de Galicia en 1820– cuando temían el triunfo de una proposición exaltada que consideraban especialmente peligrosa, consistía en apoderarse de la idea para darle un contenido u orientación radicalmente contrarios.

Los exaltados aprovecharon asimismo esa primera sesión para dejar claro que sus proyectos reformistas no eran una entelequia y que distaban de ser meros convidados de piedra. Pero, sobre todo, que conocían sobradamente los planes moderados en orden a la Constitución y venían dispuestos a abatir su política de nombramientos de cargos públicos a personas afines. Así lo demuestran las cuatro proposiciones de Decreto de ese día 2: dos de ellas, respaldadas por un número considerable de representantes, versaban sobre incompatibilidades de los diputados en relación al Ejecutivo¹⁴; las otras dos fueron presentadas por los diputados Oliver y García.

La primera, claramente inspirada en el desarrollo de los sucesos del otoño anterior sobre destitución y traslado de los militares constitucionalistas, afectaba a la aplicación del artículo 171 8ª y 9ª de la Constitución en relación a las fuerzas armadas¹⁵. El segundo hacía lo propio, pero sobre nombramiento

13 DSC, sesión del 2 de marzo de 1822, pp. 60 ss. La frase entrecomillada en p. 66.

14 Pedían, la primera, prohibición a los diputados de “concurrir a las secretarías del Despacho” durante el tiempo de su diputación y la segunda, no aceptar destino ni ascenso de provisión regia hasta transcurrido un año del cese de la Diputación”. *Ibi*, p. 67.

15 “Habiéndose interpretado equivocadamente el párrafo noveno del art. 171 de la Constitución, y no pudiendo las Cortes desentenderse de fijar su verdadera inteligencia, usando de las facultades que les corresponden exclusivamente por los artículos 131, 359 y 372, pido que las mismas decreten lo siguiente: 1. La fuerza armada de que se trata en el párrafo noveno del art. 171 de la Constitución es la que forman los cuerpos del ejército, los regimientos, batallones, escuadrones, compañías y escuadras, sin que pueda darse la misma denominación á los jefes y oficiales individualmente. 2. En su consecuencia, el Poder ejecutivo, usando de las facultades que le concede el citado artículo, no puede suspender del mando, ni cambiar de destino á los jefes y oficiales conocidos con los nombres de vivos

y remoción de los jefes políticos, en los que se daba voz a las provincias. Casualmente coincidía con la protesta presentada por el Ayuntamiento de Pamplona contra el de Navarra, a quien acusaba –al igual que al que había sido secretario del Despacho de la Guerra, Sánchez Salvador que había ordenado desarmar a la Milicia Nacional Local–, de colaborar con los movimientos sediciosos¹⁶. Ambos proyectos eran la reacción exaltada a la política seguida por los gobiernos moderados anteriores en estas materias, reiteradamente protestada en las Cortes e ignorada por los sucesivos Ministerios. Y eran, ante todo, la expresión firme de su postura ante los abusos de poder del Ejecutivo.

Con todo, la expresión más elocuente del enfrentamiento se encuentra en el conflicto generado por los secretarios del despacho del gobierno Martínez de la Rosa, quienes no incorporaban en las preceptivas memorias de sus Departamentos los presupuestos anuales de ingresos y gastos, de los que debían rendir cuentas a la Cámara. El ejemplo por excelencia es el de secretario del Despacho de Hacienda, el *anillero* Sierra Pambley. Alegando ignorancia e imposibilidad, expuso que no asumía lo dispuesto en la Memoria y que de las deficiencias observadas debía responder el gobierno anterior, a pesar de que éste, presidido por el Marqués de Santa Cruz, apenas había durado mes.

Ciertamente, el incomprensible nombramiento del gobierno el 28 de febrero¹⁷, esto es, a dos días de la apertura de Cortes, explicaba en parte su

y efectivos, que tienen despachos con señalamiento de provincias, cuerpos o compañías en que deben servir, á no ser porque lo soliciten los interesados, ó por ascensos que admitan, o por formacion de causa que deba producir la suspensión”. Ibi, p. 67.

16 “Mandose remitir al Gobierno para que tomase en consideración la parte relativa al jefe político de Navarra una exposición de ayuntamiento de pamplona en que manifestaba el sentimiento que causó la aserción asentada por la comisión de las Cortes extraordinarias encargada de proponer lo conveniente acerca del indulto para los facciosos de aquella provincia, de que el foco de la insurrección existía en la capital como igualmente de la petición del sr Sánchez salvador sobre que fuese desarmada la milicia voluntaria de aquella ciudad, cuyas ideas desventajosas se habrían formado por influjo del jefe político Veyan. Refería con este motivo la conducta de este y ensalzaba la nobleza fidelidad y patriotismo de los habitantes de Pamplona y concluía diciendo que porque había algunos que se habían extraviado de la senda del deber no era justo que recayera la odiosidad sobre todos los habitantes de la ciudad”. DSC sesión 2 de marzo de 1822 p. 58.

17 Las anteriores Cortes, como le recordaba un diputado a Sierra Pambley, habían denunciado la ausencia de “fuerza moral” del gobierno del Marqués de Santa Cruz. Pero su destitución coincidiendo con la apertura de Cortes ante las que debían rendir cuentas los secretarios del Despacho solo puede deberse a una de las típicas y calculadas estratagemas de Fernando VII –quien, por cierto, deliberadamente se fue a Aranjuez inmediatamente

postura en lo relativo a la falta de tiempo, pero, desde luego, en modo alguno justificaba su prepotencia al manifestar su desacuerdo con las Memorias elaboradas por empleados de la Contaduría y mucho menos la notable indolencia al responder a las reiteradas preguntas al respecto de los diputados. En realidad, eludió las mismas alegando que no estaba claro si la rendición de cuentas afectaba al gobierno en su conjunto o a cada uno de los ministros, de lo que se derivaba la responsabilidad ante la Cámara. Era evidente que, planteando esta “cuestión metafísica” como la calificó un profundamente contrariado Canga Argüelles, se negaba a cumplir con su obligación de presentar el presupuesto general de gastos de todos los ministerios y, subrepticamente, a rendir cuentas ante una Cámara de mayoría exaltada, para lo que contó con el apoyo de algunos diputados moderados. Pero, sobre todo, a exponer cuál sería la política económica del nuevo gobierno, que la nueva mayoría esperaba con particular interés habida cuenta la carga impositiva que ya pesaba sobre los españoles, las dificultades de la Hacienda ante la pérdida de ingresos de las colonias y, en especial, el elevado número de empleados públicos que habían introducido los anteriores ministerios, fundamentalmente por intereses partidistas y sin criterios de racionalidad.

Este hecho, que indicaba con claridad meridiana la ruptura entre el Ejecutivo y el Legislativo, era, además, palmariamente inconstitucional en la medida que infringía abiertamente los artículos 227, 341 y 342 de la Constitución, lo que incendió los ánimos de los presentes; y no sorprende que fuera precisamente en ese contexto cuando Istúriz presentó una proposición por la que pedía a las Cortes que declarasen “que ningún asunto se dará por discutido cuando sea un Ministro el que tenga la última palabra”. Aun así, la Cámara aprobó la concesión de una prórroga para que los ministros, en particular el de Hacienda, presentaran las Memorias completas “so pena de incurrir en responsabilidad”¹⁸. En la sesión del 20 de marzo se sometió a discusión el dictamen de la comisión de Hacienda, fechado el 14 anterior, elaborado sobre la remitida por el secretario de Hacienda.

Articulado en dos apartados principales intitulados “Bases preliminares” y “Economías”, en él, entre otros asuntos, se analizaba en profundidad el es-

después de inaugurar la legislatura—, para derrocar el “sistema” constitucional, como se verá más adelante. Ibi.

18 DSC, sesión 5 de marzo de 1822, pp. 139 ss. La Memoria final fue, siguiendo la práctica habitual, publicada por orden de las Cortes. Cfr. *Memoria leída á las Cortes en la sesion publica de 5 de marzo de 1822*. Madrid, en la Imprenta Nacional, 1822.

tado de la cuestión, criticaba varios aspectos derivados de funestos acuerdos gubernamentales que ni siquiera alcanzaban a cubrir los intereses de empréstitos desastrosos y proponía medidas alternativas destinadas a solventar un déficit exagerado en la línea del más acendrado liberalismo económico. Entre ellas, se encontraban la suspensión de la aplicación del plan de instrucción pública, se prohibía la provisión de empleos de naturaleza política, se regulaban las pensiones y sueldos de interinos, extranjeros, jubilados y cesantes y se eliminaban los sobresueldos de algunos funcionarios. Se trataba, en resumen, “de hacer reformas efectivas de los gastos públicos”, absolutamente necesarias para enderezar un tesoro que los gobiernos habían dilapidado actuando con “cierta generosidad y magnificencia ajenas de la pobreza actual y haciendo gallardías propias de quien dispone de ajenas riquezas”.

El debate que se suscitó a continuación fue, simplemente, el anuncio de lo que serían esas Cortes y Canga Argüelles, como miembro de la comisión, lo situó en sus justos límites: “las Cortes deberían luchar con el Gobierno palmo a palmo para mantener su terreno”. Aunque giró sobre cuestiones técnicas, no se trataba solo, o tanto, de una discusión sobre teorías o modelos: la lectura política era ostensible. Porque mientras la comisión incidía en el techo de gasto, la dilapidación en creación de empleos públicos para los correligionarios y política fiscal, Sierra Pembley y Martínez de la Rosa en su calidad de secretario del Despacho de Estado, desautorizaron no solo a la comisión sino a las Cortes por razones formales –no se había imprimido la Memoria remitida por el ministro–, denunciaron el dictamen por inexacto –a pesar de que estaba elaborado con los documentos aportados por el ministerio– y culpabilizaron de los errores a las anteriores Cortes –en las que ellos habían sido diputados–. Asimismo propusieron que la Cámara se limitaran a fijar el presupuesto sin entrar en las “contribuciones”, lo que equivalía a dejar la decisión sobre éstas en manos del gobierno. Con todo, a pesar del entusiasta respaldo de algunos intervinientes, en la votación del día siguiente se aprobó el dictamen de la comisión¹⁹. Los extensos discursos pronunciados, con frecuencia de naturaleza fuertemente ideologizada, entroncaban con la práctica

19 DSC, sesión 20 de marzo de 1822, pp. 426 ss. y 21 de marzo de 1822, pp. 452 ss. La expresión de Canga “Ha llegado el caso que anuncié el otro día en que el Congreso nacional y sus dignos representantes hubieran de disputar palmo á palmo al Gobierno sus pretensiones en orden á los gastos públicos”, en la sesión del día 20, p. 434. La comisión de Hacienda estaba integrada por diputados tan reconocidos como Canga Argüelles, Isturiz, Septien, Ferrer, Ovalle, Adan, Jiménez y Surrá, todos ellos habituales intervinientes en los debates en Cortes.

de las anteriores legislaturas, que algunos aprovecharon para alargar los debates que, a pesar de las estrictas normas al respecto, los presidentes fueron sumamente cautelosos en recortar²⁰.

Finalmente, se produjo asimismo en ese mes otro episodio que muestra la falta de sintonía, aún más, el profundo distanciamiento, existente entre los dos poderes a los que Constitución atribuía la gobernación, promovido por el gobierno de Martínez de la Rosa. Se trata de las algazaras y levantamientos, en muchos casos instrumentalizados en función de sus respectivos intereses no solo por los realistas o serviles, sino también por algunas autoridades moderadas, y no es difícil intuir la aquiescencia regia. Aunque sin alcanzar el grado de gravedad de julio, los llevados a cabo en Madrid a mediados de marzo de 1822 coincidiendo con la presidencia de Riego mostraban signos inquietantes, en parte porque los más relevantes estaban protagonizados por militares de la guardia real.

La preocupación llegó hasta el extremo de que las Cortes nombraron una comisión para que observara *in situ* los mismos, al tiempo que se acordó pedir explicaciones al secretario de Gobernación de la Península. Moscoso de Altamira alegó desconocimiento y les restó importancia asegurando reinaba la tranquilidad. Cuando la comisión regresó de la inspección, su opinión era completamente distinta ya que certificó su existencia, aunque su presidente afirmaba que los grupos ya se habían disuelto cuando llegaron allí los integrantes. Al día siguiente, Riego informó a las Cortes que, tras levantar la sesión (duraban 3 horas) había “cogido su caballo” e ido al lugar de los hechos para realizar una inspección personal. Cuando llegó, expuso, habló directamente con el oficial al mando que ordenó retirarse a las tropas, aparentemente en descanso.

Es evidente que estos incidentes, que se sucederían, recrudecerían y se expandirían posteriormente, suscitaron la intranquilidad de la Cámara. Hasta ese momento, las intenciones absolutistas que aparecieron desde la misma proclamación de la Constitución se habían contenido con mayor o menor éxito y los levantamientos de Navarra, Valencia y Cataluña así como los que empezarían a llegar de las provincias, parecían lejanos y, en cierto modo, quedaban compensados con las continuadas muestras de adhesión de los mili-

20 “No son los discursos de academia los que persuaden a los pueblos, su felicidad verdadera, aquella que toca y palpa el mas idiota, es para el pueblo el argumento mas persuasivo”, escribe Riego en el *Borrador de Representación de 1823*. Sin embargo él, que fue extremadamente conciso en sus intervenciones, fue asimismo extremadamente cauteloso en poner límites a las intervenciones durante su presidencia.

tares, algunos solicitando una bajada de sueldo para ayudar a la Nación en situación tan apremiante, y civiles que llegaban a las Cortes. Pero el hecho de que se produjeran en la capital del Reino, donde se situaba físicamente la sede de la soberanía nacional, era considerablemente alarmante.

Ya en la sesión del 9 de marzo fue leída en la Cámara una proposición firmada por más cuarenta diputados exaltados –entre ellos Riego, Alcalá Galiano y Cayetano Valdés– en la que solicitaban la presencia del ministerio “para dar cuenta” de su actuación al respecto²¹. Conscientes de la gravedad de la situación, la proposición fue aprobada tras una ardua discusión y se acordó que los secretarios del Despacho de Gobernación de la Península, Guerra y Gracia y Justicia acudieran esa misma noche a dar explicaciones sobre “el estado en que se encuentra la Nación”. Sus informes pasaron a comisión para elaborar un dictamen y proposición que debía discutirse en el pleno y, hasta ese momento, las Cortes “esperan” que el gobierno adoptase las medidas oportunas para recobrar la tranquilidad pública perturbada y se pusiera fin a las arbitrariedades cometidas contra “algunos patriotas”²².

Sin embargo, el gobierno estaba bien lejos de cumplir tal cometido como demuestra la más que notable apatía en tomar medidas contundentes para sofocar las sediciones y castigar a los responsables. Una prueba concluyente es la respuesta que el mencionado Moscoso de Altamira dio a la petitoria cursada por la Cámara promovida por ciudadanos e instituciones de Valencia para la remoción del jefe político y el comandante general de esa ciudad, fundamentada en la actuación anticonstitucional de ambos durante los graves

21 Precisamente en la sesión del 9 de marzo fue leída en la Cámara una proposición firmada por más cuarenta diputados exaltados –entre ellos Riego, Alcalá Galiano y Cayetano Valdés– cuyo tenor era el siguiente: “Siendo tan funestas las turbulencias que se advierten en las provincias, y las reacciones contra el sistema constitucional, seguidas de procedimientos y persecuciones contra patriotas beneméritos, piden á las Cortes los diputados que suscriben, se sirvan resolver: que los señores secretarios de la Gobernación de la Península, Guerra y Gracia y Justicia, se presenten en las Cortes á dar cuenta al Congreso del origen de tales procedimientos, y providencias que hayan dado en su razón”. DSC, sesión 9 de marzo de 1822.

22 “Las Cortes se han enterado por los señores secretarios del despacho del estado en que se encuentra la nación, cuyos informes tendrá presentes la comisión, para proponer á las Cortes lo que estime conveniente; y estas entretanto esperan, que el gobierno tomará todas las medidas necesarias para calmar la agitación pública, para inspirar la debida confianza á la nación, y para aliviar la suerte de algunos patriotas que gimen bajo el peso de la arbitrariedad”. Ibi.

incidentes que habían sucedido a lo largo del mes de marzo, en particular desde el día 9. Cuando fue interpelado sobre el asunto, tras comenzar por invocar la unión del Ejecutivo y el Legislativo –a la que por cierto Riego repuso “esa unión la queremos todos: todos anhelamos por ella y sobre todos Riego la desea”– expuso literalmente que no se hallaban “motivos fundados para separar(los) de sus destinos... Y no han accedido a los deseos de la comisión porque sería considerado como un castigo para aquellos funcionarios separarlos de sus puestos sin saber si son o no delincuentes”. Con esta apelación a la presunción de inocencia –que ciertamente no se había practicado en el caso de Riego en 1820 ni en ninguno en los que se vio afectado– y con una impudencia digna de mejor causa, el secretario de la Gobernación de la Península e Islas adyacentes invocaba para ello el Decreto de las Cortes de 13 de marzo de 1813²³.

Los casos que se acaban de relatar conforman, a mi parecer, testimonio bastante del cuestionable o nulo interés del gobierno de Martínez de la Rosa –un gobierno nombrado extemporánea y taimadamente por Fernando VII pero anómalo y contrario al sentido común en aquellas circunstancias²⁴– en seguir las directrices constitucionales en asuntos esenciales y, por el contrario, actuar con notable independencia, y hasta al margen, de las Cortes, a las que ni siquiera se sentía obligado a rendir cuentas. En otras palabras, de la deliberada ruptura del Ejecutivo con el Legislativo, hecho que condicionó el normal desarrollo de la legislatura.

2. *La difícil singladura de la legislatura ordinaria de 1822*

Es suficiente una primera lectura de Diario de Sesiones para percibir con rapidez las características del desarrollo de unos debates que orbitaban en

23 DSC, sesión de 23 de marzo de 1823, p. 505. Sobre las tramas realistas agudizadas en esa ciudad a partir de 1821 con la directa participación de Elío y este episodio en concreto, así como de la actitud de los liberales, García Monerris, Encarna y García Monerris, Carmen, *La Nación Secuestrada. Francisco Javier Elío, Manifiesto y Correspondencia*. Valencia, Universitat de València, 2008, en particular pp. 83 ss., “El manifiesto de Elío y el apéndice de Sombiola”.

24 “La presentación del ministerio en semejantes Cortes, era á los ojos del buen sentido una verdadera anomalía. Por muchos que fuesen los diputados que lo apoyasen, era imposible romper una falange de hombres fogosos, decididos á combatirle por todos medios, y entre los que muchos poseían ventajosamente el don de la palabra”. San Miguel, *Vida de D. Agustín de Argüelles*, p. 309.

torno a temas cuya resolución era acuciante. Sin embargo, los asuntos, y en particular su tratamiento, se muestran más bien como *causae litis* entre posicionamientos muy determinados y firmes en los que era casi imposible llegar a un acuerdo. Se puede apreciar esta situación, como acaba de reseñarse en el epígrafe anterior, desde el inicio de la legislatura cuando, bajo el preceptivo periodo de tiempo en que Riego ocupó la presidencia –algo más de un mes–, aunque hubo acuerdo en el nombramiento de los miembros del importante Tribunal de Cortes²⁵, surgieron los aludidos primeros enfrentamientos sobre interpretación de la Constitución. Los debates sobre todos los temas ofrecen esta lectura más partidista que jurídica, incluso aquellos relacionados con cuestiones no ya de *lege ferenda* sino de *lege lata*.

Se comprueba en la discusión sobre la formación de causa de responsabilidad al ex secretario del Despacho de la Guerra Sánchez Salvador y al capitán general de Madrid, Morillo, Conde de Cartagena. El procedimiento fue incoado por dos jefes y un oficial del Regimiento Sagunto con sede en la capital, a quienes el primero ordenó abrir juicio basándose en la denuncia anónima de que habían tomado parte en los altercados que acaecieron en Madrid el 12 de septiembre de 1821 con motivo de la destitución de Riego de la Capitanía General de Aragón. Morillo dispuso la inmediata conformación de un consejo de guerra, que exoneró de toda culpa al coronel Serrano, al teniente coronel Ceruti y al capitán Chinchilla y dictaminó su inmediata adscripción a sus respectivos puestos.

Una vez reincorporados, elevaron a las Cortes una representación pidiendo la responsabilidad del ex ministro y el capitán general por infracción de Constitución. Siguiendo los trámites establecidos, el asunto pasó a la comisión encargada de analizar estos casos tras ser aprobada por la cámara, la cual, a partir de la documentación remitida por el gobierno a su solicitud, elaboró un dictamen en el que declaraba la responsabilidad de ambos, del fiscal y del asesor auditor. La discusión del mismo en el pleno se llevó a cabo en la recta final de la presidencia de Riego, el 31 de marzo, en dos largas sesiones ordinaria y extraordinaria, es decir, por la mañana y por la noche, que hubieron de prorrogarse una hora más de la establecida por el Reglamento de Cortes²⁶.

25 CD, D. 26 marzo de 1822, T. IX, p. 34. Este Tribunal era el único competente para juzgar a los diputados cualquiera que fuera la naturaleza de la causa.

26 El intenso debate, en efecto, se llevó a cabo en las sesiones matinal y vespertina. DSC, sesiones de 31 de marzo de 1821, pp. 639 a 645 y 647 a 665 respectivamente.

Además de la cuestión de fondo, lo relevante a subrayar es la orientación que se dio al debate, directamente relacionada con la aplicación de la Constitución y las garantías procesales. *Prima facie*, el desarrollo de la discusión indica que la intención de los moderados era evitar que la causa prosperase, para lo cual iniciaron la misma denunciando la existencia de un impedimento formal: la sentencia del consejo de guerra, como señalaba el gobierno en su oficio de remisión, todavía no se había pasado al Tribunal de Guerra y Marina para su archivo. Para el diputado Valdés, y los representantes que apoyaron su intervención, esta formalidad invalidaba ya no sólo el dictamen de la comisión, sino incluso la petición de los militares. Apoyaba su argumentación en las ordenanzas militares preconstitucionales que seguían vigentes. La cuestión, por consiguiente, se centraba en que las Cortes habían avocado una causa pendiente, lo cual suponía una intromisión en las facultades del tercer poder.

Los exaltados centraron el asunto en cuestiones de *lege lata* y en la interpretación auténtica o más adecuada de la Constitución. De hecho, su contraataque consistió en rechazar que hubiera una intervención de las Cortes mientras la causa se estaba sustanciando, que, por el contrario, ésta había fenecido por cuanto la sentencia ya había sido ejecutada, que la remisión al citado Tribunal en modo alguno afectaba a las garantías procesales y al fondo del asunto y, por último, en que, de seguir la interpretación de la facción moderada, se llegaría a la conclusión de que el Legislativo quedaría sometido a la decisión de un Tribunal especial. Finalmente, arguyeron que la Real Célula de 1 de junio de 1816 invocada, dictada en época no constitucional, contradecía abiertamente no solo lo dispuesto por la *Ley constitutiva del ejército* de 1821, en particular los artículos 118, 135 y 137 que abolían las diferencias en los juicios militares y civiles en tiempos de paz; infringía asimismo y sobre todo la Ley de 24 de marzo de 1813 que regulaba esta delicada materia. Aunque con esta intervención el presidente dio por concluido el debate²⁷, todavía en la sesión extraordinaria de la tarde-noche no faltaron intentos de alargar el mismo. En todo caso, fracasaron y se pudo entrar en el fondo de la materia.

No es este el lugar de analizar en profundidad el asunto material que, por lo demás dio lugar a un debate de enorme interés sobre la coexistencia de la Constitución y las normas vigentes del Antiguo Régimen (en particular en este caso Partidas y Nov. R. XXXIII, 2, 7 y 8 sobre denuncias anónimas en el

²⁷ La intervención en este sentido fue del diputado Soria. Vid. DSC, sesión 31 de marzo de 1821, pp. 642-3.

proceso penal) cuya relajación, como se dijo, “puede ser obra solamente del Poder Legislativo y de ningún modo del Ejecutivo”. Se trata, más bien, de verificar la singular modernidad que se dio al binomio “obediencia debida/obediencia pasiva” para dirimir la responsabilidad de Morillo quien, siguiendo las órdenes del ministro de incoar un procedimiento basándose en denuncias anónimas en contra de lo prescrito por la legislación vigente, obligó a la inmediata conformación de un consejo de guerra en el que él actuó durante un determinado tiempo como juez y, además, como testigo. Esgrimiendo criterios teleológicos, para alguno de aquellos diputados, la primera –obediencia debida– tenía su fundamento en la razón que permite “discernir lo justo (y si) es o no opuesto a las leyes”, en tanto que la segunda –obediencia pasiva–, como demostraba el comportamiento del capitán general, no solo era por naturaleza injusta sino que era claramente contraria al ordenamiento jurídico vigente²⁸. Para uno de ellos, Salvato en concreto, el Conde de Cartagena había mostrado una “obediencia ciega, implícita y pasiva que sólo puede servir para formar de un funcionario en la sociedad un instrumento dócil a un poder desenfrenado como pudiera ser el del Gobierno”²⁹.

Incluso en un tema tan preciso y técnico como el que se acaba de reseñar, la cuestión siempre derivaba hacia el problema por excelencia: la rivalidad Ejecutivo–Legislativo o, más exactamente, los “excesos” o abuso de poder del primero y, en consecuencia, la conculcación de la Constitución en vigor. Así lo pone de manifiesto la postura de los moderados, para quienes la respuesta se encontraba, ante la evidente infracción del secretario del Despacho y autoridades inferiores, únicamente en que en el supuesto de peligro de la “salud de la Patria –lo que ciertamente no era el caso– ¿no será justo que el Gobierno procure adquirir las medidas que le convengan?” Aunque la reacción inmediata de los exaltados más combativos a tal intervención fue que precisamente “eso era establecer la necesidad de las Dictaduras”, la respuesta mayoritaria para este grupo iba de suyo y fue de nuevo Salvato quien recondujo las opiniones a sus justos límites constitucionales en la percepción exaltada: “El Ministro Salvador antes de firmar la orden debía tener presente que la autoridad Real ni aun bajo el pretexto de peligrar la seguridad del Estado, podía dispensar en

²⁸ Intervenciones de los diputados Gómez Becerra y Soria. DSC, sesión 31 de marzo de 1821, pp. 653 y 658.

²⁹ Y continúa “estos instrumentos pueden ser muy terribles, los únicos de quienes tendría que recelar siempre la libertad”. Ibi.

manera alguna las formalidades que establece nuestra legislación”³⁰. Es decir, el orden constitucional no conocía excepciones.

Lo cierto es que todos eran conscientes de que, en el fondo, lo que se estaba discutiendo era la dualidad discrecionalidad/arbitrariedad o, como más gráficamente expuso el diputado Gómez Becerra que “bajo el imperio de la Constitución hubiera funcionarios públicos opresores y déspotas”³¹. Así las cosas, no puede sorprender el resultado de la votación: se aprobó abrir causa al ministro, al fiscal y al auditor asesor del consejo de guerra y se exoneró a Morillo y a los generales jueces que habían sido miembros del mismo. La escasísima diferencia de votos, apenas diez, entre los principales encausados, evidencia la profunda brecha que existía en aquellas Cortes³².

Por lo demás, esa legislatura fue singularmente compleja desde el inicio no solo por el agravamiento del problema de fondo sino por los propios asuntos a tratar. Y, durante la presidencia de Riego, al lado de los conflictos electorales y el sempiterno problema de la Hacienda Pública, los debates se centraron preferentemente sobre el preocupante y perentorio “arreglo del clero” (la desamortización de bienes del clero regular y jurisdicción eclesiástica, fundamentalmente).

Era ésta una cuestión que se arrastraba desde las anteriores Cortes y, desde luego, distaba de suscitar el acuerdo de la Cámara no obstante la beligerante oposición de, sobre todo, la jerarquía eclesiástica desde los mismos inicios del Trienio³³. Con los trabajos de codificación, tanto en el ámbito civil –Códigos

30 Ibi, p. 650.

31 Como defensor del gobierno y del ministro, el diputado Lapuerta; entre los que denunciaron la Dictadura, Alcalá Galiano. DSC, sesión 31 de marzo de 1821 noche, p. 656. La intervención de Gómez Becerra, p. 653.

32 DSC, sesión 31 de marzo de 1821, pp. 660 ss. Es a este respecto ilustrativo que Riego pidió a las Cortes no participar en la misma dado el conflicto personal que tenía con Sánchez Salvador por el asunto de la Capitanía General de Aragón, que se analizará más adelante, todavía abierto, pero a petición del diputado Septien “que de ningún modo debía accederse a esta petición, porque las leyes no transigían ni aún con los padres ni parientes, votó en efecto”. Ibi, p. 660. Apartándose de su habitual proceder que coincidía con los exaltados, en la votación, que fue nominal, votó en contra del encausamiento del ministro Sánchez Salvador, a pesar de la enemistad manifiesta de éste.

33 “Durante el Trienio Liberal fue permanente la conflictividad entre las autoridades civiles y el episcopado español”. “La oposición eclesiástica al sistema constitucional alcanzó su culmen en 1822: el clero participó activamente en conspiraciones contra el régimen, y se comprometió directa e intensamente en la organización de Juntas y guerrillas para derribarlo por la fuerza, sin cesar en la condena verbal y por escrito de la actuación del po-

Penal, Civil y de procedimientos— como militar encomendados a las diferentes comisiones retardados, el tema venía a sumarse a las conflictivas Ley de Señoríos —sobre la que el rey, en conformidad a los artículos 142 y siguientes de la Constitución había ejercido su veto en la legislatura precedente y, ahora, contraviniendo abiertamente la misma, presentaba un proyecto alternativo—, la del gobierno interior de los pueblos y provincias (Ayuntamientos y Diputaciones), las ordenanzas militares y la de Milicias Nacionales, cuya aprobación representaba, aislada o conjuntamente, *de iure et facto*, uno de los más complejos obstáculos a superar.

Precisamente la redacción y aprobación de esta última conformaba uno de los objetivos primordiales para los liberales exaltados. Sin embargo, no sólo contaba con la completa antipatía y oposición del rey —de hecho, las suprimió en 1814 y volvería hacerlo a la caída del Trienio— sino que pronto se presentó como otro de los principales elementos de confrontación entre ambas ramas del liberalismo. Reguladas en el capítulo segundo del Título VIII “De la fuerza nacional militar” de la Constitución, es decir, en el mismo apartado que el ejército regular permanente, tanto el Constituyente como los exaltados la contemplaban, al igual que al jurado o jueces de hecho, como una manifestación de la soberanía nacional que, en este caso, exigía la participación e involucraba a la ciudadanía en la defensa de la Nación y el orden constitucional. Por esta razón formaban parte de ella los varones de entre treinta y cincuenta años registrados en un censo adecuado a la población de la provincia, entendida ésta como la circunscripción en la que debían prestar sus servicios por un plazo determinado en conformidad a los requisitos establecidos por una ordenanza específica, cuya redacción obligatoria prescribía el artículo 363 del texto constitucional. Fue justamente esta participación de toda la ciudadanía una de las principales causas de enfrentamiento con los moderados, que mostraron su desconfianza hacia las mismas en la medida que contradecía el definitivo giro, más aristocrático que mesocrático, que esta corriente otorgaba a todos los asuntos constitucionales. Incluido éste, como se demostró con la creación de la milicia urbana durante el gobierno Martínez de la Rosa bajo el Estatuto Real³⁴.

der civil”. La Parra López, Emilio: “1820: ruptura entre la Jerarquía eclesiástica y el Estado Constitucional”, en *Historia constitucional* n° 21, 2020, pp. 5-26, 6 y 24.

34 Una milicia que, en este último caso, se reservó exclusivamente a, y se dejó en manos de, los propietarios, aunque posteriormente se vieron obligados a ampliar su base a causa de la guerra carlista. Para este tema sigue siendo de obligada consulta Pérez Garzón,

Este era, por consiguiente, uno de los principales asuntos pendientes de las Cortes cuando el 2 de abril³⁵ Riego se incorporó, iniciados los trabajos de redacción, a la comisión especial nombrada por las Cortes para elaborar el proyecto sobre Milicias Nacionales. Desde el primer momento pudo confirmar cuanto se ha expresado en el párrafo anterior. La abierta oposición de los moderados siguiendo las directrices gubernamentales era de dominio público y fue precisamente Riego el comisionado para leer al pleno sendas representaciones dirigidas a las Cortes por la Milicia Nacional Local de Madrid en las que taxativamente solicitaban al “soberano Congreso” que no aprobasen las medidas del gobierno sobre este cuerpo y “se sirviesen darle todo el ensanche que el bien de la Patria requería”³⁶. De hecho, esta oposición se manifestaba de manera más ardua en el seno de la comisión, donde fue imposible alcanzar la unanimidad. Así lo transmitía el mismo Riego, encargado de la lectura ante la Cámara del finalizado proyecto del *Reglamento y ordenanza de la Milicia Nacional Local* en la sesión del 24 de mayo, cuando a su conclusión expuso que dos integrantes “disentían de la mayoría de la Comisión” y presentarían votos particulares³⁷.

Se iniciaba así un larguísimo periodo de debates sobre la norma que se prolongaron a la siguiente legislatura, a pesar de que las sesiones no conocían descanso semanal, con la excepción del Corpus, Jueves y Viernes Santo, durante el periodo lectivo. Y no fue, desde luego, el único en prorrogarse: todos los asuntos de envergadura que necesitaban una rápida atención, en particular la aludida ley sobre abolición de señoríos –cuyo nuevo dictamen elaborado por la comisión de Legislación tras el veto regio se pasó a votación el 27 de abril para someter la norma a la segunda sanción del rey³⁸– o la des-

Juan Sisinio. *Milicia Nacional y Revolución Burguesa*. Madrid, CSIC, 1978. También, Cuenca Toribio, José Manuel, “En los orígenes de la Historia peninsular contemporánea: Ejército y liberalismo”, en *Revista de Derecho Político*, nº 83, 2012, pp. 294 ss.; Sánchez i Carcelén, Antoni, “La formación de la Milicia Nacional en Lleida (1820-1821)”, en *Cuadernos de Historia Contemporánea*, 30, 251-271, donde el autor explica la función de Riego en el arraigo de la misma en esa provincia.

35 DSC, sesión 2 de abril de 1822.

36 DSC, sesiones del 26 de abril y 12 de mayo de 1822, respectivamente.

37 DSC, sesión del 24 de mayo de 1822. Los diputados oponentes eran Lamas y Ta-boada, este último miembro de la Sociedad de Anillo de Oro.

38 DSC. Sesión 27 de abril de 1822. Resulta, a este respecto, ilustrativa la participación de Riego, en la medida que denota que su conocimiento de la Constitución y práctica parlamentaria no son en absoluto superficiales. Cuando en esa sesión se somete a vota-

amortización y supresión de conventos de despoblado –ambos temas estrechamente vinculados a la defensa de la propiedad, emblema por antonomasia del liberalismo posesivo– y la “reforma del clero”, así como los Códigos, entre otros, sufrieron la misma suerte³⁹.

ción el mencionado dictamen de la comisión de Legislación sobre la Ley de abolición de Señoríos, uno de los temas más controvertidos en ese momento como se ha expuesto, es él quien solicita la lectura del artículo 148 de la Constitución. La invocación del precepto, que alude a la segunda sanción regia de un proyecto ya rechazado, no era gratuita. Por el contrario, ante la proposición de una votación del texto íntegro, les estaba recordando a los diputados el más que probable rechazo, y por consiguiente, la existencia de una segunda negativa a sancionar una medida estrella del liberalismo a la que Fernando VII se oponía radicalmente. Las Cortes así lo entendieron y procedieron a una votación artículo por artículo con el fin de evitar errores o proporcionar motivos en los que el rey pudiera apoyarse. Aunque el debate fue intenso y de gran altura, a la postre resultó ineficaz ya que el rey lo devolvió a las Cortes, que se vieron obligadas al archivo del proyecto que ya no podría presentarse hasta el siguiente periodo legislativo.

39 Durante esa legislatura, como en las dos siguientes, Riego no figura entre los oradores más asiduos de aquellas Cortes, pero demuestra conocer bien los principios constitucionales, fundamentalmente en lo referente a las libertades y derechos, que defiende y reclama con vehemencia, en especial “la igualdad delante de la ley”, en discursos y representaciones a las Cortes, la mayoría de ellos pensados para su publicación, lo que no dejó de generarle problemas. Ciertamente participa en todas las votaciones y pide y usa la palabra en momentos puntuales y para temas muy concretos que expone con concisión y oportunidad. En su mayor parte son asuntos relativos a cuestiones militares, incluida una adición al proyecto de Ordenanzas Generales del Ejército que a la sazón estaba redactando la comisión de Guerra y que la cámara aprueba ordenando su traslado a dicha comisión. DSC, sesiones del 15 y 18 de mayo de 1822. Las formulaba a título personal o como intermediario de sectores militares, incluidos miembros de la Guardia Real, que se dirigían a él y le entregaban personalmente sus peticiones para que las defendiera ante las Cortes. DSC, sesión del 26 de abril de 1822, presenta una exposición de la Milicia Nacional de Madrid que, en la sesión de 12 de mayo de 1822, se ordenó pasar a la comisión de milicia nacional; sesión del 18 de mayo de 1822, presenta dos exposiciones a las Cortes del escuadrón de artillería ligera procedente del disuelto ejército de San Fernando en la que renunciaban a parte de su sueldo para contribuir a la Hacienda y solicitaban les enviara el gobierno a luchar contra los facciosos de Cataluña, que fueron aceptadas; Sesión del 15 de junio de 1822, presenta a las Cortes dos exposiciones de 25 oficiales y 72 sargentos de la Guardia Real solicitando que se arreglen definitivamente esos cuerpos. Esta última es especialmente importante ya que procede de un cuerpo marcadamente realista y, a mi parecer, pone de relieve la especial sintonía y confianza que inspiraba en amplios sectores militares –a excepción de la cúpula realista y moderada– que se remontaba a su comportamiento con la tropa de la columna móvil. Su jefe de Estado mayor en aquella época relata una anécdota

Si nos detenemos en comprobar los acuerdos y las disposiciones (Leyes, Decretos y Órdenes) que se promulgaron durante la legislatura, la inmensa mayoría corresponde a asuntos de trámite o relativos a la Hacienda y el tesoro, aquellos como consecuencia del derecho petición y los últimos como

significativa: sirvió personalmente a soldados y suboficiales de esa columna en un banquete celebrado en enero de 1820, especialmente organizado para ellos. Cfr *Memoria de las operaciones de la columna móvil de las tropas nacionales al mando del Mariscal del Campo don Rafael del Riego publicada anteriormente por el Jefe de Estado mayor de la misma*. Nuevamente corregida y aumentada. Madrid, Imprenta de Collado, 1820, p. 6. Su preocupación se extendía asimismo a las familias de los militares muertos en aquellas acciones como ponen de relieve las diferentes peticiones en este sentido y, en particular, la proposición que presentó en enero de 1823 con Canga Argüelles para que se les pasara una pensión a las viudas y huérfanos del batallón Asturias que murieron ese año. DSC. Sesión del 3 de enero de 1823.

Se observa asimismo su respaldo a proposiciones especialmente comprometidas. Como la que firmaba con otros diputados, entre ellos, Canga y Oliver, para que las Cortes autorizaran al gobierno San Miguel a trasladar magistrados de audiencias y jueces de primera instancia –las denuncias sobre la ostentosa anticonstitucionalidad de numerosos miembros de la magistratura se sucedieron desde inicios del Trienio y eran de dominio público– en aplicación del artículo 14 del Decreto de Cortes de 29 de junio de 1822, que fue aprobada por la Cámara. DSC, sesión del 14 de noviembre de 1822. En esta línea, es asimismo altamente reseñable un acontecimiento que sirve de elocuente testimonio de cuanto se viene afirmando sobre su actuación como diputado; o si se quiere, de cómo entendió y practicó su función de representante. Su intervención aquel día es una manifestación más de la postura que siempre siguió en las Cortes y que no solo rehúye exhibicionismos y grandes discursos que dilataban la adopción de medidas, sino que tenía una clara orientación ejecutiva, bien que ateniéndose rigurosamente a lo prescrito por la Constitución y la normativa aplicable. Ocurrió en la sesión del 24 de abril de 1822, con motivo de la proposición presentada por ocho integrantes de la comisión encargada de informar sobre el estado político de la Nación –nombrada en sustitución de la de “tranquilidad publica” propuesta por los exaltados– en la que solicitaban una ampliación de plazo para presentar su memoria. Con buena parte de España en armas, Riego intervino para decir que ya existía un dictamen elaborado por otra comisión de igual nombre “de las anteriores Cortes”. El diputado Álava, como él militar y presidente que sería de las mismas, de inclinación moderada, contesta que las circunstancias son diferentes y se necesitaba un mayor conocimiento. La respuesta del interpelado fue contundente y no precisa comentarios: lo que él “veía era que los desórdenes iban en aumento y solo exigía un remedio pronto y eficaz”. A pesar de todo, la proposición se sometió a votación acordándose que la comisión presentara sus conclusiones “á la más posible brevedad”, aunque sin fijar plazo. Los diputados eran Alix, Reillo, Soria, Muro, Serrano, Sáez de Buruaga, Bartolomé y Pérez de Meca. DSC, sesión 27 de abril de 1822, p. 1010.

medidas perentorias para solucionar una situación ciertamente preocupante. Aun así, fundamentalmente a través de la práctica, aquellas Cortes mostraron, como recordaba Carlos Petit recientemente, sobre todo en determinados temas, una sorprendente, por así decir, “modernidad”, difícil de encontrar en el posterior ochocientos⁴⁰. No obstante, dadas las circunstancias y la prolijidad en los debates, algunos ciertamente de interés general dada la situación y polarización política, las Cortes, que debían cerrarse el último día de mayo, se vieron obligadas a acordar una prórroga, prevista por el Reglamento con la duración de un mes y no más, así como a solicitar al rey la celebración de unas extraordinarias para avanzar en los trabajos de codificación. Durante junio del 22, el número de disposiciones, sobre todo a finales, se agiganta y algunas llaman la atención por su contenido, si bien formalmente denotan el exquisito cumplimiento del dictado constitucional por unas Cortes que facilitaban de esta manera la gobernación a un ministerio particularmente hostil.

En efecto. Aparte de promulgación del Código Penal el 8 de ese mes⁴¹ que resultaría infructuosa, son singularmente relevantes los Decretos LX y LXI de 12 y 14 de junio por los que se autorizaba al gobierno a disponer de 128.000 hombres, incrementados en 20.000 por el segundo, procedentes de la milicia nacional en todo el territorio. Aunque se tratase de un momento especialmente complicado por las revueltas provinciales que se habían agravado desde abril, no dejaba de ser un gran riesgo dejar en manos de un Ejecutivo, cuya cabeza era el rey que podía nombrar libremente los jefes militares por imperativo constitucional (artículo 171-5^a de la Constitución), un número tan considerable de fuerzas, como no tardarían en comprobar unos diputados que es imposible que a esas alturas desconocieran las conspiraciones en curso.

El otro es el CXIX de 29 de junio sobre las facultades que se dan al gobierno, cuyos miembros eran libremente designados por el rey y habían mostrado su desafección a la Cámara, para mejorar el estado político de la Nación⁴². Además de unas reglas acerca de la enseñanza, finanzas y tribunales en los que se permitía el traslado de jueces, la mayor parte de los apartados están destinados a solicitarle el control real y efectivo de los obispos y eclesiásticos

40 Petit, Carlos, “Españolas gaditanas. En recuerdo de Antonio Hespanha”, en *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n° 49, 2020, pp. 419 ss., en especial 425 ss.

41 Decreto de 8 de junio de 1822. CD, T. X.

42 DSC, sesión 29 de junio de 1822, pp. 556-58. Los Decretos mencionados en CD T. X.

que desde el principio del Trienio venían ejerciendo una clara y contundente oposición al “sistema constitucional”, para la que contaban con la plena aquiescencia y respaldo del Vaticano. Es decir, dejaban en manos de su aliado natural el castigo de quienes defendían al rey absoluto en una de las etapas donde la alianza altar-trono resultó más intensa y eficaz.

El 30 de junio se cierra la legislatura ordinaria y se remite la preceptiva comunicación al rey. El primero de julio ya estaba constituida la diputación permanente y elegidos su secretario y presidente. Para entonces, Riego, que había presentado su representación a las Cortes sobre el asunto de la Capitanía General de Aragón en el que solicitaba la responsabilidad del ex ministro Feliú, no estaba presente ya que disfrutaba de un permiso de ausencia desde el 19 de ese mes que las Cortes le habían concedido “para salir de Madrid a restablecer su salud demasiado deteriorada”⁴³.

3. Los sucesos de julio de 1822 y la actuación de los poderes Constitucionales: rey, Gobierno, diputación permanente de Cortes y Consejo de Estado. El dictamen de Consejo de Estado: primera inhabilitación del rey

Además de la preceptiva elección de presidente y secretario, cuyo nombramiento fue trasladado inmediatamente al secretario de Gracia y Justicia y comunicado por éste al gobierno⁴⁴, en su primera sesión, celebrada el 1 de julio de 1822, la diputación permanente de Cortes adoptó dos acuerdos de incuestionable importancia en aquellas circunstancias. El primero de ellos

43 DSC sesión del 19 de junio de 1822. Es obvio que la salud no fue la única razón. Carmen de Burgos, *Gloriosa vida y desdichada muerte de don Rafael del Riego (un crimen de los Borbones)*. Madrid. Biblioteca Nueva, 1931, cap. XII, da a entender que tenía razones personales, en concreto, reunirse con su esposa con la que había contraído matrimonio por poderes aunque en los *Ocios de los españoles emigrados*, de diciembre de 1824 se alude a enfermedad de la misma. Es, por lo demás, obvio que, a esas alturas, estaba decepcionado por tanto discurso y la marcha de los acontecimientos. Por esas fechas la ilusión, intacta todavía a finales de abril, había sido sustituida por un intenso pragmatismo que, sin embargo, no afectaron a su responsabilidad como diputado ni minusvaloraron, sino todo lo contrario, su integérrima adhesión a la Constitución y a la “causa de la libertad”.

44 Integrada por los diputados Cayetano Valdés, Quiñones, Castejón, Romero, Flores Castejón, Toribio Núñez y Benito, es decir, con significativa presencia de diputados no exaltados, fue elegido presidente Cayetano Valdés y secretario Francisco Benito. DSC. *Actas Secretas de las Sesiones de la Comisión Permanente de la legislatura ordinaria de 1822*. Sesión 1 de julio, p. 439.

se refería a mantener la guardia del edificio –que, como ya se ha expuesto, procedía por imperativo legal de la Guardia Real– en los mismos términos y número que el año anterior. El segundo fue solicitar al gobierno información acerca del “estado actual de la Nación”, con el fin de convenir conjuntamente las medidas pertinentes dentro del ámbito de las respectivas competencias.

Ambos acuerdos adquieren una relevancia definitiva en la medida que están conexionados con los acontecimientos de extraordinaria gravedad –hasta el extremo de ser calificados de golpe de Estado– que acontecieron desde ese día, reiteradamente tratados por la historiografía. En atención a los objetivos de este trabajo, la necesaria y sucinta relación secuencial de los hechos que se expondrán aquí se atiene exclusivamente a lo recogido en las *Actas* de la comisión Permanente, reunida desde entonces en sesiones secretas que, por lo demás, no difieren –en lo material– de lo relatado en otras fuentes⁴⁵.

El día 2 de julio, una vez abierta la sesión, el comandante al frente de la guardia de las Cortes comunica al presidente que a las 7 de la mañana los soldados habían abandonado sus puestos y se habían incorporado a los batallones que prestaban servicio en el palacio real. Y añadía que “las críticas circunstancias en que se halló le obligaron a no tomar las medidas que habría adoptado en cualquier otro caso”. Inmediatamente, la diputación permanente remite al gobierno un escrito exponiendo el incidente y explicando que la desertión había comenzado la noche anterior. El oficio concluía con el siguiente párrafo: “la Diputación (está) en la mayor inquietud porque no ve al Rey en la independencia que convendría que tuviera para mandar con el lleno de sus facultades. Esta diputación espera que V.E. le dé las convenientes explicaciones”.

Para entonces sus miembros ya conocían que cuatro batallones de la guardia real de infantería habían abandonado sus cuarteles y que a ellos se habían unido los desertores de las Cortes, lo cual no sólo suponía una grave falta de disciplina según la legislación militar sino, sobre todo, una flagrante vulneración del Reglamento de Cortes y la Constitución. Sin haber recibido ninguna contestación al oficio anterior, los miembros de la Permanente acordaron enviar otro al secretario del Despacho de la Gobernación de la Península e Islas Adyacentes exponiéndole la gravedad de la situación y exigiéndole una respuesta con el fin de adoptar las medidas que la Constitución atribuía a la

45 DSC, legislatura 1820-23. *Sesiones secretas. Primera Diputación permanente 1822-23*. Actas de las sesiones de la diputación permanente de las Cortes ordinarias de 1822 y 1823, sesiones del 1 al 8 de julio de 1822.

diputación. Poco más tarde se recibió un oficio del secretario de Guerra afirmando que el rey estaba enterado, que tanto él como el gobierno reprobaban la actuación de la tropa y que, desde luego, ambos, rey y gobierno, estaban plenamente capacitados para “obrar con la precisión y energía y dispuestos a adoptar las medidas oportunas a mantener la tranquilidad pública y hacerse respetar”.

A esas alturas, se había extendido por la capital la noticia de la rebelión y en algunos círculos se defendía que el rey y el gobierno no eran ajenos a la misma. En estas circunstancias, y sin más noticias del ministerio, la diputación escribe esta vez a Fernando VII, en términos respetuosos pero contundentes, exhortándole a que adoptara las medidas oportunas y, asimismo, a que de ninguna manera se ausentara de Madrid. Y añadía que en el caso, “que no es de esperar”, de que en tan críticos momentos no tomase las medidas “indispensables” y desplegase *toda la autoridad* que le está confiada para el mantenimiento del orden público, conservación de las libertades y eliminación de todos los males que amenazaban perturbar la tranquilidad pública, “la Diputación, puntual observadora de las leyes fundamentales, se verá en la precisión de adoptar las providencias que en las mismas se hallan determinadas”⁴⁶.

En otras palabras, la diputación, en uso de las facultades que le atribuía el artículo 160-1^a de la Constitución –cuidar y vigilar la observancia de la Constitución y las leyes y dar cuenta al pleno una vez constituida la siguiente legislatura de las infracciones a la Constitución– recordaba a Fernando VII el cumplimiento de Artículo 170 en relación a la conservación del orden público en lo interior. Pero ¿qué hay realmente detrás en esta amenaza velada? ¿La declaración de un estado de sitio tal y como se entendía en la época aunque no constase en las ordenanzas ni en la legislación?⁴⁷ ¿O, más directamente, le comunican al gobierno y al rey que, dada la gravedad de la situación, si éste se ausenta, puede entenderse vacancia de corona, lo que daría lugar a una regencia provisional en los términos previstos por los artículos 189, 190 y 191 de la Constitución, en los que expresamente se le atribuye a esta institución el entendimiento de los asuntos que no admiten dilación? Si nos atenemos a la

46 DSC, Actas, p. 441.

47 Vid. al respecto Cruz Villalón, Pedro, *El Estado de sitio y la constitución: la constitucionalización de la protección extraordinaria del Estado (1789-1878)*. Madrid, CEC, 1980 y Palma González, Eric Eduardo. “El estado de sitio en las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal”, *IH*, 21, 2001, pp. 181 ss., p. 203.

línea seguida por la propia diputación en ese y los siguientes días, la respuesta, *a priori*, no resulta en absoluto clara.

Tras horas de espera y después de haber remitido un nuevo oficio al secretario de la Gobernación de la Península, se recibió finalmente la contestación de éste comunicando que los cuatro batallones habían salido de noche “sin órdenes” y que se había nombrado al Conde de Cartagena –por entonces simpatizante del liberalismo moderado y posteriormente defensor de los realistas al aceptar la regencia del Duque del Infantado impuesta por Angulema en 1823– coronel interino de esa tropa. Resultaba así que “para admiración del mundo, un mismo hombre mandaba el ejército de los liberales y el de sus contrarios”⁴⁸. Por su parte, los secretarios de Guerra y Marina se pronunciaban en los mismos términos.

La insólita tardanza del Gabinete, reunido en palacio con Fernando VII, en responder a los despachos oficiales de la diputación permanente, además de la vulneración de la legislación, comenzando por la Ley fundamental, y la palmaria infracción formal y material de las normas más elementales de un sistema representativo, evidenciaba hasta el extremo las maniobras arteras que se estaban llevando a cabo en Palacio por el Ejecutivo encabezado por el rey, por una parte, y de éste y sus consejeros por otra⁴⁹. Los ministros, todos ellos menos uno, anilleros, según una fuente posterior de inclinación moderada, veían la situación como una oportunidad y confiaban que el rey les apoyara en la implementación de su objetivo de reforma de la Constitución, y los segundos, presionaban para que ésta no tuviera lugar y restaurase el absolutismo⁵⁰.

48 Bayo, Estanislao de Koska, *Historia de la vida y reinado de Fernando VII*, T. 2, p. 332.

49 “Los consejeros ilustrados del príncipe entre quienes había algunos realistas le inclinaban a modificar la Constitución de Cádiz y que en el mismo sentido trabajaban algunos liberales convencidos de la dificultad de pasar adelante con un Código que no daba al poder ejecutivo la fuerza necesaria para ahogar la anarquía. S. M. simulaba estar de acuerdo con unos y otros para conseguir por medio de la apetecida reforma no solo el afianzamiento de su corona sino también la unión y felicidad de los españoles banderizados y prontos a lanzarse en los horrores de una guerra civil. Pero mientras así lo afirmaban sus augustos labios a espaldas de aquellos y en lo más escondido de su retrete seguía tramas muy distintas aunque a veces parecían urdidas con sedas de los mismos colores”. Ibi, p. 295.

50 “Habíase comprometido (Fernando VII) fuerte y sagradamente en favor de la modificación del código de Cádiz repitiendo que aborrecía el despotismo y Mataflorida,

La lasitud del gobierno en responder a los oficios recibidos de la diputación permanente de Cortes tiende a confirmar esa percepción. Sus contestaciones, tardías y más bien evasivas, así como el comportamiento sostenido durante la crisis, indican un primer momento de expectación en el triunfo de su plan y un segundo de pérdida de la confianza del rey. Desde luego, no testimonian el seguimiento, ni siquiera formal, de las prescripciones legales, o al menos tanto, sino que parecen responder al temor inspirado por el apoyo de las instituciones constitucionales (Ayuntamiento y Diputación Provincial de Madrid) a esta última. Y, sobre todo, por el levantamiento del pueblo y la milicia nacional de la capital tras haberse hecho público el asesinato por la espalda en las escaleras del Palacio Real por soldados de la guardia real del oficial de la misma, Mamerto Landaburu, simpatizante constitucionalista, pues la diputación permanente de Cortes, que continuaba reunida, recibió un Despacho del secretario de Gracia y Justicia comunicándole que se estaban tomando medidas y se había abierto una investigación sobre este crimen.

En cualquier caso, los hechos volvieron la situación insostenible desde todos los puntos de vista. En especial para quienes, en atención al evidente riesgo que corría el “sistema constitucional”, no alcanzaban a entender la propia actitud seguida por los miembros de la Permanente. De hecho, con fecha del 3 de julio, cuarenta de los más representativos diputados (entre ellos Riego, Canga Argüelles, Alcalá Galiano y el Duque del Parque) que se hallaban en Madrid le remitieron un escrito conminándoles a que se aplicase lo dispuesto por la Constitución y las leyes⁵¹. A este respecto, no deja de ser ilustrativo que

Creux, Balmaseda y demás atletas del realismo temían mucho el éxito favorable de aquella liga, no obstante que confiaban en la propensión natural y en un aviso autógrafo del que después hablaremos”; escribe Bayo, *Historia de la vida y reinado de Fernando VII*, p. 319. En esta fuente también consta la articulación e intervinientes en el citado “plan de las Cámaras”: “Fuerza nos es al llegar aquí apuntar una especie que, recogida de la boca de algunas personas que residían entonces en París y que estaban iniciadas en parte en los misterios contemporáneos hemos hallado confirmada en los regentes de Urgel que cita el índice de su archivo. Reduce a que en el plan de la conspiración de la guardia fraguada para establecer dos cámaras en España, el gabinete de las tullerías que poseía la clave se entendía con los amigos de aquella clase de transacción por medio del Conde de Toreno, a quien servía de intermediario con Eguía y Morejón el conde de Fernán-Núñez, que Toreno estaba en inteligencia con Martínez de la Rosa y que el embajador francés era el alma de las comunicaciones y el lazo que ataba a los opuestos cabos de la urdimbre”. Ibi.

⁵¹ Vid. Bayo, *Historia de la vida y reinado de Fernando VII*, pp. 329-30, así como *El Espectador* de esa fecha.

la redacción de esta exposición coincidiera cronológicamente con la convocatoria en junta del ministerio, Consejo de Estado y del jefe político de Madrid cursada por el rey para someter a consulta los acontecimientos. Y asimismo, resulta altamente revelador que los ministros declinaran acudir, renunciando en el Consejo⁵².

El 4 de julio, la insubordinación de la guardia en palacio, donde se encontraba el gobierno, el rey, la real familia y hasta el Consejo de Estado, era tan ostentosa y desafiante que el malestar de la población civil madrileña había crecido alarmantemente. A pesar de ello, la diputación no recibió más comunicaciones oficiales y sus integrantes decidieron dirigirse de nuevo al rey. En su exposición, en la que literalmente hacen constar que “vuestro Real Palacio tiene el aspecto de un campamento militar en el que se acude a las armas a cada instante por los batallones de la Guardia que se hallan reunidos, y no puede dudarse que han tomado una actitud hostil contra este heroico pueblo que sometido constantemente a la Constitución y a las Leyes obedece las órdenes de V. M. con la mayor veneración y respeto”, solicitaba la convocatoria del Consejo de Estado para pronunciarse al efecto.

Los días siguientes muestran una agónica situación en la que el presumible interés y esfuerzos de los diputados por evitar la confrontación y aportar una pronta solución, chocaron abiertamente con los deseos y actos de quienes querían hacer caer, al menos, la representación política existente. El 5, finalmente, la diputación, tras el más que razonable plazo concedido y ante la inactividad del ministerio y el rey, “teniendo presente que en nada se había mudado el estado crítico de la capital y del Gobierno, se ocupó –expone literalmente el Acta de esa fecha– inmediatamente de las medidas que podría adoptar para alejar el peligro que le amenazaba” y del que da cumplido testimonio el hecho de que el alcalde constitucional de Madrid acudiera a manifestarle personalmente a sus miembros con su lealtad, la adhesión del ayuntamiento en pleno y a ofrecerles un lugar más seguro de reunión, ofrecimiento que sus miembros agradecieron, aunque se negaron a abandonar el “Santuario de las leyes”. El resultado de la deliberación fue un escueto despacho dirigido al rey en el que, en términos concluyentes y en seguimiento de las formalidades propias de un régimen constitucional, la diputación le reitera que ordene una reunión extraordinaria del Consejo de Estado (de hecho estaba reunido en Palacio, pero para tratar de “otros negocios” como se verá

52 Bayo, *Historia de la vida*, p 331.

más adelante⁵³) con el fin de que elaborase un dictamen sobre las medidas “efectivas” que habría que tomar en tan “críticas circunstancias”. Así las cosas, Fernando VII, lo convoca ese mismo día según comunicación cursada a la 1 de la tarde por el secretario de Gracia y Justicia.

La jornada del 6 de julio reviste, desde el punto de vista que aquí particularmente interesa, un interés especial en la medida que en ella se exasperan las posturas de los contendientes principales, esto es, el Ejecutivo y el Legislativo representado aquí por la diputación permanente. Y así, mientras esta última se justificaba en el dictado constitucional y la legislación, incluso yendo más allá de lo requerido, en la Corte el gobierno llegaba a un acuerdo con el rey, de tal manera que “en la mañana del 6 estipulose la reforma de la Constitución dividiéndose en dos cámaras el cuerpo representativo y dando a la Corona el poder necesario para sobreponerse a las sociedades secretas y guardar armonía con los estamentos”⁵⁴. La conspiración contra el orden constitucional, urdida desde el mismo gobierno, se había consumado.

Los acontecimientos que se sucedieron vienen a confirmar esta opinión. Porque a las once de la mañana de ese día 6, la diputación recibió un despacho del secretario del Despacho de Gracia y Justicia donde participaba el resultado de la consulta al Consejo de Estado instada por la Permanente en los términos que se exponen a continuación. Según expresaba el documento, a las diez de la noche del día anterior –es decir, once horas antes, un retraso inexplicable en una situación de máxima urgencia– el secretario del Consejo le había entregado el dictamen en el que los Consejeros hacían constar que

53 En su número del día 5, *El Universal* daba cuenta de que el Consejo de Estado había estado reunido desde la 10 de la mañana a las 8 de la noche “sin presencia de los secretarios del Despacho”, al tiempo que exponía “la diputación Permanente vela para que no peligren las libertades” y elogia el celo de las autoridades provinciales. En contraposición, la postura del *El Imparcial* y *El Censor*, que en su n.º del día 13 ataca con furor a Riego y los exaltados, a pesar de que en los precedentes no comunicaba nada de los acontecimientos. Ambos periódicos dejaron de publicarse ese mes.

54 El Consejo de Estado, a pesar de la fortísima división interna, mantuvo, en relación con estos sucesos, una actuación impecable, apoyando a la diputación, oponiéndose a las pretensiones del rey y contestando a las consultas que el gobierno le había formulado el 4 y 5 de julio “que no había hallado medio honroso de terminar el negocio, sin que antes obediesen los batallones de El Pardo la orden de partir a Toledo y Talavera”. Bayo, *Historia*, p. 334 y también el entrecomillado del texto. En este sentido no deja de ser llamativo que los editores de esta documentada obra justifiquen la actuación del gobierno Martínez de la Rosa en “la salvación del gobierno representativo”.

lo urgente, lo indispensable, lo preciso para el restablecimiento total de la tranquilidad pública en esta Corte y para alejar toda sospecha de intranquilidad y de falta de seguridad de S. M. era el preliminar de que los cuatro batallones situados en el Pardo obedeciesen la orden que les estaba comunicada (disolución y traslado a Toledo y Talavera) y que debería reducirse la guardia de SM a dos compañías de la misma.

Pero, significativamente, el ministro añadía de su propia mano que los batallones de infantería que se encontraban en palacio, lo estaban como defensa ante los eventuales levantamientos populares. Era, pues, evidente que, tanto el rey como el gobierno, no estaban dispuestos a seguir tales indicaciones⁵⁵.

Quedó fuera de toda duda ese mismo día cuando, a las dos de la tarde, el secretario de Guerra contestó al requerimiento de la diputación permanente para que se expidiesen tales órdenes a la tropa de El Pardo, alegando que el comandante de la misma afirmaba “que no podía llevar a efecto lo mandado por S. M. supuesto que no se le daban ningunas seguridades”. En esas circunstancias la diputación envía ya un ultimátum al rey donde le indica taxativamente que es el momento de tomar un partido: o dicta las medidas para reprimir la audacia inadmisibile de esa respuesta o “la diputación, en cumplimiento de sus deberes, no puede dejar de poner en ejecución cuantos recursos estén a su alcance dentro de los límites de sus atribuciones”. Entre tales recursos se encontraba el que figuraba en una exposición presentada a las diez y media de la noche por un grupo de ciudadanos madrileños que pedían la inhabilitación del rey y “la necesidad de aplicar la regla que la Constitución señala para semejantes casos”, esto es, la regencia provisional.

Esa es, exactamente, la conclusión a la que llegó el 7 una parte del Consejo de Estado, con los batallones de El Pardo presentando batalla en la capital, en la que en un sorprendente dictamen firmado por 16 consejeros declaraba la inhabilitación del rey y la aplicación inmediata del artículo 162 de la Constitución. Previamente, la diputación permanente había redactado a primera hora una exposición dirigida al rey donde le comunica la convocatoria de Cortes extraordinarias y la creación de la regencia siguiendo lo indicado por ese precepto. Ciertamente se vio respaldada por la presencia de “algunos consejeros de Estado” y las autoridades civiles y militares de la capital –salvo el jefe político–, entre ellas el presidente de la diputación provincial, además del

55 Esta percepción aparece reafirmada por la promesa cursada ya el 3 de julio, por la cual “el Gobierno se compromete a no cumplir el decreto de cortes y a conservar la guardia walona como está” a cambio de que se trasladasen a Toledo y Talavera, como se había ordenado. Ibi, p. 330.

Ayuntamiento que, a lo largo de la mañana, acudieron al palacio de las Cortes y se reunieron conjuntamente en deliberación secreta en el salón de sesiones.

Como se observa, la primera inhabilitación de Fernando VII tuvo lugar el 7 de julio de 1822. Aunque no llegó a formalizarse por el desarrollo de los acontecimientos, básicamente por la victoria de los constitucionalistas entre los que se encontraban los diputados militares que estaban en Madrid, entre ellos Álava y Riego, lo cierto es que se produjo con la connivencia de más las altas instituciones, excluido, naturalmente, el Ejecutivo y su cabeza, esto es, el rey. Sin embargo, con relación a estos hechos es conveniente poner de manifiesto las siguientes consideraciones.

Llama la atención, en primer lugar, la actuación de la diputación en aquellos días severamente censurada por los exaltados en la siguiente legislatura extraordinaria, como se verá más adelante. Su talante mediador apuró hasta el límite y hasta sobrepasó lo que razonablemente le era exigible. A pesar de las reiteradas peticiones de un número considerable de diputados y ciudadanos para que procediese a aplicar lo que la Constitución y la legislación determinaban en estos casos, se resistió a calificar de rebelión hasta el último momento la actividad de los batallones sublevados, no obstante su negativa a acatar órdenes y que todo indicaba que se dirigían desde su acuartelamiento en El Pardo a Madrid con propósitos claramente belicistas. Y desde luego, sorprende su renuncia, basándose en que “habían variado las circunstancias”, a remitir la aludida última exposición al rey, a deliberar sobre el dictamen del Consejo de Estado y a dar publicidad a sus actos que hubieran fortalecido la confianza en las Cortes de la población.

Es ésta una consideración que se fundamenta en su posición de los días posteriores, en especial el 8 de julio. Con la población de Madrid pidiendo la adopción de medidas perentorias contra los rebeldes, sus instigadores y directores, perfectamente identificados y sobradamente conocidos⁵⁶, la diputación opta por remitir una nueva exposición al rey en la que le felicita por “haber recuperado la libertad” y únicamente solicita la convocatoria de Cortes extraordinarias, el cese de los “pérfidos consejeros privados” y que gobierne solo con el Consejo de Estado y los secretarios del Despacho, cuya participación en los hechos era más que notoria.

La extraña benevolencia de los miembros de la diputación permanente se hizo más patente todavía en la respuesta que dio a continuación a una comisión integrada, entre otros, por miembros de la Provincial, el alcalde de Ma-

56 *Bosquejo del plan de conspiración del 7 de julio*, nº 1, pp. 5-6.

drid y el jefe político interino que expresamente pedían que “para calmar la justa ansiedad del vecindario era indispensable que se verificase prontamente el condigno castigo de los agresores y que la diputación permanente reclamase de S. M. la separación de su lado de todas las personas contra quienes estaba la opinión pública”⁵⁷. En nombre de la Permanente, que estaría reunida hasta las once de la noche, su presidente, es cierto que ateniéndose a la concepción imperante de la Constitución como norma jurídica aplicable pero basándose en una interpretación difícilmente comprensible de la misma, únicamente respondió que la primera petición era cuestión de los tribunales y sobre la segunda ya se había pronunciado en la exposición a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior. En todo caso, aunque ese mismo día cesaron los secretarios del Despacho de Guerra y Gobernación de la Península, la mecha de la insurrección estaba prendida y el 9 de julio la Permanente recibe un oficio de la Audiencia de Sevilla pidiendo instrucciones acerca de las medidas a adoptar en el muy probable supuesto de que los facciosos interrumpieran la comunicación con el Gobierno y las Cortes, al mismo tiempo que particulares de diversas provincias pedían la urgente convocatoria de Extraordinarias⁵⁸.

En segundo término, es asimismo interesante resaltar la connivencia pasiva de algunos moderados con los acontecimientos de primeros de julio y más en concreto la participación mucho más activa de los *anilleros*. Todos los miembros del gobierno cuya actitud hostil hacia las Cortes desde el comienzo de la legislatura y, en especial, durante estos acontecimientos, no resiste el más benigno de los exámenes sobre práctica y convenciones parlamentarias, con excepción del secretario del Despacho de Marina, pertenecían a esta so-

57 DSC, Actas, sesión 8 de julio de 1822, p. 451.

58 *El Espectador* del 15 de julio, pp. 1 y 2, publicaba una Representación presentada al Ayuntamiento de Madrid por una comisión de patriotas en la que, entre otras, piden: 1. Castigo ejemplar, 2, disolución de los guardias que quedan en Vicalvaro y otros pueblos en cuerpos del ejército, 3 que VE no se separe de su actitud mientras no se nombre un ministerio auténticamente liberal y también el que se haga un expurgo sensato en las secretarías del despacho porque se presume que están contagiados muchos de sus individuos y, asimismo, expurgo de cargos de la corte. Fechada el 3 julio, presentaba más de quinientas firmas de propietarios, empleados y artesanos, pp. 1 y 2. En los días 19 y 20, en la sección “Variedades”, acusa directamente al gobierno de colaboración, señala que no se han producido ceses y que, además no solo no se han tomado represalias contra los guardias sublevados sino que éstos todavía estaban en Madrid, por donde paseaban impunemente los asesinos de Landaburu.

ciudad⁵⁹. En este sentido, no cabe menos que reflexionar sobre el hecho de que, en tanto la diputación permanente de Cortes muestra un seguimiento –excesivo “y sin paragón con lo que sucedería en otros países con un sistema similar al español”, como recordarían varios diputados en la siguiente legislatura criticando su actuación– de la normativa vigente, el Ejecutivo se extiende en parcas y claramente insuficientes excusas que, en realidad, no eran más que dilaciones para procurar el triunfo de una conspiración contra la Constitución que incriminaba al propio rey y al Gobierno y que, a esas alturas, se manifestaba abiertamente apoyada en la rebelión de la Guardia Real⁶⁰.

59 Martínez de la Rosa, Estado; Sierra Pambley, Guerra y Hacienda; Gracia y Justicia, Garellly; Gobernación de la Península, Moscoso de Altamira y Gobernación y Ultramar, Clemencín. Fuentes: *Reglamento de la Sociedad Constitucional* pp. 21 ss. Urquijo Goitia, José Ramón. *Diccionario Biográfico de los Ministros Españoles en la Edad Contemporánea* (1808-2000), en línea.

60 Es, a este respecto, ilustrativa la transmisión de los hechos por la *Gaceta de Madrid*, de los que da cuenta a partir del día 8. Condena a los sublevados y expone: “¿Y cuál ha sido el motivo de tan bárbaro arrojo? [...] El restablecer al Rey en su poder absoluto. [...] quedaron frustradas sus esperanzas [...] este día en que acabó de sucumbir el partido anticonstitucional y quedaron frustradas todas sus locas esperanzas [...] los individuos de la guardia real que pudieron escapar de la venganza de los valientes se metieron apresuradamente en palacio donde se hallaba el resto de los insubordinados. El gobierno no vio ya otro remedio que el tomar medidas vigorosas (y los insubordinados) salieron inmediatamente esta tarde para varios pueblos de las cercanías de la capital. *Gaceta de Madrid*, 8 de julio de 1822, p. 1061. El día 9, esta publicación da cuenta de los desórdenes del 30, de la muerte de Landáburu y de la insurrección de unos pocos y de que “el Gobierno comenzó a tomar providencias que creyó más oportunas en tan críticas circunstancias: la autoridades contribuyeron eficazísimamente con el mayor celo a cuanto se creía conveniente”. Insiste en “la resuelta resistencia del Gobierno... desvelándose en sus tareas... adoptando medidas y los ministros continuando con trabajo” en los días siguientes. *Gaceta de Madrid*, 9 de julio de 1822, pp. 1067-8. Sin embargo, algunos periódicos ofrecían una visión diametralmente opuesta. *El Espectador* del 19 de julio, pp. 3-4 lanzaba duras críticas contra el gobierno porque ha mantenido el sueldo y grado de los militares conspiradores enviándolos a nuevos destinos en vez de someterlos al brazo fuerte de la ley y porque muchos de ellos, a pesar de la orden, continúan en Madrid y lo acusa de complicidad en la impunidad y de fomentar las conspiraciones por mantener una conducta que ninguna nación toleraría. Le inculpa de tibieza en la represión de la conspiración porque los ministros “veían nuestra revolución como la francesa y como un acto de jacobinismo”. Su actuación es censurable frente al ayuntamiento: “La imprevisión de los actuales ministros pusieron la libertad de la patria a dos dedos de su ruina”. Y concluye: “si el ministerio continúa sacrificando a su mal entendido orgullo los intereses de la libertad caerá cuando menos lo piense rodeado

4. La legislatura extraordinaria de 1822-23. Recuperación de las relaciones Ejecutivo-Legislativo e intervención internacional en la sedición

De las medidas enunciadas en la exposición al rey archivada por la diputación permanente el 7 de julio se mantuvo, no obstante, la convocatoria de cortes extraordinarias. En este caso, dada la solución del conflicto, y puesto que no existía vacancia de corona ni inhabilitación regia, únicamente podía apoyarse en la causa prevista por el artículo 162 3º que atribuía al rey la decisión sobre la misma⁶¹. A pesar de las “circunstancias críticas” y de la muy extendida petición en este sentido por parte de instituciones y ciudadanía, Fernando VII se resistió hasta que, probablemente presionado por el nuevo gobierno presidido por Evaristo San Miguel de signo liberal exaltado –y que sería el de más larga duración de Trienio– que había sustituido al de Martínez de la Rosa el 5 de agosto, emite finalmente el 4 de septiembre la “excitación” a la diputación permanente para que actúe en este sentido. Ésta, en uso de sus competencias, acto seguido, redactó la convocatoria de las Cortes fechada el día siguiente, señalando el 1 de octubre para su conformación. Entretanto, ese organismo continuó desempeñando sus funciones, estrictamente reglamentadas en el artículo 160 de la Constitución, en un ambiente obviamente complejo.

Ciertamente, la celebración de Cortes extraordinarias, tal y como las contemplaba la Constitución, era un recurso excepcional, cuya convocatoria, finalidad y desarrollo estaban delimitadas en el propio texto y el Reglamento de Cortes. Sin embargo, desde la primera legislatura del Trienio, se reunieron todos los años hasta la caída del sistema constitucional. Aunque la situación durante el periodo fue invariablemente difícil, no todos estaban de acuerdo

de las maldiciones de todos los hombres” de bien. En la actualidad se ve que el ministerio marcha espantosamente mal... ya deberían estar hechos los nombramientos que el bien de la patria exige” (sólo dimitieron los secretarios del Despacho de Guerra y Gobernación de la Península e islas adyacentes). El día siguiente, este periódico notifica horrorizado que por el gobierno se dio la orden de incorporar a los guardias reales que se opusieron a la rebelión a sus antiguos batallones, es decir, los que habían asesinado a Landaburu, los cuales, a pesar del Decreto de Cortes, no se habían disuelto, lo que colocaba a aquellos en una situación sumamente peligrosa. *El Espectador*, 20 de julio de 1822, pp. 2-3.

61 “La Diputación Permanente de Córtes las convocará con señalamiento de día, en los tres casos siguientes: 3º quando en circunstancias críticas, y por negocios arduos tuviere el Rey por conveniente que se congreguen, y lo participare así á la Diputación permanente de Cortes”.

en su convocatoria. En 1821, por ejemplo, hubo quien se opuso a las mismas negando la perentoriedad que, entre otros, defendía Romero Alpuente⁶². Para las de 1822-23, no se discutía su palmaria oportunidad sino otra cuestión de fondo de innegable relevancia en ese momento: si el rey podía “imponer una ley u orientación” a la Cámara a través de su discurso. Amparándose en los artículos 163 y 167 de la Constitución, no faltó quien, apoyándose en sólidos argumentos jurídicos, veía esta actitud como una exigencia inadmisibles e incompatible con el dictado constitucional. De hecho, se contemplaba como una infracción y, en consecuencia, eran nulas de pleno derecho todas las normas aprobadas en Cortes⁶³. Se planteaba así de nuevo la recurrente cuestión de la “invasión” del Ejecutivo en las competencias del Legislativo, pero ahora denunciada desde la perspectiva de la reciente experiencia.

Aun así, el 3 de octubre se procedió a la “instalación de las Cortes” y el 7 tuvo lugar el Discurso de apertura por un rey que ya no engañaban a nadie a pesar de sus alusiones a la Constitución como pacto. Y de sus referencias a los enemigos de la misma que, pronunciadas por él, debieron resultar insultantes para la mayoría de los presentes.

Puesto que el propio texto constitucional disponía que debían reunirse para un “objeto concreto” (art. 163) en la sesión del día siguiente, 8 de octubre, se dio lectura al escrito de la diputación permanente que trasladaba el oficio del secretario de Gracia y Justicia, Felipe Benicio Navarro, con los cuatro asuntos que debían tratarse necesariamente: primero, proporcionar recursos al gobierno en su lucha contra los facciosos; segundo, “arreglar negocios sumamente interesantes con algunas potencias extranjeras”; tercero, “dar al ejército español ordenanzas acordes al código e instituciones con las que nos regimos” y cuarto, “dar el Código de Procedimientos, tan necesario para la recta y pronta administración de justicia”⁶⁴. Cabe señalar que a la sesión asistió el gobierno en pleno y dos de los secretarios del Despacho, los Guerra y Hacienda, en especial este último, procedieron a hacer una exposición del estado de sus respectivos ramos mediante la lectura de prolijas memorias que dejaban bien a las claras la alarmante gravedad en que se encontraba la Nación.

62 Revilla, Francisco Manuel, *Impugnación del discurso sobre la urgentísima necesidad de Cortes extraordinarias que escribió el ciudadano Juan Romero Alpuente*. Madrid, Oficina de don Francisco Martínez Dávila, 1821, *passim*.

63 Andrés y Almarza, Vicente, *A los patriotas españoles*. Madrid, Imprenta de Miguel de Burgos, 1822. Es apenas un folleto de 6 páginas, prácticamente carente de contenido político, donde prevalece una seria argumentación estrictamente jurídica.

64 DSC, sesión 8 de octubre de 1822, p. 21.

Con unas relaciones fluidas entre el ministerio y la asamblea, el día 9 intervino Canga Argüelles para, según sus palabras, dar curso a la petición del gobierno de que se transmitiera a la Nación los sacrificios que la esperaban pero justificando las causas de “los males que nos aquejan”. En un amplio discurso perfectamente articulado en tres apartados y pensado para su divulgación⁶⁵, el diputado asturiano señalaba al respecto la impunidad de que habían disfrutado los contrarios al régimen constitucional vigente, incluso la pasividad del gobierno anterior en la represión de quienes se levantaban en nombre del “rey absoluto” apoyándose en los casos reales que habían sucedido y que denotaban la completa indiferencia del mismo hacia la Cámara, de cuyos acuerdos hacía caso omiso. Es más, acusó directamente al gobierno Martínez de la Rosa de traición por su connivencia con el francés a pesar de que aquel gobierno, y a su cabeza Luis XVIII, con sus alocuciones sobre la defensa de Fernando VII y contra la Constitución de 1812, se había erigido con su consentimiento en “tutor voluntario de España”⁶⁶.

Es, a este respecto, ilustrativa la conclusión del Discurso. Porque en la parte final del mismo, Canga, tras lamentar el tono moderado, sin paragón en otros países con un régimen político similar, que hasta ese momento habían

65 Fue publicada como *Exposicion hecha á las cortes extraordinarias por 66 diputados sobre las causas de los males que afligen á la Nacion*. Madrid, se hallará en la librería de Ranz, Imprenta calle de la Greda, por Cosme Martínez, 1822. Como se observa, constan los 66 primeros diputados signatarios a los que se sumaron posteriormente dos más.

66 En su extensa alocución ocupan un lugar destacado las acusaciones lanzadas contra los gobiernos extranjeros, en particular los del Concierto –“¿conocemos a fondo los fines de la santa alianza” (hace suyas las palabras de un diputado en la sesión del 7 de marzo) y señala directamente a Francia de intrigar desde 1820 para la caída del régimen constitucional y de subvencionar las “escandalosas insurrecciones de Aragón, Cataluña y Navarra”– y al gobierno de Martínez de la Rosa de felonía por su connivencia con el francés acerca del que, en efecto, había dicho el 1 de marzo a las Cortes que mantenía una relación de amistad a pesar de las denuncias de injerencias del mismo en la península como demostraban los debates en las cámaras francesas y que el “Ministerio francés había tomado el carácter de tutor voluntario de España”. Y eso que Canga desconocía la nota diplomática que varios embajadores encabezados por el nuncio habían remitido al gobierno expresando su malestar por los sucesos de julio e incluían amenazas apenas encubiertas sobre lo que podría pasar en caso de que el rey corriera peligro. También la respuesta, extensa y ambigua, de Martínez de la Rosa a la misma y las conversaciones del rey y sus consejeros con Francia. Bayo, *Historia de la vida y reinado*, pp. 341 ss. DSC, sesión 9 de octubre de 1822, p. 82.

mantenido las Cortes –y que ciertamente había alcanzado su cenit con la actuación de la diputación permanente durante los sucesos de julio– lo que había redundado en claro perjuicio de las mismas, presenta una proposición en la que se pedía al gobierno que antes de proceder a la votación y aprobación de las propuestas que había presentado el día anterior –básicamente, petición de recursos– explicase éste a las Cortes las causas que habían llevado a tal situación y los remedios para atajar los males “que nos apremian”. De esta manera, venía a reconocer tácitamente que se abría una nueva etapa en las relaciones Ejecutivo–Legislativo de signo totalmente contrario a la anterior⁶⁷. La proposición fue firmada por sesenta y ocho diputados.

En ese estado de ánimo las Cortes emprendieron su difícilísima singladura, conscientes de la activa beligerancia no solo del “enemigo exterior” sino también del “interior” que, además, estaba presente en la propia cámara y que se mostraría abiertamente con el abandono de los diputados durante los acontecimientos de mayo–junio de 1823. Resulta a este respecto conmovedor contemplar sus esfuerzos por cumplir las formalidades en aquellos momentos e intentar mantener la normalidad en el tratamiento de los temas encomendados y que se debatieron en las sucesivas sesiones, a menudo interrumpidas por las noticias alarmantes que llegaban de todas partes. A este fin, crearon, como preceptuaba el Reglamento interior en seguimiento de los artículos 163 y 164 de la Constitución, desde el principio las correspondientes comisiones encargadas de elaborar los proyectos y articular los contenidos antes de presentarlos al pleno.

A lo largo del mes de octubre en la Cámara, a pesar de los acontecimientos que sucedían diariamente y a los que debían enfrentarse por imperativo constitucional tanto en el ámbito interno como internacional, se trabajó incansablemente en asuntos de interés general⁶⁸. Incluso se suscitaron debates

67 Es asimismo revelador que nada más concluir Canga su extensa alocución, Alcalá Galiano, presidente de la comisión encargada de dar contestación al Discurso de apertura del rey, que leyó a continuación, señale en el mismo con preocupación el “estado de guerra civil” que se vive en varias provincias, lo cual, añadía, no impediría llevar a cabo las tareas que le habían sido encomendadas a las extraordinarias. DSC, sesión 9 de octubre de 1822, p. 87.

68 El 16 de ese mes se presentó por la comisión encargada, en cumplimiento del artículo 131-23^a de la Constitución, para su discusión el Reglamento provisional de policía, cuyo presidente, Salvato, definió la misma “como aquella parte de la política dirigida a la observancia de las leyes establecidas para el orden y la seguridad interior de los pueblos” y cuyo contenido fue parcialmente impugnado por Gómez Becerra por ser materia del

esclarecedores sobre el entendimiento de asuntos relativos a los derechos individuales. Como el relativo a la confrontación libertad–seguridad, en el que la propuesta de limitación de la primera no prosperó⁶⁹. O el sostenido entre Alcalá Galiano y Canga Argüelles sobre la dotación del clero, que el primero proponía abolir dadas sus inclinaciones anticonstitucionales y el segundo defendió porque “se trata de hacer ciudadanos a los eclesiásticos, para ello es necesario que renuncien a resabios antiguos y al servilismo a Roma”⁷⁰. Aunque el dictado constitucional disponía que las extraordinarias debían contemplar solo los asuntos para los que habían sido convocadas, la Cortes siguieron debatiendo sobre los pendientes de la anterior legislatura que estimaban especialmente relevantes aunque, en rigor, no formaban parte de los objetivos fijados⁷¹.

No obstante lo anterior, en las propias Cortes la acre confrontación era más que evidente entre moderados y exaltados. Se puso de manifiesto continuamente y se exacerbó en los asuntos más complejos de clara naturaleza política, en especial en los relacionados con los acontecimientos de julio,

Se advierte con claridad en la sesión del 10 de noviembre, con motivo del dictamen, más bien indulgente, evacuado por la comisión especial encargada de analizar el caso de Garellly, el dimisionario secretario del Despacho de la Gobernación de la Península e Islas Adyacentes implicado directamente en tales sucesos. Para los exaltados, como expuso el diputado Oliver, uno de los más brillantes y habituales oradores de aquel periodo, se trataba de una cons-

Código Penal. DSC, sesión 16 de octubre de 182, p. 195. El 19 se inicia la discusión del Código sanitario previsto en el precepto que se acaba de citar. E igualmente se adoptan medidas acordes al estado latente de guerra que se vivía. Como la que, en la sesión de día 24 autorizaba al gobierno a remover los jefes y oficiales del ejército sin “alterar el orden de ascensos establecido”. DSC, sesión 24 de octubre de 1822, p. 321 o la aprobación el 25 del reclutamiento obligatorio de 29 973 hombres de 18 a 36 años, exceptuando los incluidos en el reemplazo extraordinario.

69 El 23 surge el debate sobre la perenne e irresoluta confrontación libertad–seguridad al proponer un diputado, Saavedra, que “cuando hay tantos enemigos de la Nación ¿No debía hacer momentáneamente el sacrificio pasajero de parte de su libertad para gozar después de todo ello de su libertad?”. DSC. Sesión 23 de octubre de 1822, p. 290.

70 DSC, sesión 20 de octubre de 1822, p. 246.

71 Así, por ejemplo, comenzaban noviembre con la lectura en el pleno, “por segunda vez”, de la proposición de Argüelles sobre reducción del clero y el 15 se envió para su sanción al rey un Decreto sobre supresión de conventos en despoblado o en poblaciones con menos 450 habitantes. DSC, sesiones del 2 y 15 de noviembre de 1822, respectivamente.

piración que venía de atrás, cuya enorme gravedad exigía la suspensión de las formalidades preceptivas en estos casos y proceder sin excepción contra todos los implicados, desde los secretarios del Despacho a la última autoridad⁷². Aunque era una petición que hoy cuestionaría no solo la constitucional sino la teoría procesal y penal, podía, sin embargo, encontrar acomodo y validez en aquel protoconstitucionalismo donde los criterios de juridicidad eran exactamente iguales para la ley suprema y las demás normas. En todo caso, quedaba claro que aquella rama del liberalismo no transigiría sobre el castigo de los autores de un “crimen de lesa Nación”, lo que obligó a los moderados a plantear una estrategia de contención destinada a exonerar de responsabilidad o modificar las sanciones.

Así al menos se pone de relieve en la discusión sobre el procedimiento a seguir en los casos de sedición. Mientras unos solicitaban que los responsables fueran directamente juzgados por el Tribunal Supremo sin mediar la previa autorización de las Cortes⁷³, los otros proponían que los diputados en Cortes, magistrados del TS, consejeros de Estado y generales en jefe “quedaran exceptuados de la intervención de los jefes políticos en los casos de sospecha de conspiración”. El fundamento de la propuesta carecía de lógica jurídica⁷⁴ y respondía a requerimientos políticos que, por un lado, ponen de manifiesto evidentes intereses partidistas y, por el otro, que, incluso en un asunto aparentemente técnico y tan definitivamente importante, sobre todo en aquellos momentos, parecía imposible llegar a una transacción entre las dos principales ramas del liberalismo escindido.

En este sentido, aunque hubo intervenciones fundadas en argumentos jurídicos, en muchas ocasiones de innegable calidad, acerca de cuestiones como la comprensión de conceptos de incuestionable relevancia (p. ej., inviolabilidad o independencia), es claro que tenían un marcado objetivo dilatorio, y probablemente exculpatorio. Así lo denunció Istúriz cuando airadamente se quejaba del alargamiento del debate y las continuas devoluciones a la comisión y concluía que no podía “menos de escandalizarme al ver proclamar tantas inviolabilidades”. Y no carecía, desde luego, de razón este diputado si

72 DSC, sesión del 10 de noviembre de 1822, p. 563.

73 Proposición de Ayllón en esa sesión. DSC, sesión 10 noviembre 1822.

74 Únicamente descansaba en la “contradicción política que se encuentra en suponer al gobierno supremo y a los primeros agentes del poder ejecutivo supeditados de manera tan arbitraria a sus mismos subalternos y haciéndoles depender de sus mismos dependientes”. El proponente era Flores Calderón, que sería no mucho más tarde presidente de las Cortes. Ibi, p. 562.

se tiene en cuenta el número y resultado de las sesiones dedicadas al “proyecto de ley sobre medidas contra los conspiradores” que se arrastraba desde finales de octubre ⁷⁵.

Las razones extraconstitucionales y metajurídicas, más vinculadas a la vieja “razón de Estado” que a las prescripciones legales, acabarían por imponerse en casos singularmente importantes, en ocasiones respaldadas por algunos diputados exaltados. Pues aunque finalmente, el “asunto Garely” dio lugar a la aprobación y promulgación de un importante Decreto según el cual en los supuestos de conspiración los ex secretarios del Despacho debían juzgarse como si aún lo fueran, un caso de evidente inconstitucionalidad como era el indulto concedido por Palarea a la tropa rebelde, cuya discusión comenzó exactamente el día en que se comunicó a las Cortes la sanción regia al Decreto sobre “reuniones públicas para discutir materias políticas” que restringía la libertad de expresión y afectaba seriamente a las Sociedades Patrióticas⁷⁶, se sustanció con la exoneración del sujeto con el apoyo entusiasta de Alcalá Galiano.

Aun así, es claro que el principal elemento de confrontación, es decir, los modelos constitucionales y en particular el “plan de las cámaras”, jamás dejaron de estar presentes y se manifestaba hasta en los asuntos más estrictamente formales. Como el sucedido en la aludida sesión del 10 de noviembre, cuando se llevó al pleno una proposición de la comisión de Guerra en la que solicitaba se autorizara al gobierno a crear compañías de extranjeros. Varios diputados, entre ellos Argüelles, denunciaron su ilegalidad basándose en que era una competencia del rey, lo que provocó la inmediata reacción de Alcalá Galiano y su respuesta de que las *Cortes extraordinarias no eran las Cámaras de Francia* (cursiva mía) y poseían el poder para proponer y decidir en los asuntos que tenían encomendados⁷⁷. Obvia añadir que así quedaba el campo abierto para otro debate de larga duración en el que los diputados pudieron hacer alarde sus conocimientos, a pesar de que retrasaba la atención a alguno

⁷⁵ Ibi, p. 564. En la sesión del 2 de noviembre Meléndez propone una adición al proyecto contra “los conspiradores del sistema constitucional” para que al artículo 1º se añada la cláusula después de “custodia” “diferente de la cárcel pública y en comunicación” para los conspiradores de alto rango, que se aprobó el 4. A partir del 5 se debatieron las formalidades a seguir en el arresto.

⁷⁶ DSC, sesión 27 de octubre de 1822, p. 800. El dictamen de la comisión especial que le exoneraba se aprobó el 3 de diciembre, pero con varios votos particulares, entre ellos de Oliver, y tuvo proposiciones a favor, como la de Buey que la retiró el 9 de ese mes.

⁷⁷ DSC. Sesión 10 de noviembre de 1822, pp. 567-68.

de los asuntos concretos para los que habían convocadas las Cortes, como la codificación procesal, por ejemplo⁷⁸.

Quizá influenciados por las buenas relaciones con el gobierno se observa a partir de noviembre, una cierta relajación y parsimonia en el tratamiento de los temas. Es muy probable que influyera la creencia de que cualquier proyecto aprobado en Cortes sería sancionado por el rey, extendida hasta el extremo de que en la sesión del 16 de noviembre es el propio Argüelles quien se dirige a la Cámara para recordarles, en primer lugar, que no siempre sucedía y, en segundo, que incluso en el caso de medidas urgentísimas no podían obviarse las formalidades exigidas por una ley⁷⁹. Aunque se aprobaron disposiciones de importancia, casi todas ellas están relacionadas por las perentorias necesidades del momento porque, a pesar de que las comisiones remitían sus proyectos y dictámenes para ser debatidos y sometidos a la aprobación de la Cámara⁸⁰, con frecuencia se retardaban por la duración de los debates. Sólo las cuestiones de trámite, formales o rutinarias, parecen tener una rápida atención a través de la fórmula “las Cortes se dan por enteradas”.

Tal era el ambiente cuando Riego se incorporó a las Cortes el 5 de noviembre e inmediatamente⁸¹ fue adscrito a la de Guerra, una de las más, sino la que más, activa en ese momento. Como proyecto principal, en la medida que conformaba uno de los cuatro asuntos para los que habían sido convocadas las Extraordinarias, tenía confiada la redacción de las Ordenanzas Generales de Ejército. Se trata éste, como es sobradamente conocido, de un tema al que las

78 Aun así, sobre todo la de Procedimientos, presenta varios Dictámenes para su aprobación por el pleno, o consultas cómo sobre quien debían recaer los gastos de ejecución en la aplicación de la pena capital que se discute y aprueba mientras se informaba sobre los sucesos de Cataluña y la victoria de Mina y continuaba la discusión sobre qué hacer con los facciosos. DSC, sesión 5 de noviembre de 1822.

79 “Se ha creído que cuando el Gobierno envía un Decreto a las Cortes trae de antemano la Sanción real. Pueden ocurrir casos en que no”. DSC, sesión 16 de noviembre de 1822, pp. 637 ss.

80 Código de procedimientos, Penal –el 1 y 5 de enero de 1823 todavía se debatía su entrada en vigor alegando que el jurado es la base del Código Penal y se somete a votación si este plazo se suspendía hasta la publicación del Código de Procedimientos, donde salió vencedor el no–, de sanidad militar, y otras disposiciones. Algunas de las consultas eran particularmente relevantes, ya que afectaba a un conflicto de jurisdicciones, como la dirigida al gobierno remitida por la comisión de código de procedimientos sobre qué tribunal era competente para dirimir los conflictos entre funcionarios del poder ejecutivo y el judicial. Vid., en especial, DSC, sesiones de 1 y 5 de enero de 1823.

81 DSC, sesión 6 de noviembre de 1822.

Cortes, ya desde 1810 dedicaron una importancia capital, hasta el extremo de que se propuso hacer una constitución militar para la que, desde entonces, se presentaron varios proyectos, entre otros uno de Florez Estrada⁸². Su relevancia radicaba principalmente en la necesidad de crear un ejército permanente de la Nación vinculado a las Cortes, lo que suponía privarlo de la esfera del rey de cuyas decisiones y órdenes dependía durante el Antiguo Régimen. En el Trienio ya se adoptaron medidas sobre su reorganización en 1820⁸³ donde se optó por una ley–ordenanza cuya elaboración figuraba entre los principales objetivos, pero su discusión se alargó durante los meses siguientes⁸⁴.

Las extraordinarias continuaron sus funciones condicionadas por los

82 A este respecto pueden consultarse “Juan Camuñas: «Ideas para el proyecto de Constitución militar» (3 de febrero de 1813)” analizadas por Teijeiro de la Rosa, “Las ideas de Juan Camuñas para un proyecto de Constitución Militar” en Fernández Sarasola, Ignacio (ed.), *Constituciones en la sombra (Proyectos constitucionales españoles, 1809-1823)*. Oviedo, Seminario Martínez Marina, “In itinere”, 2014 (en línea). Durante el Trienio, las cuestiones militares adquieren un interés singular, sobre todo por el plan reformista que suscitó la oposición de cuerpos consolidados y privilegiados, como la Guardia Real. En este marco, ya desde los inicios se presentan, fundamentalmente escritos por militares constitucionalistas, interesantes observaciones y proyectos al respecto. Así, *Observaciones acerca de la administración militar en España* por J. M. B., Madrid, imprenta del Censor, 1821 o *Reflexiones sobre la constitución militar*. Segovia, Imprenta de Espinosa, 1820. Sobre la aportación de Flórez Estrada en este tema vid. Blanco Valdés, Roberto L., “Álvaro Flórez Estrada teórico de la revolución militar gaditana, en Varela Suanzes, Joaquín (coord.), *Álvaro Flórez Estrada (1766-1853), política, economía, sociedad*. Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 2004 y también en *Historia Constitucional*, n. 5, 2004, en línea.

83 D LXVII de 1 de noviembre de 1820 Se aprueba con algunas modificaciones la organización y fuerza del ejército propuesta por el gobierno. CD T. VI 266-68 (supresión y reorganización de cuerpos).

84 Es de destacar que la comisión, integrada exclusivamente por militares, obviamente todos ellos diputados, presentaba, y desde su incorporación fue frecuentemente Riego el comisionado para su lectura al pleno, la parte que redactaba y solo muy excepcionalmente no aceptó las enmiendas de la Cámara. Además de esa tarea principal, que desarrolló con un rendimiento encomiable pues casi eran diarias, evacuaba asimismo con una mayor frecuencia respuestas a las cuestiones presentadas por particulares e instituciones así como los habituales dictámenes sobre consultas del gobierno y las propias Cortes, siendo abundantes las relativas a los facciosos. Durante los meses de octubre hasta diciembre –menos, aunque igualmente abundantes con posteridad– no existe prácticamente día en que no se remitan a la misma tales cuestiones. Algunas tan relevantes como la disolución de la Guardia Real o formación de nuevas Compañías y remplazos.

acontecimientos cada vez más alarmantes tanto internos como del extranjero que, naturalmente, influían en el correcto desempeño de sus labores legislativas y alteraban el seguimiento de lo preceptuado por el artículo 163 de la Constitución (las cortes extraordinarias no entenderán sino en el objeto para que han sido convocadas). Un impacto particular lo ocasionó el discurso de apertura que Luis XVIII pronunció ante las Cámaras francesas el 28 de enero de 1823. En él, tras exponer que “todo lo he intentado para asegurar la tranquilidad de mis pueblos, y preservar á España de las últimas desgracias, la ceguedad con que han sido desechadas las proposiciones hechas en Madrid, dejan pocas esperanzas de paz”, anunciaba una invasión “para conservar el trono de España”⁸⁵.

Lo que más irritó a la mayoría de la Cámara, incluso a algunos diputados no exaltados, fue la injerencia en los asuntos internos y, fundamentalmente, el ataque la soberanía nacional que tales declaraciones conllevaban. Como mostró Argüelles el 14 de febrero siguiente, en uno de sus más radiantes discursos que acreditaban su sobrenombre de brillante orador, “hasta ahora nadie se había atrevido á decir, que los pueblos no pueden recibir su Constitución política sino de los reyes”. Cargado de razón y con el pleno respaldo de los constitucionalistas expuso llanamente la causa en un memorable párrafo con el que comenzó su intervención y que merece la pena reproducir:

Toda esta historia se reduce á que la Constitución española es el escándalo de la Europa, y una ley incompatible con la seguridad de los Estados, y particularmente de los tronos. [...] . A esto se reduce en compendio todo el grande fundamento de esta especie de conmoción general, que por un encanto se afecta que tiene á la Europa en espectáculo⁸⁶.

En ese ambiente convulsionado, donde, excepto para algunos, la crispación y la desolación operaban a partes iguales, no se puede pasar por alto una cuestión que indignó especialmente: la afirmación del rey de Francia acerca del fracaso de “las proposiciones hechas en Madrid”. Los diputados de buena fe, pertenecieran o no al partido exaltado, interpretaron esta expresión como una falsedad, una invención destinada a justificar una operación contraria a

85 “Cent mille Français, commandés par un prince de ma famille, par celui que mon coeur se plaît à nommer mon fils, sont prêts à marcher, en invoquant le Dieu de Saint Louis, pour conserver le trône d’Espagne à un petit-fils d’Henri IV, préserver ce beau pays de sa ruine, et le réconcilier avec l’Europe”. *Discours du Roi [Louis XVIII], prononcé le 28 janvier 1823, à l’ouverture de la session des Chambres*. Paris, Impr. royale, 1823.

86 DSC, sesión del 14 de febrero de 1823. Vid. también las demás intervenciones.

Derecho, sobre todo tras la negativa del gobierno, y en particular del secretario del Despacho de Estado, de haber recibido ninguna comunicación de las Tullerías. Sin embargo, Luis XVIII no mentía del todo: las notas y conversaciones existían, aunque no precisamente por la vía oficial. Por entonces, tanto anilleros como realistas estaban desplegando una intensa actividad en este sentido, es decir, conspirando contra la Constitución, por más que sus propósitos no fueran coincidentes, en la Corte francesa y en Madrid⁸⁷.

A pesar de ese abrumador escenario, y de la beligerante escisión en el seno de las mismas que la que son elocuente testimonio los votos contra el dictamen de la comisión contra la invasión aprobado en el pleno, las Cortes extraordinarias se mantuvieron como tales y la legislatura se extendió durante todo el tiempo permitido por el propio texto constitucional. Éste, en efecto, disponía que de no haber concluido sus objetivos, como era el caso, serían éstos continuados por las ordinarias que debían iniciarse preceptivamente el 1 de marzo (art. 166).

La clausura tuvo lugar el 19 de febrero de 1823 con un discurso del rey que, ocupado en sus propias intrigas –entre las que figuraba el ya aludido extemporáneo nombramiento de un gobierno exaltado destinado a no tomar posesión para mantener la interinidad del existente y contribuir a la inestabilidad con el pleno respaldo del ministerio francés– y engañando a unos y otros⁸⁸, no acudió al acto y hubo de ser leído por el presidente Ruiz de la Vega. En él atacaba a la regencia provisional creada por los absolutistas calificándola de junta de perjuros rebeldes, aludía a la posición de Francia y otras potencias respecto a España y a la ruptura de relaciones diplomáticas, alababa las medidas adoptadas sobre los sucesos del 7 de julio y remataba con otra de sus

87 Por entonces, “Morejon y Mataflorida estaban en Paris haciendo una Constitución vaciada en el molde la francesa”, expone el documentado Bayo, *Historia de la vida y reinado de Fernando VII*, p. 298.

88 “Hemos insinuado en otra parte que los consejeros ilustrados del príncipe entre quienes había algunos realistas le inclinaban a modificar la Constitución de Cádiz y que en el mismo sentido trabajaban algunos liberales convencidos de la dificultad de pasar adelante con un Código que no daba al poder ejecutivo la fuerza necesaria para ahogar la anarquía. S. M. simulaba estar de acuerdo con unos y otros para conseguir por medio de la apetecida reforma no solo el afianzamiento de su corona sino también la unión y felicidad de los españoles banderizados y prontos a lanzarse en los horrores de una guerra civil. Pero mientras así lo afirmaban sus augustos labios a espaldas de aquellos y en lo más escondido de su retrete seguía tramas muy distintas aunque a veces parecían urdidas con sedas de los mismos colores”. Ibi, p. 295.

constantes “ingeniosidades”: “Mi unión firme y constante con los diputados de la Nación será el garante seguro del acierto y de los nuevos días de gloria que se preparan”⁸⁹.

5. *Prolegómenos del fin: las Cortes ordinarias de 1823. Madrid-Sevilla-Cádiz*

Sin solución de continuidad, al día siguiente, 20 de febrero de 1823, siguiendo las prescripciones constitucionales y del Reglamento de Gobierno interior, se celebró la primera Junta preparatoria de las Cortes ordinarias. La sesión concluyó con el discurso pronunciado por el presidente de la comisión Permanente, Cayetano Valdés, que finalizaba con unas emotivas palabras trasto de la ingenua esperanza y confianza que algunos todavía poseían⁹⁰.

Fernando VII tampoco acudió a la apertura el 1 de marzo. Su discurso, al igual que el de clausura citado, fue entregado por Fernández Gascó, a la sazón secretario del Estado de la Gobernación de la Península interino, al presidente quien lo leyó a la Cámara. En él, además de reconocer que la Administración pública ofrecía “un porvenir bastante favorable” se daba cuenta de la abierta hostilidad de las fuerzas de la Santa Alianza y se consideraba la guerra “ya un mal irremediable”. Tras exponer que “por mi parte ofrezco de nuevo al Congreso nacional cooperar con todos mis esfuerzos á que se realicen las esperanzas que los amantes de las instituciones liberales tienen de la España poniendo en ejecución cuantos medios me dan mis facultades para repeler la fuerza con la fuerza”, añadía la necesidad de “la traslación oportuna mía y de las Cortes a un punto menos sujeto al influjo de las ope-

89 Merece especial atención el párrafo dedicado a Francia. Mientras destacados realistas ultimaban en la Corte de París la intervención, fiel a sí mismo, Fernando exponía literalmente “El rey de Francia a manifestado a las dos Cámaras del Cuerpo legislativo sus intenciones con respecto a España. Las mías son ya públicas y están consignadas del modo más solemne”. DSC, sesión 19 de febrero de 1823, pp. 1513-14.

90 “La Europa toda espera de la constancia y firmeza de las Cortes españolas que la libertad de la España no sea destruida, ofreciendo su perpetuidad la más segura garantía para que no pierda la que ella disfruta”. DSC, sesión 20 de febrero de 1823. Siguiendo lo preceptuado por el artículo 113 de la Constitución, en la primera junta se conformó la comisión de poderes cuya función era comprobar y subsanar las irregularidades que se presentaban en los poderes o actas de los diputados, y en la segunda, 21 de febrero, se eligieron el presidente y los secretarios de las mismas.

raciones militares”⁹¹.

Tras ese anuncio de la guerra, a la que se sumaba el hecho de que el nuevo gobierno nombrado el 28 de febrero, de signo claramente exaltado ya que estaba presidido por Flórez Estrada, no había tomado –ni lo haría nunca– posesión, la legislatura echa a andar en una situación de patente inestabilidad dada la interinidad del ministerio. Aun así, comenzó sus sesiones con una actividad verdaderamente notable. A nadie se escapaba la gravedad de la situación y desde el comienzo, al tiempo que continuaban entendiendo en los asuntos pendientes, se tomaron medidas para hacerle frente. Así lo pone de manifiesto la conformación inmediata de las Comisiones de Cortes, tanto las reglamentarias como las creadas en la legislatura anterior, algunas a socaire de los acontecimientos y otras en virtud del evidente interés de la mayoría por realizar sus ideas y potenciar el “adelanto” de la Nación en conformidad a sus exigencias programáticas, cuya permanencia se aprobó por unanimidad a propuesta del nuevo presidente. Dadas las circunstancias, se reforzó asimismo la de Guerra, de la que Riego era presidente, con cuatro diputados, dos de los cuales estaban destinados a la tarea de redacción del Código penal militar y los restantes a la elaboración del reglamento de cirugía militar⁹².

No es en absoluto difícil comprobar, a través de la lectura de las actas de unas sesiones que han tenido que ser reconstruidas tras la pérdida de documentos en el sabotaje del barco que los llevaba de Sevilla a Cádiz, el *pathos* de aquellos diputados, a excepción claro está de los realistas, e incluso de algunos moderados, en unos momentos en los que todo parecía escapar a su control y, lo que es más importante, a la legalidad constitucional. Debatándose entre las causas y los remedios, todos eran conscientes en donde estaba realmente la raíz de la conspiración.

Lo dejó bien patente el diputado Joaquín Ferrer en esa misma sesión, en la que se aprobó la publicación de la Memoria elaborada por la diputación permanente sobre los sucesos de julio y el presidente informó que la traslación de las Cortes y el rey solo estaba pendiente de un dictamen del Consejo de Estado. En uso del “más sagrado de sus deberes”, describió con datos incon-

91 DSC, sesión 1 de marzo de 1823, pp. 5-6.

92 DSC, sesión 2 de marzo de 1823, pp. 7-8. Las reglamentarias eran las de poderes, legislación, primera de hacienda, guerra, marina negocios eclesiásticos, casos de responsabilidad, comercio, agricultura y artes, instrucción pública, Diputaciones provinciales, libertad de imprenta, biblioteca, ultramar, gobierno interior y corrección de estilo. A ellas se sumaron las de Caminos y canales, procedimientos militares, Diplomacia, Códigos, salud pública, segunda de hacienda y pesos y medidas.

testables el estado crítico al que habían llevado a la Nación las conspiraciones existentes y la inmediata invasión. Con todo, lo que aquí más interesa resaltar de su alegato es la directa acusación de connivencia con los conspiradores que lanza contra el rey, al que señaló como causa primera de la inestabilidad política, al reprocharle que en momentos “tan urgentes, tan preciosos y que se va a comprometer al pueblo de Madrid con esta invasión intentada y calculada”, cuando se necesitaba más estabilidad, haya destituido a un “Ministerio del que dice estar muy contento, muy satisfecho y de que ha cumplido con sus deberes”. No era, desde luego, el único diputado en expresar una opinión que se extendía más allá de las filas exaltadas.

Sus consideraciones, en efecto, fueron respaldadas inmediatamente por otro interviniente en una línea aún más contundente: “Yo repito con S.S. que veo una conspiración organizada, y añado, que estoy convencido, y creo que todo el mundo lo está también, de que esta conspiración existe en el centro del Palacio Real”. Coincidiendo en los mismos argumentos, relativos a la inoportuna e imprevista destitución del gobierno y a la perentoria necesidad de adoptar medidas urgentes, el diputado Rico en “descargo de su conciencia” exhortaba perentoriamente a “declarar la impotencia física de Su Majestad”⁹³. Esta petición, que mereció grandes aplausos del público asistente desde las tribunas, reprobados, en conformidad a lo dictado por el Reglamento de gobierno interior de las Cortes, inmediatamente por el presidente de las mismas, dio lugar a un intenso debate que, por un lado, refleja la impotencia, ansiedad e insatisfacción de los diputados exaltados y, por otro, manifiesta con fidelidad impresionante la profunda crisis política y, sobre todo, constitucional del momento. En conjunto, es sin duda una de las sesiones más sobrecogedoras del Trienio.

La cuestión, llegados a estos extremos, se presentaba en términos sencillos. Por un lado se encontraban los diputados que, en especial los así llamados exaltados, a pesar de conocer, y sufrir, los inconvenientes y ardides polí-

93 DSC, sesión 2 de marzo de 1823, pp. 8 y 9. Como “Diputado y español”, Ferrer, en efecto, expone alto y claro lo que no era un secreto para nadie: que la “Nación está en el cráter de un volcán”. Siempre bien informado –de hecho fue él quien anunció a las Cortes en marzo del año anterior la existencia del “plan de las Cámaras”, esto es, la abolición de la Constitución de 1812, de los *anilleros*– expuso que los movimientos conspirativos seguían exactamente el modelo de los que habían sucedido en Nápoles y anunciaba que para el próximo 5 se esperaban en Bayona 27 regimientos de infantería y 17 de caballería “y que su proyecto es el mismo que se nos ha anunciado otras veces, esto es, dar un golpe de mano sobre Madrid, privarnos del Gobierno en el momento mismo en que abren las Cortes”.

ticos, se veían completamente coartados por el seguimiento estricto del texto constitucional y la legislación de Cortes a la que fueron rigurosamente fieles como corresponde a un gobierno de las leyes. Por el otro, el rey, con el apoyo miembros de la Iglesia católica que se opusieron sistemáticamente aceptar las medidas acordadas por las Cortes, aun las que le beneficiaban, y de los que, en el Diario de Sesiones, se denominan “consejeros privados”. A este grupo se añaden quienes mantuvieron una actitud pasiva o que llegaron a colaborar de una u otra forma pero siempre en la sombra con las maquinaciones realistas, en particular los conocidos como *anilleros*. Su deslealtad al sistema constitucional era más que evidente y se expresaba por todos los medios a su alcance, desde la prensa a las operaciones más o menos encubiertas.

En este sentido, los ardides empleados rayan en ocasiones la estolidez, lo que, bien mirado, demuestra la seguridad en un apoyo interno y exterior del que, en efecto, gozaban. Tal es el caso del burdo cese del gobierno el 28 de febrero en las mismas vísperas de conformarse las Cortes. El haber nombrado en esa fecha uno presidido por Flórez Estrada de signo más exaltado que el de Evaristo San Miguel solo podía tener el propósito de ofrecer a los integrantes de la Santa Alianza la deriva de un régimen que se oponía radicalmente al modelo, absolutista o en el peor de los casos doctrinario, del que aquellos se habían proclamado defensores acérrimos y exclusivos. Las denuncias en Cortes de esta actitud y la presión externa hicieron que este ministerio no llegara a tomar posesión, pero a la postre, el movimiento no le salió tan mal a Fernando VII y sus afines ya que mantuvo hasta mayo, en que nombró un gobierno moderado, al existente de forma interina. Aunque es cierto que no faltaron exaltados que vieron en esta interinidad una oportunidad, lo cierto es que, como el mencionado diputado Rico reconocía⁹⁴, coartaba tanto la labor del propio ministerio como de las Cortes, fomentando así un recrudecimiento de una situación desesperada, que era lo que se pretendía desde la Corte.

La maquinación, cuyo fundamento constitucional era incuestionable en la medida que el artículo 171-16^a le reconocía la facultad de nombrar y separar libremente a los secretarios de Estado y del Despacho, no es más que otro episodio de un juego perverso desarrollado en el límite de la Constitución.

94 “Yo quisiera, por lo tanto, saber del Gobierno, si hay fuerzas que puedan impedir a los franceses su marcha hacia la capital: si no las hay, como yo así lo creo, pues no es posible que las haya, resultará que los franceses llegarán a Madrid antes que el Gobierno nuevamente nombrado pueda tomar conocimiento del estado en que se encuentra la Nación”. Ibi, p. 9.

En realidad, un atropello al espíritu de la misma por cuanto el Decreto de cese obligaba a los ministros a permanecer en su cargo hasta que leyesen sus Memorias, lo cual, como recordaría con apenas oculta indignación en su intervención Canga Argüelles, impedía –“¿qué hacemos con esto? Nada”– la adopción de cualquier solución, absolutamente perentoria en aquella situación donde todos conocían la inmediata invasión tras la confirmación de la misma que el secretario de Estado, Evaristo San Miguel, en uso de sus atribuciones en situación de interinidad, realizó a solicitud de este diputado⁹⁵.

Tales posicionamientos no afectaban solo a la Corona sino que involucraban a altas instituciones del Estado. Al margen de consideraciones políticas, esta manifestación de deslealtad, uno más en los constantes episodios de su reinado, se extiende de manera palmaria al Consejo de Estado. Su inexplicable actitud en relación a la no emisión del preceptivo dictamen –como exigía el artículo 236 de la Constitución– sobre la traslación de las Cortes, el Ejecutivo y familia real aprobada por un Decreto de 17 de febrero a dos días de la clausura de las Cortes extraordinarias, era, a todas luces, una injustificable operación dilatoria rayana en la infracción constitucional y solo puede entenderse desde la complicidad con el rey, a quien la Constitución reconocía su nombramiento a propuesta de las Cortes (art. 233). Que la mayor parte de sus integrantes eran afines a Fernando VII se puso de manifiesto en los sucesos de julio por cuanto de los treinta consejeros, solo 16 firmaron el dictamen de inhabilitación. Su actitud era tanto más incomprensible cuanto, tal y como informó el secretario de Guerra interino, el gobierno en aplicación del mencionado Decreto, había solicitado inmediatamente un informe técnico a una junta de militares, requiriéndoles una respuesta en veinticuatro horas que ésta evacuó en tiempo y forma. El 24 de febrero se sometió a consulta del Consejo de Estado, a quien, por Real Orden de la Secretaría de Guerra fechada el 28 de ese mes se le reiteró la urgencia, pero, tal y como expresó el secretario, aún no se había recibido el dictamen.

Se comprende muy bien la reacción que la noticia provocó en la Cámara, y no solo entre los diputados exaltados. Apelando al precedente de la traslación de las Cortes y la Regencia en 1811, Canga y Argüelles presentaron una proposición, que se aprobó por mayoría, en la que pedían que fuera el gobierno, obviando al Consejo de Estado, el que declarase al día siguiente la fecha y lugar de traslación, dado que Fernando VII, a quien las Cortes habían autori-

95 De hecho confirmó la existencia y el número, entre 80.000 y 90.000 hombres de las fuerzas apostadas en los Pirineos para el 15 de octubre. Ibi.

zado a señalarlos, no se pronunciaba al efecto. De entre todos los oradores en aquella importantísima, desde el punto de vista constitucional, sesión donde la confrontación de poderes y el conflicto institucional alcanzó una de sus cotas más elevadas, resalta la intervención de Isturiz, en la que no solo acusa al Consejo de infringir la Constitución: calificaba directamente a sus miembros de prevaricadores⁹⁶. Con todo, de nada valieron las medidas propuestas por la comisión especial de Cortes encargada de analizar este particular asunto⁹⁷.

Nos encontramos aquí, a mi parecer, ante otro episodio que deja traslucir uno de los principales problemas, cuando no el mayor, de aquella segunda etapa constitucional y que se presenta sobre todo en las legislaturas de 1822 y 23, es decir, las de mayoría exaltada que jamás fue bien recibida no ya por los absolutistas sino entre los moderados.

El fondo de la cuestión pone de manifiesto la propia idea de Constitución y más en concreto de su aplicabilidad y juridicidad contempladas ambas en conformidad a la coetánea concepción europea de la misma como acertadamente ha visto Fernández Sarasola⁹⁸. Es decir, la equiparación de la juridicidad de la Constitución y demás disposiciones en un sistema que carecía de control de constitucionalidad, lo que fue una fuente inagotable de conflictos en aquellos precisos momentos, cuando los intereses partidistas se impusieron e imposibilitaron llegar a acuerdos. La ausencia de voluntad para conseguir este propósito se substituyó, entre los realistas y, al menos, un sector de los moderados, por el recurso a comportamientos abiertamente anticonstitucionales.

En este sentido, en el plano material, la raíz del conflicto radica en que mientras los exaltados partían de una visión unitaria de Constitución a la que

96 “Yo no puedo menos de encontrar un gran crimen, bien de ignorancia, bien de intención, por parte del Consejo de Estado, que tanto tarda en dar su dictamen sobre una consulta de esta magnitud y yo no sé cómo el Consejo de Estado ha de responder a este cargo, porque no puede decirse que haya un asunto de más importancia que éste, ni que tenía que tomar datos para resolver sobre él, pues estos solo los tiene que tomar el Gobierno”. DSC, sesión 2 de marzo de 1823, p. 11.

97 Vid. a este respecto *Examen analítico del dictamen de la Comisión de medidas en cuanto á la responsabilidad que propone se exija al Consejo de Estado, precedido de una carta sobre el mismo asunto*. Madrid, imprenta nacional, 1823.

98 Sobre este aspecto y las relaciones constitución material y constitución formal, vid. las lúcidas observaciones de Fernández Sarasola, Ignacio, “Valor normativo y supremacía jurídica de la Constitución de 1812”. Puede consultarse ahora en Biblioteca Virtual Cervantes.

contemplaban como norma suprema y se empeñaron en un seguimiento escrupuloso y rigurosa aplicación del texto constitucional y el ordenamiento jurídico, los segundos, desde una visión “exclusivamente política”, apuraron hasta el extremo todas las oportunidades para eludir la misma en aquellos aspectos contrarios a su ideario, e intentaron, en muchas ocasiones infructuosamente, no salir de los límites de un terreno muy pantanoso siguiendo una calculada estratagema que no siempre les dio resultado. A ello, en gran parte, contribuyó el diseño constitucional del rey y sus facultades y competencias, que Fernando VII y sus seguidores interpretaron siempre de una forma exasperada, incluso rechazando las convenciones parlamentarias, generando así continuos enfrentamientos y una tensión que no se desvaneció nunca en la Cámara. En más de un sentido, su actuación incluso sobrepasa el poder moderador que el doctrinarismo, tan caro a los moderados y *anilleros*, reconocía a los reyes. Todos sus ardides y argucias, de las que fueron plenamente conscientes los representantes y la propia ciudadanía, podían, sin embargo, encontrar acomodo en la propia Constitución dejando inermes a unos diputados cuyo interés en la conservación “intacta” y en la exquisita implementación rigurosa del ordenamiento jurídico vigente les dejaba, en ocasiones, indefensos y sin argumentos.

Presionadas por las sublevaciones internas y la invasión extranjera, las Cortes, con todo, intentaron seguir en la medida de lo posible sus funciones. Así, por ejemplo, en la sesión del día 3 se aprobó la publicación, tras ser finalmente sancionada por el rey, de la ley para el gobierno económico-político de las provincias, cuya larga discusión habían concluido las extraordinarias⁹⁹. Se trata de una norma de incuestionable relevancia por cuanto regulaba el fundamental asunto de las diputaciones provinciales y ayuntamientos y buena parte de su importancia descansa en el hecho de que recogía los principios irrenunciables del liberalismo progresista sobre esta materia en el siglo XIX. Y asimismo se siguieron los habituales asuntos de trámite, los casos de responsabilidad, las solicitudes cursadas en base al derecho de petición, mientras las Comisiones, en especial la de guerra, continuaban sus respectivos trabajos y el pleno debatía sobre los proyectos en curso, algunos tan relevantes en ese momento como era el de las Ordenanzas de Ejército¹⁰⁰, además de atender y

99 DSC, sesión 3 de marzo de 1823, p. 15, el presidente ordena su promulgación y archivo del proyecto sancionado por S. M.

100 DSC, sesión de 5 marzo de 1823, se reanudan los debates sobre este proyecto que se alargarían a las siguientes.

procurar el remedio de las cuestiones y necesidades de la hacienda pública. Asimismo, se consiguió a lo largo de la legislatura solventar las dificultades que impedían la aplicación del Código Penal, redactar el de procedimientos, el de sanidad militar y reglamento de cirugía y progresar en otras normas de incuestionable interés.

El avance en las tareas legislativas y demás que tenían encomendadas las Cortes se llevó a cabo, sin embargo, en un ambiente convulsionado por los acontecimientos de naturaleza jurídica aludidos en los epígrafes anteriores, los cuales dieron lugar a un clima de desconfianza en el que los exaltados siempre trataron de evitar o solventar los atentados contra la Constitución. Incluso en una situación abrumadora en la que la extremada gravedad de los hechos externos condicionaba el desarrollo de las sesiones, para ellos los dos asuntos más relevantes se condensaban en exigir el compromiso constitucional efectivo del rey con la Constitución¹⁰¹ y aplicar escrupulosamente el ordenamiento jurídico encabezado por la misma. Así, entre otras, lo pone de relieve la adopción de medidas tendentes a la articulación milicia nacional-ejército sin alterar lo preceptuado en el texto constitucional y siguiendo la legislación específica sobre ambos cuerpos en aras a la defensa nacional.

Como es bien conocido, el domingo 22 de marzo el presidente de las Cortes, Flores Calderón, en conformidad a lo aprobado por las mismas, anunció la suspensión de las sesiones y su reanudación en Sevilla el 23 de abril¹⁰². Se continuaron, en efecto, con la presencia del Ejecutivo en pleno –salvo el rey– y se abrieron con un extenso discurso del presidente de encendido tono patriótico que, a petición de Canga, fue publicado. Y se iniciaron con el aparente tono de normalidad que procedía de las peticiones remitidas a las respectivas comisiones y hasta con la felicitación por su alumbramiento a la infanta Josefina Carlota¹⁰³.

101 Vid. a este respecto el interesante debate sostenido “sobre esta cuestión delicada” entre Ruiz de la Vega y Argüelles el 3 de marzo. DSC, sesión 3 de marzo de 1823, pp. 5-6.

102 “El Señor Presidente dijo: “Se suspenden las sesiones de la legislatura ordinaria actual en su segundo periodo, para continuarlas en Sevilla el día 23 de abril próximo venidero, conforme a lo acordado por las Cortes”. DSC, sesión 22 de marzo de 1823, p. 28. El traslado era prácticamente asunto único ese día, pues en la sesión, que se abrió a las 11,30, solo se leyó el acta de la anterior y se ordenó agregar el voto particular de un diputado a las intervenciones sostenidas por Vicente Ferrer Carrera.

103 Merece la pena reproducir el inicio del discurso de Flores Calderón : “En medio de mil obstáculos, y mal que les pese a los autores de tantas imposibilidades como entonces se propalaron, hemos dado a la Europa entera un nuevo desengaño [...] conduciendo

No obstante, en seguida apareció de manera abrupta la principal cuestión de fondo cuando el secretario de Estado de Gobernación de la Península, que seguía interino, informó a la Cámara que, sin mediar declaración de guerra, el ejército francés apostado en los Pirineos había atravesado la frontera y que 10.000 hombres estaban ya en Vitoria. Esta confirmación oficial fue seguida por la exposición de Canga acerca del apresamiento de un buque español por los franceses justamente coincidiendo con la declaración que Luis XVIII había hecho en enero ante la Asamblea francesa acerca de la obligación de efectuar cambios en la Constitución de 1812. Considerados actos bélicos injustificables e injerencia inaceptable en los asuntos internos que infringían las normas más elementales del Derecho internacional vigente, el diputado asturiano solicitaba la adopción de medidas urgentes y contundentes¹⁰⁴. Sin embargo, una vez más y a pesar de la anormalidad y gravedad del momento, se sigue escrupulosamente el Reglamento de Gobierno de Cortes y por su artículo 100, se envían a una comisión especial. Ni siquiera en el escenario más desastroso de todos los posibles, los representantes estaban dispuestos a aprobar una solución por más apremiante que fuera y optaron por seguir un procedimiento formal que dilataba la toma de decisiones en el mayor caso de excepcionalidad que podía presentarse.

Sin embargo, es precisamente en ese contexto donde, a mi parecer, se entiende la inexplicable situación de interinidad gubernativa que había mantenido Fernando VII. Con prácticas dilatorias, facilitadas por el formalismo de las Cortes, las preceptivas memorias de los secretarios del Despacho sufrieron retrasos continuados, impidiendo así la toma de posesión del nuevo gobierno ya que no podría hacerse hasta cumplir aquel requisito. Era una estratagema perfectamente calculada, en la medida que imposibilitaba la presencia de un ministerio de signo aún más exaltado que el anterior y, por consiguiente, contaba *ab initio* con la profunda animadversión del rey a pesar de haberlos nombrado en base a la potestad otorgada al efecto por el 171-

en triunfo la *libertad* (cursiva original), sostenida, por decirlo así, en los hombros del dignísimo general y los valientes que nos acompañaban [...] Al oír este nombre sagrado, lo pueblos todos se apresuran y acuden a felicitarnos...". Y poco antes de concluir añadía "No es solo nuestra libertad la que atacan, es nuestra independencia a la que quieren atentar [...] intentan empañar su esplendor y mancillar la gloria del gran Monarca que le ocupa, por no tener el valor de imitarle ni de emular siquiera sus virtudes y su justa decisión" DSC, sesión 23 de abril de 1823, pp. 1-3. Sobre las Cortes en esta época, Sánchez Mantero, Rafael, *Las Cortes de Sevilla en 1823*, Parlamento de Andalucía, 1986.

104 Ibi.

16^{a105} y así pudo nombrar uno de claro signo moderado. Con ello, como con agudeza manifestó a la Cámara el diputado Ferrer, el rey y sus aliados habían conseguido un éxito indiscutible porque, de esta manera, la responsabilidad, “el peso de esta guerra”, recaía sobre el Congreso y no sobre los invasores a pesar de la infracción de la normativa internacional vigente¹⁰⁶.

Con ese telón de fondo se continuó una actividad en la que se atendían los asuntos ordinarios marcados por las circunstancias, como las peticiones realizadas a las Cortes, los relativos al comercio y hacienda, los secretarios del Despacho presentaban finalmente sus memorias y las comisiones, en especial la de guerra por razones obvias, siguieron realizando las funciones que tenían encomendadas¹⁰⁷.

A este respecto merece una especial atención la proposición de “muchos señores diputados” para que volviera a tratarse “por tercera vez” el decreto de abolición de señoríos aprobado en las legislaturas de 1821 y 22. Aceptada por el pleno, dio lugar a un debate de interés, que afecta al propósito de este trabajo, acerca del dictamen de la comisión de legislación sobre el Decreto de abolición de señoríos, que el rey había rechazado en dos ocasiones basándose en un dictamen del Consejo de Estado. Éste, en efecto, integrado en su mayoría por miembros de la jerarquía eclesiástica y alta nobleza designados por

105 De hecho, los secretarios del Despacho dimitieron al día siguiente, 24 de abril, tras haber leído sus Memorias en las Cortes. Como exponía años más tarde el propio San Miguel “El día 24 de abril leyó su memoria, con el indicado apéndice; y el momento que siguió á este acto, fué el principio de la salida sucesiva de todos los individuos de aquel ministerio, pues cada uno dejó el puesto conforme leyó en el seno de las Cortes su respectivo documento. Así concluyó aquel ministerio azaroso, que desde el 19 de febrero en que habia sido exonerado por el Rey, no era propiamente ya gobierno. Solo un espíritu, de consecuencia con las Cortes; el deseo de corresponder á su confianza, y un sentimiento de deber, llevado tal vez á la exageración, le habia hecho arrostrar la terrible responsabilidad en que incurría, permaneciendo en el poder dos meses mas de lo que en rigor le estaba prefijado; pero crecía en ellos á cada momento la profunda convicción de que era indispensable la salida del gobierno y las Cortes de Madrid, y de lo difícilísimo, si no imposible, que en un cambio de ministerio llegaría á realizarse en tiempo”. San Miguel, *Vida de D. Agustín de Argüelles* Vol. II, p. 73.

106 “Naciones extranjeras que pasan por amigas y personas del mayor respeto, han querido defender en nuestra Nación la opinión dirigida á echar el peso de esta guerra sobre el Congreso, suponiendo que se le han hecho proposiciones no contrarias a nuestro sistema, que a haberlas admitido se hubiera evitado la guerra”. Diputado Ferrer, DSC, sesión del 23 de abril de 1823, p. 4.

107 DSC, sesiones 28 y 29 de abril de 1823.

el rey a propuesta de las Cortes, sostenía entre otras cosas, que los requisitos que el Decreto exigía a los señores suponían una agresión a la Corona¹⁰⁸.

Lejos de ser un caso aislado, el que acaba de relatarse no era sino un episodio más a sumar a los que continuaron planteándose ininterrumpidamente desde el prisma de la confrontación efectividad política-validez jurídica, que nunca dejó de estar presente, en las relaciones Ejecutivo-Legislativo. Un testimonio elocuente se presenta cuando la solicitud que el diputado Salvá dirigió a las Cámara el 27 de abril para que impeliese al rey a no cambiar el gobierno en tan críticas circunstancias fue contestada abruptamente por Alcalá Galiano con el argumento de que entraba dentro de sus competencias y a las Cortes solo competía pedir la responsabilidad de los secretarios del Despacho como contraposición a aquella facultad constitucional del rey, poniendo así de manifiesto que el bloque exaltado también presentaba sus fisuras¹⁰⁹. El resultado, como es conocido, fue un gobierno interino en un estado de guerra y que el ministerio progresista de Flórez Estrada designado dos meses antes quedó desbancado por el moderado de Pando, nombrado el 12 de mayo siguiente.

Con esos mimbres se tejió el cesto en que se ahogaron aquellas Cortes de mayoría exaltada en los meses siguientes, en la medida que facilitaron el éxito de la conspiración anticonstitucional. Si, dejando a un lado el previsible comportamiento de los absolutistas, los moderados pretendían convencer o al me-

108 DSC, sesiones 26 y 27 de abril de 1823. La encargada era la Comisión de Legislación que tenía encomendado “el arreglo de tribunales y señoríos” y presenta su dictamen en 26 de ese mes. Ya el proyecto y dictamen elaborado por la comisión primera de Legislación en 1820 (integrada por Calatrava, Gascó Marina, Vadillo, Manescáu, S. Miguel, Moragues) y que fue publicado por orden de las Cortes, obtuvo duras críticas incluso en el seno de la misma. La comisión en efecto, había dejado sentado que “los españoles... no reconocen otro señorío que los de la Nación misma... sus derechos están consignados en la Constitución... y ella les asegura del modo más positivo que son libres y que no pueden pertenecer a otra dominación”, pero esta decisión mereció el voto particular del diputado Joaquín Rey con el argumento de que la soberanía nacional no se extendía a la propiedad y sus facultades anejas. y defendía que “es necesario destruir esta doctrina de los publicistas”. Se cita por *Dictamen y proyecto de ley sobre señoríos presentados a las Cortes por su comisión primera de legislación y mandado imprimir por orden de las mismas*. Madrid, en la imprenta de la calle de la Greda, 1820, pp. 16 y 37 respectivamente. El tema despertó interés, sobre todo entre las gentes del foro. Un intento de conciliación, si bien más inclinada hacia la última tesis, en *Los principios de la Constitución española y los de la justicia universal aplicados a la legislación de señoríos [...] dedicado a las Cortes por un jurisconsulto español*. Madrid, Imprenta de don Mateo Repull, 1821.

109 DSC, sesión 27 de abril de 1823, p. 24.

nos aquietar los ánimos del *Concierto* europeo, apurando lo que, sin fundamento, creían que era una de sus últimas oportunidades, es obvio que no lo consiguieron¹¹⁰. Por el contrario, con esa actitud insuflaron energía al rey y sus secuaces que se permitieron toda clase de licencias en este terreno como reconocería explícitamente Munárriz, uno de los más activos diputados del periodo, en la sesión del 2 de mayo. En su extensa intervención dejaba constancia de forma contundente que la proclama del rey dirigida a los españoles con motivo del aniversario de ese día “no versa sobre nuestros principios ni sobre la justicia de nuestra causa”. Aun así, las Cortes, a instancias del presidente y varios diputados que insistían en conservar la moderación al respecto, solo aprobaron que el gobierno escribiera un manifiesto dirigido a las cortes de Berlín, Viena y San Petersburgo y a los liberales de toda Europa en defensa de la causa¹¹¹.

Pero también procuraron respaldo a los moderados y anilleros que habían aprovechado las circunstancias para llevar a cabo un amplio despliegue en favor de la reforma de la Constitución, como exponía el astuto Alcalá Galiano a la Cámara en su célebre discurso del 24 de mayo de 1823, con ocasión del debate suscitado en torno al dictamen elaborado por la comisión Diplomática acerca de la Memoria presentada por el secretario del Despacho de Estado. Es decir, allí donde recordaba que eran dos los principios que estaban en guerra: la soberanía nacional y el despotismo y atacaba con dureza la *Carta* francesa de 1814¹¹². A esas alturas no solo la división, en y dentro de los bloques, sino la difidencia dentro de las mismas Cortes era notoria y se pone de manifiesto hasta en los asuntos secundarios o formales. Como el ocurrido el 3 de junio con relación a las elecciones, cuando un diputado pidió que el voto secreto del artículo 73 de la Constitución se modificase para evitar que el presidente y los secretarios hiciesen un uso incorrecto. Fue rechazada entre otros por el prudente Oliver con el argumento de

110 Es a este respecto significativa la profesión de “moderantismo” a la queja diplomática elevada al gobierno por los embajadores acreditados en Madrid, a excepción del de Gran Bretaña, encabezados por el Nuncio acerca de los acontecimientos del 7 de julio de 1822, en el que amenazaban con represalias “si el rey sufría algún daño” dada por Martínez de la Rosa, que puede consultarse en Bayo, *Historia de la Vida* y en los *Ocios de los españoles emigrados*, nº 4, 1824.

111 DSC, sesión 2 de mayo de 1823. El entrecomillado en p. 45.

112 “Corre muy válida, señores, de que tanto el Gobierno por su ligera e imprevisión, cuanto el Congreso por un movimiento noble, pero imprudente, desaprovecharon una ocasión oportuna para negociar, o ya haciendo modificaciones de breve importancia en la Constitución y cediendo un tanto del orgullo nacional, evitar la guerra como otros gobiernos deseaban de su parte”. DSC, sesión 24 de mayo de 1823, pp. 183-84.

que era de todo imposible “que alguien se votase a si mismo”¹¹³. Para entonces, ya existía un número considerable de deserciones en la Cámara, hasta el extremo de no poder reunir el quorum necesario en determinadas ocasiones.

La situación como es sobradamente conocido, se exasperó en la sesión del 11 de junio, en la que se procedió, a propuesta de Alcalá Galiano, a declarar la inhabilitación del rey y al nombramiento de una regencia provisional, y es de destacar que inmediatamente tras su aprobación, fue Riego quien, habitualmente parco en intervenciones, solicitó que sus miembros jurasen la Constitución, reafirmando así su adhesión a la intacta. En este contexto, adquiere una singular importancia el fundamento de la negativa de Fernando VII al traslado de la familia real, el gobierno y las Cortes a Cádiz ante el inminente peligro de ocupación de Andalucía por las tropas francesas con el apoyo popular y de los realistas. Con su tajante respuesta a la comisión especial de Cortes que le presentó la resolución de las mismas sobre el asunto, de que como hombre lo haría pero no así como rey, estaba invocando ni más ni menos la teoría de los dos cuerpos del rey que había servido de fundamento al poder regio desde la Edad Media¹¹⁴. Era, claramente, un acto de inconstitucionalidad por el que Fernando VII no solo manifestaba una vez más su abierta hostilidad a las Cortes sino que, además, reafirmaba su poder absoluto.

En este sentido no puede negarse que tenía toda la razón el general asturiano cuando escribe el documento referencia de este trabajo. Completamente decepcionado e impotente, asistió a y siguió el desarrollo de las sesiones, participó activamente en sus tareas en la comisión de Guerra y aceptó los encargos que se le hicieron. A este respecto, es desde luego reseñable que fuera elegido únicamente para encabezar, en los tiempos más difíciles, las comisiones más conflictivas con el rey, como la que debía comunicarle su inhabilitación o recordarle el pronunciamiento de 1820¹¹⁵, y nunca formó parte de las muchas otras protocolarias que se desarrollaron a lo largo de las legislaturas.

113 DSC, sesión 3 de junio de 1823, p. 208.

114 A este respecto, el clásico estudio de Ernst H. Kantorowicz, *Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval*. Madrid, Akal, 2012.

115 Riego, como es conocido, formó parte de la comisión que comunicó al rey su inhabilitación en mayo 1823. Con anterioridad, el 30 de diciembre de 1822, fue nombrado presidente de la comisión (integrada toda ella por militares diputados) que debía hacer la manifestación de gratitud a las tropas el 1 de enero de 1823; y el 11 de enero de este último año, fue también designado presidente de la comisión que debía entregar al rey el acuerdo unánime de las Cortes contra la invasión francesa y las amenazas de las otras Potencias. DSC, sesiones del 30 de diciembre de 1822 y 11 de enero de 1823.

CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD E INFRACCIONES A LA CONSTITUCIÓN EN LOS CASOS DE RAFAEL DEL RIEGO

Así pues, concepciones opuestas e irrenunciables de Constitución, conflicto de poderes y un, por así decir, formalismo legal, producto de la propia idea de la normatividad constitucional entonces vigente que implicaba la aplicación rigurosa de la Constitución y las leyes, con el que los diputados exaltados quisieron defender el orden constitucional existente de las múltiples conspiraciones en curso. Una manifestación ilustrativa de este último aspecto se advierte con nitidez en la sesión del 28 de abril cuando se le deniega a Riego la autorización para abandonar las Cortes y unirse a la defensa de la Nación. Fue la postrera causa de las que le afectaron y que se analizarán a continuación, las cuales, a mi entender, vienen a corroborar cuanto se ha expuesto en los epígrafes precedentes. Es decir, más allá del sujeto afectado, de las intrigas y juegos políticos y de la importancia concedida a la opinión pública, en lo que aquí interesa tiene el valor añadido de procurar una imagen acerca de la inteligencia del Poder Ejecutivo, o más exactamente, del ejercicio de este poder entre moderados y exaltados, por un lado, y, por el otro, de las consecuencias derivadas de la inexistencia del control de constitucionalidad.

Todos los casos están relacionados con su posición de personaje público y, si aceptamos la teoría de Lakoff¹, poseen una clara finalidad propagandística ejercida desde el poder para imponer un determinado punto de vista eliminando el contrario. Y dos de ellos lo están, además, con las vicisitudes relativas a cargos de designación regia a los que renunció infructuosamente y que, al igual que los demás otorgados por el rey, fue, como demuestran los acontecimientos, fruto de una calculada operación destinada a abolir –o, en el mejor de los casos, modificar– el “sistema” representado por la Constitución de 1812 a través, principalmente, de la reducción de la influencia de los liberales más radicales caracterizados por la defensa a ultranza de la aplicación íntegra de la misma. Para alcanzar este propósito, los diferentes gobiernos, a excepción del presidido por San Miguel, utilizaron todos los medios a su alcance, incluidos los subrepticios, que afectaban directamente

¹ Lakoff, George, *No pienses en un elefante. Leguaje y debate político* (2004). Madrid, Editorial Complutense, 2007.

a los símbolos triennistas entre los que este general ocupaba un lugar destacado.

En el examen se ha optado por presentar los hechos, el *iter* procesal y calificación jurídica para concluir con unas consideraciones jurídico-constitucionales.

1. La abolición del nombramiento para la Capitanía General de Galicia

El primer litigio de alcance nacional que se plantea en relación con Riego, aconteció a finales del verano de 1820. Estuvo, como es conocido, vinculado a las circunstancias en que se llevó a cabo la abolición de su nombramiento de capitán general de Galicia sin haber llegado a tomar posesión de la capitanía.

a. *Los hechos*

La designación de Riego para este alto cargo está conexo directamente con la disolución del ejército de observación, también conocido como “ejército de la Isla”. Esto es, el cuerpo de, aproximadamente, ocho mil soldados² que, una vez asegurado el triunfo del constitucionalismo tras la jura de la Constitución por el rey en marzo, permaneció en Andalucía comandado por Riego con los generales Arco Agüero y López Baños con el fin de defender y mantener el orden constitucional en el territorio y sofocar los movimientos anticonstitucionales. Su eliminación por orden del Ejecutivo desencadenó la incompreensión de la tropa, jefes y oficiales que, por disciplina militar, acataron y cumplieron la medida, pero asimismo la estupefacción de la población que no alcanzaba a entender las razones de tal decisión.

Con el fin de convencer a las autoridades que habían dictado tal orden de rectificar esta decisión, los tres generales redactan y elevan al rey y a las Cortes una representación en la que exponen los riesgos que conllevaba la disolución, habida cuenta las conspiraciones en curso y la oposición absolutista, y rogaban su abolición³. La solicitud no solo no prosperó, sino que el

2 Aunque en las Cortes se cifró en torno a 8.000, la *Miscelánea de Comercio, Política y Literatura*, nº 99, 7 de junio de 1820, p. 2, computaba una tropa de 12.811 soldados de infantería y artillería, sin contabilizar la caballería, lo que hace presumir un licenciamiento previo a esa fecha.

3 Fue publicada ese mismo año en Méjico: *Representación hecha al Rey y a las Cortes por los generales de ejército de observación D. Rafael del Riego, D. Miguel López Baños y D. Felipe Arco-Agüero*. Mexico, en la oficina de D. J. M. de Benavente y socios, 1820.

gobierno dicta una segunda orden el 9 de agosto en que ratifica su decisión. En estas circunstancias, Riego solicita permiso para trasladarse a Madrid, a donde con el fin de evitar tumultos, por decisión propia, llegó de incógnito el 30 de agosto a las 9 de la noche, para entrevistarse con Fernando VII, que había manifestado el deseo de conocerlo personalmente, quien le recibió dos veces. A petición de Juan Jabat Aztal, secretario del Despacho de Marina a la sazón, lo hizo también con el gobierno.

En la segunda de sus audiencias con el rey, que tuvo lugar el 1 de septiembre y duró “cinco cuartos de hora”⁴, Riego, que a juicio de su íntimo amigo Evaristo San Miguel carecía de lo que hoy eufemísticamente se denomina “corrección política”⁵, le expuso las razones de la inconveniencia de la eliminación de ese ejército, los males que se derivarían de la misma, desmintió con rotundidad los rumores de desobediencia y acerca de las intenciones espurias que se le atribuían, trasladó el respaldo popular que hacia ese cuerpo se mani-

4 *El Universal* de 2 de septiembre de 1820, p. 421 y, asimismo, *Miscelánea de Comercio, Política y literatura* de ese día “el general Riego tuvo una larga audiencia de S. M. que le colmó de testimonios de augusta benevolencia”, p. 1. Más entusiasmo, si cabe, manifiestan otros diarios de tirada nacional.

5 “Riego era vivo, fogoso, impetuoso, hombre de las primeras impresiones, y muy poco reservado en ciertas ocasiones que aconsejan la reserva”, “Riego no medía mucho sus palabras” por lo que se granjeó la enemistad del ministerio escribe Evaristo San Miguel, *Vida de don Agustín de Argüelles*. 4 vols, Madrid, 1851-52, T. II, p. 137. Esta visión, más bien negativa, contrasta, no obstante coincidir en el carácter directo de Riego, con la que él mismo autor aportaba en el Trienio y con otras fuentes coetáneas. Por ejemplo, *El Imparcial*, que en su nº del 10 de septiembre de 1821 escribía: “respecto al general Riego es del número de aquellos que le creen incapaz de haber cometido un crimen de verdadera traición, y aunque están persuadidos que la única culpa que puede haber en tan digno general será alguna ligereza”; Le Brun (*Retratos*, p. 48): “Riego, cuya alma, todo lo que tenía de grande por su valor, por su desinterés, por su integridad, por su patriotismo, por su honradad de corazón, y por otras mil circunstancias apreciables que lo adornaban, lo malograba muchas veces por falta de conocimiento del mundo y de los hombres, y por la escasez de su ingenio para circunstancias tan difíciles; y por un sí es no es de fanatismo que se le asomaba alguna que otra ocasión para desacreditarlo”. Pero está en consonancia con lo que unos años antes que San Miguel, durante el reinado de Isabel II, el simpatizante moderado Bayo, *Historia de la Vida*, p. 195, escribía: “Don Rafael del Riego joven valeroso y que frisaba en temerario, dócil, fácil, sin hiel en el corazón, escaso de ingenio, aun menos instruido, de agradable presencia encumbrado al azar por uno de esos movimientos casuales de la rueda de la fortuna, carecía de todas las grandes cualidades de un tribuno y de un dictador”.

festaba constantemente en Sevilla y Cádiz y expresó abiertamente sus “dudas sobre el recto proceder del Ejecutivo”. Asimismo, renunció a la Capitanía General de Galicia, para la que había sido nombrado, arguyendo que el mando militar de esa “importante provincia” estaba en manos de una persona de probada lealtad constitucional y, en su lugar, propuso un plan alternativo. Tal plan consistía en el mantenimiento del ejército y el nombramiento de Arco Agüero y López Baños como comandante de Sevilla y Gobernador de Cádiz y de él mismo “comandante de la provincia marítima”.

En el encuentro sostenido con el gobierno, tras expresar su reconocimiento y adhesión al rey, denunció la falsedad de los hechos sobre los que, presumiblemente, se había basado la orden de disolución, transmitió a los ministros la situación y las quejas acerca del estado del ejército en general y expuso abiertamente las reformas que, en diversos campos, era conveniente llevar a cabo en conformidad a lo dictado por la Constitución para eliminar los muy extendidos movimientos sediciosos. Ninguna de sus proposiciones fue admitida: el rey “le escucho con agrado” pero respondió que por el momento no pensaba modificar la disposición y el gobierno ni siquiera aceptó debatir las propuestas.

El 3 de septiembre, Riego redactó, dirigida a sus dos colegas militares, una carta en la que les comunicaba el resultado de las conversaciones y añadía su opinión al respecto, en particular sobre el ministerio, con el ruego que se transmitiese a los “comandantes del ejército”⁶.

El 4 de septiembre, dispuesto a agotar los recursos que la Constitución y el ordenamiento ofrecían a todos los ciudadanos, escribe un Discurso en defensa del “ejército de observación” destinado a ser leído en la tribuna del público de las Cortes para solicitar la intervención de éstas en el asunto.

En paralelo a esos actos oficiales tuvieron lugar otros de naturaleza popular. A primeros de septiembre se había extendido la noticia de su primera venida a la capital tras la proclamación del 1 de enero. *El Constitucional* del día 1 de septiembre describía el júbilo que había producido su llegada en la población y, significativamente, relacionaba su viaje con las vicisitudes sufridas

6 Los “ministros aspiran, a mi entender, sin deber pretender serlo, al nombre de los únicos creadores de la libertad civil de la patria, únicos restauradores de ella, y únicos consolidadores del sistema, mirándonos con envidia” guiándose por necios rumores producto de bajas pasiones que les crean una desconfianza mezquina sobre su ambición y les ruega que comuniquen esto a todos los comandantes de la tropa para dejar clara su conducta. Riego, Rafael del, *Carta del General D. Rafael del Riego a sus compañeros de armas, los Generales López-Baños y Arco-Agüero*. Madrid, Imprenta de Collado, 1820.

por el “ejército de la Isla”⁷. Para celebrar el evento y testimoniar su gratitud, los liberales –en particular las Sociedades Patrióticas de *La Fontana de Oro* y *La Cruz de Malta*– y algunas instituciones públicas organizaron una serie de festejos y manifestaciones en honor del “héroe de las Cabezas” que incluían desde banquetes y “procesiones” callejeras hasta funciones de teatro.

El 31 de agosto, cuando transitaba por el Paseo del Prado, se vio rodeado de una multitud de personas y de una comisión de la milicia nacional que entonaban canciones patrióticas y le acompañaron a su residencia en la Posada del Ángel. Allí permanecieron dando vivas a Riego, hasta el punto de que se vio obligado a salir al balcón y pronunciar un discurso de agradecimiento, elogiando al pueblo de Madrid por sus esfuerzos en restablecer el sistema constitucional y “exhortando á todos á la concordia y al amor al Rey, al Rey Fernando el Grande, y á la Constitución de la Monarquía española”⁸.

El 3 de septiembre, “hizo el general Riego el paseo triunfal que estaba dispuesto, y para el cual se habían hecho las prevenciones oportunas”. Salió de su alojamiento a las dos y media, acompañado de un regidor y representantes de las mencionadas Sociedades hacia el Ayuntamiento donde fue recibido por

7 *El Constitucional, o sea, crónica científica, literaria y política* le dedica, en efecto, la mayor parte de su primera plana del número de 1 de septiembre de 1820: “en la noche del 30 de agosto, á las nueve de ella, entró en esta corte el general Riego, causando una inesperada alegría á los verdaderos amigos de la patria y de la libertad. Inmediatamente se propagó la noticia por Madrid, y un intenso concurso de ciudadanos, acompañados de una numerosa música militar, acudieron á la fonda del Ángel, donde se había alojado el general. Éste salió al balcón, y arengó al pueblo en términos capaces de deshacer todas las imposturas que ha inventado la malignidad para disminuir el entusiasmo y el reconocimiento que deben inspirar á todos los ciudadanos españoles, las invencibles tropas de San Fernando. Ahí está el héroe libertador, ahí está el que ha roto nuestras cadenas. Acriminen ahora su inobediencia los que á él le deben los puestos que ocupan, la libertad de que gozan, el aire que respiren. Admiren su noble y generosa conducta los que se habían arrojado ciegamente á una lid en que su mayor enemigo era su propia impotencia. Riego viene á manifestarse á nuestros ojos mas héroe que cuando lanzó el primer grito de la independencia; viene á que juzguen sus operaciones el Monarca que tiene en él la más sólida defensa, las Cortes, que no se hubieran jamás reunido sino á la sombra tutelar de su heroísmo. ¡Ojalá su presencia aniquile las tramas miserables y odiosas de la ambición y de la ingratitud! ¡Ojalá lleguen á convencerse todos los españoles de que nadie es mas digno de sostener la causa de la libertad que el que la proclamó á costa de tantos peligros!”, p. 1.

8 *El Universal*, 2 de septiembre de 1820, p. 421. Es, a este respecto, ilustrativo que Riego se alojara en una fonda no perteneciente a ninguna de las Sociedades Patrióticas, la Fontana de Oro o la Cruz de Malta, que disponían de esta clase de establecimientos.

la corporación en pleno y, a petición de ésta, se dirigió a la multitud que le aclamaba en el exterior. Finalizado el acto, acudió a la sede de la *Fontana*, donde a las tres le esperaba un almuerzo, organizado y costeado por ambas Sociedades, al que asistieron representaciones del consistorio y la milicia nacional local así como “algunas personas distinguidas”.

En la noche, al concluir la representación de “Enrique III de Castilla” en el teatro del Príncipe, los asistentes entonaron la canción antiabsolutista “El Trágala”, ignorando la prohibición que allí mismo dio el jefe político de Madrid, asistente al acto. Este hecho sirvió de pretexto para que un determinado sector político y de la prensa contraria a los exaltados le responsabilizara directa o indirectamente de causar disturbios en Madrid. La acusación no era gratuita ya que venía a unirse a las sospechas, incluidas las de simpatizar con el republicanismo, que había lanzado el Ejecutivo contra él y el ejército disuelto⁹. Ambas imputaciones alcanzaron una considerable divulgación, incluso en los periódicos que hasta ese momento habían cubierto la noticia en un sentido favorable, a pesar de que ninguna de ellas tenía fundamento¹⁰ como se demostró posteriormente.

El 4 de septiembre el asunto llegó a las Cortes, cuando se estaba debatiendo la “conveniencia” de regular las “sociedades patrióticas”, muy vinculadas al sector exaltado. Un diputado, que sería posteriormente secretario del Des-

9 Con claridad meridiana transmite esta opinión *El Constitucional*, o sea, crónica científica, literaria y política de 2 de septiembre en su velada crítica al Ejecutivo: “La venida del general Riego es el asunto de todas las conversaciones. Este suceso, como un rayo de luz, ha disipado ciertas noticias que empezaban á formarse en nuestro horizonte político. ¿Ha inspirado el ejército alguna desconfianza? ¿ha dado lugar a algunos temores? Lejos de todo buen español esta inicua sospecha. Tranquilos, alomados y recompensados por el éxito feliz de su empresa, ¿serán enemigos de su patria los que perseguidos, desnudos y extenuados se mantuvieron amantes del Rey, obedientes á sus gefes y fieles observadores del orden ? ¿ Qué funesta ceguera ha sido pues la que olvidando tantas consideraciones, rompiendo tantos vínculos y desconociendo tantos peligros nos preparaba ya todos los males de la desunión y la enemistad?”, p. 1.

10 En realidad, sólo asistió a ese almuerzo y mantuvo silencio durante la representación incluso en los entreactos, abandonando el teatro antes de que se iniciara canto. Un ejemplo de la cobertura periodística es que algunos medios ni siquiera recogen la noticia de la llegada a Madrid, en tanto que *El Universal* y la *Miscelánea*, que hasta ese momento la habían recogido resaltándola muy positivamente y subrayando el comportamiento ejemplar y patriota del pueblo y Riego, incluida la función teatral, en sus números del día 5 se muestran claramente críticos y favorables al gobierno, postura que sostendrían en los días siguientes. Vid. notas posteriores.

pacho en el gobierno Martínez de la Rosa y reconocido *anillero*, Moscoso de Altamira, utilizó la alusión de otro diputado (Álvarez Guerra) para presentar una proposición, que fue aprobada, a la Cámara en la que directamente calificaba a los manifestantes de “enemigos del sistema Constitucional” y solicitaba la presencia de los ministros para explicar la situación¹¹.

Ese mismo día, por Real Orden del secretario del Despacho de Guerra que le es entregada en mano al interesado por el capitán general de la Región, se le cesa de la Capitanía de Galicia y se le ordenaba que “saliese inmediatamente de la Corte” para incorporarse al cuartel de Oviedo.

El 5 se recibe en las Cortes, dirigido a los secretarios de las mismas, un oficio de Riego fechado a primera hora de la mañana, justamente antes de partir a su nuevo destino, en el que incluye el mencionado discurso con el ruego de que se lea en el pleno y se publica la carta de Riego a Arco-Agüero y López Baños.

El 6 de septiembre aparece en la *Miscelánea de Comercio, Política y Literatura* de ese día, firmada por los ayudantes de campo del general Riego, una carta en la que, desmintiendo a la prensa, explican su versión y niegan la participación de éste en lo acaecido en el teatro¹².

El 7 de septiembre el gobierno es interpelado por segunda vez en la Cámara ante los disturbios que se sucedían en Madrid desde el conocimiento del extrañamiento de Riego, cuya sofocación, no obstante su naturaleza pacífica, había requerido la intervención del jefe político, el capitán general y el auxilio de la milicia nacional local¹³.

A partir del 8 de septiembre, la prensa, con independencia de su signo político, solicita un pronunciamiento explícito del gobierno sobre las razones de la destitución y cambio de destino de Riego, para responder a la opinión pública¹⁴.

Posteriormente, Riego publica *Vindicación de los extravíos imputados al*

11 DSC, sesión 4 de septiembre de 1820, p. 807.

12 *Miscelánea de Comercio, Política y Literatura*, 6 de septiembre de 1820, pp. 2-3.

13 *El Constitucional* en su número de 8 de septiembre publica las órdenes del jefe político y capitán general, agradeciendo a la milicia su defensa frente al pueblo, que gritaba ¡viva Riego!, p. 4.

14 *El Conservador*, por ejemplo, que había mantenido silencio acerca de la llegada y los actos de Riego, alarmado por la inquietud del pueblo de Madrid, dedica un amplio espacio en los números del 8 y, sobre todo, el 9 de septiembre, con tres páginas, a solicitar que el gobierno aclare los hechos.

*General D. Rafael del Riego el 7 de septiembre en las Cortes*¹⁵, escrito reivindicativo y probatorio que el Ejecutivo ni desmintió ni adoptó acciones en contra, desautorizando al gobierno por sus contradicciones y mistificaciones.

b. *El debate en Cortes. Primera versión del gobierno*

Es evidente, a juzgar por lo recogido en el *Diario de Sesiones*, que el gobierno no quería entrar en el tema y trató, recurriendo a un “lenguaje orwelliano”¹⁶, de evitarlo, lo que, si por una parte manifestaba su debilidad, por la otra, le permitía establecer responsabilidades y exculpaciones. Así al menos. se desprende de la intervención de Garellly, el primero en dirigirse al pleno. Aunque se ocupó exclusivamente de las sociedades patrióticas, materia para la que también se había solicitado la presencia de los ministros pero que no era en ese momento lo que centraba el interés de la Cámara, aprovechó la ocasión para introducir juicios de valor ostensiblemente contrarios a los manifestantes, a los que acusó llanamente de saboteadores del orden constitucional y, más encubiertamente, de republicanismo y jacobinismo¹⁷. Sus veladas imputaciones presagiaban cuál era en realidad el objetivo del Gabinete y dejaba clara cuál era su estrategia al respecto.

Ya fuera el recordatorio del fin para el que habían sido llamados los secretarios del Despacho –explicar lo acontecido la noche del día 3 en Madrid–, ya el argumento que utilizó Moscoso –intento de los manifestantes de derrocar el gobierno constitucional existente¹⁸–, finalmente se decidió a intervenir el verdadero causante de la situación, el secretario del Despacho de la Gobernación

15 Madrid, Imprenta Del Censor, 1820. Es interesante dejar constancia que aparece publicada en la imprenta de la publicación periódica *El Censor*, que siempre fue crítica con Riego.

16 “Ellos utilizan el lenguaje orwelliano exactamente cuando tienen que hacerlo: cuando están debilitados y cuando no pueden aparecer y decir lo que piensan [...] El lenguaje orwelliano indica debilidad –debilidad orwelliana–. Cuando oigas el lenguaje orwelliano, observa de dónde surge, porque es una guía para saber en qué son vulnerables. No lo utilizan en todos los sitios”. Lakoff, *No pienses en un elefante*, p. 20.

17 “Los mismos que se llaman constitucionales y que en verdad lo son, adolecen de ciertos resabios de la leche que mamaron [...] resabios que nos arrastran hacia la arbitrariedad con el lenguaje constitucional”. DSC, sesión 4 de septiembre de 1820, p. 810.

18 “El trastorno o alteración del Gobierno constitucional, objeto al que se dirigirán constantemente los esfuerzos de aquellos que con diversos motivos y por diversos fines o invocando el nombre del pueblo a quien desprecian”, Ibi, p. 811.

de la Península, Agustín de Argüelles. *El divino* articuló su discurso concienzudamente siguiendo los recursos retóricos que dominaba para convencer al auditorio. Comenzó centrándose en las Sociedades Patrióticas respaldando a Garelly para señalar que las de Madrid no habían participado en los sucesos. Y acerca de éstos, se limitó a exponer que “aún no puede dar el Gobierno al Congreso todo el conocimiento que quisiera, ya porque no están reunidos todos los hilos del suceso, ya porque no ha llegado todavía el tiempo de hacerlo”¹⁹.

Sin embargo, de esta afirmación se desprendía una única interpretación sobre dos hechos igualmente reprobables: o bien el gobierno había llevado a cabo un acto de arbitrariedad al cesar y desterrar a un individuo sin causa probada, sometiéndolo además a un juicio público innecesario que atacaba la presunción de inocencia constitucionalmente reconocida, o bien infringía abiertamente la Constitución al negarse a responder a una interpelación realizada por un diputado sobre materia de su competencia (art. 226). Fue tal vez esta consecuencia en que había incurrido Argüelles la que determinó a intervenir en su auxilio a su íntimo amigo el Conde de Toreno, quien solicitó una explicación más oportuna en aras de la seguridad pública. La respuesta fue contundente “la tranquilidad pública no se había turbado porque el Gobierno tomó las medidas para que no se turbase”. Y añadió: “en una diversión pública hubo alguna alteración; pero la cosa no pasó de allí ni era posible que hubiese pasado porque el Gobierno todo lo había previsto y estaban tomadas las correspondientes providencias”. Todos los demás ministros, desde el presidente hasta el secretario de Ultramar que afirmó verse “sorprendido” por lo expuesto por Moscoso ya que él carecía de toda noticia al respecto, respaldaron a Argüelles²⁰.

Así pues, quedaba claro que no había habido alteraciones en Madrid y que reinaba “felizmente la tranquilidad” en la Península porque, al fin y al cabo, como concluiría Toreno, también él miembro de la Sociedad del anillo de oro, en una intervención que puso fin aquel día a la discusión “¿qué motivos hay para tanto escándalo? ¿Qué artículos de la Constitución se han quebrantado? ¿Qué leyes se han infringido? ¿A qué ciudadano se le ha sacado a deshora de su casa para conducirlo a una prisión? ¿a quién se ha atropellado? ¿Qué intenciones siniestras se notan en el Gobierno o en las Cortes?”. Siniestras o no, lo cierto es que el asunto Riego se combinó muy oportunamente con la discusión sobre las sociedades patrióticas y con ello se consiguió formar una comisión, integrada mayoritariamente por moderados que habían manifesta-

19 Ibidem.

20 Ibi, pp. 811-12.

do con claridad en la Cámara los peligros de las mismas (Álvarez Guerra, Benítez, Cosío, Moscoso, Pérez Costa, Calatrava, Couto y Garellly) para elaborar un proyecto de ley recortando sus atribuciones.

La cuestión, por consiguiente, parecía resuelta tras las manifestaciones de todos los miembros del gobierno en el pleno, hasta que en la mañana del día siguiente se recibió en las Cortes la exposición de Riego, acompañada del ya aludido discurso que, como manifestaba el signatario, estaba destinado originalmente a ser pronunciado por él mismo, con la autorización de la Cámara, desde la tribuna del salón de sesiones. Avanzada la sesión, el presidente ordenó la lectura de ambos. En la primera, firmada por el ciudadano Riego a las diez de la mañana del 5 de septiembre, expone que el día anterior, –por consiguiente, cuando era conocedor del desarrollo de la sesión de la víspera–, se determinó a solicitar el permiso para dirigirse a la Asamblea ese mismo 5, pero que, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente por la orden recibida, “y queriendo cumplimentar sin pérdida de instantes dicha orden”, solicitaba que se leyese el segundo en la Cámara.

En el discurso –que en realidad era una representación– escrito con la soltura de quien está acostumbrado a este tipo de actuaciones, no se recoge ninguna alusión personal. Por el contrario, manifestaba en tono respetuoso la alarma que había provocado la disolución del ejército, cuyo resultado fue la elevación de exposiciones al gobierno y a las Cortes explicando la inoportunidad de tal medida y los peligros que se derivaban de la misma. No sólo no habían tenido respuesta, sino que el gobierno atacó al ejército vinculándolo a actividades subversivas y emitió una segunda y definitiva orden de disolución. Tras reiterar su “respeto al poder Ejecutivo”, dedica su escrito a reafirmar su fe en la Constitución, a la defensa de la tropa y oficiales que componían dicho ejército, a señalar la dudosa adhesión constitucional del secretario del Despacho de la Guerra y a advertir de los riesgos que esta medida del gobierno conllevaba, habida cuenta la proliferación de facciosos conspiradores por todas partes de los que “están las cárceles llenas”, prueba evidente, en su opinión, de que “el sistema constitucional no está bien establecido ni consolidado”. Con la expresión “era mi deber esponder estas observaciones al gobierno y a las Cortes”, concluía: “por mi parte, resuelto a no ser el blanco de tantas falsas imputaciones dejo voluntariamente mi puesto incompatible con mi honor en las actuales circunstancias y vuelvo a la simple condición de ciudadano”²¹.

21 DSC, sesión 5 de septiembre de 1820, pp. 826-7. La exposición está fechada el 5 y la representación el día anterior, 4 de septiembre.

c. *La reapertura del debate en Cortes*

El efecto automático de esta exposición de Riego fue la reapertura de un asunto espinoso que se pretendía cerrado desde la sesión anterior. Como expuso Romero Alpuente, el hecho de que el general recibiera “esta mañana” la Real Orden testimoniaba la existencia de maniobras oscuras o, como con elegancia decía este diputado, que “el Gobierno no se manifestó con... franqueza”. No deja, a este respecto, de ser significativo que el presidente le interrumpiera en este punto alegando que sólo podía intervenir si tenía una proposición al respecto.

Era obvio que un sector de las Cortes estaba dispuesto a manifestar su indignación por el transcurso de los acontecimientos. Para varios diputados, entre ellos Flórez Estrada, se presentaban cuestiones de notable gravedad y profundidad sobre las que el ministerio estaba obligado a responder. Ya no solo se trataba de la disolución de un cuerpo del ejército de probada lealtad constitucional, sino también de la separación del mismo de más de treinta oficiales patriotas que se habían distinguido en restablecer la Constitución y de “otros ciudadanos muy beneméritos que están a discreción del poder ejecutivo” de los que el cese de Riego era un ejemplo²². A estos efectos, se presentaron (Flórez, Romero Alpuente) sendas proposiciones en las que se solicitaba de nuevo la presencia del gobierno para explicar lo ocurrido.

Era ésta, por consiguiente, una situación distinta de la anterior que resulta extremadamente ilustrativa para el objeto de este trabajo. Posee, a mi parecer, el valor de sacar a la luz, por así decir, oficialmente las aludidas posturas encontradas acerca del entendimiento de la Constitución que están presentes no ya fuera sino incluso en la propia Cámara desde los mismos inicios del Trienio. Ambas posiciones se mostraron con nitidez en el acre debate que siguió a continuación. Formalmente desarrollado dentro de los límites marcados por el Reglamento de gobierno interior de Cortes y la cortesía parlamentaria del momento, lo cierto es que, en el fondo, se trataba de dos visiones muy distintas que, entre otros aspectos cardinales, afectaban a una contrapuesta concepción del Ejecutivo. Lo dejó meridianamente claro en su intervención Martínez de la Rosa cuando, en su escogido discurso, expresó con contundencia que el gobierno había actuado en el marco de sus facultades y,

22 Esta fue la calificación que mereció al diputado Gutiérrez Acuña . DSC, sesión 5 de septiembre de 1820, pp. 827-28.

en consecuencia, las Cortes carecían de total competencia para interrogarle sobre estos extremos²³.

Con sus palabras, Martínez de la Rosa avivaba el fuego de un conflicto que hasta entonces se había mantenido de alguna forma dentro de una calculada contención. Ciertamente, en ese momento actuaba, más que con la diligencia de un representante de la Nación, como un vehemente defensor de su propia idea de Constitución, completamente alejada de la vigente. A diferencia de la de 1812, cuyos defensores la contemplaban ante todo como vehículo de “una mejora de la moral política y civil de los españoles” y sabían que su aceptación y arraigo en la sociedad “necesitaba cierta circunspección, cierta opinión de probidad, y rigidez en sus sostenedores”²⁴, el principal fundamento de la suya

23 “¿Bajo que aspecto, pues, pueden las Cortes ocuparse de este asunto? ¿Bajo que aspecto pueden entrometerse en las legítimas facultades del Gobierno y so color de premiar a los defensores de la libertad atropellar las leyes y poner en grave riesgo la libertad misma?”. Y ya con ataques directos a Riego, que en todo momento había reconocido la separación de poderes y se había limitado a exponer en su discurso con relación al Ejecutivo: “Respeto el poder ejecutivo. Cualquiera que sea la opinión que tengan de la situación del pueblo acerca del sistema que le rige, se puede asegurar que este sistema se encuentra rodeado de poderosos y encarnizados adversarios, que espían día y noche los momentos de descuido que puedan favorecer sus proyectos criminales”, Martínez de la Rosa exponía: “¿Quién tiene el derecho de decidir si ha usado convenientemente de una facultad propia y privativa de sus atribuciones? ¿Será acaso un general, por mas cubierto de laureles que se presente á nuestra admiración? ... ¿Dónde iría la libertad de las naciones, si un caudillo decidiese de la conveniencia ó perjuicios de la distribución y posición de los ejércitos? ¿Qué sería de la nación si concediese esta facultad al mismo gefe de la fuerza armada?”. DSC, sesión 5 de septiembre de 1820, p. 830.

24 “La Constitución no era en verdad una reforma religiosa, mas sí una mejora en la moral política y civil, y nadie me negará que para difundirla y hacerla grata á los ojos de la muchedumbre se necesitaba cierta circunspección, cierta opinión de probidad, y rigidez en sus sostenedores. Muchos liberales por comprender mal la significación de esta palabra, ó por manifestarse exentos de las preocupaciones del vulgo, ó quizá por espíritu de moda, ostentaron en su conducta, en sus palabras, y hasta en sus escritos, cierta relajación y libertad que fué fácil á sus enemigos presentar con los colores de irreligión y desenfreno”. San Miguel, Evaristo, *De la Guerra civil de España*. Madrid, Imp. M. de Burgos, 1856, pp. 82-3. Refiriéndose a la aceptación de la Constitución en 1820, este autor y protagonista de la etapa, continúa: “no eran tan vivos en 1812 los deseos de tener una Constitución como los de verla restablecida á principios de 1820. Así fué saludado este acontecimiento memorable con todas las demostraciones de un aclamación universal única en su especie en los fastos de la España. Es inútil recordar aquella época de alegría y de entusiasmo. Todos han presenciado las fiestas cívicas, las solemnidades religiosas, el espíritu de fraternidad que

era, además de “la división de la representación” en dos cámaras, incrementar el poder del rey y, por tanto, del Ejecutivo frente al Legislativo.

En este sentido, no solo aprovechó inteligentemente cada oportunidad, legal o ilegal, que se le presentaba para defenderla e incluso imponerla, sino que cultivó hasta el extremo su posición de prohombre por antonomasia de un grupo influyente en la Cámara, el más afanoso de los *anilleros* del que, entre otros, formaban parte Toreno, Calatrava y Moscoso. Pero éstos, a diferencia de aquél, respetando las formalidades exigibles en un debate parlamentario entre dos partidos enfrentados, con posturas irreconciliables sobre aspectos constitucionales básicos, consiguieron hábilmente desvirtuar con éxito en no pocas ocasiones, como en este caso, las propuestas de los diputados exaltados. Y no era el único mecanismo, pues en su ánimo de abatir por todos los medios a los exaltados, en esa precisa ocasión llegaron a sugerir que los seguidores de Riego eran, ni más ni menos, que serviles disfrazados, al igual que en otras habían lanzado la acusación de republicanismo²⁵.

A pesar de la dureza de las acusaciones, incluida la de “atropellar las leyes y atacar la libertad”, los diputados exaltados (Romero Alpuente, entre otros), tomando ya el caso de Riego como referencia preferente, no solo no modificaron sus imputaciones, sino que insistieron en las mismas reforzándolas con la denuncia de la arbitrariedad con que actuaba el gobierno al tratar con patente discriminación a los miembros de la jerarquía eclesiástica, declarados y probados anticonstitucionalistas, y a los militares constitucionalistas. Se entraba así en otra faceta del poliédrico tema que enfrentaba a ambos contendientes. Para hacer prosperar su modelo constitucional y en particular su idea de la supremacía del Ejecutivo, los anilleros estaban dispuestos a sacrificar principios tan incuestionables como el de la igualdad ante la ley, el derecho de interpelación y hasta la inviolabilidad de los diputados. Se puso palmariamente

animaba á los hijos de esta gran familia, y el concierto de votos porque correspondiese el porvenir á principios tan altamente lisonjeros. Nunca amanecieron para España días mas serenos, mas brillantes”. Ibi, p. 27.

25 “De aquí sus insinuaciones de que los enemigos de la libertad no eran precisamente los serviles, sino los que llamaban alborotadores; de aquí la acusación de que no eran estos mas que serviles disfrazados, constitucionales hipócritas, que bajo este manto asestaban á la libertad sus tiros alevosos”; “insinuaciones nada disfrazadas de que los enemigos de la Constitución no eran precisamente los serviles. Entonces fué cuando por primera vez se susurró la voz de República, de que los moderados acusaban á sus antagonistas. Era una calumnia, y lo fué siempre en aquella época constitucional”, escribe Evaristo San Miguel, *Vida de D. Agustín de Argüelles*, T. II, pp. 80 y 138.

de manifiesto cuando Istúriz presentó una proposición en la que pedía que, para evitar “el extravío muy peligroso” de la opinión pública a causa de las medidas adoptadas contra prohombres muy importantes “sin preceder juicio legal que convenza de la culpabilidad”, se hiciera un “uso debido” del artículo 226 de la Constitución en cuya virtud “los secretarios del Despacho exhiban las órdenes y resoluciones que han dado sobre el particular”. La oposición de los moderados encabezados por Calatrava fue total.

Mostrando una vez más su habilidad en técnicas disuasorias, es, desde luego, ilustrativo que el principal argumento de este diputado fuera que “el general Riego no se queja directa ni indirectamente de que el Gobierno le haya turbado en el uso de su libertad”, y por consiguiente, el debate era superfluo. Con la contundente pregunta “¿quién ha erigido a las Cortes en procurador de ese General?” declaraba incompetente a la Cámara para entender del asunto. No sorprende que el directamente afectado, Istúriz, para quien el gobierno había llevado a cabo un abuso de poder, le respondiese que con su intervención estaba ni más ni menos denegando el derecho de los diputados, cuya inviolabilidad garantizaba la propia Constitución, a interpelar al gobierno y a expresar su opinión acerca de sus actos²⁶.

26 Calatrava a Isturiz: “Pero, señor, ¿por qué no se ataca con firmeza, y se anda con estos medios indirectos, que solo pueden servir para destruir el orden? ¿Por qué no se presentan en la palestra, y piden que se haga efectiva la responsabilidad si hay motivo para ello? Háganlo como la ley misma lo previene: yo seré el primero que lo apoye, si esta responsabilidad tiene los fundamentos que el reglamento prescribe.” Respuesta de Isturiz: “Se ha interpelado aquí la franqueza y la legalidad con que un diputado debe salir á la palestra, para esponer con franqueza lo que tenga que decir contra el gobierno. Yo no he faltado nunca á ellas mas diré solamente, que yo, en vista de lo que ha sucedido de pocos dias ó semanas á esta parte; en vista de los males gravísimos que estoy temiendo para lo sucesivo; y deseoso de que toda la nación esté convencida de la justicia ó injusticia con que el gobierno ha obrado, por su honor, quiero que se aclare este asunto. Yo tengo fundados motivos para creer, diré mas, tengo la certeza moral, de que ha abusado de sus facultades; pero no tengo la prueba legal que se necesita para hacer la acusación, aunque podré tenerla mañana : y entre la necesidad de aclarar un hecho en que están interesadas la vindicta pública y la tranquilidad de tantos, y la falta de prueba legal, me veo precisado á buscar esta prueba de que carezco, en cualquiera parte donde se halle”. DSC, sesión 5 de septiembre de 1820, pp. 836-7. Por otro lado, no carecen de cinismo las observaciones de los moderados acerca de que Riego no había presentado una reclamación personal habida cuenta su rotunda oposición a la petición cursada por el coronel constitucionalista Francisco O'Donnell contra su traslado, encabezada por el discurso que pronunció Martínez de la Rosa, secundado por todos los de su grupo, tan sólo unos días antes. DSC, sesiones 6, 7, 8 y 20 de agosto de 1821, pp. 425, 433, 518 y 596.

Las posturas encontradas se mantuvieron incólumes durante el largo debate cada vez más enrocado. Y era obvio que la de los anilleros respondía a una estrategia perfectamente calculada. Pudo observarse con precisión en su actitud y respuesta a los intentos de conciliación. Como el fomentado por Flórez Estrada quien, buscando una transacción, propuso que la exposición de Riego pasara a una comisión y que, una vez elaborado el dictamen por ésta, se llamara de nuevo a los secretarios del Despacho para que ofrecieran las oportunas explicaciones. Observando que el asunto escapaba a su control, Toreno pidió la palabra para apoyar la vista en comisión, pero solicitó que fuera a la de ípremios! con el fin de recompensar “al valiente y digno general y a todos los patriotas” que habían traído el nuevo sistema. De esta manera, el Conde consiguió evitar el debate sobre la acusación de arbitrariedad vinculada al abuso o mal uso del poder por parte del gobierno. Tan extemporánea petición, que los exaltados consideraron insultante y provocó la inmediata dimisión de esa comisión de Istúriz y Flórez que no fueron admitidas, puso fin al debate y, por segunda vez, se dio el asunto por cerrado tras ser aprobada en la Cámara²⁷.

Sin embargo, para los liberales así llamados exaltados y un sector considerable de la población la destitución, sin ni siquiera haber llegado a tomar posesión, de la Capitanía General de Galicia y su destino “de cuartel” a Oviedo era un, literalmente, *destierro* injusto y, sobre todo, una presunción de culpabilidad²⁸. De hecho, ambas acusaciones fueron el principal fundamento del

27 Es, a este respecto, ilustrativa la intervención de Martínez de la Rosa. Como Riego no aludía a su situación, pero, para defenderse de las acusaciones y evitar su disolución, sí recordó la actuación del ejército, tropa, jefes y oficiales, en favor de la restauración de la Constitución y su lealtad a la misma, así como la existencia de las conspiraciones y el desempeño de cargos por personas contrarias a la Constitución, lo que ponía en riesgo el sistema, este diputado dio por cerrado el debate al entender que en su discurso se distinguían dos partes: una relativa a los méritos, a los que las Cortes respondieron con su traslado a la comisión de premios, y otra relativa a la disolución del ejército, que Martínez de la Rosa dio por ya discutido al no haberse aceptado las proposiciones de Flórez Estrada y Romero Alpuente. Y añadió que la labor de la comisión de premios debía circunscribirse exclusivamente, como así lo haría, a reconocer tal trabajo a través de un premio pecuniario, razón por la cual debía reunirse con la de Hacienda. DSC, sesión 5 septiembre 1820, pp. 837 ss.

28 Como expone Evaristo San Miguel treinta años después de aquellos sucesos, “Riego acusado por sus enemigos y émulo de promover desórdenes, de querer supeditar al gobierno, de abrigar miras subversivas, quizá planes mas funestos, pues no hay que olvidar que el rumor de República había circulado mucho aquellos días, se ve de repente separado del mando de capitán general, y enviado de cuartel á Oviedo. ¿No era esto confirmar las

motivo que se esgrimió durante las protestas que se sucedieron, sobre todo en Madrid, tras el cese, de las que Riego, que había abandonado discretamente la ciudad para dirigirse a su nuevo destino, no formó parte ni las alentó. Aunque fueron al parecer pacíficas y no generaron daños de ningún tipo²⁹, en seguida se calificaron oficialmente de grave alteración del orden y sirvieron de inapreciable pretexto para situar, por reacción, al general en el centro de la diana de la oposición anticonstitucional y antiexaltada.

d. *Segunda versión del gobierno*

Así se puso de manifiesto en la sesión de 7 de septiembre cuando, de nuevo, volvió a plantearse el tema en Cortes con ocasión de la perturbación del orden público que tales protestas habían generado. Aunque por denuncias de, en especial el jefe político de Madrid que así lo hace constar en sus oficios, bien que no de manera explícita, los responsables eran los exaltados que se dedicaban a organizar tumultos con el grito ¡Viva Riego!, el diputado Palarea, general de reconocido prestigio y futuro anillero, desmintió tales inculpaciones. De hecho, alegó que tanto por testimonios ajenos como por su propia observación, los tumultos se remontaban a días atrás –más o menos coincidiendo con el inicio de la discusión en Cortes que se ha recogido en los párrafos anteriores– y habían sido iniciados por los realistas que en la inmediaciones del Palacio Real se organizaban en grupos para dar vivas al rey absoluto. Para Palarea quedaba fuera de toda duda que habían llevado a cabo una provocación constante a la que los liberales habían respondido con mucha menos intensidad de la que demostraban los anteriores obligando a decir “viva el rey constitucional”.

Palarea finalizaba solicitando la aplicación del artículo 308 de la Constitución que contemplaba la suspensión de garantías en el caso de peligro de la seguridad del Estado, dado el riesgo real que suponían tales movimientos

acusaciones, dar cuerpo á los rumores, imprimir el sello de la culpabilidad, sin causa , sin prueba de delito?”. San Miguel, *Vida de D. Agustín de Argüelles*, II, p. 152.

29 “Mas en ninguna de las comunicaciones se hablaba de vias de hecho, de heridos, de muertos, de violencias cometidas en casa del gefe político, etc. La cosa no había pasado de ruido, de bulla y de algazara”, escribe Evaristo San Miguel, *Ibi*, II, p. 156. Y añade: “Ese día primeros gritos contra la Constitución y a favor del rey absoluto. El general los aquietó”; “la corte, que por un lado aborrecía á los ministros, y probablemente miraba á Riego con antipatía, debió de gozarse en un conflicto, precursor, tal vez, de otros mas serios y trascendentales”. *Ibi*, p. 142.

anticonstitucionales. Con la declaración de que no era necesaria la implementación de tal artículo ya que para “reprimir a tantos delincuentes no hace falta la posibilidad sino la voluntad”, el diputado Moreno Guerra, pedía la comparecencia del gobierno. Las Cortes querían que se les informara el porqué del retraso en sofocar las revueltas en diversas ciudades además de Madrid, entre ellas Burgos³⁰.

Finalmente, el secretario de Gobernación de la Península, es decir Argüelles, se vio en la obligación de responder en su nombre. Y lo hizo rechazando la acusación de morosidad, exculpando a los absolutistas y atribuyendo los “desórdenes de ayer” a causas que se remontaban a días pasados. Como directo responsable del mantenimiento del orden público, Argüelles presentaría además poco convincentes y casi improvisadas réplicas a las interpe-laciones y preguntas directas sobre la situación que desmerecen en su bien merecida fama de artífice de la Constitución y excelente orador. Ocurrió con motivo de una intervención de Romero Alpuente quien expuso que, ante la pasividad del gobierno el pueblo había ejercido la justicia *per se*, cuestión extremadamente grave sobre la que, añadió, las Cortes tenían la obligación de deliberar y pronunciarse. Y también de la petición del diputado Baamonde, quien solicitaba que se expusieran abiertamente las causas que habían impulsado al gobierno a actuar como lo había hecho y que hasta el momento se había negado a revelar.

El *Soberano Congreso* y el público presente pudieron comprobar entonces el giro copernicano que se produjo en relación a lo que el secretario del Despacho de la Gobernación de la Península había sostenido ante las Cortes en la sesión del día 4. En su largo discurso, en efecto, Argüelles defiende la postura del gobierno alegando que fue tomada por unanimidad, justificando los ceses en la facultad de nombrar y deponer cargos libremente y la disolución del ejército de la isla en la vanidad y en profesar ideas de dudosa constitucionalidad de la tropa y oficiales del ejército suprimido, así como en el coste de su mantenimiento y en la oposición de las autoridades provinciales. Sobre Riego se esforzó en señalar su imprudencia al escribir y sacar a la luz una carta a sus compañeros de armas explicándoles los extremos de sus conferencias con el rey y el gobierno, afirmando con rotundidad que esta “irregularidad de la publicación basta por sí misma para haber autorizado al gobierno para tomar la última resolución”³¹.

30 DSC, sesión del 7 de septiembre de 1820, pp. 856-7.

31 DSC, sesión 7 de septiembre de 1820, p 863. La carta aparece publicada el día

El discurso desencadenó una reacción inmediata y no sólo entre los exaltados, sino también entre algunos moderados. Con relación al primero de los puntos tratados, Moreno Guerra, tras solicitar la lectura del artículo 171-9ª de la Constitución, le recordaba que la expresión “como más convenga” relativa a la distribución de las fuerzas armadas que incluía el texto se refería al interés de la Nación y no al del Ejecutivo, como era el caso. Por su parte, el comedido Quiroga, entonces diputado y el único general que respaldó la proclamación constitucional del 1 de enero, en su breve alocución defendió al ejército de la isla demostrando la insostenibilidad de las acusaciones que contra él había lanzado el gobierno a través de este ministro³². Otros diputados representantes de las zonas implicadas no solo respaldaron la opinión de Quiroga, sino que abiertamente expusieron el afecto de las gentes y autoridades al mismo, la seguridad que les proporcionaba a la población y la existencia de exposiciones al gobierno cursadas por dichas autoridades en su apoyo.

Deliberadamente, Argüelles se había centrado en responder únicamente a una parte de lo demandado y continuaba sin exponer las verdaderas razones de los acuerdos y las órdenes adoptadas el día 4 y el origen de los disturbios que se estaban produciendo. Apremiado de nuevo al respecto, no tuvo más

5 de septiembre, en tanto que la orden de destitución es del día anterior. Como el propio Riego expone, “Según el señor Ministro, una fatalidad, la publicación de mi carta el 5 de septiembre, hizo se revocase en el 4 del mismo mes el nombramiento de capitán general de Galicia. Un efecto anterior a la causa, una providencia expedida en escarmiento de una acción posterior es un fenómeno jamás visto ni oído”. Describe con detalle sus pasos en la capital: “Llegué a Madrid el 30 de agosto sin que nadie tuviera conocimiento de mi venida. Inmediatamente a través de mi ayudante Valcarce avisé al Ministro de la Guerra para que fijara la hora para el besamanos de S. M.”. Fue la única petición que realizó y explica la solicitud que, visitando al Señor Jabat, le cursó éste para entrevistarse con los demás miembros del gobierno. Indica, lo que es en extremo interesante, que el 1 de septiembre ya eran de dominio público todos estos pasos así que el 2 le preguntó directamente a Argüelles la causa de las filtraciones, a lo que éste respondió que eran habituales ya que el secreto no se mantiene entre dos. Sobre la publicación de la Carta con posterioridad a estos sucesos esgrime como causa el derecho de libertad de imprenta que poseen todos los españoles, por lo que él se siente legitimado al igual que los periodistas que critican al gobierno. Rafael del Riego, *Vindicación*, pp. 6, 9-11, 17-18 y 19.

32 DSC, sesión 7 de septiembre de 1820, p. 864. Sin embargo, Riego reprocha a su compañero el que hubiera añadido que la opinión de ese ejército de la Isla no era “la de tres o cuatro personas” y que dijera que *en mi concepto* (cursiva original) el decreto de abolición no se había leído. Riego sostiene que lo recibió de noche y lo leyó íntegro a primera hora del día siguiente, citando testigos. *Vindicación*, nota 19.

remedio que pronunciarse en un incoherente discurso disonante de su apodo y que desmerece de sus grandes dotes oratorias. Según expuso, la “tranquilidad pública” se alteró con “la venida de aquel caudillo”, que enardeció a la población al recibir el “aplausos” de la misma que el gobierno, aun pudiendo, no quiso prohibir. Asimismo, acusaba directamente a Riego de ser el culpable del desorden producido el día 3 de septiembre en el teatro a donde, “en contra de su costumbre” acudió el jefe político, por permanecer callado “cuando una sola voz suya hubiera bastado para contener el exceso”. Su expulsión de la Corte se debía, según el secretario del Despacho, a esta circunstancia y, además, se había hecho “con la ley en la mano”, lo que descartaba toda arbitrariedad³³.

Desmintiendo todo lo que había expuesto en la sesión del día 4 donde claramente había manifestado que no se había alterado “la tranquilidad”, ahora responsabilizaba a Riego de los altercados producidos desde entonces a pesar de que éste había abandonado la capital dos días antes. Puesto que no había ninguna proposición que someter a votación y los ministros habían satisfecho

33 Ibi, p. 867. En ningún periódico se indica que Riego asistiera a la representación del 3 de septiembre. Solo la *Miscelánea* del día siguiente, p. 4, expresa que “en la comida reynó un gran orden y mucha alegría. A la noche la comitiva pasó al teatro del Príncipe donde se representó á Enrique 111 de Castilla, y continuaron los aplausos, los himnos nacionales, y todas las demás demostraciones de júbilo, que se hicieron en iguales ocasiones, y por igual motivo con los generales Arco-Agüero y Quiroga”. Es de notar que los ayudantes, en la aludida carta que publica este mismo periódico el 6 de ese mes, asumen que ellos cantaron “la letrilla” en el teatro de la Cruz al día siguiente de su llegada a Madrid, por tanto el 31 de agosto, porque entendieron que los presentes eran partidarios de la Constitución y no tenía más consecuencias, pero no aluden a la sesión del teatro del Príncipe. Exponen que jamás pensaron que una cuestión jocosa supusiera “dar un paso que condujera a un resultado tan triste y mucho menos que se atribuyera a su jefe haber entonado la canción que solo ellos cantaron. El general no posee el fútil talento del canto”. *Miscelánea de Comercio, Política y Literatura*, 6 de septiembre de 1820, p. 2-3. Esta manifestación viene respaldada por la noticia que transmite *El Constitucional* sobre dicho acto: “El inmortal general don Rafael del Riego asistió al teatro de la Cruz en la noche de ayer 3 I de agosto, y con motivo tan plausible compuso don José Adrian, y recitó el actor Rafael Perez, el siguiente SONETO” (sigue el poema). *El Constitucional, o sea, crónica científica, literaria y política*, 1 de septiembre de 1820, p. 4 y también por lo expresado por Riego: “yo había asistido al teatro en los días anteriores al suceso en cuestión [...] Había un concurso de canciones y al oír la voz “no se canta” deje inmediatamente el teatro para restituirme a mi habitación”. Cita como testigos al alcalde, a toda la corporación municipal y al general Velasco. Rafael del Riego, *Vindicación*, p. 89.

la petición de informar a la Cámara sobre los verdaderos motivos, el asunto se cerró en este punto. Para los moderados, este resultado fue un éxito incontestable pues, como expondría el inefable Martínez de la Rosa, “la discusión ha procurado a las Cortes y al Gobierno la ocasión tan apetecida de empezar a rectificar la opinión pública y a refrenar sus extravíos” lo que, a juicio de este diputado, se había hecho “oponiendo datos a sospechas, razones a calumnias, virtudes a imprudencias (¡!)”³⁴.

Para los exaltados y la “opinión pública” era, sin embargo, evidente que el gobierno había mentido a las Cortes en sus comparecencias, que había actuado arbitrariamente y por razones contrarias al interés público en la disolución del ejército y con el cese de Riego y los demás jefes y oficiales³⁵. En aquella ocasión no se discutieron las imputaciones falsas lanzadas desde el Ejecutivo, ni tampoco el hecho de que se dieran por verdaderos hechos sin haberlos probado de ninguna manera o peor aún, que hubiera prueba en contrario.

Argüelles intentó salir lo mejor parado posible de una actuación que resultó altamente impopular y, sobre todo, rayaba los límites de la constitucionalidad. En ese contexto, no se puede pasar por alto la intervención de Martínez de la Rosa cuando un diputado solicitó que el Congreso se pronunciara acerca de la petición de que el ministro expusiera en la Cámara las “razones reservadas” a las que había aludido en su anterior comparecencia. “Me opongo a que se haga semejante pregunta, respondió, ¿A dónde nos conducirá semejante precipitación?... El Gobierno... tiene la responsabilidad y él debe pesar en la balanza de su prudencia lo que sin arriesgar el cumplimiento de sus determinaciones puede hacer público en este sitio”³⁶. Haciendo suya la máxima de Guizot (“que la cámara de diputados se conforme para sostener a un buen ministerio. Únicamente así la sabiduría puede advertirse de una manera útil y secundarse con eficacia”)³⁷, con sus palabras este diputado estaba intentando blindar el Ejecutivo frente a las Cortes, como haría durante su gobierno en 1822, en la redacción del *Fuero Real de España* en 1823 y, desde luego, con un éxito incontestable en 1834.

34 DSC, sesión 7 de septiembre de 1820, p. 869.

35 Una determinada percepción exaltada de los hechos y acontecimientos en Alcalá-Galiano, Antonio. *Examen crítico de los bandos del gefe político y capitán general de la provincia de Madrid el 7 de este mes de septiembre y breves reflexiones sobre los sucesos de estos días*. Madrid, Imprenta de Collado, 1820.

36 DSC, sesión 7 de septiembre de 1820, p. 860.

37 François Guizot, *Du gouvernement*, p. 284.

e. *Análisis jurídico-constitucional*

En el asunto que acaba de reseñarse en los párrafos anteriores se presentan dos facetas que atañen directa e indirectamente a Riego. El primero es el relativo a la abolición de su nombramiento como capitán general de Galicia y el segundo a la disolución del ejército de observación que él comandaba.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico la abolición, que Riego asumió con la disciplina que corresponde a un militar, era, sin embargo, formalmente válida. Si bien es cierto que el precepto no alude a ceses o destituciones, para la opinión común se ajustaba a lo dispuesto por el artículo 171-5^a de la Constitución que facultaba al rey a “proveer todos los empleos civiles y militares”. Ahora bien, desde el de la legitimidad, resulta mucho más cuestionable. En especial porque la decisión, carente de motivación, incurre en lo que los tratadistas contemporáneos más frecuentados y bien conocidos por los españoles –desde Sala a Marcial Antonio López– y los recién traducidos Constant y Bolingbroke denominaban “mal uso” del poder. Es decir, cuando por intereses particulares o distintos del bien común, o “pública utilidad” por usar la expresión de la época, se adoptan medidas o acuerdos que infringen los valores y principios de justicia e imparcialidad que inspiran la propia Constitución, tales actos, nos dicen estos juristas, no son en rigor ilegales, pero sí ilegítimos.

En este sentido, era, asimismo, una manifestación de despotismo, en la que, como exponía Destutt de Tracy, el ministerio había actuado a través “providencias particulares para salir de la dificultad presente”, impropias de un gobierno nacional o público en la medida que había infringido su “principio conservador” por excelencia: “el amor a los individuos, a la libertad y a la igualdad o si se quiere a la paz y la justicia”³⁸. En otras palabras, afectaba a los derechos individuales.

Ciertamente, la destitución responde claramente a los requerimientos de un acto de gobierno, para los que, en este particular supuesto, ni la Constitución ni el ordenamiento añaden cláusulas específicas ni prescriben requisitos especiales. Aunque afecta a una materia a la que la propia Constitución reco-

38 “La palabra despótico indica un abuso, un vicio que puede hallarse más o menos en todos los gobiernos porque todas las organizaciones humanas son imperfectas”; “democracia representativa es el estado de naturaleza perfeccionada que no se extravía ni se guía por sofismas, ni procede por sistema de providencias particulares para salir de la dificultad presente”. Destutt de Tracy, *Comentario*, pp. 32, 46 y 47.

noce entidad propia (artículo 250), ni para el Constituyente ni, por supuesto, para el legislador ordinario, esta singularidad, como expresamente se recogerá con posterioridad en el artículo 118 de la *Ley Constitutiva del Ejército* de 9 de junio de 1821, supone un privilegio; antes al contrario, se contemplaba como “excepción onerosa” que en modo alguno afectaba al disfrute de los derechos civiles por los militares en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. Era, por consiguiente, un acto político para los que el legislador y la doctrina admitían un amplio margen de discrecionalidad³⁹, pero se presumía igualmente, como ya se ha expuesto, que, en todo caso, tales actos tenían que ajustarse y realizarse en conformidad al espíritu de la Ley fundamental, lo que eliminaba la arbitrariedad en la toma de decisiones. Entre otras causas, porque, como escribía Constant, recurrir a la misma “hace a un gobierno nulo con respecto a su institución”⁴⁰.

En este sentido, la motivación *a posteriori* en que encuentra causa la destitución es extremadamente reveladora. Las razones extrajurídicas –falsedades, comisión de hechos inexistentes– que expuso Argüelles en su segunda comparecencia del día 7 de septiembre en conjunción a su negativa a presentar pruebas a requerimiento de las Cortes, ponen de manifiesto que el gobierno y el rey eran plenamente conscientes de que su proceder no era conforme a derecho. Es, precisamente, esta justificación lo que desnaturaliza y convierte en despótico el acto según la definición que del mismo había adelantado Flórez Estrada años atrás en su *Representación*, esto es, el llevado a cabo por quien “sin contrariar ninguna ley del país, egerce la autoridad suprema, no atenido á otra regla qué su capricho”⁴¹ y, como se dijo en su momento, en an-

39 He aquí lo que al respecto aparecía en el nº 1 de *El Cetro Constitucional* y que se cita a modo de ejemplo: “Tengan muy enhorabuena el Rey y sus ministros toda la plenitud de facultades y toda la extensión de recursos que sean necesarios para dar impulso y movimiento á la voluntad soberana de los legisladores : haya, si es menester, resortes ocultos para las transacciones de alto gobierno , pues asi lo quiere el estado actual de los gabinetes : sea el ministerio el juez privativo del mérito de los ejecutores subalternos en materias gubernativas, sin prescindir del concepto general en esta parte tan importante de la administración económica; en una palabra, no haya nada que se oponga á la fuerza del poder ejecutivo dentro de los límites que le ha designado la Constitución”. *El Cetro Constitucional. Semanario Político*. Madrid, imprenta de d. José Collado. nº 1, 1820, pp. 23-24.

40 Constant, *Curso*, T. II, p. 344. Constant incluso rechaza “la arbitrariedad admitida” que, en su concepción, se aproxima al concepto de discrecionalidad. Ibi, p. 344.

41 Flórez Estrada, Álvaro, *Representación hecha á S. M. C. el señor D. Fernando VII*

ticonstitucional el procedimiento que dio lugar al mismo⁴². Para Isturiz, que en su intervención en una de las sesiones manifestó “no saber” si se trataba de una infracción a la Constitución, era obvio que el cese de Riego en base a murmuraciones sin pruebas respondía a un abuso de poder contra el que las Cortes debían precaverse⁴³. El ministerio, como se decía, había sustituido aquí la prudencia por la arbitrariedad y la ilegalidad, de esta manera la “indulgencia” (discrecionalidad) aplicable a los actos políticos desaparecía. Para algunos, incluso se trataba de un crimen que debía ser visto en los tribunales ordinarios y sometido a las leyes comunes⁴⁴. Sin embargo, en las Cortes ni siquiera se solicitó la responsabilidad política de los autores.

No obstante, esa solución, que, como ya se ha reseñado, mereció el aplauso del grupo capitaneado por Martínez de la Rosa, no satisfizo a casi nadie –por el contrario, afectó seriamente la credibilidad del gobierno y causó un hondo y largo impacto en la opinión pública⁴⁵– y tuvo consecuencias de alcance constitucional. Además de reforzar al Ejecutivo, sentó un precedente que sería utilizado por gobiernos posteriores sin ningún retraimiento y “prudencia”, como, sin ir más lejos, se efectuó en la siguiente destitución de Riego. Además, desde

en defensa de las Cortes. Impresa en Londres en 1818 y reimpressa después varias veces. Madrid, en la imprenta de Villalpando, año de 1820, p. 6 nota.

42 “Nosotros vemos ahora á Riego remunerado en cierto modo; pero no libre de la infame mancha con que el tal Ministerio pretendió eclipsar osadamente su inmortal gloria, pues se conservaban impenetrables las decantadas páginas depositarias del secreto que sin duda dio lugar en aquella época á un *procedimiento del Ministerio tan extraordinariamente anti constitucional*” (cursiva mía). *El Cetro Constitucional*, nº 5, pp. 28-29.

43 DSC, sesión 5 de septiembre de 1820.

44 *El Cetro constitucional*, nº 1, p. 29.

45 En *El Cetro Constitucional* de 22 de diciembre de 1822 se lee: “hemos visto la disolución del ejército de la Isla, único organizado, por aparentadas sospechas de una soñada república, que después autorizó á los Ministros para desterrar y perseguir al caudillo Riego.... Hemos oído al Ministro de la Gobernación ponderar con su acostumbrado tono en medio de las Cortes unas malditas páginas que aun guarda secretas, y con tal énfasis, que despertando nuestra curiosidad, también despertó sospechas que fomentaron varias hablillas nada favorables á V. M conducta extraña que deben evitar los gobiernos sábios para no introducir la desconfianza en los pueblos contra los verdaderos intereses del estado y su prosperidad [...] Nosotros hemos visto y leído infinidad de representaciones que han hecho sin resultados, beneméritos militares desterrados arbitrariamente por el Ministerio de Guerra, entre los que contamos una gran parte de los que con el Imperial Alejandro ayudaron en Ocaña al heroico movimiento de esta capital y su guarnición en el memorable mes de enero próximo pasado”, nº 5, p. 29.

la perspectiva validez-efectividad, aún en el caso de que pudiera admitirse formalmente la primera, es obvio que fue sobre todo ineficaz, en consecuencia, carente de la pretendida eficacia dados los resultados producidos y el nombramiento poco tiempo después de Riego capitán general de Aragón.

La disolución del ejército, a diferencia del supuesto anterior, más que una infracción a la Constitución presenta, a mi parecer, una evidente naturaleza anticonstitucional *ab initio* que entronca con las prácticas del Antiguo Régimen. El artículo 171-9^a reconocía, en efecto, al rey la facultad de “disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como más convenga”. Pero, como le recordaba expresamente a Argüelles un diputado la conveniencia en este caso no se dejaba a la discrecionalidad del ministerio ni del rey, sino que estaba vinculada al interés de la Nación. Es obvio que tampoco aquí el gobierno actuó con la probidad requerida, sobre todo teniendo en cuenta que la justificación de tal disolución se basó en falsas imputaciones delictivas fundadas en deslealtad constitucional y movimientos conspirativos relacionados incluso con el republicanismo. Como escribiría un año más tarde Romero Alpuente, en el mejor de los casos estaríamos aquí ante una “orden contraria al bien común aunque cubierta con la letra de la ley” y ello, como continúa exponiendo este jurista, conlleva la responsabilidad del ministro aunque vaya firmada por el rey, pues, en este supuesto, la obligación del secretario del Despacho era hacer ver a éste su error o dimitir⁴⁶.

Por otro lado, es incuestionable que los hechos y soluciones a las que se acaba de hacer referencia son un elocuente testimonio de los efectos producidos por la ausencia de mecanismos dirigidos al control de constitucionalidad que, como bien escribe Fernández Sarasola, la Constitución de 1812 no preveía. Aun así, cabe preguntarse si la actividad desarrollada por aquellos diputados que de manera reiterada insistieron y trabajaron intensamente para forzar las explicaciones y comparecencias del gobierno en las Cortes con el fin de poner de manifiesto unos abusos efectuados a través de actos y disposiciones que contradecían el espíritu, y hasta la letra según alguna interpretación, de la Constitución, se aproxima por sus fines e intencionalidad a lo que este control significa. Es imposible determinar y, desde luego, no es permisible esta licencia desde la deontología profesional, si en otras Cortes no tan polarizadas tales esfuerzos, aunque fuera por la vía de las convenciones parlamentarias, hubieran prosperado y materializado en un procedimiento más positivo de revisión y fiscalización que el entonces existente.

46 Romero Alpuente, *op. cit.*, pp. 32-33.

Es cierto que ambas disposiciones gubernativas se producen en un periodo sustancialmente difícil y extraordinariamente complejo, muy afectado por la presión internacional, en especial la ejercida desde las cancillerías de las grandes potencias europeas, completamente contrarias al “sistema constitucional” español que se hizo sentir con mayor intensidad en las Cortes desde 1822. Y lo es igualmente que razones de *realpolitik* condicionaron, en ocasiones incluso entre algunos exaltados –como ocurrió en el caso Palarea a finales de ese año–, la irrenunciable inteligencia contemporánea de que un gobierno de las leyes conllevaba el imperativo de la aplicación rigurosa de la Constitución y demás disposiciones legales. Sin embargo, es asimismo indudable que, en realidad, tales decisiones de indiscutible naturaleza política no son sino una evidencia del principal conflicto endémico de naturaleza constitucional que se arrastraba desde principios del Trienio. Ambos hechos –disolución del Ejército y abolición del nombramiento– suponen, en efecto, una elocuente manifestación de la efectividad de los principios y bases de la articulación de los poderes en la Constitución.

Diseñada para que, a partir de la separación de los mismos, se modulara el gobierno sobre la colaboración de los dos primeros, las Constituyentes configuraron la figura del rey con unas competencias cuyo alcance real no pudieron comprobar en aquella primera época, cuando la Regencia acataba sin discusión el dictado del “Soberano Congreso”, pero fueron una fuente de conflictos en el segundo periodo constitucional⁴⁷. Sobre todo para quienes defendían la primacía del Ejecutivo y un derecho propio del rey al gobierno forzando, en espera de una mejor ocasión, una interpretación que reconocía a ese poder potestades inexistentes en el texto constitucional, como de hecho había dejado sentado Martínez de la Rosa ya en 1820 con motivo de la discusión del Discurso de contestación al de apertura del rey. Redactado por una comisión de la que él formaba parte con Toreno, para este grupo la exacta observancia de la Constitución –“en la que se cimentan los derechos del trono”– consistía en proteger “la religión y los derechos de la Corona y de los ciudadanos”, porque ambos eran igualmente sagrados⁴⁸. Con razón López pudo decir a principios

47 No está de más recordar lo que Destutt de Tracy decía a este respecto: “El cuerpo legislativo y el cuerpo de los ministros son realmente el gobierno, el rey no es más que un ente parásito”. Destutt de Tracy, *Comentarios*, p. 209.

48 El particular énfasis en los derechos del trono se acentuó ante la protesta de Flórez Estrada, para quien el trono no tenía derechos, sino prerrogativas y es igualmente rotunda a las objeciones en sentido similar de Romero Alpuente, quien había protestado el uso de señores diputados en lugar del Congreso, negándole así a este una entidad propia. Vid. DSC, sesiones 9 y 19 de julio de 1820, pp. 23 y 24.

del Trienio en sus observaciones al *Curso* de Constant sobre el poder regio que todas las facultades, y aún más, que el tratadista francés le reconocía al monarca de la *Carta* estaban recogidas en la Constitución española. Algunas de ellas sin ni siquiera la cláusula “con las limitaciones legales”⁴⁹.

En su lucha con el Legislativo y con más o menos frecuencia, la mayor parte de los gobiernos, con excepción del de San Miguel (agosto de 1822 a marzo de 1823), rebasaron ampliamente las facultades de la potestad reglamentaria y la esfera de la discrecionalidad correspondiente a la “materia reservada” en la que se incardinaban los actos políticos reconocida, más que por la Constitución, por la práctica y convenciones, por así decir, “parlamentarias”. Incluso actuaron al margen de la preceptiva autorización de Cortes. Un ejemplo elocuente es el siguiente asunto relacionado con Riego, procedente de su segunda destitución de otra Capitanía General, la de Aragón, a finales del verano de 1821.

2. La destitución como capitán general de Aragón

Se trata éste de un caso que dio lugar a un procedimiento que se extendería durante largos meses y, en sí mismo, reviste extraordinaria complejidad desde diversos puntos de vista. Dados los antecedentes descritos, no sorprende que el ejercicio de la capitanía estuviera desde el comienzo rodeado de incidentes que ponen de relieve hasta qué extremo el nombramiento, al que renunció infructuosamente, fue un presente envenenado para el interesado.

En una primera aproximación, tanto el caso anterior como, en particular, el que ahora se examinará, destacan por dos motivos fundamentalmente. El primero, como testimonio de que Riego conocía como pocos el valor de los impresos y los “papeles públicos” en la formación de la opinión pública considerada desde el siglo XVIII un elemento fundamental de constitucionalismo moderno⁵⁰. Acérrimo partidario y defensor de la libertad de prensa, utilizó, firmando siempre en calidad de ciudadano y no de militar, profusamente los periódicos, en particular *El Espectador*, para dar a conocer sus ideas, pero también para publicar los principales documentos relativos a los sucesos que le atañían directamente, como los que se vienen relatando.

Aunque era ésta una actitud unánimemente aceptada entre todos los libe-

49 Constant, *Curso*, T. I.

50 Fernández Sarasola, Ignacio, “Opinión pública y “libertades de expresión” en el constitucionalismo español (1726-1845)” en *Historia Constitucional*, nº 7, 2006.

rales, para alguno de los cuales no era sino el último recurso de un ciudadano cuando sus peticiones son desatendidas oficialmente⁵¹, exasperó al Ejecutivo, hasta el extremo de acusarle de buscar con ello una confrontación de la Nación contra el gobierno. Se defendió de esta imputación en la representación que dirigió a las Cortes en 1822 calificándola en una *Nota especial e indispensable* de “principio erróneo o una superchería miserablemente sostenida en un país en el que todo ciudadano goza de la libertad de imprimir cuanto quiera quedando responsable a la ley”⁵². A este respecto cabe decir en su favor que no solo no escondió nunca sus inclinaciones políticas ni las disfracó revistiéndolas de un lenguaje retórico, sino que se dedicó con un entusiasmo formidable a la defensa del sistema y texto constitucionales.

El segundo de los motivos, y más relevante a los efectos que aquí interesan, este concreto asunto pone de manifiesto hasta qué punto las aludidas ambiciones y rivalidades políticas con los planteamientos ideológicos irreconciliables sobre la idea y contenido de la Constitución condicionaron el desarrollo normal de las funciones del Legislativo en aquellos momentos. Es ésta una aseveración que se manifiesta explícitamente en lo que concierne al asunto de la Capitanía General de Aragón, donde la articulación de este poder y el Ejecutivo, complicada en este caso por las atribuciones constitucionales del rey, se ve afectada por supuestos de responsabilidad ministerial, actos de inconstitucionalidad e infracciones de la Constitución y hasta en la conculcación de leyes y normas específicas que regulaban los derechos individuales.

En lo que aquí se persigue, el proceso, cuya evolución conocemos sobre todo por la documentación aportada por el propio interesado, las noticias de

51 “Nosotros pensamos que la acusación de una persona ante el tribunal de la opinión pública por medio de los periódicos que son los papeles que circulan con más rapidez, es la última razón de un ciudadano cuyas quejas han sido desatendidas”. Javier de Burgos, en *Miscelánea de Comercio, Política y Literatura*, nº 101., 9 de junio de 1820, p. 1.

52 “Nota especial e indispensable=En el año próximo pasado se ha querido hacer pasar por doctrina corriente que era apelar a la Nación contra el gobierno el imprimir las representaciones, exposiciones, instancias y memoriales que se hacían a la superioridad. Este es un principio erróneo o una superchería miserablemente sostenida en un país en el que todo ciudadano goza de la libertad de imprimir cuanto quiera quedando responsable a la ley. En este concepto yo protesto a la faz de toda España que no tengo la extravagante idea de querer extraviar la opinión pública con la impresión de este papel, y que mi intención no es otra sino que se hagan públicos y notorios estos sucesos de un carácter extraordinario.” ACD, *Exposiciones de Rafael del Riego en queja del Ex Ministro Ramón Feliú*, sig. P-01-000044-0199, 1-2-3.

ciertos periódicos y la causa contra uno de los militares presentes en los hechos, ya que el Gobierno se negó sistemáticamente a complementarla a pesar de los requerimientos de las Cortes, carece, que sepamos, de conclusión. No obstante, los datos existentes son suficientes para aportar luz sobre el funcionamiento institucional en aquel segundo periodo de nuestro primer Estado de Derecho. Una sumaria exposición de los hechos y las calificaciones jurídicas así como los argumentos, por así decir, metajurídicos usados por miembros del gobierno, bastarán para procurarse una idea al respecto.

a. *Precedentes*

Los hechos que originan el proceso comienzan, *stricto sensu*, los últimos días de agosto de 1821, si bien vienen precedidos de algunos otros inquietantes. Como el que él mismo describe el 6 de marzo anterior, cuando incluye en la felicitación que dirige al *Soberano Congreso* desde Zaragoza por la apertura de la segunda legislatura la denuncia del robo de la correspondencia que se le dirigía desde la Corte⁵³, que atribuye a los anticonstitucionalistas.

Es relevante señalar que, además de manifestar una vez más su lealtad a las Cortes y la Constitución, Riego, que remitió su escrito por mano de un militar de su confianza (el coronel Paniagua adicto a las “instituciones constitucionales”), denunciaba sin ambages los movimientos realistas y solicitaba que, ante la ineficacia de las medidas de gracia concedidas hasta el momento a los facciosos, los *Padres de la Patria* acordasen un endurecimiento de las mismas con el fin de abortar mediante “el pronto escarmiento los progresos de esta enfermedad que va gangrenando varios miembros de este cuerpo político y tiene en inquietud a la Nación”. Aprovechaba la ocasión para ponerse, con las tropas a su mando y la ciudadanía de la provincia, a disposición de la Cámara en defensa del sistema constitucional.

El presidente de las Cortes se limitó a resaltar la importancia del escrito dada la excepcionalidad del remitente –de nuevo el valor simbólico–, y ordenó su lectura íntegra en la sesión del 9 de marzo. En una de sus constantes, firmes y públicas adhesiones a la Constitución *intacta*, ya entonces y como capitán general de una *provincia*, comunicaba, con pleno conoci-

53 “De haber sido interceptado el correo de esa Corte y robadas todas las cartas y noticias que me ha afligido por considerarlo más bien efecto de las maquinaciones de los malos que de un simple robo, respecto que el conductor fue bien tratado y no se le quitó dinero ni cosa alguna a excepción de la correspondencia”. DSC, sesión 8 de marzo de 1821.

miento de causa, las tramas absolutistas que se estaban urdiendo en Cataluña, Navarra y Aragón, cuyo desarrollo y peligros sabía, por su ubicación y cargo, por propia experiencia. Sin embargo, a pesar de la importancia de lo notificado, la Cámara se limitó a expresar un especial agradecimiento y a aprobar su inclusión completa en el Diario de Sesiones. No obstante las graves acusaciones vertidas y la exacta exposición de la realidad que nadie desconocía, no suscitó ningún debate ni generó ningún efecto más allá del puramente anecdótico⁵⁴.

b. *Los hechos*⁵⁵

El 1 de septiembre de 1821, cuando se encontraba efectuando un recorrido por diversos pueblos de la provincia con una pequeña escolta para contrarrestar la campaña anticonstitucional que el arzobispo de Zaragoza venía realizando desde marzo en los mismos ante la proximidad de la elecciones, Riego recibió en uno de ellos una Real Orden del secretario del Despacho de la Guerra fechada el 29 de agosto. En ella se hacía constar que se le cesaba del mando militar de la provincia, se le conminaba a entregarlo interinamente a Francisco Moreda, el jefe político, y se le ordenaba trasladarse *inmediatamente* al cuartel de Lérida.

La RO venía precedida de una proclama que el jefe político había dirigido a los zaragozanos el día anterior en la que les informaba de la existencia en la ciudad de una conspiración republicana en la que, sin pruebas, implicaba a Riego. La noticia alcanzó rápidamente difusión nacional y aunque los periódicos más serios la publicaban con reservas, sospechando de su veracidad y a la espera de la corroboración de su autenticidad, su participación en esa trama parecía confirmarla la propia conducta del jefe político en los días siguientes. Es decir, cuando, ante la confidencia de que “el héroe de las Cabezas” regresaba a la ciudad para esclarecer lo ocurrido, Moreda, que previamente había informado al ministro en los términos aludidos, hizo correr el rumor de que venía “a degollar a los zaragozanos y a quemar el templo de Nuestra Sra

⁵⁴ Ibi, p. 377.

⁵⁵ Todas las referencias y hechos están tomados de la extensa representación, abundantemente documentada, que Riego elevó a las Cortes solicitando la responsabilidad del secretario del Despacho Feliu. ACD, *fondo General*, P-01-000044-0199, 1-3-5 *exposiciones de Rafael del Riego*. 4, escrito de Ramón Feliu.

del Pilar”⁵⁶, puso en pie de guerra a la guarnición y la milicia nacional local, alentó a la población a mantenerse en guardia y envió un destacamento de soldados y milicianos a una localidad cercana con el fin de impedir su entrada en Zaragoza.

Comandado por un joven oficial, que según el interesado mantuvo hacia él una conducta completamente inaceptable en la disciplina militar, se le informó *in situ* de la prohibición, al tiempo que una diputación de civiles llegados *ex profeso* le expusieron que su ausencia de Zaragoza calmaría los ánimos excitados. Por confesión propia y deposiciones de otros testigos, la explicación de las motivaciones –evitar los tumultos– de la petición para que no entrara en la ciudad fue suficiente para que se retirara a Lérida, donde, como le comunicaba su alcalde constitucional, se le esperaba con los brazos abiertos⁵⁷.

56 “El cese despertó el odio a Riego [...] la autoridad que allí mandaba tomo todas las precauciones que podían convenir para rechazarlo como enemigo. Corrieron voces de que el general Riego venía a degollar a los zaragozanos y a quemar el templo de Nuestra Sra del Pilar”. *Conclusión fiscal, defensa y determinación definitiva del Consejo de Guerra de oficiales generales celebrado en Zaragoza en 11 de abril de 1823 para fallar la causa formada al Teniente Coronel don Fernando de Alcozer en averiguación de la conducta que observó en las ocurrencias de dicha ciudad en el 29 de octubre de 1821 de cuyas resultas se separó de su mando político y militar al brigadier Don Francisco Moreda*. Zaragoza, por Roque Gallifa, 1823, p. 15. La reconstrucción de los hechos que figura a continuación esta extraída de esta causa y de la representación que Riego eleva a las Cortes 1822 pidiendo la responsabilidad del secretario de la Gobernación de la Península, complementadas con fuentes periodísticas coetáneas.

57 La carta del Alcalde de Lérida y la contestación de Riego fechadas en 31 de agosto y 6 de septiembre en *El Espectador* de 15 de septiembre de 1821. La explicación de Riego en el expediente cit. Por su parte, Evaristo San Miguel, que vincula el hecho a una trama organizada desde el gobierno y que era a la sazón director de este periódico, narra así estos hechos: “Sabida de oficio la disposición del gobierno, parecía muy natural la vuelta de Riego á Zaragoza para recoger sus efectos, y hacer los preparativos de su viage: mas el gefe político, creyendo ó fingiendo creer que su vuelta ocultaba algún designio hostil, trató de evitarla á toda costa. El día que debía ser de su llegada, se mandó poner la guarnición sobre las armas, se tomaron todas las disposiciones militares, como si Riego estuviese resuelto á entrar en la ciudad á viva fuerza, con el auxilio de sus partidarios. Para dar mas aparato á la solemnidad, se publicó el plan de los conspiradores, y se puso en la cárcel á Montarlot y los principales indicados. Al mismo tiempo se mandó salir una partida de caballería á las órdenes de un oficial, con la orden de ir al encuentro de Riego, y hacerle detener en el punto donde le encontrase. Se habló de colisión entre esta tropa y la que escollaba al general, de que este tiró de la espada contra el oficial que le comunicó la orden. Mil especies de esta clase se esparcieron por sus enemigos, empeñados en ennegrecerle. Mas no hubo

Aunque el cese revestía irregularidades formales de envergadura –se efectuó “sin entregar formalmente el mando militar”⁵⁸– la aceptación de la retirada fue seguida de un discurso de despedida ante los presentes dirigido al ejército de Aragón (*La proclama de Pina*) de profunda adhesión a la Constitución. Acompañado de la RO de junio en la que el rey le denegaba el permiso de salida al extranjero que había solicitado y su segunda renuncia a la Capitanía⁵⁹, el discurso, en el que también aludía a las condiciones en que se había llevado a cabo la remoción, fue ampliamente difundido por la prensa afín a sus convicciones políticas⁶⁰.

La destitución fue seguida por el inmediato cambio de destino del Regimiento “Constitución” creado por las Cortes en 1820 a petición de Riego y caracterizado por sus firmes convicciones a favor de la Constitución de 1812. Formaba parte de él el batallón del mismo nombre integrado por los supervivientes de la columna móvil que había acompañado a éste desde el momento de la proclamación del 1 de enero ⁶¹.

conflictos, ni golpes, ni amenazas. En medio de su irritación tan natural, comprendió bien Riego el terreno que pisaba entonces; y desde el mismo donde se encontraba, torció el curso hacia Lérida, á donde en clase de general de cuartel, estaba destinado”. San Miguel, *Vida de D. Agustín de Argüelles*, II, p. 260.

58 La frase entrecomillada pertenece a la primera representación realizada por Riego que forma parte del extenso expediente sobre el caso que se encuentra en el archivo del Congreso. La cuestión, desde luego, no era secundaria y así lo hace constar en su intervención la defensa del teniente coronel Alcocer: “la separación del mando del general y su cumplimiento se trazó de manera jamás usada”. *Conclusión fiscal*, p. 15.

59 Riego, en efecto, había solicitado permiso al rey para abandonar España y marcharse al extranjero en junio de ese año, el 21 de agosto anterior había renunciado una vez más en exposición dirigida a las Cortes –y que fue publicada íntegra en *El Espectador* de 2 de septiembre– a la renta de 80.000 reales anuales que aquellas le habían concedido, y el 27, por tercera vez, a la propia Capitanía.

60 *El Eco de Padilla*, que había publicado las proclamas de Moreda, hace lo propio con la “Proclama de Pina” y el discurso de despedida del coronel jefe del Batallón Constitución el 7 de septiembre de 1821 en un suplemento especial. Y este periódico que se había mostrado simpatizante de Moreda y había trasladado tardíamente noticias sobre el suceso, publicaba el 10 de septiembre un “Artículo comunicado” a favor de Riego y crítico con el jefe político y el gobierno.

61 La noticia la transmitía *El Espectador* de 4 de septiembre y en el número correspondiente al día 9 incluye la proclama de despedida del comandante del Regimiento Constitución “que es destinado a otra parte” a los Zaragozanos. El batallón había sido creado por RD de 11 de septiembre de 1820, cuyo tenor es el siguiente: D. Fernando VII por la

En los días siguientes, merced a las noticias difundidas por los periódicos, las protestas se extendieron por toda España como reacción al cese y se mantendrían a lo largo de todo el mes de octubre y aún más. Las campañas a favor de Riego se propagaron por todas partes: las Cortes recibieron representaciones y escritos firmados por regimientos enteros de militares y por civiles, lo periódicos cartas, se publicaron folletos y las manifestaciones se sucedían en las ciudades más importantes. La exigencia era invariablemente la misma en todas partes: un pronunciamiento al respecto del Ejecutivo ya que “*Si es inocente ¿por qué se le juzga indigno de la confianza del Gobierno? y si no lo es ¿por qué no se publica su delito?*”.

A la luz de los acontecimientos, el gobierno se vio obligado a intervenir a través de todas las instancias, utilizando recursos contradictorios para justificar en derecho su decisión. El *leit motiv* de la orden transmitida a través del secretario de Gobernación de la Península, Ramón Feliú, era que había que defender a toda costa que el cese había sido legal en la medida que el Ejecutivo obraba en virtud de las facultades concedidas por la Constitución. Así, el 4 de septiembre, mientras el jefe político Moreda emitía una proclama a los zaragozanos en la que exculpaba completamente a Riego de las acusaciones vertidas con anterioridad, le exonera de republicanismos, alude a Ley y Orden, reclama la presunción de inocencia y expone que Riego no ha perdido ninguno de sus privilegios, su colega de Madrid, Francisco Copons, publicaba en *La Antorcha Española* de ese mismo día, por orden de

gracia de Dios, y por la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado lo siguiente: «Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por la Constitución , y habiendo examinado lo expuesto á las mismas por el general D. Rafael del Riego con fecha 12 de julio próximo pasado, y la oferta hecha al ejército de S. Fernando por el general D. Antonio Quiroga en su proclama de 15 de enero anterior, han decretado lo siguiente: 1.º Se aprueba la formación del batallón compuesto de los individuos de la compañía de guías del general del ejército expedicionario de Ultramar que siguieron a la columna móvil del general Riego, el cual ha de ser ligero, y se denominará batallón de la Constitución. 2.º El escuadrón que creó el expresado general, al mando de D. Carlos Osorno, será uno de los que formen alguno de los actuales regimientos de caballería, el cual tomará desde entonces el nombre de regimiento de la Constitución, 10. Se confirma la oferta que en las inmediateces de Córdoba hizo el general Riego al residuo de su división, compuesta de 285 hombres, de 15 rs. de gratificación al mes á los fusileros, 20 rs. á los granaderos y cazadores, y de 25 rs. á los de caballería y artillería. Madrid 11 de Setiembre de 1820.= El conde de Toreno, presidente. = Juan Manuel Subrié, diputado secretario. *Gaceta de Madrid*, 8/10/1820, pp. 442 a 443. Incluía también pensiones para las familias de Díaz Porlier y Lacy.

ministro, una RO en la que se incriminaba directamente a Riego en la conspiración republicana.

El 7 de septiembre, desde Lérida, donde continuaba arengando a la población en favor de la Constitución y a participar en las elecciones⁶², Riego inicia el procedimiento enviando su primera exposición al ministro de la Guerra en la que solicitaba la apertura de juicio”. En esa misma fecha, el jefe político y el Ayuntamiento de Madrid publican sendas disposiciones en que apelaban a la “tranquilidad” ciudadana y el primero amenazaba con aplicar la legislación “contra asonadas”⁶³.

En esta línea, en Zaragoza, donde el 3 de septiembre se había cambiado el nombre de la plaza de la Justicia por la de Lanuza como emblema de la libertad protegida por la Constitución⁶⁴, el Ayuntamiento dicta una proclama destinada a tranquilizar los ánimos en una ciudad particularmente afectada por el impacto del cese y por la forma en que se había llevado a cabo. El núcleo de la misma se concentraba en torno a estas dos interrogantes: “¿Podía llamarse constitucional el que ataca una de las prerrogativas que la Constitución concede al Rey? ¿Será constitucional el que repugna una disposición tomada por el rey en uso de sus facultades? No, ciertamente y no puede serlo”⁶⁵.

Por su parte, el oficioso *Diario Político de Zaragoza*, que venía publicando regularmente escritos oficiales vagamente inculpatórios contra Riego y de felicitación a Moreda por su conducta⁶⁶, publicaba un extenso artículo destinado a refutar los ataques dirigidos contra el jefe político Moreda exponiendo, por un lado, que había perseguido a quienes desacreditaban públicamente la reputación de Riego y pedían su muerte o proscripción y, por otro, a justificar

62 Y a solicitar que no se hablara de su causa: “Lérida 9 de setiembre. El general Riego ha llegado felizmente á esta ciudad donde viene destinado de cuartel por orden del gobierno. Antes de anoche salió a pasear la ciudad, precedido de una banda de música, de uno de los regimientos de la guarnición, y otra de paisanos recorrió las calles y el paseo, y arengó dos veces al pueblo, inculcándole la importancia del acierto en las próximas elecciones, y explicándoles las ventajas de la Constitución. Suplicó también que se suspendiese el juicio acerca de sus cosas, hasta que se aclare su inocencia, y protestó lá pureza de sus intenciones. Carta particular”. *El Imparcial*, 15 de septiembre de 1821, p. 4.

63 Publicadas ambas en *El Universal* de 8 de septiembre de 1821, p. 965.

64 Noticia adelantada por el *Diario político de Zaragoza* y recogida por *El Universal* de 10 de septiembre de 1821, p. 972.

65 Publicada íntegra en *El Imparcial* de 12 de septiembre de 1821.

66 Vid. *El Espectador* de 15 de septiembre de 1821, donde incorpora dos de los publicados en este sentido por ese diario, uno de ellos de la Capitanía General de Aragón.

por qué no se había emitido antes la disposición exculpatoria del general. Los argumentos utilizados se reducían a dos: el estricto cumplimiento de la Constitución y seguridad personal del interesado, razón por la cual “la venida de aquel general á Zaragoza ni era prudente en medio de aquella fermentación, ni parece tenia obgeto, puesto que su destino era á la plaza de Lérida”⁶⁷.

El *Diario Político* se limitaba a dar curso a las directrices gubernamentales al respecto, pero no solventó, ni siquiera palió, la *horrorosa borrasca* como se calificaba a la situación en un oficio aparecido en esta publicación. Las decisiones del gobierno habían alentado a los realistas desencadenando con ello enfrentamientos cotidianos con los constitucionalistas, quienes se habían manifestado contra tales medidas una vez conocida la no intervención de Riego en los hechos imputados.

El 29 de octubre, entre 150 y 200 miembros de la Milicia Nacional local se reunieron en la plaza del Ayuntamiento y pidieron presentar sus reivindicaciones al consistorio, que se hallaba celebrando sesión con el jefe político con el fin de tomar medidas para controlar la situación. Concedida la solicitud,

67 “El señor gefe político tan lejos de fomentar en lo mas minimo la opinión de los que se hallaban preocupados, ni de tolerar públicamente voces de proscripción y de sangre contra la persona del general Riego, y otros beneméritos militares, puede acreditar haber declamado por sus calles contra los que proferían expresiones de muerte y de proscripción, y haber hecho cuanto era de hacer entonces pata conciliar el honor y buen nombre, del General, con la tranquilidad y sosiego de estos habitantes. ¿Más por qué no publicó en el día 2 la proclama favorable al General, que dió el día 4? Los que hacen esta pregunta, ignoran, ó no quieren reflexionar que en el día 2 hubiera sido tan intempestiva , como útil podía ser en el día en que salió , y desconocen que el arte de gobernar requiere la delicadeza de acomodar las providencias a la exigencia de las circunstancias. [...] y si á cada disposición de esta clase hubiéramos de pedirle cuenta de por qué lo hace, ademas de infringir la misma Constitución, seria preciso publicar cosas que por su naturaleza llevan consigo el carácter de la reserva. El que por la exoneración del mariscal de campo don Rafael del Riego haya que es criminal, ó que lo es la conducta del gobierno en relevarle sin formación de causa, y sin dar una satisfacion de los motivos que haya tenido, está muy lejos de discutir constitucionalmente y si intenta seducir a los incautos con aquella falsa doctrina, es un anarquista, enemigo del orden y de la pública tranquilidad. Sin embargo es un hecho, que la orden de dicha exoneracion llegó en los momentos en que los ánimos estaban inquietos con la idea de los proyectos republicanos, y sea por ésto ó por lo que quiera; lo cierto es que la venida de aquel general á Zaragoza ni era prudente en medio de aquella fermentación, ni parece tenia obgeto, puesto que su destino era á la plaza de Lérida”. Dirigido a refutar un impreso firmado por P. P. y C. : J. G. S., conocemos el escrito por su publicación íntegra en *El Imparcial* del 15 de septiembre de 1821.

los milicianos eligieron una comisión que expuso directamente al pleno las tres demandas: Que se les dejase pronunciar los gritos de ¡Viva Riego!, que se incoara una “sumaria” contra quienes atentaban contra y molestaban a los vecinos y, finalmente, la dimisión del jefe político, allí presente, porque ya no gozaba de la confianza de la población y la milicia.

Los regidores pidieron una segunda comisión que ratificara la última petición. Inmediatamente, los reclamantes nombraron otra y designaron como portavoz de la misma al teniente coronel Fernando Alcocer, que se encontraba en la plaza como un particular contemplando el desarrollo de los acontecimientos. Una vez recibida, el teniente coronel ratificó lo expuesto acerca de la pérdida de confianza y “exigió” que antes de que expirara la noche se zanjasen los asuntos en aras de la tranquilidad pública.

El alcalde y regimiento aceptaron las dos primeras peticiones, expresando que nunca habían prohibido tales expresiones y que ya se habían pasado a conocimiento del juez pertinente las actuaciones denunciadas, pero alegaron que no podían asumir la tercera porque escapaba al ámbito de sus competencias ya que el nombramiento dependía del gobierno, salvo la voluntaria renuncia del interesado. Moreda presentó allí mismo su dimisión, pero exigió que fuera el ayuntamiento quien enviara oficialmente la renuncia al gobierno.

La reacción del ministerio consistió, en primer lugar, en reponer a Moreda⁶⁸ en el cargo y, en segundo, ordenar la formación de sendos Consejos

68 Sobre la enemistad de ambos –Moreda y Riego– y la afinidad del primero con el Gobierno expone San Miguel: “D. Francisco Moreda* paisano de Riego y amigo personal suyo, antes de ser en cierto modo compañero en mando. Moderado puro en todo el rigor de la palabra, no ocultaba su desaprobación de la conducta del general, que tachaba de asaz ligera y poco circunspecta. A la frialdad que esta diferencia de ver las cosas introdujo entre las dos autoridades, sucedió una verdadera pugna y rivalidad, por ninguna de ambas ocultada. Varias quejas mutuas llegaron por distintos conductos al gobierno: las del gefe político debieron de hacer mas impresión en hombres como los ministros, que participaban en un todo de sus opiniones. Vinieron después las acusaciones de república, que sino caían directamente sobre Riego, le hacían daño por suponer que su conducta demasiado franca, era la que daba alas á planes subversivos; Las inculpaciones, las insinuaciones del año anterior, se renovaron: se hizo creer que era incompatible con el reposo público, la conservación de un hombre tan peligroso en aquel mando. Triunfó, pues, el gefe político, y se espidió la orden de separación de Riego, mientras este se hallaba fuera de Zaragoza, recorriendo varios pueblos del distrito”. San Miguel, *Vida de D. Agustín de Argüelles*, II, p. 259. Gil Novales coincide en resaltar su moderantismo y servilismo, tanto en la época constitucional como a partir de 1823: “El 18 de agosto de 1823 fue nombrado por Morillo,

de guerra contra el teniente coronel Alcocer que había actuado de portavoz (sobreseído en 1823 tras el escrito exculpatorio del auditor-fiscal)⁶⁹ y el ya aludido contra dos jefes y un oficial del ejército, acusados anónimamente de participar en las protestas del 12 de septiembre en Madrid (igualmente exculpados y del que se derivó la causa de responsabilidad política aprobada en Cortes del secretario del despacho de la Guerra, Sánchez Salvador, el 31 de marzo del año siguiente).

Todos estos hechos fueron ampliamente divulgados y llegaron a todos los extremos del territorio español avivando aún más la inestabilidad o, como entonces se decía, “las pasiones”. En estas circunstancias, la prensa, incluso la afín al gobierno, se vio obligada a tomar partido. He seleccionado al efecto tres diarios solventes que representan otras tantas tendencias políticas no extremistas: *El Censor*, de Miñano y Lista, cercano al Gobierno existente, conservador de calidad indiscutible, *El Imparcial* de Javier de Burgos, cuyo primer número salió precisamente el 10 de septiembre de 1821, y *El Universal*, de Manuel José Narganes, “afrancesado” moderado y que en este concreto asunto demostró una ecuanimidad encomiable. Porque mientras el primero, que recoge el asunto muy tardíamente, no se pronunciaba sobre la destitución, limitándose a condenar vivamente las manifestaciones populares y a responsabilizar y atacar despiadadamente a los exaltados⁷⁰, el segundo adop-

con la aprobación de la Regencia, comandante interino de la provincia de Tuy, y salió para Vigo, cesando el 12 de enero de 1824. El 20 de noviembre de 1824 firma en Lugo la *Relación histórica*, que se conserva manuscrita, y en la que se jacta de haber servido siempre los intereses de SM durante la época revolucionaria, y especialmente de haber impedido en Zaragoza el triunfo de sendas conspiraciones republicanas –alude a Villamor, al que no cita por su nombre, y a Cugnet de Montarlot–. Fue purificado el 30 de septiembre de 1826 y nombrado mariscal de campo, entre 1830 y 1842, capitán general de Puerto Rico, en 1837, y gobernador de Cádiz, en 1840. Se mantuvo fiel a María Cristina con motivo de la revolución de ese año”. Gil Novales, Alberto, *Las sociedades patrióticas*. Madrid, Tecnos 1975. Los datos entrecomillados en del mismo, “Moreda, Francisco (S. XIX)” recuperado de www.mcnbiografias.com. Como subalterno de Morillo, fue uno de los jefes militares que no opusieron resistencia a la invasión de 1823.

69 Sentencia exculpatoria en Zaragoza 11 de abril de 1823. La orden de apertura de juicio fue dada el 3 de noviembre de 1821 por el Excmo. Sr. D. Miguel del Álava. *Conclusión fiscal*, pp. 5 ss., de donde están extraídos los datos que se adjuntan.

70 Los trata, en efecto, en los nos de 22 y 29 de septiembre: “si es que tienen algún fundamento los rumores que corren estos días, y si se refieren á esto ciertas espresiones de las proclamas del gefe político de Zaragoza, sobre una secreta maquinación dirigida á mudar la forma actual del gobierno. Nosotros no diremos que en efecto haya existido ni exista

taba una actitud, por así decir, “equidistante”. Exculpa a Riego de la conspiración, pero le reprocha las alusiones que hizo en *la proclama de Pina*⁷¹, al mismo tiempo que resalta la valía de Moreda y rechaza las protestas callejeras como un peligro para la Constitución.

Sólo *El Universal* lleva a cabo un ejemplar ejercicio de periodismo clásico: no se pronuncia hasta conocer los hechos que publica con rigor desde el primer momento, da cabida a documentos de todas las partes, contrasta opiniones y sólo expone su opinión cuando las actuaciones han sido contrastadas, denunciando entonces la obligatoriedad del gobierno de sacar a la luz el expediente porque, afirman sus redactores, se trataba de un caso que revestía mayor gravedad que el similar del año anterior⁷². Y en este sentido, no deja de

semejante trama, ni que en ella hubiesen entrado tales ó cuales personas: nada sabemos ni queremos aventurar temerariamente; pero siguiendo siempre el sistema de conjurar la tempestad antes que llegue, por si algo hubiere de cierto, nos ha parecido útil y aun necesario discutir con alguna estension las dos grandes cuestiones que presenta la materia. ¿Es posible establecer en España el gobierno republicano? Suponiendo que lo fuese, ¿sería conveniente hacerlo ?”, “Proyectos republicanos”, *El Censor* 22 septiembre 1821, pp. 425 ss. Y “Que el gobierno, con razón ó sin ella, exonera del mando de una provincia a un general benemérito é ilustre sin duda, pero amovible constitucionalmente: pues dispongase pasear en público su retrato para dar en ojos al gobierno [...]. Prohibe este que se haga la procesión ; pues hacerla contra su mandato espreso, despreciar sus amonestaciones, ceder solo á la fuerza, y decir luego que el gobierno tiene la culpa de algunas desgracias ocurridas por nuestra tenacidad é inobediencia. Esta es la historia de las asonadas de Madrid”. “Sobre asonadas y motines”. *El Censor* 29 septiembre 1821, pp. 11 ss., p. 25. Era claramente una versión tendenciosa rayana en la desinformación, ya que no hubo víctimas ni daños de consideración.

71 “En cuanto á los sucesos de Aragón El Imparcial espera parar dar su voto, a que se publique la causa que se está formando ; y aunque respecto al general Riego es del número de aquellos que le creen incapaz de haber cometido un crimen de verdadera traicion , y aunque están persuadidos que la única culpa que puede haber en tan digno general será alguna ligereza; sin embargo en honor de la verdad, debe decir que quisiera no haber leído en la proclama que el señor Riego dirigió en 3 del corriente al ejército de Aragón las espresiones siguientes “al verme arrebatar del modo mas irregular el mando militar de la provincia” & c. Un militar que recibe una orden superior la respeta, la obedece, representa si tiene justos motivos para hacerlo, pero no se queja de ella á presencia de la tropa, ni la traía de irregular en una proclama impresa. Lo decimos con dolor; pero este paso es poco favorable á la disciplina militar, y al espíritu de subordinación que es el alma de los ejércitos”. *El Imparcial*, 10 de septiembre de 1821, p. 3. En los días siguientes, en particular el 12, comienza ya a publicar los documentos gubernativos.

72 *El Universal* da las noticias desde el día 2 de septiembre, mostrando reservas

ser ilustrativo que este medio sacara por esos días en primera plana artículos de fondo sobre la *inviolabilidad del rey*.

Por su parte, entre los periódicos más próximos a los exaltados, *El Espectador* de Evaristo San Miguel, que había sido jefe del Estado mayor de Riego cuando estaba al frente de la columna móvil, se posiciona en una clara defensa de éste y publica las noticias de Zaragoza, en especial las de carácter militar, pero también documentos gubernamentales comprometidos, pidiendo siempre el esclarecimiento de los hechos por el Ejecutivo⁷³. En este sentido, adquiere una singular relevancia la pregunta que el más popular de los medios de esta tendencia, *El Zurriago*, siguiendo su línea editorial se formulaba en el Suplemento a su nº 5 dedicado al tema: “¿Por qué se le envió de destierro a Lérida cuando ya existía un cordón sanitario allí y no se le hizo venir a Madrid?”.

Finalmente, el 13 de diciembre todo el gobierno y en particular el secretario del Despacho de la Gobernación, es reprobado por las Cortes por mala gestión, y en especial Feliú, por la intervención en las elecciones y por abuso de poder en el caso de Riego.

c. El contexto y las causas inmediatas: la crisis de gobierno y las elecciones de 1821

La inteligencia de los hechos que acaban de compendiarse requiere prestar necesariamente atención al contexto en que se producen. Que la destitución de Riego, y los sucesos posteriores que la acompañaron, era un objetivo, y no precisamente colateral, de una oscura y mal trabada trama de intereses encontrados entre el rey, invistiendo para cargos a personas simpatizante del absolutismo o de dudosa afinidad constitucional, y el gobierno con su abierta

pero sin pronunciarse sobre la veracidad hasta que exista confirmación. Publica documentos oficiales de las distintas autoridades, así como cartas de los lectores a favor de Riego. En los números siguientes es crítico con el modo y el momento en que se llevó a cabo el cese, que permitían deducir la culpabilidad de Riego. Finalmente, el 8 de septiembre exculpa a Riego y pide claridad al ministerio, p. 3.

⁷³ *El Espectador* se hace eco y comienza a dar la noticia en el nº de 4 de septiembre mostrando su extrañeza y presumiendo la inocencia, aunque sin pronunciarse a la espera de más noticias. El 6 ya lo vincula a una conspiración oculta: “y si alguna cosa columbramos en medio de estas sombras es que el general Riego se encuentra víctima por segunda vez de intrigas y maquinaciones sordas”. En el de 12 transmite el pesar de la Milicia Nacional de Zaragoza, “de la que es coronel”.

campana contra los exaltados, parece no ofrecer dudas. Desde luego, no las ofrecía a las Cortes que se pronunciaron al efecto en las sesiones del 12, 13, 14 y 15 de diciembre de 1821, que aprobaron el dictamen de la comisión acusando la inconstitucionalidad de lo actuado por el Ministerio. Pero fue asimismo vigorosamente criticado por los moderados, en particular los anilleros Martínez de la Rosa y Toreno, siempre prontos a aprovechar cualquier ocasión en defensa de su Ejecutivo fuerte y el innato poder del rey.

A este respecto, adquiere una singular relevancia por su influencia en el proceso, la crisis de gobierno presentada por la dimisión del secretario del despacho de la Guerra Moreno Daoiz a finales de agosto de 1821 y su sustitución, primero por Rodríguez Contador, designado unilateralmente por el rey y muy contestado en los medios por su edad y anticonstitucionalismo, y, tras su renuncia, por Sánchez Salvador, próximo a los anilleros y al que las Cortes censuraron directamente en la sesión del 13 de diciembre citada por dos infracciones a la Constitución⁷⁴.

Aunque este último nombramiento fue entusiastamente celebrado por algunos periódicos moderados⁷⁵, en realidad, Salvador era uno de los tres gene-

74 Estanislao Sánchez Salvador era, en efecto, hermano de Ramón Sánchez Salvador, coronel de infantería del Regimiento España y diputado a Cortes por Soria en las elecciones de 1820. ACD, *serie documentación electoral*: 6 n° 27. Aparece como uno de los 101 miembros originales de la Sociedad del Anillo de Oro en el apéndice al Reglamento de la misma. La contestación del mismo a la acusación de infringir la Constitución, DSC, sesión 13 de diciembre de 1821, p. 1266.

75 “Las gentes sensatas y los militares dignos de este nombre, celebrarán sobre manera este nombramiento por haber recaído en un oficial esforzado, un general inteligente, un constitucional por principios, un buen padre de familias y en una palabra, un excelente ciudadano”. *El Imparcial*. 11 de septiembre de 1821, pp. 6-7, periódico que se había mostrado abiertamente hostil a Contador. Esta crisis pone de manifiesto uno de los más controvertidos episodios de la época toda vez que el rey nombra al primero sin contar con los secretarios del Despacho (RD de 23 de agosto de 1821, *Gaceta de Madrid* 26/08/1821, pp. 1289 a 1290). A este respecto, escribía *El Espectador* del 5 de septiembre: “Nos aseguran que la diputación permanente de cortes ha representado enérgicamente á S. M. sobre los nombramientos últimos de ministros de la guerra, con los que no se ha contado con los demás secretarios del despacho. No alcanzamos porque estos señores continúan en sus sillas, al ver de una manera tan terminante no merecen la confianza del rey, que ni les ha consultado para el nombramiento de uno de sus colegas ni ha elegido S. M. a ninguno de los que le han propuesto”. Este ministro dimitió el 4 de septiembre. Por RD de 9 de septiembre 1821, nombra al mariscal de campo don Estanislao Sánchez Salvador para secretario de estado de Guerra por dimisión de Balanzat. El RD de concesión de la media firma es del

rales, con el Conde de Calderón y Fournas, a los que Riego mandó aprisionar en enero de 1820 por su radical oposición al movimiento constitucionalista⁷⁶. Al margen de su trascendencia en la marcha general del Trienio, en lo que aquí interesa, la aludida relevancia viene dada porque, en su condición de ministro de la Guerra, era únicamente a él a quien correspondía ver y resolver en primera instancia las reclamaciones del general asturiano, una vez que el rey le concedió la “media firma”. Por lo demás, las remociones afectaban asimismo a autoridades intermedias, como la que ocurrió en Madrid con la destitución del jefe político Copons por orden del secretario del Despacho de la Gobernación de la Península, Ramón Feliú⁷⁷.

16 de mismo mes. GM, 20 de septiembre de 1821. Con relación a los mismos se lee en el Suplemento al nº 5 de *El Zurriago*: “En nuestra opinion el Rey constitucional debe separar al general Salvador del ministerio de la guerra: si S. M. no lo hace así, las Córtes deberán exigir en su día la responsabilidad personal al ministro que autorizó su nombramiento; y ese mismo general sin esperar a que el Rey ó las Córtes lo separen, si tiene delicadeza está en el caso de renunciar inmediatamente [...], hasta purificarse de las imputaciones que le hace el general Riego en su citada representación de 2 de septiembre. Si no adopta esta resolución el general Salvador, gravitarán indudablemente sobre su opinión cargos más enormes, y no faltará quien atribuya su permanencia en el ministerio á ideas hostiles contra el sistema constitucional”, p. 6-7.

⁷⁶ A. T. *Historia de la Revolución en España en 1820*. Cádiz, Imprenta de Carreño, 1820, p. 15.

⁷⁷ Los medios próximos a los exaltados atribuyen la destitución a la negativa de Copons de acatar la orden del ministro sobre el cierre de La Fontana de Oro, que sí llevó a cabo de manera inminente tras su nombramiento San Martín. *El Zurriago*, nº 5, p 3, con una durísima crítica a Feliú y nº 6, p. 12. La clausura del centro simbólico de los exaltados fue seguida por el arresto arbitrario del dueño de la misma, Gippini, con el pretexto de que en la misma habían hablado diversos oradores, quienes contaban con la preceptiva autorización de su antecesor. La causa fue sobreseída, pero la defensa de Gippini pidió indemnización por ataques a la libertad personal y restricciones a la libertad de expresión, rechazando la argumentación de San Martín quien había ordenado el cierre en base a que la autorización “era un acto personal del Jefe Político” y, en consecuencia, invalidaba los permisos anteriores. Vid. *Causa formada contra Juan Antonio Gippini dueño del café de la Fontana de Oro en suposición de haber permitido hablar públicamente en la tribuna de dicho café a algunos individuos de aquella reunión sin conocimiento ni noticia del escelentísimo señor gefe de la capital José Martínez San Martín / y defensa por escrito del mismo Gippini*. Madrid, Imp. De E. Aguado, 1821. En la sesión del 14 de diciembre de 1821, Feliú explicaba las causas de tal destitución: ponerse de parte de los que calumnian y abusan de la libertad de imprenta, de confesarse anticonstitucionalista y de proximidad con Elío. DSC, sesión 14 de diciembre de 1821, p. 1282. En base a estas imputaciones,

En lo que afecta al protagonismo del gobierno, los acontecimientos están determinados por la inmediatez de las elecciones de diciembre para las que los exaltados venían movilizándose con una extremada diligencia⁷⁸. Preocupado y temeroso de su triunfo, dispuesto a utilizar todo lo necesario para evitarlo, el ministerio Bardají había remitido a principios de agosto por orden del ministro Feliú, el “hombre fuerte” del mismo, una circular a todos los jefes políticos en la que directamente les conminaba a intervenir en el proceso electoral. Aunque en su día la orden se mantuvo en estricto secreto, pronto circuló su contenido y se supo que era la contestación oficial a las listas de candidatos que habían elaborado los exaltados. La reacción por parte de éstos fue inmediata y desde la tribuna de *La Fontana de Oro* se pronunciaron arengas de rechazo a esta intervención del Ejecutivo considerada como un escándalo anticonstitucional. Surgió así una polémica acerca de la legalidad y legitimidad de esta injerencia gubernativa de la que se hicieron eco los periódicos y a la que merece la pena prestar una sumaria atención.

El 17 de agosto *El Universal* publicaba la carta de “una persona” de cuya sinceridad y conocimiento respondían los editores. Se trataba de la contestación al discurso pronunciado por Juan Mac-Crohon Henestrosa en aquella Sociedad Patriótica. En ella el remitente afirmaba haber leído la orden y negaba que en la disposición del secretario del Despacho hubiera cualquier referencia a ese grupo. Argumentaba que había sido motivada por la *admirable anticipación* (cursiva original) con la que se habían realizado las candidaturas. Y como explicación al párrafo de la circular en el que, tras ordenar a los jefes políticos que “hagan conocer a los pueblos la utilidad de nombrar sujetos” adictos al sistema constitucional, literalmente se exponía que *aquellos no deben ser de los que la opinión pública designe fundadamente como promovedores de principios y opiniones exageradas* (cursiva original), el anónimo firmante añadía que tal alusión se refería exclusivamente a “los serviles”⁷⁹. En

Copons insta el 11 de marzo de 1822 ante las Cortes la apertura de un proceso de responsabilidad al ministro que le fue concedida. ACD, ES.28079. P-01-000037-0116. Las primeras gestiones de la comisión de Responsabilidad, de la que formaba parte Argüelles como presidente, el 19 y 20 de marzo. Ibi.

⁷⁸ Sobre este tema vid. la reciente aportación de Carantoña, Francisco, “Las elecciones de 1821, primer ensayo de competición de “partidos” en el constitucionalismo liberal español”, en *Historia constitucional* n. 21, 2020, pp. 63-105. El autor cuestiona la mayoría exaltada en la Cámara.

⁷⁹ El párrafo exacto era: “Que por el influjo de personas de ilustración y patriotismo procure ilustrar la opinión pública para contrarrestar las *diferentes* intrigas que se mue-

todo caso, siguiendo estas instrucciones, las autoridades provinciales emitieron las correspondientes órdenes, alguna de las cuales apareció en periódicos de alcance nacional, y aplicaron los medios disponibles para neutralizar al enemigo político.

En los días sucesivos, *El Universal* continuó sacando a la luz artículos en los que defendía la legitimidad del gobierno para influir en las elecciones. Apelando a la autoridad de Constant defendía, sobre todo en el quinto y último de la serie publicado el 24 de agosto, que no sólo *podía*, sino que *debía*, bien creando las listas o bien disponiendo los requisitos que debían reunir los candidatos. Y aunque es cierto que no recomendaba la primera porque “lo que puede ser útil hoy, mañana puede resultar funesto”, entendía que bajo ningún concepto podía renunciar a la segunda, pues entonces estaría haciendo dejación de su “deber de vigilancia”. Para entonces, los autores ya conocían la respuesta de Mac-Crohon que, a su entender, no afectaba en nada a sus conclusiones⁸⁰, por cierto, diametralmente contrarias a las que exactamente un año antes había sostenido el periódico con ocasión de sus comentarios al artículo 97 de la Constitución⁸¹. Y, sin embargo, la refutación se basaba en sólidos fundamentos del derecho público de la época y en el espíritu de la Constitución reflejado en la orientación que al régimen electoral había dado el constituyente. En este sentido, manifiesta la esencia última de ese primer constitucionalismo en el que la representación nacional descansa en la decisión libre del ciudadano, por consiguiente, no vinculado a la disciplina de partido y el principio de liderazgo.

Tales son, de hecho, los dos puntos básicos sobre los que articula Mac-Crohon su respuesta, publicada por *El Espectador* el 2 de septiembre⁸². En

ven en algunas provincias, en donde con una *admirable anticipación* se han hecho correr las listas de las personas que se designan para diputados” (cursiva original). *El Universal*, 17 de agosto de 1821, p. 884.

80 Los artículos fueron publicados el 17, 22, 23 y 24, si bien los más interesantes son el primero y el último.

81 Allí en efecto, en relación a la intervención gubernamental se leía, entre otras cosas: “¿Cómo podrá reusarse á la dirección que se indique la mano que acaba de besar, y de cuya largueza se promete su felicidad?” y “Es tan difícil resistir á una seducción de la esperanza, y se necesita tanta entereza para no someterse al imperio del poder, que se puede. contar por cero el número de diputados empleados capaces de substraerse del influjo ministerial”. “Artículo 97”, *El Universal*, 17 de agosto de 1820, primera página.

82 “Para evitar descender a los pormenores fijaré las cuestiones sobre si es conveniente a las naciones constituidas bajo la forma de gobiernos representativos el que

relación con el primero, concluye que del propio articulado de la ley fundamental –título tercero, en particular el capítulo 5º– se desprende la prohibición de la interferencia del gobierno por cuanto el constituyente, acertadamente, había tenido presente un elemental principio de los gobiernos representativos: mientras el Legislativo busca afianzar los derechos de las naciones y por tanto de los individuos, el Ejecutivo pretende exclusivamente “ensanchar su poder”. Permitir esta intervención, por tanto, no solo redundaría en una pérdida de libertad de quienes son responsables de elaborar las leyes que deben proteger a todos por igual, sino que introduce la arbitrariedad. Esta es asimismo la razón por la que rechaza la propuesta de Constant, cuyo *Curso de Política Constitucional* cita, en estos extremos, pues su aplicación desencadenó el penoso panorama de las cámaras francesas, a las que describe como producto final de su sistema electoral y de “las intrigas de los ministros en los nombramientos”⁸³.

Mac-Crohon remataba su contribución con un contundente párrafo: “El cargo que se hace al señor ministro de la gobernación no es el de que exhorte a los jefes políticos para que cuidasen de que las elecciones se hiciesen con arreglo a la Constitución, sino el de que pretenda influir en que a las personas sean señaladas calidades no exigidas por ley alguna”. Sin expresarlo explícitamente, acusaba a Feliu de llevar a cabo actos inconstitucionales por arrogarse competencias que solo pertenecían a las Cortes.

Apenas una semana más tarde, el 8 de septiembre, y en plena efervescencia del “asunto Riego” sobre el que había evitado pronunciarse, *El Censor* publicaba un sólido artículo de fondo cuyo análisis coincide con el último,

los poderes ejecutivos influyan en las elecciones de sus diputados y si según nuestra Constitución le es permitido al nuestro hacerlo”. *El Espectador* publicó íntegro el texto, firmado y fechado el 31 de agosto, como suplemento a su nº del domingo 2 de septiembre de 1820.

83 “La representación nacional que la Francia sufre la debe al sistema con que se ejecutan las elecciones y a las intrigas con que los ministros influyen en los nombramientos”. Ibidem. En este sentido coincide con lo que *El Universal* exponía en su artículo de 17 de agosto de 1820 acerca de que se debía lograr que las autoridades “no coartasen la libertad de los electores, porque pudieran ganarse los votos por los medios que les proporciona su cargo o su autoridad”. Mac-Crohon era uno de los oradores que intervinieron en La Fontana de Oro en la sesión que dio lugar al arresto de su dueño, Gippini, por orden del jefe político San Martín. Por lo demás, el incidente fue seguido y censurado por *El Eco de Padilla* (el primero en divulgar la noticia) desde el 15 hasta el 20 de agosto, con un extenso y fundado artículo.

pero difiere sustancialmente en la solución. En él se califica con contundencia de corruptelas las injerencias gubernativas en las elecciones aunque, expone, son comunes en todos los gobiernos constitucionales porque lo que éstos, asentados en el clientelismo, buscan es disponer de un legislativo dócil que siga ciegamente sus directrices. Ciertamente permiten un partido en la oposición, pero lo único que éste puede hacer es “hablar” ya que, a la postre, las leyes no son una expresión de la voluntad general, sino de la del Ministerio. Admite que “el deber de los legisladores constitucionales consiste en disminuir cuanto sea posible la influencia ministerial en las elecciones” y, como Mac-Crohon, expresa que en la Constitución existen disposiciones muy sabias en orden a impedir la dependencia de los diputados del Ejecutivo en la parte dedicada a las elecciones. Pero, al mismo tiempo, asegura que cuanto más próximas están éstas, más ineficaces son los medios de que pueden valerse los votantes frente a los poderosos recursos que emplea el gobierno.

Se adoptaba ahí, como se advierte, una solución, por así decir, pragmática o en todo caso no comprometida, porque, tras las anteriores consideraciones y de afirmar que “los liberales solo se exaltan” cuando son atacados por el “poder o el privilegio”, para sus redactores esta influencia, por más que sea un atentado contra la razón, la justicia “y los derechos de la soberanía nacional”, parece ser un mal inevitable. A este respecto, no deja de ser, desde luego, ilustrativa la conclusión, de clara inspiración constantiana, dirigida a los gobernantes: “Renuncien á las leyes de excepción, renuncien á la monstruosa alianza del gobierno constitucional con la aristocracia, y tendrán una influencia ilimitada en el cuerpo legislativo”⁸⁴.

He seleccionado deliberadamente estas tres publicaciones porque, a mi parecer, reflejan con precisión las más importantes sensibilidades existentes en la época sobre el, probablemente, más conflictivo motivo de enfrentamiento constitucional. Esto es, la confrontación Legislativo-Ejecutivo, un tema poliédrico del que, en aquella época, las elecciones conforman una de sus facetas más evidentes y complejas.

Es, a este respecto, cierto que no existía en el ordenamiento jurídico es-

84 “La renovación del cuerpo legislativo”, en *El Censor* de 8 de septiembre de 1821. Son particularmente interesantes las pp. 262-63, 268 y 272. Constant en efecto, bien que en la época revolucionaria, pronunció un discurso en la Asamblea Nacional en el que denunciaba el “nuevo peligro que amenazaba [...] la clase de los privilegiados o al menos una clase próxima a los mismos que los privilegiados protegían”. Constant, Benjamin, “Discurso de 16 de septiembre (30 de fructidor) de 1797”, en *Écrits*, pp. 115 ss., p. 123.

pañol ningún precepto específico sobre este extremo, por lo que la discusión necesariamente se desenvolvía en un plano deontológico y, sobre todo, de los principios inspiradores del texto constitucional, resultando más complicada establecer la analogía a la que se aferran tanto Mac-Crohon como los redactores de *El Censor*. Sin embargo, sí eran legítimos los argumentos de naturaleza “intencionalista”, fundados en los propósitos y fines que perseguía el constituyente, que ambos utilizan y cuya infracción o ignorancia de los mismos, ya fueran estos primarios o secundarios, llevaría, en estricta lógica moderada, inevitablemente al caos⁸⁵. Y, desde tales puntos de partida, existe un “mal uso del poder”, realizado a través de mecanismos ocultos –en la medida que carecían de publicidad– y desde una posición privilegiada, que no solo no se ajustaba al espíritu y hasta a la letra de la Constitución, sino que denotaba un uso torticero de la misma.

Contemplada desde esta perspectiva, se comprende muy bien la operación contra Riego, articulada desde el propio gobierno sobre una base totalmente endeble (vincularle a una conspiración de dos revolucionarios republicanos franceses en Zaragoza). En buena parte debido a la publicidad a la que contribuyó él mismo, la trama fracasó, pero, de tener éxito, supondría un golpe irrecuperable contra los liberales defensores de la Constitución intacta, entre los que, desde luego, se encontraba y con los que se le relacionaba universalmente, en especial por el pueblo que unía los gritos Viva Riego y viva la Constitución.

Parece, pues, evidente que, desde el punto de vista político, el asunto se incardina dentro una calculada campaña que los moderados llevaron a cabo contra los exaltados, tanto dentro como fuera de las Cortes, a través de tácticas desacreditadoras que comenzaban por abatir sus símbolos más representativos entre los que figuraba el general asturiano. En su caso, sin embargo, por los sujetos intervinientes y la forma en que se había llevado a cabo, era palmaria la flagrante infracción de la legalidad al tiempo que ponía de manifiesto la arbitrariedad del gobierno en perseguir conductas delictivas.

Se trata, en este último caso, del comportamiento seguido por el Arzobispo de Zaragoza y su campaña anticonstitucional por diversos pueblos de la provincia, hecho que, como ya se ha expuesto, había sido el causante de la salida de Riego para efectuar una contracampaña en favor de la Constitución. Según consta en el aparato probatorio del proceso contra el teniente coronel Alcocer, la desarrolló con un profundo respeto, creando “tertulias patrióticas”

85 Constant, *Principes*, p. 65.

e, incluso, organizando ceremonias religiosas a las que asistió con la debida circunspección acompañado de su pequeña escolta.

Sin embargo, mientras el gobierno y Moreda, aplicando sus órdenes, llevaban a cabo una auténtica campaña de desinformación basada en noticias falsas sobre aquél, y aunque la conducta del prelado estaba expresamente condenada por los apartados 3º y, especialmente, 4º de la Ley del 17/26 de abril de 1821⁸⁶, no consta ninguna actuación al respecto del jefe político. Ni *ad extra*, denunciando su conducta ante el gobierno, ni *ad intra*, en el marco de la provincia, incoando una investigación o poniéndolo en conocimiento del fiscal para que iniciara de oficio el preceptivo procedimiento, a pesar de que una de sus atribuciones consistía, precisamente, en velar por su cumplimiento.

A pesar del tono represivo hacia el clero que se adopta desde 1821 por la beligerante oposición de alguno de sus miembros –del que son elocuente testimonio la Orden de 6 de abril y el Decreto XXI de 18 de mayo de ese año⁸⁷–, y de que este arzobispo tenía una acreditada fama por su combativo anticonstitucionalismo que se remontaba a las Cortes de Cádiz y se había recrudecido ahora⁸⁸; y no obstante las causas incoadas contra cargos eclesiásticos y

86 3º. Cualquiera español de cualquier condición y clase que de palabra o por escrito no impreso tratare de persuadir que no debe guardarse en las Españas o en alguna de sus provincias la Constitución política de la Monarquía en todo o en parte, sufrirá confinamiento en algún pueblo de las islas adyacentes bajo la inmediata inspección de las autoridades civiles y perderá todos su empleos, sueldos y honores ocupándose además sus temporalidades si fuera eclesiástico. 4º Si incurriese en el mismo delito un empleado público o algún eclesiástico secular o regular cuando ejerce su ministerio en discurso o sermón al pueblo, carta pastoral, edicto u otro escrito oficial será declarado indigno del nombre español, perderá todos sus empleos, sueldos, honores y temporalidades, sufrirá ocho años de reclusión y después será expulsado para siempre del territorio de la Monarquía. CD. T. VII, pp. 37 ss.

87 Orden de 6 de abril de 1821: se considera al episcopado cargo público de nombramiento del gobierno y por lo mismo comprendido en el art. 97 de la Constitución (es decir, no ser elegidos diputados en Cortes por la provincia respectiva) y Decreto XXI de 18 de mayo de 1821 por el que se hace extensivo a los eclesiásticos y militares el medio de conciliación que se prescribe para los demás ciudadanos, con las excepciones que se expresan (La orden encargando al gobierno su promulgación es del de 4 de junio siguiente). CD, T. VII, pp. 29 y 99 respectivamente.

88 Vid. a este respecto el excelente artículo de La Parra López, Emilio, “1820: Ruptura entre la jerarquía eclesiástica y el Estado Constitucional”, en *Historia constitucional*, nº 21, 2010, pp. 5-26; del mismo, “Cultura católica: confesionalidad y secularización”, en

existir una sólida doctrina entre los miembros del ministerio público acerca de que la inmunidad eclesiástica era incompatible con el Estado Constitucional y los clérigos debían acatar la ley y ser sometidos a los jueces legos tanto en materia civil como criminal porque su fuero quedaba limitado a estrictas cuestiones dogmáticas,⁸⁹ no hay constancia, al menos entonces, de ninguna actuación oficial respecto. En este sentido, no deja de ser altamente significativo que, justamente en aquel preciso momento, actos probados e imposibles de ignorar fueran obviados por las mismas autoridades competentes que se empeñaron en hacer parecer como delictivas conductas constitucionalmente impecables⁹⁰.

d. *El iter procesal y calificación jurídica*

En lo que concierne al principal objeto de este trabajo, conviene prestar

Miguel Ángel Cabrera y Juan Pro (coords.), *La creación de las culturas políticas modernas, 1808-1833*. Madrid/Zaragoza, Marcial Pons/Prensas Universidad de Zaragoza, 2014, pp. 140-148; Revuelta, Manuel, *Política religiosa de los liberales en el siglo XIX. Trienio Constitucional*, Madrid, CSIC, 1973; Teruel Gregorio de Tejada, Manuel, *Obispos liberales. La utopía de un proyecto (1820-1823)*. Lleida, Milenio, 1996 y Artola Renedo, Andoni, *De Madrid a Roma. La fidelidad del episcopado en España (1760-1833)*. Gijón, Trea, 2013, en especial, caps XV y XVI.

89 Así la sentencia en apelación dictada en el proceso contra el canónigo y arcediano, don Fernando Hermoso, de la catedral de Coria el 31 de julio de 1822 por conspiración. Vid., “causa de conspiración” en *Colección de las causas más celebres e interesantes de los mejores modelos de alegatos, acusaciones fiscales, interrogatorios y las más elocuentes defensas en lo civil y en lo criminal del foro español, francés e inglés* por una sociedad de jurisconsultos. Parte española, I. Madrid, librería de don Leocadio López Editor, 1863, pp. 73 ss. Se le condena en apelación por tentativa a 10 años de exilio en Mahón y pérdida “empleos, sueldos, honores y temporalidades”. Los comentaristas, por cierto, estiman la sentencia arbitraria por casar el fallo del tribunal inferior que lo condenaba a muerte en conformidad a la Ley de 17 de abril de 1821, lo cual bien puede servir de testimonio de que la legislación de Cortes distaba de aceptación general entre sus aplicadores, esto es, los jueces, tal y como se denunciaba habitual y abundantemente desde la filas exaltadas e incluso por individuos no pertenecientes a esta corriente.

90 Es a este respecto significativo que Feliú fuera elegido representante de la Junta de gobierno de Aragón según consta en oficio elevado el 25 de abril de 1820 a la Junta Suprema Consultiva del Reino. ACD. *Papeles reservados de Fernando VII*, H-03-T.41, F. 189-190. Es aceptada por ésta felicitando lo acertado de la elección de un “sujeto cuyas virtudes y acreditados talentos nos facilitarán inmensamente el acierto en los graves negocios”. Ibi, H-03-T.41, F. 189-191.

atención la estrategia seguida por Riego, desarrollada siempre en el marco de la legalidad, es decir, usando los mecanismos que ésta proporcionaba a cualquier ciudadano español. Incluido el derecho de petición a las Cortes. Así, tras la publicación de la RO y las proclamas acusatorias de Moreda, eleva el 7 de septiembre desde Lérida al secretario del Despacho de Guerra el aludido escrito donde, tras exponer literalmente “tengo derecho a ser oído”, reclama justicia y pide “que se nombre un tribunal para esclarecer los hechos”. La respuesta del secretario de la Guerra, Estanislao Sánchez Salvador, fechada el 15 del mismo mes es taxativa: “enterado S. M. me manda decir a V. S. que estando en sus facultades relevar de estos mandos a los comandantes y Gobernadores Militares como se practica sin ofensa de los que los han estado sirviendo ninguno puede tomar motivo de ello para pedir la formación de causa”.

Es extremadamente importante detenerse en el contenido de esta respuesta por cuanto es determinante en la orientación del caso. Como se observa, el ministro utiliza la estratagema de alterar el objeto de la solicitud al identificar su causa en la destitución y cambio de destino, hechos que Riego nunca impugnó, para justificar la legalidad de la disposición. Está, a este respecto, clara la intencionalidad gubernativa: al ignorar deliberadamente el contenido de la reclamación, fundamentada en el derecho a un “juicio *justo*” para recuperar sus vulnerados honor y dignidad protegidos por la Constitución en los términos prescritos por el ordenamiento jurídico, pretendía, infructuosamente como se verá, eliminar la legitimación activa y, con ello, el acceso a la jurisdicción civil, tanto la ordinaria como la especial de imprenta. Estas dos posiciones –la del Ministerio y la de Riego en calidad de actor– conforman la base de las contrarias calificaciones jurídicas que marcan la primera fase del procedimiento, cuyo desarrollo se expone a continuación.

El 22 de septiembre, ante la contundente negativa, escribe ya una exposición directamente al rey. El texto es extenso y es evidente que lo redacta bajo los efectos de una indisimulada indignación. Desde el comienzo expone con claridad su objetivo: reestablecer su dignidad personal estrechamente conectada al honor militar, seriamente quebrantados por las falsas y públicas imputaciones lanzadas contra él. No formaba parte del *petitum* protestar el cese, cuya legalidad presumiblemente asume dada la potestad regia de nombrar y deponer cargos, único aspecto en que se centraban las Rs Os, e insiste en que no era cuestión de ambición personal como demostraban las renunciaciones realizadas a cargos y prebendas, respecto a las cuales afirma “no haber

tenido contestación a los oficios” en que se presentaron, salvo en 1820⁹¹. El fin exclusivo de la solicitud es que se “abran las misteriosas páginas”, es decir, la publicidad de y el acceso a la prueba documental en la que el gobierno fundamentaba la imputación en base a la antijuridicidad de unos supuestos actos cuya comisión el ordenamiento tipificaba como delito de conspiración contra la Constitución.

Sin adornos retóricos, recuerda a Fernando VII que si bien la Constitución le permite disponer de la fuerza armada como más convenga, también “le niega totalmente la de causar daños o perjuicios a todo ciudadano Español en sus propiedades, personas y especialmente en su honor y buena reputación”. En otras palabras, proclama la inconstitucionalidad de lo que había ocurrido en Zaragoza: su detención ilegal y la sublevación de pueblos próximos a la ciudad. Finalmente, denuncia a Moreda por su proximidad a Elio y recusa al nuevo ministro, Salvador, por enemistad manifiesta al ser uno de los generales que se negaron por dos veces a secundar el levantamiento de Cabezas de San Juan no obstante ofrecerle la dirección del mismo. Tras mostrarle su leal adhesión y reconocerle las virtudes propias del primer rey constitucional de las Españas, concluye su representación pidiendo se le aplique la “justicia rigurosa” a la que todo español tiene derecho.

La respuesta llegó cuatro días más tarde por medio de una Real Orden firmada por el mismo ministro al que había recusado. El 26 de septiembre, en efecto, no sólo no se pronunciaba sobre lo solicitado, sino que le conminaba a que saliera “desde luego” con su cuartel de la ciudad a cualquier pueblo de su elección “en lo interior” de la provincia. El pretexto utilizado era “una epidemia en algunos puntos de sus inmediaciones”.

91 No solo a la renta aprobada por las Cortes sino también a la faja de mariscal de campo (hasta cinco veces) y las tres a la capitanía de Aragón, (en junio y agosto, al última el 27 de ese mes) sin haber obtenido contestación a los oficios de petición. Presentó reiteradamente las renunciaciones a los honores y cargos desde el primer momento como acredita el oficio que le remitió el secretario del Despacho de la Guerra, Amarillas: “Ministerio de guerra=He puesto en manos del Rey la cuarta renuncia que la muy recomendable moderación de V. S., que tan bien se hermana con su mérito, le ha llevado á hacer y S. M. me manda decirle, que necesitando la patria de los servicios de V. S. en el empleo de mariscal de campo de los ejércitos nacionales á que su Real bondad le ha elevado, no tiene por conveniente admitir su dimisión de él. Lo que comunico á V. S. de Real orden para su inteligencia, satisfacción, y demás que corresponda. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de mayo de 1820.=Amarillas”, publicado por la *Miscelánea de Comercio, Política y Literatura* nº 99, 7 de junio de 1820, p. 2.

No es posible establecer si esta respuesta influyó en la decisión de hacer uso del derecho de petición contemplado en el artículo 373 de la Constitución y elevar una exposición a las Cortes a primeros de octubre. Probablemente fuera una de las causas principales, dada la irrefutable postura gubernamental. En ella, además de reiterar las aludidas causas de la animadversión del ministro de la Guerra, expone con llaneza la flagrante discriminación con que se ha tratado su caso si se compara con la tolerancia mostrada hacia los obispos y arzobispos que con plena libertad conspiran contra la Constitución⁹². Tras confiar en que el “soberano Congreso” sepa “sondear los misterios ministeriales” –evidente alusión a las maniobras gubernamentales– reitera su petición de que ordenen la formación de un tribunal y la consiguiente apertura de causa. Aunque las Cortes extraordinarias habían abierto sus sesiones el 22 de septiembre, pasó en virtud del artículo 228 de Reglamento interior de Cortes a la diputación permanente y los secretarios de las mismas, según lo preceptuado por el artículo 41 del Reglamento –aprobado, por cierto, la víspera del cierre de las ordinarias⁹³– informaron a la Cámara de su existencia a través de un extracto, conjuntamente con las demás reclamaciones sobre infracciones de la Constitución.

Orgánicamente, su entendimiento correspondía a la *comisión de examen de casos* en la que, según el artículo 85 de esta última disposición, debía contemplarse la responsabilidad de los empleados públicos por denuncia hecha a los casos de infracción de la Constitución. Con todo, no es en modo alguno aventurado suponer que, a aquellas alturas, el asunto, en especial por los sujetos afectados, esto es, el gobierno y “el héroe de las Cabezas”, había alcanzado una tal magnitud que su tratamiento y solución suponían un reto que nadie quería asumir.

Así al menos se desprende del hecho de que la diputación, entre cuyos componentes Riego no contaba precisamente con simpatizantes y, por el contrario, había además de un obispo, conspicuos representantes de la Sociedad del Anillo de Oro, todos los cuales debían atender y encauzar las denuncias de sedición de un prelado y el comportamiento anticonstitucional de un mi-

92 “Arzobispos y Obispos disidentes pasean impunemente su desafección al nuevo sistema; ansiosa por último a cuantos estamos (sic) de libertad y por qué medio se está minando el orden glorioso que se construyó en el año de 20. Hablo a las Cortes de España y no necesito decir más”.

93 D. LXXXVII de 29 de junio, CD, T. VII, pp. 385 ss.

nistro afín a la Sociedad⁹⁴, lo tratase en Sesión secreta. No han llegado las discusiones llevadas a cabo en el seno de la diputación. Únicamente disponemos del extracto que le exigía el artículo 228 del Reglamento para dar cuenta a las Cortes y que es una transliteración del resumen que figura en el *Diario de Sesiones*. Y básicamente el mismo contenido del despacho que, firmado por Martínez de la Rosa en su calidad de secretario, se le dirige al ministro de la Guerra el 13 de octubre. A este respecto, resulta ilustrativo comprobar que en el escueto escrito la Permanente, aunque alude a la seguridad del goce de los derechos de cada ciudadano, que era la real y reiterada petición de Riego, no olvida apostillar en el oficio que el gobierno le envíe la documentación necesaria para acallar la opinión pública “tan varia en este punto”⁹⁵. El requerimiento no tuvo respuesta por parte del ministerio.

Entre tanto, el 6 de octubre, Riego recibía contestación a la exposición elevada al rey el 22 de septiembre y la respuesta venía por el conducto habitual: una escueta RO del secretario del Despacho de la Guerra, Sánchez Salvador, en la que se le comunicaba lo siguiente: “me manda decir a V.S. como lo hago, que no habiendo variado en nada las razones que tuvo para dictar la contestación que le dirigí en 15 del pasado no halla ahora SM motivo para variar su resolución”. Aceptable desde el punto de vista formal, se trataba, sin embargo, de una disposición unilateral, que no fue sometida al rey, si bien dadas las circunstancias, el fallo de este no hubiera alterado en nada el contenido.

Decidido a agotar todos los recursos y apurar todas las vías, tras cumplir escrupulosamente la orden dada de alejarse de cualquier punto conflictivo,

94 Los integrantes de esta segunda diputación constituida como tal el 1 de julio de 1821 eran el Obispo de Mallorca, Terán, Calatrava, O. Daly, Martínez de la Rosa, Pau y Gutierrez Acuña. Fueron elegidos presidente Calatrava y secretario Martínez de la Rosa, ambos relevantes anilleros. DSC, sesión 13 de octubre de 1821, p. 287.

95 DSC. Ibi; ACD. Sesión de la diputación permanente de 13 de octubre de 1821. El oficio enviado al secretario de la Guerra que incorpora literalmente el contenido de las anteriores es el siguiente: “Al Secretario del Despacho de Guerra=Excmo Sr, Por los Señores Secretarios de las Cortes extraordinarias se ha pasado a la diputación permanente la adjunta representación documentada del General Don Rafael del Riego, y en la vista ha acordado la diputación que se le pase al Gobierno para que proceda en uso de sus facultades, esperando que no omitirá ningún medio en que le rectifique la opinión pública, tan varia en este negocio, y se asegure a cada ciudadano el goce de sus legítimos derechos. Dios Guarde a SE. Madrid, 13 de octubre 1821. Francisco Martínez de la Rosa. Diputado Secretario”. (Acuerdo sobre la representación de Riego acerca del robo de correspondencia como capitán general).

desde Castelló de Farfaña y desde Reus vuelve a elevar sendas representaciones a Fernando VII, la primera el 12 de octubre y la segunda el 20 de noviembre. En todas las presentadas –hasta cuatro– la petición es invariable: designación de un Tribunal de justicia, apertura de causa y estricta aplicación de la Constitución en lo referente a los derechos que entiende han sido vulnerados. Aunque, en lo sustancial, la del 12 de octubre obtuvo doce días más tarde la misma respuesta –aparece por vez primera ligeramente más fundada en Derecho que las anteriores–, lo cierto es que el apoyo jurídico se basa en las Ordenanzas militares del Antiguo Régimen, obviando deliberadamente la aplicación de la vigente Ley Constitutiva de Ejército aprobada unos meses antes⁹⁶. Aun así, en lo que aquí principalmente interesa, es importante detenerse brevemente en la del 20 de noviembre en atención al alcance de su contenido.

A este respecto, no se trata tanto de resaltar determinados aspectos materiales cuanto de identificar la asunción y asimilación de los rasgos consustanciales al primer liberalismo y, sobre todo, al constitucionalismo moderno, que aquí se muestran claramente, en particular en lo que afecta a la garantía de derechos. En concreto de dos que veremos repetidos a lo largo de sus escritos: la igualdad ante la ley y el derecho a un juicio justo. Consciente de que todo lo que le afecta va a ser publicado, es evidente que Riego plantea sus escritos con fines divulgativos destinados en todo caso a apelar al “Tribunal” de la opinión pública y, complementariamente, en aras a conseguir el arraigo de una Constitución que ya entonces era públicamente cuestionada y no solo por los absolutistas.

Su objetivo es indiscutible: la igualdad no entiende de excepciones –“la calidad de militar” no le priva del derecho a una causa justa– como dispone el artículo 4º de la Constitución. Y porque la última Real Orden se refería, aunque sin invocarlo expresamente, al artículo 250 de la misma que preveía la vigencia del fuero militar en determinados casos al mencionar por vez primera

96 RO “Ministerio de la Guerra. 1ª División=Secretaría del Despacho. Sección central. 24 de octubre de 1821: persuadido el Rey de que esta solicitud es sustancialmente la misma que V.S hizo desde el principio, se ha servido mandar recuerde a V. S. como lo ejecuto, la contestación que de real orden le di en 15 del anterior respecto a que debe V. S. estar convencido de la exoneración del mando militar de Aragón, ni le causa la menor nota ni exige manifestación de motivo que haya podido influir en aquella, ni es de los casos en que pueda solicitarse la formación de causa con arreglo a las reales órdenes de 12 de marzo de 1781 y 25 de abril de 1789”. Como se viene reiterando, los documentos proceden de la Exposición que elevó a las Cortes y se encuentra en el archivo del Congreso.

las ordenanzas del ejército que, por lo demás, no eran aplicables al caso, presenta una vez más su renuncia a todos los cargos, grados condecoraciones, en suma a su condición de militar si con ello consigue la apertura de juicio, por la jurisdicción militar o por la civil⁹⁷. Se trataba, en definitiva, de que “V. M. se sirva señalarme el Tribunal competente a que deba acudir para vindicar mi honor, el principal sino el único patrimonio de un soldado”. No sólo la igualdad o la libertad, es también la seguridad personal la que está en cuestión.

Para cuando redacta esta última representación al rey ya se conocían con detalle aspectos relevantes que habían sido desconocidos inicialmente. Así, en primer lugar, que la publicación el 4 de septiembre en el nº 3 de *La Antorcha española* por el jefe político de Madrid, Francisco Copons, de la disposición –en la que “equivocada o malintencionadamente afirma sin la menor duda que yo he sido inducido por malvados Extranjeros y Nacionales a dar pasos que comprometían mi gloria y el bien y la paz de la Nación”– había sido

97 “La calidad de militar, por más que vuestros consejeros os dicten lo contrario, de ningún modo puede privarme de tan general derecho, poniéndome a merced de viles detractores y haciéndome juguete de su implacable venganza; más para evitar semejante escollo y aun me atreveré a decir tamaño escándalo en toda la Nación, desde ahora renuncio todas las recompensas, grados y honores militares con que habéis tenido la bondad de premiarme, condecoraciones que detesto si ellas son incompatibles con mi libertad, con mi honor y con el derecho de poner en claro mi opinión y mi conducta atrozmente vulneradas”. Esta era una opinión completamente asumida por los militares constitucionalistas como testimonio la divulgación de la obra del coronel D. L. S. en *Manual de la constitución o Compendio razonado de sus leyes fundamentales, y de los derechos y deberes de todos los Ciudadanos*. León, Imprenta de Miñón. 1820 (2ª edic.). Escrita según el habitual modo de los “catecismos políticos”, el coronel explica que “entre nosotros debe entenderse por ciudadano el hombre libre que solo depende del gobierno de cualquiera ciudad o nación y no de otra persona o potentado”; que “los derechos legítimos que gozamos todos los españoles en virtud de la Constitución son [...] esencialmente cuatro pues aunque la Constitución no los expresa nominalmente todos están comprendidos en sus leyes sabias y justas [...] Primero la igualdad delante de las leyes. Segundo la libertad de hacer cuanto no prohíban las leyes. Tercero el goce de las propiedades protegidas por las leyes, cuarto, la seguridad personal afianzada en las leyes”. Y, finalmente, reviste interés la siguiente pregunta y respuesta: “Con que ahora nadie podrá disponer a su arbitrio de nuestras vidas y haciendas? Nadie absolutamente: ni las Cortes ni el rey ni sus ministros podrán ya despojarnos de nuestras propiedades, de nuestras vidas ni aun de la libertad de nuestras personas sino incurrimos por nuestros delitos en semejantes penas. Y aun en este caso deberá ejecutarse con las formalidades que prescriban las mismas leyes para todos los españoles sin distinción alguna de personas, clases ni jerarquías porque la ley será ya siempre entre nosotros igual para todos”, pp. 28-29 y 11-12.

instada por el propio ministro de la Gobernación de la Península e islas adyacentes, Ramón Feliu. Y, en segundo, que las protestas causadas por los acontecimientos de Zaragoza, en particular el cese de Riego, se habían extendido a los liberales de toda España⁹⁸. Ambos extremos son utilizados para acusar en términos contundentes al secretario del Despacho de haber llevado a cabo actos inconstitucionales por, primero, autoerigirse juez de una causa que le afectaba directamente y no aceptar la recusación. En segundo término, por la reiterada denegación de justicia en desprecio “del imperio de la ley” a través de una actuación que, expone, ni siquiera se hubiera producido “en los años más ominosos de vuestro reinado”⁹⁹.

Este era, asimismo, el parecer de quienes, sin identificarse con ninguno de los dos bandos y ajenos a los círculos políticos más implicados en el ejercicio del poder, clamaban a finales de 1821 por la unión de liberales y exaltados y veían la “caída” de Riego como una “resolución arbitraria e impolítica”. Para éstos, se trataba de un complot oculto, organizado por quienes ostentaban los más importantes cargos del Estado, muchos de ellos anticonstitucionalistas reconocidos, cuyo fin no era otro que trabajar “a mansalva en el esterminio y ruina de los bienes, vida y honor de los decididos patriotas”. Esta denuncia, reiterada hasta la extenuación por los defensores de la “intacta”, concluía con la petición de apertura de juicio para determinar la inocencia o culpabilidad del general asturiano¹⁰⁰. El público en general no entendía que se le denegase

98 Una prolija descripción de tales protestas, además de las relatadas por los periódicos de la época, puede encontrarse en San Miguel, *Vida de D. Agustín de Argüelles*, II, pp. 259 ss.

99 “Semejante aserto aun en la época de los seis años ominosos de vuestro Reynado en que fue desconocido el imperio de la ley no se hubiera escapado al Ministro más arbitrario sin que al mismo tiempo al reo verdadero o supuesto, si los reclamaba, se le concediesen los medios de defensa que la ley no puede dejar de dispensar al que es acusado”.

100 “Que los que condujeron al suplicio al generoso Lacy no ostenten su atroz e impúdica fisonomía en puestos distinguidos en tanto que inocente o culpable el valiente Riego reclama en vano o la cuchilla que ha de segar la tierra de un monstruo perjuró o que se aclaren los hechos que ocultan la gloria de un héroe digno de haber sido el restaurador de nuestras libertades. Perezca enhorabuena el culpable sean cuales sean los méritos pasados, pero no se presente el feo espectáculo de verlo juzgado por los viles esclavos del año 14, más dignos mil veces por su bajeza de un patíbulo que los Merinos y Gavarris, al menos estos hombres tan decididos no son tan temibles y mucho más generosos que los que prostituyendo su opinión trabajan siempre ocultos y trabajando a mansalva en el esterminio y ruina de los bienes vida y honor de los decididos patriotas”. C. de P. y V. *No hay moderados ni exaltados en España. Hay pícaros como siempre. Verdades que todos*

la vía de restablecer su honor y dignidad, por otro lado, un derecho que las Cortes habían reconocido en casos precedentes, como el ocurrido ese mismo año con el Duque del Infantado¹⁰¹ y cuya restauración expresamente invocaría unos cuantos meses más tarde el propio secretario del Despacho de la Gobernación Ramón Feliú, como se verá más adelante.

La representación, que fue entregada en mano por un hombre de confianza de Riego al ministro de la Guerra, surtió, desde luego, efectos. Salvador, en su respuesta de 1 de diciembre, acusa recibo de la misma y se compromete a someterla directamente al rey, ausente en El Escorial.

e. La influencia de la censura al gobierno de 15 de diciembre de 1821 y de la condición de diputado en la marcha del proceso

El hecho de haber salido elegido diputado por Asturias en las elecciones de 5 de diciembre de 1821, influyó de manera concluyente en el proceso. Su condición de representante de la Nación se imponía a la de militar y, en consecuencia, se producía un cambio en la adscripción de la causa. De esta manera, por una RO del mismo ministro fechada el día 10 se le comunica que el caso había pasado al Departamento de Gobernación de la Península por “corresponder(le) al citado ministerio” para que fuera su titular quien la sometiera a la resolución de SM Pero es asimismo obvio que fue determinante la ya aludida censura aplicada al gobierno los días 12 a 15 de diciembre de 1821, en la que su caso fue uno de los principales apoyos para pedir la dimisión del gobierno por un particularmente severo Calatrava¹⁰². Un mes más

conocen y nadie ha dicho hasta ahora. Dedicado a los verdaderos amantes de la Patria por un jubilado. Madrid, Imprenta de don J. Ramos y compañía, 1821, pp. 4, 5, 8, 11-12. Es igualmente significativo que para el autor, al igual que para muchos liberales, a los magistrados antiguos, unos buenos conocidos y otros propuestos por el Consejo de Estado, debió habérseles exigido, en todo caso, pruebas de adhesión al sistema p. 12.

101 *Representación del Duque del Infantado al Congreso de las Cortes sobre infracciones a la Constitución.* Madrid, Imprenta de don Francisco Martínez Dávila, impresor de Cámara de SM 1821. No está de más reproducir el encabezamiento de su Representación a las Cortes, muy ilustrativo en relación con los motivos de Riego: “Exmos. Señores.= El que recibe una ofensa pública, y experimenta una injusticia notoria sin manifestarse sensible á uno y otro, acredita con su silencio, que no tiene pundonor, que desprecia la opinión de las gentes, ó que es un pusilánime, dando motivo á sospechar que no está ageno á toda culpa”.

102 Con motivo de las revueltas sucedidas en toda España, en particular en Cádiz, el rey pronuncia un discurso de condena para cuya contestación las Cortes designaron

tarde, el 11 de enero de 1822, su sustituto, el interino Francisco de Paula Escudero, le confirma, también por RO, que el asunto ya está en el ministerio de Gobernación.

El 24 de enero de 1822 cayó el gobierno Bardají y fue sustituido por el del Marqués de Santa Cruz que duró apenas un mes. El 28 de febrero el rey nombró un nuevo ministerio presidido por uno de los más combativos anilleros, Martínez de la Rosa. Es probable que, no obstante el signo político del Gabinete, Riego confiara en la imparcialidad del nuevo secretario de la Guerra, Balanzat Briones, quien, a diferencia de Salvador no era anillero y había ejercido

una comisión especial integrada por Muñoz Torrero, el obispo de Mallorca, Moscoso de Altamira, Calatrava, Vicente Sancho, Ramón Losada, Victorica, Fernández Golfín, Juan Francisco Zapata (cinco de ellos pertenecían a la Sociedad del Anillo de Oro: Altamira, Calatrava, Losada, Victorica y Zapata, estos dos últimos sacerdotes) que debía dar respuesta a dicho discurso. Utilizando la destitución de Riego, aunque sin nombrarlo –y por el que además no sentía demasiada simpatía (vid. Ramírez, Pedro J., *La desventura de la Libertad. José María Calatrava y la caída del régimen constitucional español, 1823*. Madrid, la Esfera de los Libros, 2014)– en nombre la comisión el diputado extremeño rebatía a Feliú y pedía la dimisión del gobierno diciendo: “Yo al menos ... ni desconozco la facultad que tiene el rey para dar y quitar esos destinos hubiera usado de ella con mucho miramiento para alejar la idea de que el gobierno la había ejercido por capricho Pues qué ¿es lo mismo tener una facultad que abusar de ella? ¿No se pueden y deben evitar los extremos? ¿No hay el justo medio de usarla con la prudencia necesaria para que no se diga que se procede arbitrariamente? Y si no se ejerce de este modo ¿podrá extrañarse que reconociéndose la facultad se censure su mal uso? Pero supongo que sea justísima la remoción y que en ella por si sola nada haya que llamar la atención pública: ¿no debía llamarla precisamente la coincidencia de esa medida con circunstancias que tanto comprometían el honor y concepto de la persona de quien se trataba? ... ¿No se han concebido temores y sospechas? ¿No se ha clamado en todas partes contra el silencio del Ministerio?... es imposible que nieguen los Sres Secretarios del Despacho que su proceder en esta parte ha sido una de las causas que más ha contribuido a ponernos en el estado en que nos vemos (corrobora la comisión que no se pronuncia sobre el fondo sino solo por el silencio del Ministerio) ... este proceder ha dejado al Ministerio sin opinión, sin confianza y por consiguiente sin fuerza moral... paréceme por tanto que si el amor al bien de la patria los anima tan ardientemente como creo, deben persuadirse que no les queda mejor recurso que abandonar sus puestos”. DSC, sesión 13 de diciembre de 1821, p. 1254. Este duro pronunciamiento, inusual en él, e insistencia en la remoción del gobierno, acaso permitiera sospechar el interés en un cambio que solo beneficiaría a los anilleros, como de hecho sucedió a la caída del gobierno el 22 de enero siguiente, pues el de Pando fue testimonial. En todo caso, la Cámara estaba dividida como se reflejó en la votación del 15 diciembre 1821, en que se aprobó el dictamen de la comisión, por 104 votos contra 59. DSC, sesión 15 de diciembre de 1821 p. 1308-9.

brevemente como interino en el mismo cargo durante los dos gobiernos anteriores, porque el 19 de abril le dirigió, redactada en tono más circunspecto y contenido que en los anteriores escritos, su última y breve exposición. En ella se limita a denunciar la superación por el gobierno de los plazos de resolución y a solicitar que se dictara una providencia sin dilaciones. Es de señalar que, a pesar del largo tiempo transcurrido y que para él era una cuestión de absoluta relevancia, Riego no llevó a efecto ningún trámite durante el periodo de su presidencia de las Cortes.

El nuevo ministro no solo aceptó y dio curso a la petición sino que el 11 de mayo le responde directamente en una muy interesante RO cuyo contenido resulta altamente esclarecedor, en la medida que revela hechos cuasi delictivos perpetrados por el propio gobierno.

Balanzat, en efecto, comunica que con fecha de 29 de abril trasladó copia de su escrito al secretario de la Gobernación de la Península, Moscoso de Altamira, quien, a su vez, le respondió que en su ministerio no había constancia de los documentos requeridos (la última representación de Riego y la Real Orden de 10 de diciembre en la que se le comunicaba el traslado a Gobernación), en vista de lo cual sometió el asunto a SM que ordenó que se solicitara informe al anterior titular de Gobernación, Ramón Feliu. Se manifestaba así un abuso de poder a través de una manipulación sin precedentes cuya responsabilidad o bien recaía en el actual secretario de la Gobernación que ocultaba la información, o en Feliu, quien presuntamente había ordenado su destrucción o desaparición, o más simplemente, la había llevado consigo al abandonar el ministerio.

En todo caso, en virtud de lo ordenado por el rey, este último redactó el informe requerido. Sobre el mismo cabe decir que, aun aplicando grandes dosis de benevolencia, resulta indigno del que fuera un notable diputado gaditano y miembro entre los más combativos del entonces denominado “partido americano”. Compendiando un escrito que se caracteriza por su cobardía para justificar la autoexculpación, Feliú reconoce que reclamó en Consejo de ministros el entendimiento del asunto que planteaba Riego, y acerca de la RO de 10 de diciembre, alega que o no existió o posteriormente se perdió. “No trato por esto de inculpar a nadie acerca del extravío o desaparición de la mencionada orden si llegó a existir: atribuyan a mí solo, pero sobre repetir que no la he visto [...]”. A continuación pasa a analizar el fondo de la cuestión representado por la petición de Riego, documento acerca del que asegura que “no lo tiene a la vista” aunque “entiendo que se reduce a quejarse agriamente

de una real orden comunicada por mi conducto en 4 de septiembre del año anterior a D. Francisco de Copons, Jefe Político que era de esta Provincia”.

f. Modificación de la calificación jurídica introducida por el gobierno

Finalmente, como se observa, en las instancias gubernamentales se reconocía que la demanda de Riego no se fundaba en el cese, como hasta entonces había sostenido el ministerio, sino en injurias cursadas contra él. Sin ese apoyo legal, se trataba ahora de justificar un acto de gobierno que revestía caracteres delictivos. Y lo hizo del siguiente modo

Según Feliú, fue el propio Copons quien le preguntó si había algún modo de calmar a la población agitada, o, en sus propias palabras, de “ilustrar al pueblo en un caso apurado (subrayado del autor) de la causa que motivó la separación de aquel General a fin de que este fuese uno de los medios para restablecer el orden”. En esas circunstancias el secretario afirma que consultó al rey quien le aseveró que solo en un caso apurado podía comunicar al público “que el Gobierno ha tenido poderosas razones para persuadirse que algunos malvados nacionales y extranjeros inducían al general Riego a dar pasos que comprometerían su gloria y el bien y paz de la Nación: y para evitar tan funestos resultados doy &^a”.

Siempre según el ex secretario de Gobernación de la Península, actuando *motu proprio*, Copons publicó la RO dictada por él mismo alterando los tiempos verbales de inducían y comprometían por inducieron (sic) y comprometían, lo que modificaba sustancialmente el significado y hacía aparecer como culpable al general Riego que, obviamente, no lo era. Abundando en esta tardía exculpación, deliberadamente sustituía la discrecionalidad propia de los actos políticos reconocida al Ejecutivo por los inquietantes argumentos en los que se fundaba la vieja Razón de Estado, totalmente incompatibles con un sistema constitucional. De esta manera, “las poderosas razones”, aunque inexistentes, por las que el gobierno acusó a Riego de conspirador pertenecen al funcionamiento interno de las secretarías del Despacho, por lo cual no estaba obligado exponerlas. En apoyo de esta aseveración aportaba dos “indicaciones”: “1º, que mil veces hay razones poderosas para creer como cierto lo que realmente es falso” y “2º es evidente que en forma gubernativa pueda no dejar el más mínimo género de dudas las mismas razones o datos que no serían bastantes para decidir en un tribunal”.

No solo quedaban anulados todos los derechos y garantías procesales

como el derecho a un juicio justo, el principio de presunción de inocencia y la seguridad personal sino que, de esta forma, rompía con el sistema de equilibrio de poderes situando al Ejecutivo en un plano tan superior que incluso exoneraba a los secretarios del Despacho de cualquier responsabilidad. Tal y como defendían por entonces los llamados moderados anilleros.

Recurriendo a ejemplos extemporáneos, el lustre jurídico lo aporta su peculiar visión de la libertad de prensa. Según Feliu hubo una apropiación indebida y un mal uso, naturalmente por el jefe político, del artículo 371 de la Constitución que reconoce a los españoles el derecho de escribir publicar e imprimir sus ideas políticas, por cuanto la idea reflejada en la RO publicada por Copons, era suya y no de éste que la remitió al periódico alterada y sin circunscribirse a las circunstancias para las que fue dictada. Y en un alarde de pusilanimidad antológica con el fin de acentuar la exclusiva responsabilidad del jefe político añade “pero en las circunstancias que desgraciadamente tocamos, no es muy de extrañar que aquel Jefe Político hiciese otra cosa que lo que se le mandó”. Así las cosas, la conclusión iba de suyo: “1º que ni por el Gobierno ni por mí se dio a la orden de 4 de septiembre la publicidad que es la causa del resentimiento y de la queja del general Riego; 2º que esta se funda no presencialmente en la orden sino en una orden alterada hasta tal punto que según ella aparece como castigo lo que según la original fue una precaución= V. E. hará de lo que he expuesto el uso qº tenga por conveniente”.

Tras nueve meses de silencio y un sinfín de recursos ignorados, finalmente el ministro Feliu, el hombre fuerte del gobierno Bardají, el que disponía y ordenaba, el que había remitido a los jefes políticos una circular conminándoles a intervenir en las elecciones a favor del partido gubernamental, el auténtico cerebro de la operación aragonesa, exoneraba a Riego de todos los cargos, alegando razones según las cuales desde el jefe político de Madrid hasta el mismísimo rey eran los únicos fautores y responsables de tan desventurado suceso. En esos instantes hasta la inviolabilidad e irresponsabilidad regia tan arduamente defendida por los moderados y presentada como una base del primer constitucionalismo moderno, parecían irrelevantes o inexistentes.

Con todo, interesa destacar del informe un aspecto en especial en el terreno de los hechos. En una reacción especular con la que Argüelles había sostenido en septiembre de 1820, Feliú admitía que las acusaciones eran falsas y que habían sido la causa de la destitución de la Capitanía de Aragón. El informe debió ejercer tal desagrado que no consta la réplica –si es que la hubo– del secretario de la Gobernación Moscoso, en tanto que el Guerra res-

ponde inmediatamente a Riego en términos amables y, como ya se expuso, le confirma que la RO, cuya existencia negaban ambos secretarios, se encontraba en su Departamento.

g. *La causa ante los Tribunales de Imprenta*

Para Riego, esos documentos, que en sí mismos no revestían formalmente el carácter de una resolución, debieron suponer un agravio, no obstante su naturaleza privada. En todo caso, con esta exoneración administrativa concluye la primera, por así decir, fase de este proceso iniciado a instancias del interesado a principios de septiembre anterior. Durante el mismo, Riego utilizó, además de la mencionada difusión pública, principalmente a través de la prensa, todos los instrumentos jurídicos legítimos que el ordenamiento permitía a un ciudadano español y a un militar. Como tal recurrió al procedimiento arbitrado por la jurisdicción militar y presentó sus alegatos al rey a través del ministro de la Guerra. Como ciudadano, apeló a las Cortes y a la legislación de prensa regulada por *Reglamento acerca de la Libertad de imprenta* de 5 de noviembre de 1820 cuyo artículo 6-5º del Título Segundo tipificaba de abuso de la libertad de imprenta las injurias cometidas a través de libelos infamatorios contra conductas privadas y las que mancillaran el honor y reputación de las personas, calificándolas por su gravedad y estableciendo grados en las sanciones, conforme a los cuales al primero le correspondería pena de prisión y multa. (art. 23).

En virtud del artículo 35 de esta última disposición, Riego inició este proceso a instancia de parte ya que, frente a los subversivos y sediciosos que lo eran de oficio, los de injurias solo podía incoarlos el interesado¹⁰³. Por su parte la *Ley adicional* a ésta de 13 de febrero de 1822¹⁰⁴ no sólo incrementaba considerablemente las penas, sino que ampliaba el objeto del delito a cualquier indicación que permitiera identificar al injuriado aunque no constase su nombre. En este supuesto, la ley atribuía a los “jueces de hecho” la facultad de dirimir las cuestiones acerca de si en el texto existían o no elementos suficientes que permitieran una identificación inequívoca del agraviado a través de la interpretación, “según su conciencia”, de los hechos. Era éste un requisito necesario para dar lugar al juicio.

Carezco de datos, más allá de las noticias aportadas por el propio Riego,

103 Decreto LV de 20 de octubre de 1820. CD, T. VI, pp. 234 ss.

104 Decreto LXIX de 13 de febrero de 1822. CD, T. VIII, pp. 265 ss.

acerca de en qué preciso momento presentó la demanda de un caso cuya admisión dependía de un jurado. Es decir, de los jueces de hecho en los que, realmente, recaía la instrucción. Por esa misma fuente sabemos que el proceso se interrumpió una vez conocida la implicación del secretario del Despacho Feliú¹⁰⁵, ya que entonces quedaba fuera de su jurisdicción en virtud de lo dispuesto por los artículos 226 y 228 de la Constitución que regulaban la responsabilidad de los secretarios del Despacho y el capítulo XII (artículos 137 ss) del Reglamento de Cortes.

En todo caso, quedaba expedita la vía de la última fase: pedir a las Cortes la responsabilidad del ex secretario mediante un procesamiento que, en conformidad al Decreto de las Cortes, debía seguir las mismas formalidades que si estuviera en activo.

h. Incoación del expediente de responsabilidad al secretario del Despacho de Gobernación de la Península e islas adyacentes en las Cortes. Características

El vigente Reglamento interior de las Cortes, en efecto, en su capítulo XII “Del modo de exigir responsabilidad a los Secretarios del Despacho”, preveía cumplidamente los trámites a seguir. Como diputado en Cortes, se le reconocía esta facultad, además de la “de hacerle todas las reconvenciones que consideren justas” (art. 137) imponiéndoles la única condición de que la petición de responsabilidad debía llevarse a cabo en dos sesiones públicas (art. 138). Presentada el 11 de junio de 1822 por él mismo explicando las razones de la tardanza¹⁰⁶ y cuidadosamente redactada, comienza por exponer la razón de la misma.

105 “Delatado por mi este papel ante la autoridad competente como injurioso a mi buen nombre y habiendo declarado los jueces de hecho haber lugar a la formación de causa, empezada ésta y proseguida hasta que resultó ser lo denunciado cláusula de la Real orden comunicada por un secretario del Despacho fue ya entonces preciso abandonarla porque solo a las Cortes toca declarar que hay méritos para que se le forme a los secretarios del Despacho”. Riego, *Representación a las Cortes de 11 de junio de 1822*.

106 “Las Cortes seguramente se extrañaran que estando por concluir la legislatura me presente con esta exposición; pero debo advertir que desde el principio de octubre anterior representé sobre este asunto a las Cortes extraordinarias y en prueba de ello leeré un acta que se me ha franqueado por la secretaria en la que así consta. Yo he guardado silencio todo este tiempo; pero a principios del mes pasado traía esta exposición y el Sr. Álava, que entonces era presidente, me dijo que lo suspendiese hasta que se me contestase por el Gobierno. La contestación está aquí y la acompaño original, pidiendo a las Cortes

Desde el punto de vista que aquí interesa, reviste una innegable relevancia comprobar el cambio cualitativo que se produce en el objeto. Obviamente, no plantea su reivindicación desde la perspectiva de la inviolabilidad e inmunidad de los representantes reconocida en el artículo 128 de la Constitución, pues afectaban a hechos generados con anterioridad a su condición de tal. Se trata, una vez más, de la reivindicación del honor, pero ahora lo es del diputado porque, escribe, “el honor de cada uno de los vocales del Congreso es propiedad tan sagrada que no admite transacción, sacrificios ni cesiones”. Es decir, no se trata de una “propiedad personal” –categoría con la que en el primer constitucionalismo se incluían los derechos que posteriormente integran la esfera de la personalidad– porque no le pertenece en cuanto individuo, sino como representante de la Nación, de tal manera que quien ofende a un diputado, ofende a la Nación entera¹⁰⁷. Indirectamente, a través de esta defensa de la total integridad moral y cívica de los legisladores, venía a resaltar así la primacía del Legislativo. No en vano, como defenderá más adelante, tras incluirse entre los *verdaderos* (cursiva mía) amigos de la Constitución y de las “puras libertades de las Naciones”, es en éstas donde “reside esencialmente la soberanía y la facultad innegable de establecer las reglas del pacto social que asegure su tranquilidad interior y exterior”.

Desde luego, esta confesión no es un artificio retórico; sirve, por el contrario, para reafirmar su inquebrantable adhesión a la *intacta*. Y, asimismo, para poner de manifiesto la ya muy asumida y general convicción de los planes anticonstitucionales que se estaban forjando incluso en las filas liberales acerca de cuya existencia, expone, ya abrigaba sospechas “desde septiembre del año 20”. No vacila, a este respeto, en denunciar la oculta conjura en la que participaban “algunos de los primeros agentes del poder”, que actuaban impunemente para llevar adelante un plan que empezaba por la destitución de los cargos militares y civiles adeptos a la Constitución¹⁰⁸.

que todo pase a la comisión de Responsabilidad, para que en su vista diga lo que tenga por conveniente”. DSC, sesión 11 de junio de 1822, p. 1841.

107 “porque el honor del vocal efectivo sin dejar de ser propiedad privada y personalísima pasa a ser propiedad de la Nación puesto que el representante sin honor auténtico queda desautorizado, y que si consiente que este honor se menoscabe ofende a la Nación misma que desde que nombra sus diputados mira los honores individuales como honores del cuerpo todo y sufre los perjuicios en grado mucho más alto que la persona deshonrada”. Ibi.

108 “Estoy persuadido, ojalá que mi ardiente celo me engañara, de que mi exoneración y la destitución quizás de muchos acérrimos patriotas del Gobierno Político de las

La Cámara aprobó por unanimidad su pase a la comisión de Responsabilidad la cual, al día siguiente, 12 de junio, redactó una orden para que se pidiese al gobierno la entrega de toda la documentación y, en concreto, la orden original del 4 de septiembre remitida al entonces jefe político de Madrid. También el expediente abierto a instancias de Riego contra el periódico “en que se publicó la citada Real Orden, caso encontrarse en estado de poderse remitir, o en su defecto, testimonio íntegro o las Cortes resolverán lo que estimen más justo”. Los secretarios de las Cortes envían el consiguiente requerimiento al ministro de la Gobernación de la Península, pero éste no evacuó ningún informe.

En su lugar, las Cortes recibieron una nueva exposición, fechada el 15 de junio, de Feliú que, en términos generales, consiste en una parcial reiteración de la anterior pero con dos consideraciones relevantes: primero, que no se trata de un caso de responsabilidad ya que no se infringieron artículos de la Constitución o leyes; y, segundo, que de aceptar este tipo de reclamaciones, “se trabarían las facultades del Gobierno de una manera tal que no podría responder del orden público”. Tras responsabilizar de nuevo a Copons, al que ahora atribuye haber actuado por venganza por cesarle del cargo a petición de SM, concluye solicitando que se le pase el expediente abierto del que solo tiene conocimiento a través de los periódicos.

El 19 de junio se produce una segunda solicitud de las Cortes al secretario del Despacho de la Gobernación de la Península e Islas Adyacentes para remisión de documentación, que tampoco sería atendida.. En la segunda y última lectura de la representación de Riego, que por prescripción reglamentaria debía hacerse ante el pleno, llevada a cabo por Somoza el 27 de junio, a tres días de cierre de las Cortes, se apunta llanamente la causa de la morosidad: la ocultación connivente del gobierno de lo efectuado por sus antecesores¹⁰⁹.

Provincias y el mundo de las armas nace de un plan oculto anti-constitucional en el que están acaso indiciados algunos de los primeros agentes del poder, que concede nuestra Constitución al Monarca. Si no abrigara en mi pecho estos recelos devoradores, que desde septiembre del año 20 me atormentan a cada instante, si no viera que cada día se aumentan los males de nuestra patria y que pueden ser consecuencia sensible de este mismo plan que amenaza su total ruina o un trastorno social lamentable”. Ibi.

109 “Son pasados ya más de quince días y la comisión no ha podido todavía presentar su dictamen a la deliberación de las Cortes, porque el Gobierno no se ha dignado remitir aún los antecedentes y testimonios de la causa, que varias veces se le han pedido por los Secretarios de las mismas. ¿y esta inconcebible morosidad en dar cumplimiento a las superiores órdenes del primer y supremo del Estado, no es una prueba incontestable de que

No puedo reconstruir la evolución del proceso. Ni en las actas de la diputación permanente ni en las de las Cortes extraordinarias de 1822-23 ni en las ordinarias de este último año hay referencias al asunto y, por otro lado, tampoco existen las actas de la comisión para recomponer la evolución, probablemente perdidas en el sabotaje de 1823.

Por encima o más allá de la existencia de una resolución definitiva, lo que interesa destacar sobre todo es que los hechos probados a lo largo del proceso –de los procesos– conforman, a mi parecer, un testimonio elocuente de que en la incontestable fricción Ejecutivo-Legislativo que caracteriza al Trienio, el primero ignoró y menospreció sistemáticamente los requerimientos del segundo cuando afectaban a sus intereses. En resumen, procedió en ocasiones con un más que evidente desprecio de la legalidad, como, entre otros, testimonia este caso, a pesar de su pública trascendencia.

i. *Análisis jurídico-constitucional*

A diferencia del anterior, con el que sin embargo posee ciertos rasgos comunes, el Cese de la Capitanía General de Aragón reviste peculiaridades propias vinculadas a la *causa agere* del ministerio y, especialmente, al *iter* jurídico en que se desarrolló. Las “irregularidades” cometidas por, en palabras textuales de Riego en la representación que elevó a las Cortes, “usar por placer la autoridad”, indican con claridad hasta qué punto el Ministerio actuaba en aquellos momentos en contra de los principios inspiradores de la Constitución; principios acerca de los que el propio Constant decía que “no son vanas teorías escolásticas (sino) esas verdades admitidas que penetran gradualmente en las aplicaciones más circunstanciales e incluso en los más pequeños detalles de la vida social” y, por ello, merecían “respeto y obediencia”¹¹⁰. De hecho, su actuación en otros, pero especialmente en este caso, al menos en algunos aspectos, incluso violaba los mismísimos fundamentos de la concepción del gobierno en el constitucionalismo moderno.

Desde su posición privilegiada, el secretario del Despacho Feliu, el autén-

los actuales Secretarios del Despacho tratan de ocultar los extravíos de sus antecesores, oponiéndose abiertamente a los imprescriptibles y sagrados derechos de todo ciudadano consignados en nuestra Constitución? ¿No tendrá quizás el General Riego el mismo derecho que otro cualquier español a que se le administre justicia y nada más que justicia?”. DSC, sesión 27 de junio de 1822.

110 Constant, “Des principes”, en *Écrits*, 63 ss., p. 63 y 65.

tico cerebro del gobierno Bardají, buscó la neutralización del enemigo político impidiéndole concurrir libremente a las elecciones a través de mecanismos ocultos que implicaban oficialmente a las autoridades intermedias y, también, eliminando los obstáculos que se interponían para alcanzar el triunfo como podían ser figuras especialmente significativas. Fue este propósito lo que le llevó a incurrir en abuso de poder y a la realización de actos arbitrarios mediante el fomento de una campaña de noticias falsas e injuriosas y desinformación en base a inculpaciones sin base sobre el general, o la apertura de un proceso injustificado contra un militar, explicados en los epígrafes anteriores.

Los rasgos comunes vienen dados por la coincidencia en los hechos inculpatorios –de nuevo acusaciones de republicanismo– atentatorios contra el “sistema constitucional” y, de manera inequívoca, por el contexto general y particular en que se llevó a cabo.

En relación con el primero es incuestionable que se enmarca dentro de los objetivos perseguidos tanto por el rey y su círculo privado de consejeros como por un sector muy determinado de los moderados, en particular los anilleros, alguno de los cuales venía ocupando carteras ministeriales desde los mismos inicios del Trienio. Su irrenunciable oposición a los liberales partidarios de la Constitución *intacta* y su defensa de un sistema similar al de la *Carta* francesa de inspiración británica como sostienen Varela Suanzes y Fernández Sarasola y se denunció vehementemente durante el periodo sobre todo a partir de 1822¹¹¹, les llevó a actuar en ocasiones al margen de la Constitución, a infringir la misma y a cometer conscientes actos de inconstitucionalidad a través de decisiones erradas, y en ocasiones erráticas, que, a la postre, influyeron decisivamente en el desastre del año 23.

Un testimonio elocuente a este respecto es la política seguida en relación a los nombramientos que dependían del Ejecutivo, tanto civiles como militares.

111 “El asunto general de las conversaciones del día es la modificación que quisieran introducir en el pacto político de los españoles los enemigos de la libertad. Por desgracia es innegable la existencia de una facción, compuesta de hijos, indignos de la madre España, que proyecta corromper la pureza de la ley constitucional, para aliarse con el despotismo y cargar con las riquezas, los honores y el influjo. También es desgraciadamente cierto que una muchedumbre innumerable de gentes dóciles y sencillas se inclina á tan importante, medida, en la creencia de que con ella conseguiríamos la tranquilidad interior. Unos y otros fijan su mirada en la Carta francesa como un modelo que deberíamos adoptar y al que seria conveniente que nos arreglásemos para asegurar la libertad”. Ruiz del Cerro, Manuel, *La carta francesa con notas españolas*. Madrid imp. Calle de los abades, 1822, p. 1.

Los casos de la sustitución, por entonces, del jefe político de Madrid, Copons, por negarse a cerrar *La Fontana de Oro* y su sustitución por San Martín que la llevó a efecto inmediatamente o los sucesivos nombramientos, contestados hasta por la prensa moderada, en agosto-septiembre de 1821 de dos reconocidos anticonstitucionalistas como Rodríguez Contador o Sánchez Salvador para secretarios del Despacho de Guerra, son suficientemente ilustrativos.

Ciertamente, y todos los constitucionalistas así lo admitían¹¹², tales nominaciones eran formalmente impecables, ya que la libre designación era una facultad reconocida constitucionalmente o por la vía de las convenciones al rey y sus ministros, pero suponían *de facto* un atentado contra la Constitución al tiempo que ponían de relieve o bien su incompetencia o incapacidad, o bien la persecución y defensa de objetivos e intereses espurios de naturaleza claramente inconstitucional. Es decir, como gráficamente exponía *El Universal*, eran libres de nombrar a quien quisieran, hasta a un fraile, “pero si lo hiciera, ¿quebrantaría la Constitución? No por cierto; no quebrantaría ninguno de sus artículos; pero manifestaría bien claramente la intención de quebrantarlos todos, y daría á los enemigos de nuestro reposo, que con tanta rabia están viendo la marcha pacífica de nuestra revolución, un pretexto para hacernos creer que el Rey es incapaz de egercer los poderes que la Constitución le concede”¹¹³. Algo más de un año antes, Javier de Burgos se pronunciaba en términos similares y criticaba la “latitud” con que el rey utilizaba esta facultad¹¹⁴.

112 Tanto los moderados como los exaltados, así como la doctrina. Vid. Ramón Salas, *Lecciones de Derecho Público Constitucional*. Uso la edición del CEPC, Madrid, 1982 con introducción de José Luis Bermejo, lección XXI, “De los secretarios del Despacho”, p. 244 y XVI, “Del poder ejecutivo”, p. 114.

113 *El Universal* de 6 de septiembre de 1821, p. 2 en el interesante artículo “Entendámonos”. Sobre el tema vid. también *El Imparcial* y *El Espectador* de las mismas fechas, y de todos en los días sucesivos, donde se pide la dimisión de los secretarios del Despacho por no hacer cumplir al rey su obligación en relación a los nombramientos.

114 “Demostrada la facultad que reside en el Rey de destituir á los empleados que no sean del orden judicial, fáltanos hablar del modo con que convendría usar de ella, pues proclamando los principios generales, estamos muy distantes de aprobar la latitud que suele darseles. Estos principios deseamos que sirvan para afianzar el orden y no para turbarlo; no queremos que convertido un empleo en una propiedad, se perpetúe en él un hombre inepto ú corrompido, pero tampoco queremos remociones indefinidas”. *Miscelánea de Comercio, Política y Literatura* n.º 99, 7 de junio de 1820, p. 1, justamente en el número donde incluye la renuncia de Riego, por cuarta vez, a “la faja” de mariscal de campo y la negativa del rey a aceptarla, así como la composición del ejército de la Isla.

Esta práctica del Ejecutivo, que responde más bien a las exigencias de un, por así decir, “clientelismo partidista” esencialmente contrario a los principios del constitucionalismo moderno y a las propias bases de la Constitución, no se contraía únicamente a los cargos de naturaleza político-administrativa como los citados sino que se extendía a todos los demás. En particular, a los vinculados al poder judicial, “este poder terrible que decide del honor de los bienes de la libertad y de la vida de los ciudadanos, poder formidable que aunque emanado de el poder ejecutivo es independiente y absoluto en sus funciones”. Reiteradamente denunciada dentro y fuera de las Cortes desde los inicios del Trienio, las críticas se intensificaron a partir de finales de 1821¹¹⁵ y de 1822, año en que la conspiración para introducir el modelo de la *Charte del 14* trascendió al público, y abiertamente se clamaba por proveer estos cargos con constitucionalistas declarados, al tiempo que se pedía el cese inmediato de los muchos absolutistas nombrados para puestos clave en la administración de justicia¹¹⁶.

En este apartado se incluyen igualmente las destituciones llevadas a cabo a finales de 1821, de las que la de Riego fue la más notoria por la publicidad

115 Precisamente el abogado defensor de Gippini en el caso que tuvo una enorme difusión, incidía con especial vehemencia en este aspecto en su escrito, donde no faltaban las alusiones al caso Riego –“en Zaragoza se buscó lo que no había”–, con expresiones tan contundentes dirigidas al juez de primera instancia y a toda la judicatura en general por su connivencia con el Ejecutivo y autoridades políticas: “juez de primera instancia en vez de una obediencia ciega y como mercenaria al excelentísimo señor Gefe político, un juez de primera instancia que noblemente ejerciese su cargo”; “acaso (al juez) le dirigió ese deseo de armonía y uniformidad con los gobernantes que tantas y tantas veces puede ser perjudicial y ofensivo a la justicia y al derecho de los gobernados”; “esa multitud de jueces de primera instancia, los unos avezados al feroz despotismo que ejercieron, los otros no educados todavía en la carrera de la libertad que sigan por la carrera de la opresión que por una fatalidad es la primera que se presenta y la que más halaga al poder”. *Causa formada contra Juan Antonio Gippini*, pp. 8, 14 y 15, respectivamente.

116 “Un poder más inmediato y de más influjo en los derechos y las acciones personales de cuya armonía de funciones con las del gobierno se compone la vida del cuerpo político hemos creído llamar la atención publica sobre este poder que es quizá el lazo más firme y más robusto de la subordinación de la lealtad y de la obediencia es también en sus desórdenes el más fecundo origen de ansiedad, de discordia y de “perturbación civil”, era el poder judicial en aquellos momentos para el anónimo autor de *“Del poder Judicial y de la necesidad urgente de adaptarlo a la Constitución política por el autor del papel suelto la Nación y el Gobierno*. Madrid, imprenta calle de la greda, 1822, p. 3, al que asimismo pertenece la frase entrecomillada del texto.

que alcanzó, en parte por obra del afectado. Todas ellas manifiestan un calculado propósito que comenzaba por separar del servicio o cambiar de destino a los jefes y oficiales que se habían distinguido en la restauración de la Constitución en enero de 1820, aunque con ello se produjeron consecuencias irreparables. Los ceses, entre otros, de Riego y López Baños, ambos Capitanes Generales de Aragón y Navarra respectivamente, es decir, de territorios que, con Cataluña¹¹⁷, eran los más afectados por los movimientos sediciosos absolutistas, algunos fuertemente organizados en el Sur de Francia con el abierto apoyo del Gobierno de esa Nación, eran, simplemente, irracionales. No solo infringían la ley suprema que, como exponía en su alegato el ministerio fiscal en una causa de conspiración, es en los sistemas constitucionales “la utilidad común”¹¹⁸, sino que, como se decía hasta por los más moderados, suponían un atentado contra la libertad porque “la libertad no es un instinto ciego, sino una facultad que debe ser dirigida por la razón”¹¹⁹ y, precisamente por esto, eran actos contrarios “al buen gobierno y recta administración” que auspiciaba el texto constitucional.

En las Cortes esos argumentos pesaron constante y notablemente había cuenta la gravedad de una situación que el diputado Salvato comparó, alarmado, a “horribles explosiones de un volcán” y, con indisimulada indignación, preguntaba a la Cámara acerca de la tranquilidad con qué algunos se acercaban a su cráter al olvidar los principios que deben inspirar a los legisladores¹²⁰. Lo hacía en la sesión matinal del 31 de marzo de 1822, es de-

117 Vid., entre otros, Rújula, Pedro, *Constitución o muerte. El Trienio liberal y los levantamientos realistas en Aragón. (1820-1823)*. Zaragoza, Edicions del Astral, 2000.

118 “Causa contra el arcediano de Coria”, en *Colección de las causas más célebres*, p. 95.

119 Ibidem.

120 “Horribles explosiones de un volcan, nos acercaremos al cráter y plácida y tranquilamente nos calentaremos a las llamas que despide ¿Cómo es posible que podamos prescindir del espíritu de filosofía con que los legisladores deben examinar los males para atacarlos con mano fuerte y decidida, con arreglo á los principios de la verdadera legislación? Es evidente que en todas partes se han presentado oscilaciones; en todos puntos hemos visto atacadas las libertades públicas, ofendidos y atropellados atrozmente los libertadores de Ia España. Conocida es la atribucion de las Córtes de fijar todos los anos las fuerzas de tierra y mar que han de defender á la Nacion de sus enemigos exteriores o interiores: ¿y no estará en nuestra mano buscar todos los elementos y medios necesarios para remover cuantos obstáculos se opongan al bien y tranquilidad de la Patria? La indiferencia a mi vista seria un crimen indisculpable en los legisladores”. DSC, sesión del 31 de marzo de 1821, p. 62.

cir, el último día de la presidencia de Riego, la misma en que se discutió un asunto que indirectamente le afectaba, pues se trataba del ya aludido tema de la responsabilidad del secretario del Despacho Sánchez Salvador y Morillo en el consejo de guerra contra tres militares acusados de anónimamente de republicanismo y de participar en las revueltas de Madrid a causa del cese de la Capitanía General de Aragón. La cuestión vino a sumarse a otra de incuestionable importancia a los efectos que aquí interesan: la que se planteó en relación a la propuesta de Gómez Becerra acerca de la creación de una comisión de Tranquilidad Pública, que encontró la rotunda oposición de los moderados.

La subsiguiente discusión es altamente interesante, a pesar de la acritud del debate debido a las irreductibles posturas existentes acerca de la causa última, que no era otra que la que aquí se viene reiterando: la rivalidad Ejecutivo-Legislativo y la defensa de la hegemonía del primero por los moderados en contra de lo establecido por la Constitución¹²¹. Para la mayoría de los presentes era una cuestión de interpretación –o mala interpretación– del texto constitucional. En este caso, del artículo 171, donde se prescribían las facultades del rey, en especial, la “Novena. Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como más convenga”, que los moderados, en particular los anilleros, concibieron –y aplicaron– como una potestad ilimitada.

Fue, precisamente, en base a esta consideración como se llevaron a los ceses de militares y autoridades civiles partidarios de la “intacta”, pero con ello suscitaron la enemiga de sus opositores en la Cámara que los vieron como abuso de poder. En ese contexto, no sorprende que Oliver, apoyándose en la “interpretación conforme a derecho” que únicamente correspondía a las Cortes, presentara dos proyectos de Decreto en los que se prohibía al Ejecutivo llevar a cabo los mismos salvo en determinados casos y que afectaban tanto a los supuestos civiles como militares¹²². Ninguno de las dos propuestas prosperó.

121 Diputado Melo (moderado): “¿Acaso se ha creído que los poderes se han establecido para estar en una continua lucha, en una continua oscilacion, que tiene por necesidad que acabar con el menos fuerte? Señor, vuelvo á jurar que soy el primero que quiero que se vigile al Gobierno; pero quiero que al mismo tiempo se le respete. *El Poder ejecutivo es el áncora de los demás poderes, es su alma: el Poder ejecutivo es el que pone en juego todos los demás poderes, es el alma de todos ellos. ¿Delinque? Pues cástíguesele: mi voto será el primero cuando se trate de esto, y jamás faltará. Por consiguiente yo no puedo aprobar esta proposición*” (cursiva mía). Ibi, p. 62.

122 Proposiciones de proyecto de Decretos de: “el referido Sr. Oliver: Habiéndose interpretado equivocadamente el párrafo noveno del art. 171 de la Constitucion, y no pudien-

No sin razón, para los así llamados liberales exaltados, tales destituciones no eran sino un episodio más de una conspiración que se remontaba a los inicios de esta etapa y que, a pesar de sus reiteradas denuncias, se iba fortaleciendo cada vez más y más. En este sentido, las destituciones, en especial la de Riego, sobre todo por la forma en que se llevó a cabo, respondían a un plan premeditado destinado a desprestigiar a los exaltados y, más inmediatamente, a ganar unas elecciones para las que el gobierno Bardají-Feliu ordenó mediante una circular intervenir en las mismas a los jefes políticos que había nombrado, conculcando así, en opinión de Romero Alpuente, el auténtico significado de los procesos electorales constitucionales¹²³.

Para este diputado y jurista tales actos, como escribe en un opúsculo firmado el 18 de septiembre de 1821, es decir, en plena efervescencia de los acontecimientos, son susceptibles de responsabilidad en la medida que atentaban contra el mismísimo espíritu de la Constitución. Sin embargo, aunque defiende que la responsabilidad ministerial en España abarcaba con diferencia muchos más supuestos que en las demás naciones, incluidas Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, reconoce la imposibilidad de exigir la misma por la vía ordinaria debido a ausencia de ley y a la inexistencia de preceptos del texto constitucional específicos sobre la materia más allá de lo dispuesto por los artículos 226, 228 y 229, lo que, en contra de la opinión de otros¹²⁴,

do las Cortes desentenderse de fijar su verdadera inteligencia, usando de las facultades que les corresponden exclusivamente por los artículos 131, 359 y 372, pido que las mismas decreten lo siguiente: 1. La fuerza armada de que se trata en el párrafo noveno del art. 171 de la Constitución es la que forman los cuerpos del ejército, los regimientos, batallones, escuadrones, compañías y escuadras, sin que pueda darse la misma denominación á los jefes y oficiales individualmente. 2. En su consecuencia, el Poder ejecutivo, usando de las facultades que le concede el citado artículo, no puede suspender del mando, ni cambiar de destino á los jefes y oficiales conocidos con los nombres de vivos y efectivos, que tienen despachos con señalamiento de provincias, cuerpos o compañías en que deben servir, á no ser porque lo soliciten los interesados, ó por ascensos que admitan, o por formacion de causa que deba producir la suspensión". Para el nombramiento de los jefes políticos, se proponía que se realizara sobre una lista, elegidos por todos los ayuntamientos de la provincia. También contemplaba los casos de remoción. DSC, sesión 2 de marzo de 1822, pp. 67-68..

123 Romero Alpuente, *Discurso sobre la Suprema Junta Central de Conspiradores*, pp. 12-16.

124 Es, a este respecto, ilustrativa, la divergencia de interpretaciones acerca de la regulación de la responsabilidad ministerial en el ordenamiento español, como ponen de manifiesto, p. e., las siguientes opiniones: "No es conveniente enunciar que las responsabilidades constitucionales son por tardías inútiles o nulas". *Contestación que da Pedro To-*

suponía un impedimento para hacerla efectiva. Esto, no obstante, en modo alguno suponía, a su parecer, un obstáculo ya que, en su lugar, proponía su sometimiento a los jueces más duros e inflexibles y, en cierto modo, también más eficaces: el Tribunal de la opinión pública, “esta reyna del mundo que con mano fuerte e incorruptible quita la máscara a la intriga y a la arbitrariedad sean cualesquiera las formas con que se disfrace”¹²⁵.

Las divergencias de fondo en relación a la destitución de la Capitanía General de Galicia anterior son evidentes. Y no sólo porque el procedimiento fue incoado por el propio Riego, completamente ajeno al que se siguió en las Cortes un año antes, sino por la complicación que reviste, por la posible confluencia de jurisdicciones, por la propia evolución en la calificación de los hechos realizada por las instancias superiores más involucradas y la exigencia de responsabilidad de un ministro ante las Cortes.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico presenta una complejidad intrínseca promovida exclusivamente por los mecanismos utilizados por las autoridades gubernamentales. Éstas, como ya se ha expuesto en los anteriores epígrafes, proceden al cese apelando a las facultades reconocidas constitucionalmente, pero al mismo tiempo lanzan acusaciones públicas de conspiración contra la Constitución al denunciar su conexión con movimientos republicanos, aunque sin determinar el grado –colaboración, complicidad, autoría– de participación. A falta de una definición penal precisa en la normativa vigente, se acepta, al menos en algunas instancias¹²⁶, la que figuraba en el Diccionario

millio Albado al discurso que el ciudadano Juan Romero Alpuente publicó en septiembre último sobre la suprema junta de conspiradores contra el sistema constitucional y acerca de la responsabilidad moral y legal de los Ministros. Madrid, imprenta de doña Rosa Sanz 1821. Precisamente una de las mayores críticas que formula Ruiz del Cerro a la Carta francesa es, que a diferencia de la española, allí “No hay tal responsabilidad, puesto que los mismos vicios de la Carta y el influjo desmedido que atribuye al poder Real, han hecho ilusorio este artículo : de modo que á la hora esta no hay ninguna ley que determine quien juzga al ministro prevaricador, quién lo acusa , qué penas se le imponen, ni por que delitos”. Ruiz del Cerro, Manuel, *La carta francesa*, p. 15. Por su parte, Salas, quien se ocupa del tema en dos de sus lecciones, denuncia asimismo la precariedad legislativa y entiende que la materia es susceptible de regularse en una ley orgánica que sobre todo desarrolle los artículos 228, 229 y 230 y añade que le “parece muy justo que una vez dado el decreto de acusación (por las Cortes), quede el Ministro suspenso, pues no merece bastante confianza para fiarle funciones tan importantes”. Salas, “Lección XXI”, en *Lecciones*, p. 245-46.

125 Romero Alpuente, *Discurso sobre la Suprema*, pp. 27 ss. El entrecomillado en p. 39.

126 Fue el argumento utilizado por la defensa en la causa contra el arcediano de Coria y que la Audiencia aceptó. *Colección de las causas*, pp. 76 ss.

de la RAE “el acto de unirse secretamente algunos o muchos contra su soberano o gobierno”, hecho que confirman de forma inequívoca tanto el jefe político de Zaragoza como el de Madrid, actuando por órdenes del secretario del Despacho de la Gobernación de la Península. El primero, con su bando a la población y actuaciones posteriores a la publicación del mismo, ajustadas en todo a lo dispuesto por, en particular, los artículos 4º y 7º de la *Ley sobre el conocimiento y modo de proceder en las causas de conspiración* de 17 de abril de 1821¹²⁷. El segundo, a través de la publicación en la prensa de la Real Orden inculpatoria.

Todas ellas dejaban claro que Riego había intervenido activamente en la comisión de un delito que el Código Penal en proceso de redacción calificaría “contra la libertad de la Nación”, y, en consecuencia, cumplía el requisito *sine qua non* del artículo primero de la Ley de 17 de abril de 1821 *sobre las penas que habrán de imponerse a los conspiradores contra la Constitución e infractores de ella*¹²⁸. En él únicamente se consideraba sujetos activos a quienes llevaran a cabo una acción “directa y de hecho” destinada, entre otros supuestos que recoge, “a trastornar, alterar o destruir la Constitución, o el gobierno monárquico, moderado hereditario”, conductas ambas incluidas en la imputación de republicanismo. En este caso, se especificaba que eran reos de traición, correspondiéndoles la pena de muerte.

Sin embargo, más allá de impedirle la entrada en la ciudad, no se adoptó ninguna de las medidas que la ley disponía para estos casos, entre las que figuraba la prisión preventiva y la inmediata apertura de juicio que debía sustanciarse con preferencia a otras causas y sumariamente. Si bien esta evidente irregularidad del gobierno evitó a éste la complejidad que revestía en este supuesto el nombramiento de un consejo de guerra, necesariamente integrado por miembros de la Milicia Local y del ejército por estar ambos representados en la tropa que le impidió su entrada en Zaragoza, y, sobre todo, sacar a la luz las pruebas –o, más bien, ausencia de las mismas– en que se había fundamentado la imputación, ponía asimismo de manifiesto la infracción legal cometida por las autoridades al no proceder a la detención del acusado en los términos previstos por los artículos 2 y siguientes de esta última Ley.

Como se desprende de las actuaciones posteriores, esta circunstancia, unida a la retractación efectuada cuatro días más tarde de aquel episodio por el

127 Decreto VII de 17 de abril de 1821. CD, T. VII, pp. 45 ss.

128 Decreto VI de 17 de abril de 1821. CD, T. VII, pp. 37 ss.; *Gaceta de Madrid*, nº 124, de 02/05/1821, pp. 628-630.

jefe político de Zaragoza, a pesar de que no fue secundada por el ministerio, cerraba para el gobierno la vía judicial y cualquier tipo de reclamación administrativa. Así lo pone de relieve la interesada orientación otorgada por el secretario del Despacho de la Guerra a la petición de acceso a la información y apertura de juicio sobre la violación de un derecho para centrarse exclusivamente en la destitución, que el interesado no impugnaba. Para Riego, sin embargo, tales actuaciones infringían claramente la Constitución y suponían la impunidad de quienes habían ultrajado mediante calumnias su dignidad y honor imputándole un delito de traición, bienes especialmente protegidos en la época hasta el extremo de que Bonald, el más conspicuo de los pensadores legitimistas coetáneos, lo situaba en la base misma del sistema¹²⁹. Un ejemplo elocuente al respecto lo aporta uno de los más directos responsables de los hechos, el secretario del Despacho de la Gobernación de la Península, Ramón Feliu, quien, pocos meses más tarde, cuando fue atacado por su labor al frente del ministerio, se defendería alegando que nadie le impediría tomar acciones contra los calumniadores porque esa era la única vía de salvaguardar su honor y lograr el triunfo de la verdad y la justicia¹³⁰.

Es, a este respecto, cierto que, *a priori*, su condición de militar parecía operar en contra de sus intereses. Porque, aunque el artículo 118 de la *Ley Constitutiva del Ejército* de 9 de junio de 1821 consideraba la jurisdicción militar “una excepción onerosa y no un privilegio en el actual sistema político”, la suspensión del artículo 120, que abolía la jurisdicción privativa militar en las causas criminales para delitos comunes, “hasta que se establezca la distinción entre los jueces de hecho y de derecho” (art. 124) todavía no concluida dada la discusión en curso del Código de Procedimientos criminales, excluía su caso de acudir directamente a los tribunales ordinarios. Aun así, pudo invocar en su favor el artículo 132 de aquella norma que prescribía igualdad en el disfrute de derechos civiles a los militares “lo mismo que los demás ciuda-

129 “Con razón Montesquieu, diciendo más verdad que la que pensaba, dio al honor por móvil del gobierno constituido. En efecto, el honor bien entendido no es otro que la fidelidad a sus deberes públicos y privados”. Bonald, Louis-Gabriel, *Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social* (1800). Cito por *Ensayo analítico acerca de las leyes naturales del orden social o del poder, del ministro y del súbdito en la sociedad*, traducido del francés al castellano por D. Juan Pérez Villamil. Madrid, Imprenta Real, 1823, p. 113.

130 En carta dirigida a *El Universal* el 7 de julio de 1822 donde fue publicada como “Artículo único” y posteriormente apareció como publicación independiente.

danos”, por lo que, acogiéndose al artículo 373 de la Constitución¹³¹ presenta exposiciones y representaciones al rey y a las Cortes con la finalidad de conseguir la apertura de juicio bien por la vía militar o, en su defecto, por la civil.

En esta línea, adquiere una singular importancia el acertado uso de los términos “que se nombre un Tribunal” en que está expresada la petición, cuya pertinencia viene dada por la complejidad del caso derivada del sujeto, objeto y la naturaleza de la imputación. En virtud de los preceptos que acaban de mencionarse de la *Ley Constitutiva de Ejército*, su condición de militar exigía el nombramiento de un consejo de guerra. Sin embargo, en la medida que se trataba de un delito de injurias y calumnias, cometido además con publicidad oficial y por medio de la prensa, eran los jueces ordinarios y, en particular los Jurados de Imprenta, los competentes en la causa. Por último, la acusación de conspiración y la forma en que se llevó a cabo la prohibición de entrada en Zaragoza exigían la conformación del ya señalado Tribunal previsto por la Ley de 17 de abril de 1821 sobre penas de los conspiradores e infractores de la Constitución. Aunque, como se ha visto, llegó a presentar su caso ante los Tribunales de Imprenta, lo cierto es que se planteaba un conflicto de jurisdicciones no contemplado por la legislación existente, al tiempo que ponen de relieve la perentoria necesidad de aprobar el concluido Proyecto del Código de Procedimientos y vuelve incomprensible el retraso en la codificación¹³².

131 Todo español tiene derecho a representar a las Cortes o al rey para reclamar la observancia de la Constitución.

132 Sobre el tema de la codificación en el Trienio son de obligada consulta las lúcidas aportaciones de Carlos Petit. Vid. Petit, Carlos, “Los Códigos del Trienio Liberal. Una exégesis del artículo 258 de la Constitución de Cádiz” en *Historia Constitucional*, n° 21, 2020, pp. 106-137; del mismo, “Derecho civil e identidad nacional”, en *InDret. Revista de análisis del Derecho* 3/2011; del mismo, *Un Código civil perfecto y bien calculado. El proyecto de 1821 en la historia de la codificación*. Madrid, Dykinson/Universidad Carlos III de Madrid, 2019, “Proyecto de Código civil, 1821”, pp. 267-378. Del interés en la Codificación procesal es prueba la premura en concluir el proyecto por la comisión, que las Cortes ordenaron publicar: *Proyecto de Código de procedimiento criminal, presentado a las Cortes por la Comisión especial nombrada al efecto*. Impreso de orden de las mismas. Madrid, Imprenta Nacional, 1821. Entre los más interesados y solventes defensores de la Codificación se encuentra Javier de Burgos, quien ya en 1820 en el n° 102 de 10 de junio de 1820 escribía acerca de la bondad de la Codificación en todas las ramas y en el 209 de 25 de septiembre de ese año en su periódico *Miscelánea de Comercio, Política y Literatura* publicaba una exégesis del artículo 258 de la Constitución (con un error tipográfico en el texto citado como 158) y en el del 26 siguiente otro sobre la codificación administrativa, centrandó ésta en una materia que sería recogida por la Ley del gobierno interior de provincias y municipios aprobada de 1823.

Suficientemente descritas en los epígrafes anteriores, es necesario reiterar una vez más las sucesivas infracciones cometidas por el ministro y del propio Ejecutivo, desde la no abstención y admisión de la recusación por enemistad manifiesta de Sánchez Salvador hasta, principalmente, la vulneración de derechos individuales y procesales especialmente garantizados a través de la calculada inadmisión del *petitum* y modificación del objeto de la demanda con el fin de impedir la vía judicial. Sin embargo, dado que se estaba ante un “gobierno de las leyes”, en el sistema introducido por la Constitución de 1812 el acceso a la jurisdicción no se cerraba por el objeto sino por la inexistencia de legitimación activa y, en consecuencia, pudo así presentar su reclamación ante la institución prevista a estos efectos por la Ley de Imprenta y, posteriormente, solicitar como diputado, y obtener, la incoación del procedimiento de la responsabilidad del ministro ante las Cortes.

No obstante, la aprobación del inicio de este último proceso no garantizaba el resultado positivo del mismo. Porque, al margen de la ausencia de noticias posteriores sobre su evolución, la verdad es que la inexistencia de una ley específica que, como expone Salas, contemplara como mínimo el objeto, sujeto activo, tribunal, pena y hasta la capacidad del rey para indultar en estos casos, dificultaba extremadamente que cualquier demanda en este sentido llegara a prosperar más allá de su discusión en el seno de la comisión de Responsabilidad de las Cortes¹³³. Y a ello debe añadirse la arraigada posición al respecto en los círculos gubernamentales y políticos más implicados e influyentes.

Para éstos, la opinión dominante, como dejó meridianamente claro el secretario del Despacho de la Gobernación de la Península e Islas Adyacentes Feliú en su intervención ante las Cortes el 13 de diciembre de 1821, era la teoría de Constant conforme a la cual la responsabilidad ministerial se reducía a los casos de traición y concusión¹³⁴. Taimadamente, el ministro vinculaba

133 Coronas González, Santos M., “La responsabilidad de los Ministros en la España Constitucional”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, 1986, pp. 543 ss., en particular pp. 566 ss.

134 DSC sesión 13 de diciembre de 1821, p. 1248. Constant, en efecto, sostiene esta opinión en *Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs et particulièrement à la Constitution actuelle de la France par M. Benjamin Constant, conseiller d'État*. Paris, Chez Alexis Eymery, Mai 185, cap. IX “De la responsabilité des Ministres” pp. 136 ss. Y ello a pesar de reconocer al principio que podía solicitarse en tres casos, de haber escrito que “La monarchie lui-même se prête sans répugnance a la responsabilité de ses ministres”, p. 46 y que “Si l'on avait proposé d'accorder a des ministres une action

esta visión a la necesaria estabilidad de los gobiernos, quedando por tanto fuera las cuestiones relativas a la violación de derechos individuales y hasta “la usurpación de funciones del poder legislativo”. Incluso exoneraba de toda culpa a los agentes que habían actuado como correas de transmisión de las órdenes del ministro y las habían ejecutado¹³⁵, supuestos todos ellos que confluían en el caso de Riego y que están en la base de la autoexculpación que presentó Feliu ante las Cortes.

En todo caso esta opción, que por lo demás parece ser la más habitualmente aplicada, era coherente con la percepción moderada del Ejecutivo que, de esta manera, legitimaba los actos arbitrarios llevados a cabo invocando la discrecionalidad inherente a tal poder. Pero también conculcaba las mismas bases del “modelo liberal” que se conformó para hacer efectiva esta responsabilidad. Un modelo ideado originalmente para sancionar los abusos de poder y las conductas ministeriales atentatorias contra los derechos individuales, como las concretas contempladas en la categoría de delitos políticos y las realizadas contra la voluntad de la Nación, expresada ésta principalmente en el contenido y los principios inspiradores de la Constitución y, en consecuencia, de la legislación¹³⁶ aunque su regulación era, a todas luces, insatisfactoria.

Para concluir este apartado, sin necesidad de volver sobre los hechos e instrumentos jurídicos utilizados o el desarrollo procesal del caso, aspectos recogidos en los epígrafes anteriores, lo verdaderamente relevante aquí en relación con Riego reside en señalar que, aunque acude, como correspondía, a las dos vías que le proporcionaba su condición de militar y ciudadano, es obvio que es ésta la que prevalece.

Es en esta última condición como principalmente recurre, amparándose directamente en la Constitución, en particular los artículos 4 que reconoce y garantiza los derechos individuales y el 247 que establecía el modo de ser juzgado y que, en su caso, se condensa en la innegociable petición de un juicio

arbitraire sur la liberté individuelle et sur les droits des citoyens ... demonstre le danger de revêtir ce pouvoir de cette action arbitraire”, p. 57.

135 Salas, *Lecciones*, Lección XXI, “responsabilidad de los Ministros”, pp. 138 ss. Salas, en efecto, critica vivamente esta posición –cuyas deficiencias también señalaría Romero Alpuente– porque ataca el principio de rendición de cuentas ante la Nación y porque puede convertir a las instituciones gubernativas en “instrumentos de la tiranía” escudándose en la obediencia pasiva, entre otras cosas.

136 Para este tema es de obligatoria consulta Fernández Sarasola, Ignacio, *Poder y Libertad: Los Orígenes de la responsabilidad del Ejecutivo en España (1808-1823)*. Madrid, CEPC, 2001.

justo y designación de Tribunal, derecho que le corresponde como español y para cuya consecución renuncia incluso a su condición de militar. En este sentido, hasta sus reclamaciones en esta esfera se fundamentan jurídicamente no en las ordenanzas militares sino en el texto constitucional, demostrando así que la Constitución tiene una fuerza normativa *per se* y no únicamente moral que descansa en la *vis directiva*. Y, sobre todo, que, en su planteamiento, es una ley superior a todas las demás disposiciones en todas las materias pero, en particular, en la protección de los derechos individuales.

Esta última era, por lo demás, una idea compartida por, al menos, algunos de los moderados no extremistas y a la que se aferraban en su empeño de divulgar el texto constitucional ya desde la etapa anterior, como pone de relieve el discurso de inauguración de la cátedra Constitución Política de la Monarquía española en San Isidro de Madrid en febrero de 1814. Con una notable influencia constantiana, el orador comunicó a su auditorio que

El conocimiento é inteligencia de la Constitución no es una ciencia que esté reservada para los literatos. Lo que á todos importa, de todos debe ser conocido; y no hay Español, por iliterato y rudo que sea, á quien no debamos instruir con paciencia en sus derechos y en sus obligaciones, que es en suma lo que la Constitución nos enseña¹³⁷

Para Riego, esta creencia en una Constitución garantista y con poderes independientes y responsables, donde el Ejecutivo estaba obligado a la rendición de cuentas ante el Legislativo, por lo demás común a la mayoría de los así llamados liberales exaltados, conforma una regla de la que nunca se separó e inspira sus actos públicos. De hecho, en todos los litigios y causas en los que, deliberada o involuntariamente, se vio involucrado, desde el, relativamente, menos relevante hasta el de petición de la responsabilidad del secretario del Despacho de la Gobernación Feliú cuya resolución no conocemos, es primordial y básicamente su articulado el que utiliza como fundamento jurídico de sus escritos de esta naturaleza.

¹³⁷ *Relación de la solemne apertura de la cátedra de Constitución Política de la Monarquía Española por los estudios de San Isidro de Madrid en el día 25 de febrero de 1814*. Madrid, imprenta nacional, 1814, p. 12. La influencia de Constant es patente en su inteligencia del texto constitucional expresado en el siguiente párrafo: “La Constitución da libre é independiente autoridad á los tribunales; prescribe á los subditos subordinación y obediencia; *fixa el imperio de las leyes sobre el trono á un Monarca inviolable y sagrado, libre de tal modo para el bien, que esté exento y libre de hacer mal: lo qual es sin duda el último ápice y perfección de la libertad que puede el hombre concebir*” (cursiva mía). Ibi, pp. 18-19.

3. Los sucesos del 7 de julio

Desde la perspectiva de este trabajo, Riego adquiere un protagonismo, involuntario aunque extremadamente relevante, en un asunto concreto de naturaleza constitucional. Su participación activa en los sucesos de julio, no parece haber sido decisiva desde el punto de vista militar. Cumplió con especial escrupulosidad los deberes que correspondían a un diputado defendiendo con firmeza la aplicación de la Constitución a través de la aludida exposición dirigida a la diputación permanente cofirmada por un número considerable de otros relevantes diputados, pero también con las que se exigían a todo español en defensa del orden constitucional.

Como manifiesta en el borrador de representación de 1823 y en carta dirigida a *El Espectador* fechada el 6 de julio y acreditan otras fuentes solo tomó, al igual que otros diputados militares, las armas el 7 de julio para enfrentarse a los batallones realistas y arengar a las tropas constitucionales¹³⁸. Con anterioridad, se limitó a asesorar puntualmente a un oficial en el cuartel de artillería más próximo al edificio de las Cortes en una de las primeras jornadas de la sublevación y a actuar de mediador ocasional. No desempeñó oficialmente ningún mando, dada su calidad de representante de la Nación y extremó su cuidado en no llevar a cabo ninguna actuación en este sentido que sirviera de pretexto, dadas las experiencias recientes, para posibles represalias. Una vez reprimida la rebelión, fue requerido por el Alcalde constitucional para que, desde un balcón del Ayuntamiento, dirigiera un discurso a las Milicias formadas que esperaban oírle en el que, por cierto, les solicitó que no volvieran a pronunciar el grito viva Riego y no cantaran la famosa canción antiabsolutista *El trágala* para evitar todo tipo de provocaciones. Y concluye con la donación a la misma institución por la heroica defensa llevada a cabo por este cuerpo de la medalla de plata que el Ayuntamiento de Cádiz le había regalado en conmemoración de 1 de enero de 1820¹³⁹.

Aun así, se encuentra involuntariamente en el centro de una cuestión constitucional de suma importancia. Se trata de la consulta, escrita de su puño y letra, dirigida por el rey al Consejo de Estado el 3 de julio de 1822, en plena

138 “Muchísimo animaron a los patriotas Wasington (sic) español Riego y el general Álava”. *El Espectador*, 8 de julio de 1822, en un número en que lanza duras críticas contra el rey y sus consejeros. Vid. sobre el tema *Historia de la vida y reinado de Fernando VII*, T. II, pp. 325 ss.

139 *El Espectador*, 10 de julio de 1822.

efervescencia de la sublevación y con el Gobierno, en el mejor de los casos, llevando a cabo una flagrante dejación de funciones y, en el peor, cometiendo un delito de traición. Resulta a este respecto sumamente ilustrativo señalar que esta inactividad del Ejecutivo, negada o maquillada años más tarde por simpatizantes moderados, fue en aquel momento censurada por la prensa¹⁴⁰ y que, entonces y aun con posterioridad, se atribuyó a un motivo en particular. En concreto a la negativa del rey de secundar el “plan de las cámaras” o un proyecto de Constitución alternativo “vaciada en el molde la francesa”, en el que, asimismo, estaban involucrados algunos hombres que disfrutaban de la simpatía de Fernando VII, sobre todo, el Marqués de las Amarillas¹⁴¹. De

140 Es particularmente elocuente *El Universal* de 8 de julio de 1822 que expone: “Ayer dijimos que la diputación permanente de Cortes estuvo todo el día reunida en las casas consistoriales, y debemos añadir que con ella estaban reunidos tres individuos del ayuntamiento, dos del consejo de estado y dos de la diputación provincial y dos generales más acreditados por sus conocimientos y patriotismo. *Hubo que crear una especie de gobierno provisional porque parece que nos quedábamos sin gobierno*” (cursiva mía).

141 Son a este respecto elocuentes las visiones que se aportan sobre este tema tanto en la *Memorias* de Fernández de Córdova como en Bayo, *Historia de la vida y Reinado de Fernando VII*, quienes coinciden en señalar que fue por esas fechas cuando el rey retiró el apoyo al plan de Martínez de la Rosa. Para el primero “El rey y los ministros (gobierno Martínez de la Rosa) decidieron de común acuerdo sustituirla (la Constitución de 1812) con otra que encerrara principios conservadores y autoritarios, encargando su elaboración a Martínez de la Rosa el cual secretamente la redactaba para imponerla un día por un golpe de fuerza y el rey estaba resuelto después a convocar cortes que la sancionaran. Pero el proyecto fracasó porque en el nuevo código figuraba, a más del Congreso de Diputados un segundo cuerpo deliberante, especie de senado o estamento de próceres. No admito tu Constitución, le dijo a Martínez de la Rosa desde aquel momento derrotado de su favor y confianza y el monarca solo se ocupó desde entonces de tramitar conspiraciones con la guardia real esperando el momento anhelado de destruir todo el edificio de aquellas libertades con la guardia real” y a continuación señala en términos coloquiales como expresó Fernando VII su negativa, p. 41. Y el segundo lo hace en un párrafo sin desperdicio: “Hemos insinuado en otra parte que los consejeros ilustrados del príncipe entre quienes había algunos realistas le inclinaban a modificar la Constitución de Cádiz y que en el mismo sentido trabajaban algunos liberales convencidos de la dificultad de pasar adelante con un Código que no daba al poder ejecutivo la fuerza necesaria para ahogar la anarquía. S. M. simulaba estar de acuerdo con unos y otros para conseguir por medio de la apetecida reforma no solo el afianzamiento de su corona sino también la unión y felicidad de los españoles banderizados y prontos a lanzarse en los horrores de una guerra civil. Pero mientras así lo afirmaban sus augustos labios a espaldas de aquellos y en lo más escondido de su retrete seguía tramas muy distintas aunque a veces parecían urdidas con sedas de los mismos

hecho, éste conversó con Martínez de la Rosa acerca de la consulta, quien le aconsejó que “no se debía hablar claro” y que, en todo caso, él no la firmaría, “que lo hiciera el rey [...] pues no siendo precepto sino comunicación no había responsabilidad”¹⁴².

En realidad, lo cierto es que Martínez de la Rosa declinó, pese a ser convocado, asistir a la reunión, trasladando la responsabilidad de la resolución a los Consejeros. A falta de otras pruebas que confirmen su verdadera intencionalidad, *prima facie*, esta actitud es un testimonio más que evidente de que era plenamente consciente de sus actos y que, presumiblemente, la calculada pasividad, o al menos ausencia de implicación efectiva del ministerio en la solución de uno de los asuntos más graves que afectaron al sistema constitucional durante el Trienio, fuera contemplada como una oportunidad para sacar adelante su proyecto constitucional, reforzado por el inicial y ya aludido frustrado intento de pactar con los batallones sublevados, prometiéndoles el incumplimiento del Decreto de Cortes que prescribía su disolución y traslado a Toledo y Talavera. Desde esta perspectiva, la exoneración del Gobierno que se llevaría a cabo en los años siguientes parece, más bien, responder a una interesada operación de desinformación, un recurso frecuente desde entonces del que el tratamiento de la propia vida pública de Riego, en especial en las fuentes decimonónicas, es un testimonio elocuente.

Las actas de la diputación permanente incluidas en el Diario de Sesiones dan fe de esta reunión del Consejo, limitándose a constatar su existencia, pero conocemos los términos de la misma por su publicación íntegra años después en Londres, en los *Ocios de los españoles emigrados*. En ella, en efecto, Fernando utiliza a Riego, bajo la falsa imputación de haber regresado a Madrid para ponerse al frente de la Milicia Nacional y aún del ejército permanente conformando “una facción regicida (que) atenta contra la inviolabilidad de mi real persona y de mi familia” para responsabilizarle de los hechos que ocurrían en la capital exculpando a los sublevados y, en base a tales acusaciones, solicitar de los Consejeros una condena contundente. De no ser así, es decir,

colores”, p. 295. El favor regio hacia el Marqués de las Amarillas, “De todos los secretarios del despacho era Amarillas el que gozaba de las atenciones del rey en tanto que Arguelles era víctima de su ojeriza”, Ibi p. 192. La frase entrecomillada sobre el “proyecto a la francesa” en el que estaban trabajando Morejón y Mataflorida pero que, según los autores, había sido determinante Toreno, en p. 298.

¹⁴² *Bosquejo del plan de la conspiración del 7 de julio. Correspondencia importante hallada aquel mismo día en la calle del Arenal nº primero*. Madrid, imprenta de don Antonio Fernández, 1822, vol. I, p. 12.

“entendido de que en el caso de observar en lo sucesivo de que no se remedien los males presentes, y que aun amenaza (*sic*) el respeto del monarca español, tomaré las justas medidas que estén a mi alcance para salvar a la Nación de semejantes males”. Con una referencia a “la fidelidad de mi juramento” (naturalmente sin especificar cuál era éste), concluía el breve texto con la promesa de que “sabré corregir conforme a las leyes a los criminales perturbadores del orden social”¹⁴³.

El contenido de la consulta del rey trascendió al público, así como el desarrollo de la sesión en la que, según algunos, estaba presente el embajador de “una potencia extranjera” —es decir, Francia¹⁴⁴—. Los periódicos más implicados se hicieron eco de la misma y la sintetizaron en cuatro cuestiones que los moderados afrancesados seguidores de Constant no dudaron en calificar de *indignantes*¹⁴⁵: Primero, que el Consejo determinara los medios “de reducir con honor a los batallones de la guardia real extraviados por insultos”. Segundo: que confirmara si el Consejo y la Nación (en este caso, la diputación permanente) garantizaban la vida de SM amenazada por una facción anárquica y, al mismo tiempo, le desagradiaran de “los desaires que ha sufrido”, pues *en el caso contrario quedaba disuelto el pacto social y SM en disposición de usar de sus derechos*. Tercero, que se pronunciara acerca de dos cuestiones relativas al general Riego: en primer lugar, qué medidas cabía adoptar en relación a su regreso a la Corte, a la que no debía volver sino con carácter de militar y se había producido sin haber obtenido licencia real, y, en segundo,

143 *Ocios de los españoles emigrados*, T. I, 1824. Documento 5º. Billeto escrito de mano de SM al Consejo de Estado. 3 de julio de 1822, pp. 77-79.

144 La presencia del embajador francés la lanzaba *El espectador* del día 5, si bien parece cuestionable. Sobre este tema vid. Bustos, Sophie, “Francia y la cuestión española, el golpe de Estado del 7 de julio de 1822”, *Ayer*, nº 110, 2018, pp. 179 ss. La autora, utilizando la correspondencia entre el ministro de Asuntos Exteriores francés y su embajador en Madrid, niega la participación directa de Francia en estos sucesos en particular pero “se tiene constancia de que el Gabinete francés de la época apoyó una reforma en sentido conservador de la Constitución, liderada por los ministros moderados” y demuestra la constante comunicación de Martínez de la Rosa con el mismo, a pesar de los reparos que éste puso a la protección francesa de los absolutistas. El párrafo entrecomillado en p. 189.

145 “Leímos con indignación y sorpresa las *cuatro cuestiones* sometidas por el monarca al examen del consejo de estado que traían encubierto un veneno mortífero y nos vaticinaban el impotente designio de restablecer el gobierno absoluto ... día vendrá en que Fernando VII se estremezca de haber tolerado tantos ultrajes”. *El Universal* de 8 de julio de 1822. La publicación de las mismas por vez primera en *El Espectador* del día 6.

sobre su intento de usurpar el mando a las autoridades. Cuarto y último, “que desea saber SM cuál es el espíritu del Consejo”.

Es, a este respecto, definitivamente relevante subrayar una vez más la importancia de los puntos señalados, y no tanto por lo que tienen de testimonio acerca de la implicación directa del rey –quien recurrió a su habitual y perverso juego de uso torticero de la Constitución al encabezar “el billete” con la confesión “de ser y haber sido un verdadero constitucional sin dolo ni perfidia” y recordar “las obligaciones de la Nación para con su rey Constitucional”– en la rebelión, sino por la carencia de efectos que produjo la amenaza que profirió. Usar el pretexto del peligro de su vida y “los desaires” hacia su persona para llevar a cabo el mayor acto de inconstitucionalidad concebible a través de la comisión de un “crimen de Lesa Nación” cuál era la derogación de la Constitución misma es perfectamente consecuente con la naturaleza de tal gobernante, por cuanto era universalmente conocido que “Fernando naturalmente amaba el despotismo por educación y por instinto”¹⁴⁶. Es más, todo indica que se trataba, por su parte, de una maniobra de distracción para ocultar un plan que ya se estaba ejecutando y del que se habían previsto todas las actuaciones en caso de éxito o fracaso del mismo¹⁴⁷. Lo que resultaba, y resulta, incomprensible, sobre todo atendiendo a cómo se estaban desenvolviendo los acontecimientos, es que, en especial la diputación permanente a la que por los menos algunos Consejeros comunicaron estos extremos, pasara por alto la amenaza implícita en la expresiones “tomaré las medidas que estén a mi alcance” –esto es, abolición de la Constitución– y arrogarse para sí las competencias propias del poder judicial¹⁴⁸.

146 Bayo, *Historia de la vida*, p. 175.

147 “En caso de derrota los batallones debían volver a palacio para desde allí, custodiar al monarca para el traslado por ellos a una provincia fronteriza donde declararían disuelto el pacto social, y si por el contrario la fortuna ayudaba los esfuerzos de los guardias, como creían, montaría el príncipe a caballo y recorrería la corte... para que la muchedumbre aunada a los soldados le aclamase monarca absoluto” (los caballos ya estaban enjaezados, como cuando recibió a su esposa, en los establos de palacio”. Ibi, p. 338.

148 Este insólito comportamiento, al igual que el del gobierno y el jefe político de Madrid, sería posteriormente objeto de recusación en las Cortes por algunos diputados con ocasión de la comisión designada para la investigación de los sucesos. No obstante, ya en su momento llamó atención y no faltó quien la acusara de connivencia con los planes del gobierno. De hecho, una publicación compuesta de tres folletos escritos en el peculiar estilo que puso de moda *El Zurriago* entre otros y demuestra estar bien informada por la aportación de hechos concretos y nombres, expone literalmente refiriéndose a los prime-

En contraposición, se comprende, por el contrario, muy bien que “esta declaración de absolutismo” desencadenara una reacción espontánea de protestas y cartas en las que muchos ciudadanos veían una conspiración en la que estaba involucrado el gobierno y pedían la urgente aplicación de sanciones¹⁴⁹. El escándalo de la actitud abiertamente anticonstitucional del rey, la inactividad o connivencia gubernativa –“Las secretarías del despacho están casi todas cerradas menos la de guerra”¹⁵⁰–, incluida la del Jefe Político de Madrid nombrado por el secretario del Despacho de la Gobernación¹⁵¹, y la

ros días de julio: “ya corren las listas de los que serán de la cámara alta con una renta de 6000 duros de sueldo y son los ministros, la diputación permanente menos Núñez y Calderón, Calatrava, Toreno, Sancho, Noblejas, Feliu, Pelegrin, Giraldo y otros [...]”. *Bosquejo del plan de la conspiración del 7 de julio. Correspondencia importante hallada aquel mismo día en la calle del Arenal nº primero*. Madrid, imprenta de don Antonio Fernández, 1822, vol. I, pp. 9-10.

149 Es a este respecto particularmente significativa la “Representación presentada al ayuntamiento de Madrid por una comisión de patriotas” en la que, entre otras, piden: 1. Castigo ejemplar, 2, disolución de los guardias que quedan en Vicálvaro y otros pueblos en cuerpos del ejército, 3 “que VE no se separe de su actitud mientras no se nombre un ministerio auténticamente liberal”; asimismo el que se haga un expurgo sensato en las secretarías del despacho porque se presume que “están contagiados muchos de sus individuos” y también de cargos de la corte”. Lleva fecha de 3 julio. Con más de quinientas firmas de propietarios, empleados y artesanos, fue publicada íntegra por *El Espectador* de 15 de julio de 1822, pp. 1-2.

150 *Bosquejo del plan de conspiración*, vol. 3, p. 2.

151 San Martín, tras conversaciones con el secretario del Despacho de la Gobernación de la Península, se negó a calificar de facciosos y rebeldes a los batallones sublevados –de hacerlo así, tenía obligación de proceder a la defensa llamando a las milicias y al ejército– a pesar de las solicitudes al respecto, en especial, la dirigida por el Alcalde y el ayuntamiento de Madrid. De hecho, no fue convocado para formar el gobierno de emergencia. Por esta razón, las Cortes extraordinarias le incluyen entre las personas investigadas en la comisión nombrada en el otoño de 1822, que le acusó de indiferencia, falta de apoyo al Ayuntamiento Constitucional y negativa a aplicar la ley de 17 de abril de 1821 sobre conspiraciones contra la Constitución, ante las que se defendió alegando que cumplía órdenes del ministro y solicitó se le formase causa ante el Tribunal Supremo. Conocemos su defensa por la publicación de la misma: *Breve respuesta del exgefe político de la provincia de Madrid don José Martínez San Martín a lo que dice la Comisión llamada de medidas sobre su conducta en los primeros días del mes de julio último*. Madrid, imprenta de don Mateo Repullés, 1823. Para los autores del *Bosquejo del plan de la conspiración* era un ardiente defensor del “plan de las cámaras” que seguía defendiendo incluso cuando había fracasado el mismo: “Amarillas y San Martín son los que más y únicos que insisten en las Cámaras”,

tibieza en la reacción, mostrada desde el inicio del conflicto, de la única institución capacitada para adoptar las medidas pertinentes, esto es la diputación permanente, eran de dominio público y generaron un malestar general que suscitó un movimiento de presión, encabezado por el propio Ayuntamiento de Madrid¹⁵², hacia sus integrantes. De entre todos sobresale, debido a la condición de los signatarios, la ya aludida exposición del día 3 de julio que Riego, con Canga, Alcalá Galiano y otros diputados presentes en Madrid, remitieron a la misma conminándoles a que aplicaran lo preceptuado por la Constitución de forma inmediata.

No es posible conocer hasta qué extremo este escrito pudo influir en la cuestión de la consulta elevada por el rey al Consejo que le afectaba directamente, aunque sin duda existe una conexión evidente y, en todo caso, sería un agravio más a añadir al saldo negativo de quien realmente era considerado la bestia negra de los absolutistas, y, al menos, un sector muy influyente de los moderados. En aquella ocasión, a diferencia de otras relevantes que sucederían pocos meses más tarde, el dictamen del Consejo demuestra un puntual y estricto seguimiento de la Constitución y la legalidad, a pesar de que el debate debió ser intenso. Sobre todo, cuando el consejero Ciscar habló a favor de Riego y defendió que, dada la situación, había que proceder al nombramiento de una Regencia¹⁵³.

vol. 2, p. 5. Su “conferencia” con el secretario del Despacho Garellly tras la cual no adoptó las preceptivas medidas constitucionales de convocar a las milicias y, en su caso, al ejército, está registrada en una fuente tan poco sospechosa a estos efectos como Bayo, *Historia de la vida...*, p. 335.

152 *El Espectador* de 2 de julio de 1822 publica la durísima exposición del Alcalde y Ayuntamiento constitucional de Madrid dirigida al rey en ese día donde solicitan el inmediato castigo de los sublevados y, entre otras, escriben “Dígase lo que se quiera de los exaltados, hasta ahora solo se ha derramado sangre de los liberales” y exponen lo extendida que está la conspiración. Por su parte, *El Universal* en su número del 9 de julio publica la Proclama del alcalde constitucional donde dice que Riego pidió no usaran su nombre para evitar tumultos. Sin embargo, pocos años más tarde, tales hechos se interpretaron de muy diferente forma como testimonian los autores de *Historia de la vida*, para quienes mientras los secretarios del Despacho mantuvieron un comportamiento ejemplar, “El ayuntamiento, envanecido por el próspero viento que había sacado en aquellos instantes la nave de la patria de los escollos que la rodeaban pidió al rey el reemplazo del ministerio por hombres de energía y subido temple”, p. 349.

153 “Y ahí acabó el plan de las cámaras y se habló de absolutismo”, *Bosquejo del plan de la Conspiración*, vol. I, p. 12.

Tras una sesión que duró 10 horas¹⁵⁴, en términos contundentes respondía a la petición sobre los guardias, que éstos eran provocadores de una situación de extrema gravedad, por consiguiente, auténticos facciosos sobre los que debía recaer todo el peso de la ley; que, en relación a la segunda de las cuestiones planteadas, como órgano estrictamente consultivo no podían tomar decisiones ejecutivas. No obstante, añadían los consejeros que la mayor garantía sobre la real persona radicaba en la inviolabilidad de la misma constitucionalmente declarada y, por consiguiente, la única amenaza procedía de los sublevados. Finalmente, en lo referente a Riego, exponía el Consejo que como diputado gozaba de libertad de movimiento pero, además, en su condición de militar y ciudadano su obligación era acudir allí donde peligraran las “libertades patrias”. En cuanto a la acusación de usurpación de autoridad, “cree el consejo que no ha existido tal tentativa ni se ha sabido por la opinión pública”.

No es necesario profundizar en la conculcación de la legalidad y la vulneración de los derechos de que disfrutaba como español y diputado implícitas en las acusaciones vertidas en la mencionada consulta, construidas sobre mistificaciones y carentes de fundamento jurídico, contra Riego, quien había llegado a Madrid desde Miraflores de la Sierra el día 2 entrada la noche para defender “con la vida” la Constitución¹⁵⁵. Escarmentado por sus recientes experiencias personales evitó cuidadosamente actos que pudiesen servir de base a sus siempre expectantes enemigos limitándose a cumplir con los deberes impuestos a todos los españoles por los artículos 6, 7 y 9 de la Ley Fundamental por excelencia y el 2º de la *Ley Constitutiva de Ejército* conforme el cual “Todos los españoles están obligados a defender a la patria con las armas especialmente desde la edad de 18 hasta la de 50 años”. Su participación, como se ha expuesto consistió en arengar a la Milicia y tropa constitucionalista y, al igual que Álava y algunos otros diputados militares, se puso a las órdenes de Morillo en el momento del enfrentamiento abierto para rechazar a los sublevados¹⁵⁶.

154 “El Consejo de Estado se ha reunido hoy en sesión extraordinaria, la cual ha durado desde las diez de la mañana hasta las ocho de la noche a la que no han asistido los Secretarios del Despacho”, se lee en *El Universal* de 5 de julio de 1822, p. 4.

155 *El Universal* de 3 de julio de 1822: Riego llega a las 10 de la noche del día 2 y jura defender con la vida la Constitución, pp. 2-3.

156 “Los generales don Francisco Ballesteros, don Rafael del Riego, don Miguel del Álava y el brigadier don Juan Palarea presentárose al conde de Cartagena ofreciendo igualmente su brazo y espada en defensa del Código Gaditano”, “Empuñaron las armas de la

La prudencia de su actuación en aquellas aciagas fechas la explicaba él mismo en la mencionada carta que remitió a *El Espectador* el 6 de julio en la que traslada su agradecimiento al Consejo de Estado por su dictamen sobre la extemporánea petición regia de la víspera y explica detalladamente su actuación durante los acontecimientos previos al día 7. Sin embargo, tras una lectura desapasionada de los hechos cabe preguntarse si, en realidad, la inclusión de Riego en la intempestiva consulta de Fernando VII al Consejo no era más que un pretexto que operase a modo de una “luz de gas” para disimular la traición, en el más riguroso sentido jurídico del término, que se estaba llevando a cabo por el rey y el propio gobierno.

4. El borrador de representación de 1823

El último de los casos, y que es asimismo el hilo conductor de este trabajo, tiene su inicio a finales de abril de 1823, con las Cortes en Sevilla y con Angulema paseando su triunfo por toda España con el apoyo de los realistas y del mismo pueblo que, menos de tres años antes, había aclamado la restauración de la Constitución. A ellos se sumarían los generales en jefe de los tres ejércitos (Ballesteros, Morillo y el Conde de La Bisbal) que las Cortes habían levantado para enfrentarse a los invasores, consumando de esta manera uno de los episodios más vergonzosos de los últimos dos siglos de nuestra Historia¹⁵⁷.

libertad entonces (en la Puerta del Sol) los generales Álava, Copons, Riego, el Duque del Parque y otros ciento”. Bayo, *Historia de la vida*, pp. 327 y 337. En esta misma fuente se recoge una anécdota extremadamente reveladora acerca de las intenciones de Morillo y la animadversión que suscitaba Riego en esos círculos. Cuando éste le sugirió que atacaran a la Guardia Real que se dirigía a donde estaban las tropas constitucionalistas, Morillo le preguntó quién era. “El Diputado Riego”, respondió sorprendido, a lo que el Conde de Cartagena le contestó que se fuera a las Cortes. Fue ahí cuando debió tener una plena conciencia de una realidad que, hasta entonces, todavía creía poder modificar porque, volviéndose a sus amigos y colegas, el general asturiano pronunció la frase “la libertad se pierde hoy, estamos rodeados de precipicios”. Ibi, p. 332. Morillo fue posteriormente designado por el rey capitán general de Madrid, un nombramiento durísimamente contestado por la prensa afina los exaltados. En especial *El Eco de Padilla* el 23 de agosto y dos días más tarde, dedicaba el “Suplemento” de 25 de agosto de 1821 a denostar al Conde Cartagena, que se vio obligado a dimitir, aunque el rey no aceptó la dimisión.

157 “El General Conde de La Bisbal que mandaba el ejército de Castilla la Nueva y Extremadura, El General Morillo que mandaba el ejército de Castilla la Vieja, Galicia, Asturias y la Montaña, Villacampa, que mandaba el de toda Andalucía y Ballesteros, que mandaba el de Navarra, Aragón, reino de Valencia y los cuatro reinos de Andalucía, ex-

Finalmente, las amenazas que Luis XVIII había proferido en el discurso

ceptuando a Mina en Cataluña, eran los únicos generales en jefe que había en la Nación al tiempo que el enemigo entró en ella, encargados de defender la causa de cuyo sostén dependía la felicidad de millones de hombres y ninguno de todos los cuatro dio una sola batalla para sostenerla”. “Examen del convenio entre el general Ballesteros y el conde de Molitor”, en *Ocios de los españoles emigrados*, nº 9, diciembre, 1824, p.403. En los *Ocios de los españoles emigrados*, nº 3, junio 1824, pp. 269 ss se publican las cartas cursadas a mediados de agosto de 1823 entre Ballesteros jefe del Ejército Nacional 2 y Ramón Sánchez Salvador, en la que aquél le comunica su pacto con el general Molitor y el reconocimiento de la Regencia absolutista. El examen del mismo en Ibi, nº 8 noviembre 1824, pp. 361 ss. Evaristo San Miguel publica la proclama de Morillo al ejército: “El conde de Cartagena, general Morillo, luego que supo las ocurrencias de Sevilla (inhabilitación temporal del rey), dio con fecha 26 de junio desde Lugo, la proclama siguiente á las tropas de su mando: «Soldados del cuarto ejército: habéis manifestado vuestra decisión á no obedecer las órdenes de la regencia que las Cortes instalaron en Sevilla, despojando de sus atribuciones al Rey, de un modo reprobado por nuestro pacto social. Animado de los mismos sentimientos que vosotros he condescendido con vuestros deseos, y os declaro que no reconozco al gobierno que las Cortes han establecido ilegalmente; y que resuelto al mismo tiempo á no abandonar estas provincias á los furores de la anarquía, conservo el mando del ejército. Ausiliado por una junta gubernativa, tomaré las providencias que exijan las circunstancias, no obedeciendo a. ninguna autoridad, hasta que el Rey y la nación establezcan la forma de gobierno que debe regir en nuestra patria.» Cuando espidió el general Morillo esta proclama, hacia ya mas de once días que el Rey estaba repuesto en sus funciones”. Tras añadir la de La Bisbal y Ballesteros el 4 de agosto, de señalar que muchas plazas no se rindieron y que un elevado número de jefes y oficiales se negaron a aceptar tales acuerdos, explica la defección en los siguientes términos: “Así de los cuatro ejércitos que se habían alistado y organizado lo mejor posible con alguna anterioridad á la invasión francesa, se habian perdido ya tres sin. lucha y sin combate. Abundantes frutos cogía, como se ve, el gabinete de las Tullerías, de la discordia que habia encendido, de la división, de lá cizaña que habia sembrado en un terreno tan preparado para recibirla. Halagando por un lado con la esperanza de volver al favor del Rey; conservando los empleos y honores adquiridos; Entre conservarlo todo no peleando, y arriesgarlo todo y hasta la existencia corriendo á la pelea, la elección no era dudosa; y cuanto mayores eran los bienes que se iban á perder, mayor debió de ser también la apatía, la repugnancia de arrostrar los azares del combate. Así fué esta mayor en los generales, que en los jefes; en los jefes, que en los simples oficiales; en estos que en la tropa, donde tardó mas en apagarse el entusiasmo”. San Miguel, *Vida de D. Agustín de Argüelles*, II, pp. 96-98. Resulta en verdad sorprendente que Morillo invoque en su proclama para justificar la traición “nuestro pacto social”, es decir, la Constitución, cuyo acatamiento estaba lejos de admitir, como demuestra su conducta a lo largo de los tres años, algunos de cuyos episodios –consejos de guerra injustos o su actuación en los sucesos de julio, p. e.– se han recogido en este trabajo.

de apertura de las Cámaras francesas se hicieron realidad, y aunque, como ya se ha reseñado, no contó con el soporte material de los demás integrantes del Concierto europeo, en especial Gran Bretaña, estaba sin embargo respaldado por la adhesión popular que los absolutistas le habían garantizado. Estos, en efecto, habían llevado cabo una intensa actividad diplomática ante la corte de San Luis, incluso a través de embajadores y otros agentes consulares nombrados por los diferentes gobiernos del Trienio a pesar de su dudosa adhesión a la Constitución. De hecho, no sólo se habían organizado en ese país, donde actuaban con completa impunidad, sino que disponían de la ayuda armamentística y avituallamiento propiciada por aquel gobierno, en especial por su ministro de Asuntos Exteriores, Chateaubriand, quien consideraba *Ma guerre d'Espagne, le grand événement politique de ma vie*, y aunque *était une gigantesque entreprise*, la estimaba absolutamente necesaria. Razones económicas, como la restauración de la Hacienda y el comercio, políticas vinculadas a la preeminencia francesa en el marco de las relaciones internacionales y el aborto de cualquier intento republicano incompatible con el ideario del fundador de *Le Conservateur* se unían en su caso al sentimentalismo de cuño aristocrático: evitar que el rey Fernando se convirtiera, con Carlos I de Inglaterra y Luis XVI de Francia, en el tercer mártir del realismo europeo¹⁵⁸.

158 El 22 de julio de 1822, desde Londres, Chateaubriand escribía al presidente del Consejo de Ministros francés: “Les journaux anglais, d’après les journaux français, donnent ce matin des nouvelles de Madrid jusqu’au 8 inclusivement. Je n’ai jamais espéré mieux du roi d’Espagne, et n’ai point été surpris. Si ce malheureux prince doit périr, le genre de la catastrophe n’est pas indifférent au reste du monde : le poignard n’abattraît que le monarque, l’échafaud pourrait tuer la monarchie. C’est déjà beaucoup trop que le jugement de Charles Ier et que celui de Louis XVI : le ciel nous préserve d’un troisième jugement qui semblerait établir par l’autorité des crimes une espèce de droit des peuples et un corps de jurisprudence contre les rois ! on peut maintenant s’attendre à tout : une déclaration de guerre de la part du gouvernement espagnol est au nombre des chances que le gouvernement français a dû prévoir. Dans tous les cas, nous serons bientôt obligés d’en finir avec le cordon sanitaire, car, une fois le mois de septembre passé, et la peste ne reparaisant pas à Barcelone, ce serait une véritable dérision que de parler encore d’un *cordon sanitaire* ; il faudrait donc avouer tout franchement une armée, et dire la raison qui nous oblige à maintenir cette armée. Cela n’équivaudra-t-il pas à une déclaration de guerre aux Cortès ? D’un autre côté, dissoudrons-nous le cordon sanitaire ? Cet acte de faiblesse compromettrait la sûreté de la France, avilirait le ministère, et ranimerait parmi nous les espérances de la faction révolutionnaire”. Chateaubriand, François-René *Mémoires d’Outre-Tombe*, 3, L. 27, cap. 7, n° 40, las frases en cursiva del texto en ibi, 3 L. 28, cap. 1 y sobre la posición de las potencias europeas respecto a España 3, L. 27 cap. 7.

a. *Los hechos*

Este era, muy sucintamente relatado, el contexto que existía cuando en la sesión de 28 de abril de 1823 el Diputado Riego presenta su primera y más importante proposición de ese día a las mismas¹⁵⁹. En ella solicitaba la autorización de las Cortes para, en primer término, “salir acompañado de los patriotas de todas clases que quieran reunírsele para hacer la guerra a los franceses” y, en segundo lugar, destinar el premio, al que había renunciado infructuosamente en varias ocasiones, de 80.000 reales, que capitalizados ascenderían según sus cálculos a cuatro millones, para adquirir el “armamento y equipo” de quienes le siguieran.

Es, a este respecto, de extremada importancia señalar que, tal y como aparece recogido literalmente en el Diario de Sesiones, no solicita la incorporación al ejército ni un nombramiento como jefe militar, cuestiones ambas que el artículo 171-8^a de la Constitución atribuía en exclusiva al rey. Por el contrario, su petición se dirige a la creación de una tropa vinculada a y dependiente de las Cortes. Sin embargo, el presidente de la mismas, Flores Calderón, tras elogiar el ofrecimiento que denotaba un “ardiente celo” patriótico, deniega ambas peticiones. Alegó para ello, en el primer caso, que “lo prohíbe la Constitución” y, en el segundo, que ya existía una resolución al respecto de la Cortes, refiriéndose a la negativa, ya aludida, de la Cámara a aceptar su renuncia al premio tras la ardorosa defensa de Argüelles¹⁶⁰. Riego replicó suplicando que se tuviera en consideración la situación puesto que “saben muy bien las circunstancias en que nos hallamos”. Añadió que no siendo el suyo más que un voto podía acudir en su lugar el suplente “persona muy digna que seguiría en un todo a los señores Diputados” y que “debiendo a la Nación la pensión

159 Ese mismo día, en efecto, se presenta una proposición firmada por Riego, Canga Argüelles, Alcalá Galiano y Buruaga sobre la escarapela de tres colores (“encarnado, verde y morado, colores que recuerdan días de gloria a la Nación”) que debían lucir los ejércitos, probablemente como medida de identificación ante las deserciones que se estaban produciendo. DSC, sesión 28 de abril de 1823, p. 26. Es, desde luego, reseñable que la proposición a la que nos estamos refiriendo va inmediatamente después de otras dos, una en la que varios diputados pedían la creación de una fábrica de fusiles y otra de Canga que apremiaba a la “formación inmediata de un reglamento de sanidad militar”. Ibi, p. 25.

160 Obviamente se refería a la negativa a aceptar la renuncia aprobada por las Cortes tras un encendido discurso de Argüelles en 1821 tras las reiteradas negativas de Riego a aceptar la suma, concedida como premio para compensar la disolución del ejército de la Isla. A pesar de ello ni Riego ni sus herederos quisieron percibir jamás esa cantidad.

de que disfruto debo concederla a esta para hacer la guerra a los franceses que nos quieren arrebatarse la libertad”. Concluía pidiendo que “a lo menos”, no impidieran que su proposición pasara a ser debatida en una comisión para que elaborara el pertinente dictamen.

Para entonces ya habían dejado caer sus máscaras los diputados contrarios al “sistema”, en particular los realistas, y era evidente un cierto sentimiento de derrotismo general. En tal estado de ánimo, uno de ellos, Gómez Becerra, pidió la palabra para alegar algo que, probablemente, nadie se atrevería a decir tan solo algunos meses atrás: calificar su propuesta de exposición y no de proposición, con lo cual no era preceptivo un pronunciamiento sobre la misma. Aunque tal conceptualización no era conforme a derecho dado que había sido presentada por un diputado, tal y como le reconvino Flores Calderón, lo cierto es que éste también añadió que el dictamen que evacuase la comisión se limitaría a expresar “que las Cortes lo han oído con agrado”. Era ésta una intromisión inadmisible, un abuso de facultades por parte del presidente como supo ver Riego quien protestó la misma –“no quisiera que el Sr. Presidente previniese la opinión de las Cortes sobre este punto”– y, como último recurso, solicitaba que se aplicara el mismo criterio que las Cortes habían utilizado con los Consejeros de Estado a los que se le había concedido una autorización similar.

Con la respuesta de que en este último caso estos estaban sometidos a un Reglamento que “puede dispensarse”¹⁶¹ del que carecían los Diputados, “imposibilitados por la Constitución”, el presidente dio por concluido el debate y la proposición, en lugar de pasar como era preceptivo y se había acordado, a una comisión, se sometió a votación con resultado negativo. A cambio, se aprobó por los presentes su inserción íntegra en el Diario de Sesiones y se le expresó por unanimidad un especial agradecimiento. Desde una perspectiva retrospectiva, resulta cruelmente irónico que en la misma sesión y casi inmediatamente se sometiera a debate el dictamen de la comisión de Guerra, de la que Riego era presidente, acerca del “modo de contener la desertión de los quintos de las provincias de Málaga y Granada”¹⁶².

161 Orden de 26 de marzo de 1821 “se declara que la prohibición de que los consejeros de Estado no puedan ser nombrados ni aun interinamente Secretarios del Despacho a que se refiere el decreto de las Cortes ordinarias y extraordinarias de 20 de febrero de 1812 se contrae a empleos y comisiones del Gobierno”. CD, T. VII, p. 16.

162 DSC, sesión 28 de abril de 1823, pp. 25-26.

b. Examen de los fundamentos de derecho

Tales son los antecedentes en los que se incardina el borrador de la Representación que se ha tomado como hilo conductor de este trabajo. El *ciudadano* Riego, y la expresión es suya, la escribe a la desesperada, absolutamente consciente del peligro que acecha al orden constitucional por todas partes, incluso dentro de las propias Cortes, y como el último recurso de defensa de su honor como militar y de su integridad como ciudadano constitucional. Porque la *causa movens* de la misma es tanto la denegación de las Cortes a su petición como la forma en que se llevó a cabo y, muy particularmente, el apoyo jurídico de la misma.

Poniendo por delante su honor militar y, sobre todo, su lealtad a la Constitución *intacta*, además de la corrosiva crítica política que le sirve de argumentación fáctica, su principal objetivo consiste en desmontar los fundamentos de derecho señalando su inadecuada aplicación. Aunque en el Diario de Sesiones no aparecen reflejados, ya que Flores Calderón se limita a una referencia general a la Constitución, se dio por sentado que se trataba del artículo 129, cuyo tenor disponía “durante el tiempo de su diputación contado para este efecto desde que el nombramiento conste en la permanente de Cortes no podrán los Diputados admitir para sí, ni solicitar para otro empleo alguno de provisión del Rey, ni aun ascenso, como no sea de escala en su respectiva carrera”. Un artículo que había sido, por así decir, “blindado” por la Cámara, precisamente para garantizar la independencia de los diputados y evitar convertirlos en correas de transmisión –“el influjo”– de los gobiernos habida cuenta los nombramientos de cargos llevados a cabo hasta el momento, por dos Decretos de 28 de mayo de 1821 y que sería invocado de nuevo en esta interpretación en la primera sesión efectiva de las Cortes ordinarias de 1822, como ya se expuso. En este sentido, si bien uno de ellos prohibía explícitamente que se pudiera llevar a cabo cualquier alteración o modificación de ese artículo, el segundo, sin embargo, aunque impedía el cambio de destino de los diputados a petición del interesado, autorizaba no obstante al gobierno “a trasladar a los diputados que obtienen empleos civiles, militares y políticos por causa justa de pública conveniencia de la misma manera que lo haría si no fueran diputados”¹⁶³.

163 D 28 junio de 1821, por el cual “no pueden las Cortes, ni diputado alguno de ellas alterar, adicionar ni reformar el artículo 129 de la Constitución”. Publicado en la *Gazeta de Madrid*, 15 de julio de 1821, página 1095; y D XXXI de 28 de mayo de 1821, “Las Córtes

A pesar de que la gravedad de la situación podía permitir una interpretación extensiva en la línea que recogía este decreto –y a la que, por cierto, se acogería presumiblemente la Cámara el 13 de junio siguiente para concederle la autorización que ahora le denegaba–, desde el punto de vista jurídico no cabía la aplicación del artículo. Con indisimulada irritación, Riego incide en este punto y señala la equivocada invocación del precepto y, en todo caso, la incongruente interpretación del mismo –“Es lo oportuno llamar la atención al congreso sobre la errada interpretación que dieron a mi solicitud o al artº que acabo de citar en que apoyaron su resolución”–. Con asesoramiento externo, o tal vez valiéndose de sus estudios de leyes cursados en Oviedo, estaba en lo cierto al señalar un *error iuris* en la decisión de las Cortes, procedente tanto de la calificación de los hechos como de los fundamentos de derecho. Porque, tal y como había expuesto en la Cámara y específica a continuación, su petición se centraba en solicitar, en su condición de ciudadano–representante, la autorización a las Cortes para proceder a realizar un servicio militar activo en una situación de excepcionalidad¹⁶⁴ y no a la obtención de empleo alguno de provisión del Rey” (el subrayado es suyo).

Llama en este extremo la atención la torpe aplicación de este artículo en concreto. Sobre todo teniendo en cuenta que, a esas alturas, Riego era, aun a pesar suyo, mariscal de campo, es decir, había alcanzado el más alto grado en la escala que se podía obtener en el ejército¹⁶⁵. En consecuencia, difícilmente podría solicitar un ascenso o empleo en conformidad a las atribuciones reconocidas al rey por el artículo 171 8ª y 9ª de la Constitución, principalmente la primera, que le atribuye la facultad de nombrar generales. Es tanto más incomprensible cuanto en aquellas Cortes había juristas de elevada formación, muchos de los cuales habían participado directamente en la elaboración del texto constitucional.

Es obvio, a este respecto, que la explicación es extrajurídica y, en realidad,

han decretado que ningún diputado pueda ser trasladado de un destino á otro á solicitud suya directa é indirecta”. *Gaceta de Madrid*, núm. 160, de 07/06/1821, página 852 y CD, T. VII, p. 119.

164 “Su pretensión se limitó á ocupar un puesto en las filas de los defensores de la libertad en los apurados momentos en que fuerzas respetables extranjeras unidas a las de los cuerpos de facciosos y traidores [...] nos mandan descarada e imperiosamente que volvamos a someter el cuello a la coyunda”. Riego, *Representación*.

165 La *Miscelanea de Comercio, Política y Literatura* nº 99 de 7 de junio de 1820 publicaba en su p. 2 un escrito de Riego en el que constaban sus 4 renuncias a este cargo y los motivos por los que había aceptado.

tal y como ya se expuso, denota un uso espurio de la Ley Fundamental por excelencia. En aquellos atribulados días, donde la conspiración absolutista había obtenido un éxito indiscutible con el apoyo de una fuerza extranjera y la defección de los propios jefes militares españoles que ya se estaba produciendo, y, a pesar de las apariencias, la confrontación exaltados–moderados –entre los cuales, por cierto, había algunos que no veían con malos ojos la intervención exterior– que se arrastró durante todo el Trienio, había llegado a su punto culminante, todo era posible. En este sentido, el escrito denota, ante todo, el espíritu de frustración y abatimiento que debió sentir ante acuerdos inexplicables en un tiempo de tribulación.

No tengo constancia de que hubiese elevado a las Cortes esta representación. De hecho, el documento que utilizo ni siquiera se encuentra en el archivo del Congreso, sino en la Biblioteca Nacional. Probablemente debido al acelerado curso de los acontecimientos no se presentó tampoco una ocasión propicia y, en todo caso, apenas dos meses más tarde, cuando ya casi todo estaba perdido, las Cortes conceden finalmente autorización al gobierno para que “pueda emplear en comisiones militares a alguno de los actuales Diputados”. Riego, que había votado la inhabilitación del rey, pedido la jura de la Constitución a los miembros de la regencia y fue comisionado por la Cámara para dirigir el traslado de la familia real a Cádiz en mayo de 1823, fue nombrado por Fernando VII segundo general del ejército de Ballesteros¹⁶⁶ cuando éste ya estaba en conversaciones para llegar a un acuerdo de no enfrentamiento con un general del ejército de Angulema.

c. Análisis jurídico-constitucional

A esas alturas no era una novedad que los jefes y miembros más prominentes del partido moderado eran críticos con la Constitución en algunos aspectos sustanciales y, en especial, los integrados en la Sociedad Constitucional mostraban un total desacuerdo y en mayo de 1823 concluyeron la redacción

166 Autorización el 21 de junio de 1823, traslado a los interesados (Riego Álava y Valdés), 13 de julio. ACD, *Papeles secretos y reservados de Fernando VII*, Acuerdos, disposiciones, resoluciones y manifiestos de las Cortes, H-03-T.57, F. 229. El 27 de julio, se le traslada al secretario de la Guerra la autorización a Riego para incorporarse al servicio activo. Ibi, H-03-T.57, F. 237. A las dos de la tarde del 24 de junio, Riego comunica por escrito a los secretarios de las Cortes su aceptación en respuesta al oficio que acaba de recibir. ibi. La adscripción de Riego al ejército de Ballesteros, en comunicación del secretario del Despacho de Guerra de 22 de junio de 1823. Ibi, H-03-T.57, F. 221-222.

de un proyecto, que se había comenzado a gestar ocultamente dos años antes, de significado totalmente contrario a la vigente. El mismo que, con apenas unas formales modificaciones, acabó por convertirse en el Estatuto Real de 1834. Verosímilmente ellos o sus jefes más destacados –Martínez de la Rosa, Toreno–, aglutinados en torno a la Sociedad del anillo de oro desde finales de 1821, creían, al igual que los realistas, que la incorporación de Riego, vinculado a los comuneros, acusado casi desde inicios del Trienio de republicano, partidario acérrimo de la legalidad y, por consiguiente, de la intangibilidad de la Constitución como deja plasmado en todos sus escritos incluido este borrador, suponía de entrada el inconveniente de arrastrar a las masas sobre las que, pese a todo, seguía teniendo gran ascendiente.

Nos encontramos, pues, ante el uso político de la Constitución que había sido aprobada y promulgada para “la felicidad de los españoles de ambos hemisferios”. Un uso torpe y voluntariamente espurio en la medida que se infringieron las normas aplicables tanto en el plano formal –el Reglamento del gobierno interior de las Cortes al cambiar a sabiendas la calificación de proposición a exposición para impedir el dictamen de una comisión– como en el fondo, al partir de una deliberadamente errónea calificación jurídica de los hechos.

En consecuencia, los fundamentos jurídicos son en efecto improcedentes al caso. Tal y como queda puntualmente reflejado en el Diario de Sesiones, la solicitud de Riego no se dirige a la obtención de autorización para incorporarse al ejército regular, sino a la formación de uno propio que dependiera únicamente de las Cortes, petición posiblemente motivada en las defecciones de los jefes y tropa a quienes la Cámara habían encomendado la defensa de la Nación. En este sentido, el recurso al artículo 129, único fundamento del presidente y los diputados que respaldaron su propuesta con su votación, era, por consiguiente, impropio. La cuestión, entonces estriba en saber si la petición del general era extemporánea o conforme a Derecho.

Es preciso, en lo referente a este extremo, prestar atención a la parte de su argumentación relativa a la interpretación. A este respecto, resulta sumamente ilustrativo consignar que, si bien, salvo la aludida referencia al artículo 129, no se remite a ningún artículo en concreto, Riego invoca tácitamente el espíritu que inspiró al constituyente en los asuntos referentes a la defensa nacional, un deber cívico que afectaba a todo español y que transmitía la redacción de los artículos 9 (obligación de los españoles a concurrir a la misma cuando sean llamados por las leyes), 362 a 365 sobre las milicias nacionales

y hasta el 131 10^a y 11^a que fija las facultades explícitas de las Cortes a estos efectos. Ciertamente se establecen en ellos unos requisitos formales que no se contemplan en la petición *ex parte*, pero todos ellos podían ser excusables en unas circunstancias tan excepcionales, apoyándose además en el artículo 2º de la *Ley Constitutiva del Ejército* que prescribía el servicio militar obligatorio para todos los españoles de 18 a 50 años. Este, a mi parecer, es el razonamiento que se esconde tras su opción de recurrir a precedentes para demostrar la *reductio ad absurdum* que supone ese acuerdo aprobado por las Cortes.

Aunque existían antecedentes muy notables y similares, como el permiso concedido al general Blake en 1811 –bien es verdad que antes de la promulgación de la Constitución– para incorporarse al ejército en una situación similar, prefirió remitirse a hechos mucho más recientes de conocimiento sobrado por esos mismos representantes. Y así alega las felicitaciones recibidas por su comportamiento con el de otros jefes militares también diputados que, sin consentimiento de las Cortes, se enfrentaron en la plaza mayor de Madrid y redujeron a los batallones enviados para derribar el régimen constitucional el 7 de julio de 1822. Un párrafo en particular del escrito,

si el combatir los enemigos de la Constitucion cuando la atacan con las armas en la mano se refutase cargo dado por el rey incompatible con la calidad de diputado [...] pudiera llegar muy bien el caso de que fuera un deber de la representación nacional ofrecer a los cuchillos asesinos sus pechos y sus cuellos y en ellos los de todos los patriotas de la España. Esta absurda consecuencia se deduce del principio que las Cortes adoptaron al negarse a mi solicitud

es altamente elocuente a este respecto.

En este sentido, la argumentación de Riego era impecable. Estaba, en efecto, en absoluta conformidad con los propios principios y valores constitucionales, o, por expresarlo en palabras de un notable diputado, con el “espíritu de filosofía con que los legisladores deben examinar los males para atacarlos con mano fuerte y decidida, con arreglo a los principios de la verdadera legislación”. En particular, con la concepción de la soberanía nacional y, sobre todo, con la condición de español tal y como aparece definida en el propio texto constitucional cuyo artículo 6º definía el “amor a la Patria” como una de sus principales obligaciones, así como la defensa de la Nación del 9.

Es verdad que este último exigía ser llamado por la ley, pero es igualmente cierto que las Cortes estaban plenamente facultadas para introducir excepciones como explícitamente recordaba el diputado Salvato en la dura sesión

celebrada en marzo del año anterior con motivo de la discusión sobre la responsabilidad política del ex secretario del Despacho de la Guerra, Sánchez Salvador¹⁶⁷. Sobre todo en momentos tan apremiantes, como sucedió en diversas ocasiones a lo largo del Trienio y de hecho hicieron con relación a este tema apenas mes y medio más tarde. En algunos supuestos, en asuntos de gravedad, como había ocurrido en el “asunto Palarea”, tan solo unos meses antes y como harían con él mismo poco después al concederle la autorización que ahora le denegaban.

Indagar los motivos de esta decisión entraría en el plano no permitido de la especulación. En ese contexto, sin embargo, no se puede dejar de prestar atención a la respuesta dada por Flores Calderón a la réplica de Riego de que se le aplicara la misma consideración que a los Consejeros de Estado, sobre los que recaían similares prohibiciones. En ese momento, el presidente de las Cortes se movió en un terreno exclusivamente técnico que nos conduce inevitablemente al modelo normativo del sistema constitucional introducido en 1812. Aunque, cómo se repetirá en diversas ocasiones a lo largo de los debates, las disposiciones (leyes, Decretos, Órdenes y Reglamentos) eran perfectamente discernibles diferenciándose no sólo por el contenido sino por la fuente y la forma de promulgación, en este caso se muestra, a mi parecer, como la expresión de otro aspecto altamente interesante: la carencia de la regulación específica de las cuestiones de orden público y estados de excepción, por un lado, y, por otro, la existencia de una cierta jerarquía normativa. El hecho de que Flores Calderón indicara expresamente, tal y como ya se ha apuntado, que el caso de aquellos estaba previsto por un Reglamento posible

167 Los entrecomillados del texto están extraídos de una de las intervenciones de Salvato en la sesión del 31 de marzo de 1822 en la que, literalmente, expuso: “¿Cómo es posible que podamos prescindir del espíritu de filosofía con que los legisladores deben examinar los males para atacarlos con mano fuerte y decidida, con arreglo á los principios de la verdadera legislación? Es evidente que en todas partes se han presentado oscilaciones; en todos puntos hemos visto atacadas las libertades públicas, ofendidos y atropellados atrozmente los libertadores de la España. Conocida es la atribución de las Cortes de fijar todos los años las fuerzas de tierra y mar que han de defender á la Nación de sus enemigos exteriores o interiores: ¿y no estará en nuestra mano buscar todos los elementos y medios necesarios para remover cuantos obstáculos se opongan al bien y tranquilidad de la Patria? La indiferencia a mi vista sería un crimen indisculpable en los legisladores. Las Cortes pasadas, cuando vieron algunas conmociones en varios puntos, nombraron una comisión de Política, la cual entendió en todos los particulares que tenían relación con el estado de la Patria”. DSC, sesión 31 de marzo de 1822, p. 62.

de reformar o susceptible de excepciones y el suyo era un caso sometido a la Constitución, por tanto inalterable, respalda esta opinión, por más que en el plano de la realidad esto no siempre se cumpliera por razones de conveniencia política e incluso razón de Estado, de los que existen elocuentes testimonios durante el periodo.

A MODO DE RECAPITULACIÓN

Este trabajo se inicia con la alusión al valor simbólico de Riego en el acervo popular, resaltado por los conspicuos especialistas que se han ocupado del estudio de Trienio y de su persona en particular. En los epígrafes precedentes se ha querido incidir en el mismo, pero desde la perspectiva que se incardina en un plano esencial de la etapa, el jurídico-constitucional. Desde este punto de partida, el valor simbólico del personaje se agiganta en la medida que aparece como protagonista involuntario de episodios concretos a través de los que se manifiesta con crudeza la confrontación, no sólo acerca del modelo constitucional sino de la propia “idea” de Constitución, existente entre los liberales así llamados exaltados y los moderados. En particular con los denominados *anilleros*, el sector más combativo y taimado de los mismos, cuya expresión más evidente, en el plano que aquí interesa, fue la irrenunciable y beligerante reivindicación por estos últimos de la primacía del Ejecutivo frente al Legislativo.

En esta línea, no es desde luego aleatorio que los casos analizados, acaecidos además en todos y cada uno de los años del periodo, coincidan con acontecimientos definitivamente importantes desde el punto de vista constitucional, pero que ambos partidos contemplaban con sensibles diferencias. En 1820, la abolición del nombramiento de capitán general de Galicia con la discusión en Cortes del proyecto de Ley sobre las Sociedades Patrióticas; en 1821, la destitución de la Capitanía General de Aragón con las maniobras y manipulaciones gubernamentales para impedir el previsible triunfo de los exaltados en las elecciones de diciembre; en 1822, Fernando VII utiliza su regreso a Madrid como la principal razón de su consulta al Consejo de Estado para *romper el pacto constitucional*, esto es, abolir la Constitución y *restaurar sus derechos* absolutistas. Y, finalmente, en 1823, denegación, en una situación de excepción, de la autorización para formar un ejército dependiente de las Cortes, aunque posteriormente le sería concedida al gobierno y al rey, quien ordenó su incorporación al ejército comandado por Ballesteros cuando éste estaba a punto de firmar con el general francés Molitor una rendición sin haber presentado una sola batalla y que le abandonó a su suerte de la forma más sancionada y repudiada por el Código y por la deontología militares.

Es indudable que el hecho de que exhibiera a través de discursos, cartas, proclamas y colaboraciones que se cuidó de dar a conocer a la “opinión pú-

blica” a través de los periódicos, su completa adhesión a la Constitución de 1812 “*intacta*” así como la continuada reivindicación de, e invocación a, los derechos individuales que ésta garantizaba –en realidad, los dos puntales en que se asienta no solo su actividad pública sino sus defensas jurídicas en los litigios que le afectaron personalmente–, la igualdad ante la ley o la libertad de imprenta, le colocaron en el centro de la diana de todos, desde los realistas a los moderados contrarios a la misma. Y a ello contribuyó en no poca medida, como se reconocería abiertamente en los debates en Cortes, el fervor popular que despertó, una popularidad que no buscó y de la que quiso huir en junio de 1821 cuando solicitó del rey permiso para abandonar España que, por cierto, no le fue concedido.

Son, todos ellos, motivos perfectamente identificados y asumidos por ambos bandos contendientes, como se desprende de las acusaciones lanzadas en Londres tras la caída del Trienio por un diputado exaltado contra Calatrava, responsable del último gobierno de esa etapa. Entre ellas, el tratamiento de las reclamaciones de Riego en las Cortes, en particular relacionadas con la Capitanía General de Galicia, ocupa un lugar destacado y llama la atención el hecho de que el siempre comedido Calatrava se defienda forzando la lectura del Diario de Sesiones al darle un contenido muy diverso a sus intervenciones reales¹.

En este preciso sentido, la “instrumentalización” de Riego fue útil para todos. Para el rey, que lanzó contra él falsas acusaciones de traición como pretexto para abolir la Constitución y le humilló en todas las ocasiones a su alcance promocionándole a los más altos grados militares y nombrándole para cargos, a los que renunció reiteradamente sin éxito, para destituirlo de los mismos de forma pública, notoria y deshonorosa. Para los exaltados, que hicieron de él un referente principal de sus reivindicaciones y denuncias de inconstitucionalidad dentro y fuera de las Cortes. Y, en especial, para los moderados, que lo usaron como principal objetivo de su calculada y deliberada cruzada contra sus adversarios políticos. También como centro de imputación de todos los males a través de manipulaciones y campañas de desinformación realizadas por sucesivos gobiernos, los cuales no tuvieron escrúpulos en violar los derechos y conculcar las garantías establecidas por la Constitución y las leyes. Entre otras, denegándole del derecho “a un juicio justo” que, sin embargo, si se le reconoció a otros jefes militares en situaciones coetáneas,

1 Calatrava, José María, *Respuesta de Don José María Calatrava a un libelo publicado contra él*. Londres, Imp. A. Macintosh, 1825, cargo 2º pp. 10 ss.

similares y por actuaciones reales y efectivas, denunciadas en su momento por su extremada gravedad².

El Ejecutivo y, excepcionalmente, las mismas Cortes, a pesar de que, como entonces universalmente se defendía entre los liberales, “la libertad civil establecida por la Constitución hace la igualdad de condiciones ante la ley”³ y del lugar preeminente y garantista que se otorgaba a la Constitución en el sistema jurídico que ella había introducido y que, desde luego, va más allá de la simple garantía moral y enunciado principal, no vacilaron en infringirla o llevar a cabo actos de inconstitucionalidad en muy relevantes ocasiones.

Desde el punto de vista teleológico, la causa final y asimismo desencadenante del conflicto era, como se viene reiterando, la existencia de dos modelos incompatibles de Constitución. Como es sobradamente conocido, desde su promulgación en 1812 la Constitución, no solo en el extranjero sino en el interior, fue duramente criticada desde determinados sectores liberales por, fundamentalmente, la merma del poder regio y la articulación de las Cortes, hacia las que se dirigieron las más acerbas críticas. Para estos grupos, como directamente escribía el “jurisconsulto español” que redactó, probablemente alrededor de 1813, un panfleto que no por azar se publicaba en 1820, no eran más que una *corporación, en que* (los diputados) *ó pensaban permanecer á tiempo indefinido, ó cuyo acceso les quedaba fácil con pequeñas interrupciones*. En suma, una reunión de advenedizos paniaguados que habían osado regular el poder del rey a través de restricciones destinadas a *quitar al Rey aquel poder regulador de todos los otros grandes poderes, [...] que impide toda lucha entre ellos; que mantiene la armonía en que deben vivir, ó la restablece si por acaso llega á turbarse, [...] este poder, que es el esencial de la cabeza o gefe de un estado*. Con evidente influencia más que de Constant de Guizot, reminiscencias en la asentada teoría de la Constitución histórica de cuño jovellanista y una selecta prosa, el anónimo autor en su crítica, por lo demás muy próxima a la efectuada por un sector de los *tories* desde el siglo

2 Además de los casos de los dos jefes y un oficial del regimiento Sagunto sometidos a consejo de guerra, asunto que se vio en la las Cortes el 31 de marzo de 1822, y el caso de general Copons, a quienes las Cortes aprobaron su petición de responsabilidad contra el ministro Feliú, ambos directamente relacionados con el asunto de la Capitanía General de Aragón y ya analizados en este trabajo, precisamente a petición de Morillo tras haber sido acusado por los miembros de la Fontana de haber infringido las leyes por la dura represión que llevó a cabo contra sus miembros en junio de 1821, se nombró un consejo de guerra, que le absolvió. Bayo, *Historia de la vida*, pp. 250-51.

3 Carnicero, *Causas de la división de ánimos*, p. 9.

XVIII o los legitimistas franceses, no duda en escribir, premonitoriamente, que su vigencia conduciría inevitablemente a una guerra civil⁴.

Este era, en términos generales, en lo que aquí principalmente interesa, el pensamiento del partido moderado, ejemplar y elegantemente condensado por los redactores del siempre sólido *El Censor* en un artículo publicado en la significativa fecha de 13 de julio de 1822. Incluso su interpretación del principio de separación de poderes, estaba orientada a reducir al máximo las competencias reconocidas al Legislativo en el texto constitucional⁵. Presupuestos tales como, entre otros, la prevalencia del Ejecutivo, iniciativa legislativa y derecho propio del rey al gobierno y bicameralismo con marcada superioridad de la Cámara alta, adquirieron en su sector más influyente, esto es, los *anilleros*, un carácter más que mesocrático, filoaristocrático⁶. Si bien en algunos de ellos, como Calatrava, se observa una inclinación más moderada que doctrinaria fue, en todo caso, el modelo que intentaron por todos los medios imponer por la vía de los hechos, en abierta contradicción a lo dispuesto por la propia Constitución que preconizaba un gobierno de los dos primeros poderes respetando su ámbito de competencias. Así se desprende de la aspérrima pugna entre el Ejecutivo y las Cortes a lo largo del periodo, recrudecida a partir de la legislatura ordinaria de 1822.

Es conveniente añadir que, en contra de lo que lo que se defiende por parte de la doctrina, de la lectura de los Diarios de Sesiones y de los actos del Ejecutivo no se desprende la existencia de un gobierno de asamblea, sino más bien lo contrario. Formalmente, el origen del conflicto radica en la reivindicación por parte de los gobiernos de un mayor poder de decisión amparándose en la potestad discrecional que, por naturaleza, corresponde al Ejecutivo para desarrollar su labor. Los Diputados exaltados nunca discutieron la misma, antes bien la

4 *Opinión sobre la Constitución política de la Monarquía española hecha en Cadix a principios del año 1812*, pp. 19, 21-2 y 64.

5 Fernández Sarasola, *Poder y libertad*, p. 522.

6 Comentando el artículo 16 de la *Charte* francesa, “El rey propone la ley”, Manuel Ruiz del Cerro escribía: “La iniciativa en la proposición de las leyes vinculada exclusivamente en la persona del Rey es un arma formidable con la que se destruyen fácilmente todos los bienes que puede traer consigo, la Constitución mas liberal que adoptase tan maléfico principio. No hay libertad que resista de la voluntad de un Rey que está seguro del poder legislativo, puesto, que éste no puede obrar sino es cuando y como el quiera: ¿Qué sería de la España si, como es indudable, esta innovación fuese una de las que con mas empeño tomasen sus representantes?”, escribe un autor en la ilustrativa fecha de 1822. Ruiz del Cerro, Manuel, *La carta francesa*, p. 18.

reconocieron e, interpretando extensivamente los preceptos constitucionales al respecto, no solo respetaron escrupulosamente las potestades de los gobiernos, sino que otorgaron amplias facultades en este sentido. Incluso a ministerios declaradamente hostiles y en las más adversas circunstancias, como testimonian los decretos de autorización para decidir sobre todas las materias que se aprueban en las últimas sesiones de todas las legislaturas ordinarias.

Pero asimismo eran conscientes de que, en base a esa facultad, como había defendido en una ocasión Constant y de hecho sucedió frecuentemente, los gobiernos confundían “la latitud concedida a la acción de gobierno con la arbitrariedad”⁷ y, en consecuencia, incurrían en abuso de poder, cometían infracciones y llevaban a cabo actos abiertamente inconstitucionales. Y también que, con la normativa existente, la responsabilidad ministerial, ya fuera penal por la comisión de un delito o disciplinaria “por ejecución”, carecían de eficacia. Solo “la política difusa”⁸, a través de la influencia de la opinión pública, a la que tanto valor concedieron las Constituyentes desde el Decreto de 10 de noviembre de 1810 y sobre la que con tanta vehemencia escribieron, entre otros, Flórez Estrada o Romero Alpuente, aun carente de valor jurídico, resultó ser un recurso, prácticamente el único, altamente eficiente.

Hechos como la negativa de sanción a disposiciones especialmente relevantes como, por ejemplo, la ley de abolición de señoríos, para presentar un proyecto gubernativo alternativo formal y materialmente en contra de lo prescrito por la Constitución, el nombramiento y mantenimiento de cargos y autoridades manifiestamente anticonstitucionales o la negativa a exigir una declaración de adhesión a la Ley fundamental en las tomas de posesión, el deliberado y ostentoso incumplimiento de Decretos de las Cortes aún en las más graves circunstancias y la frecuente indiferencia hacia su inaplicación, aspectos todos reiteradamente protestados en la Cámara y denunciados hasta por la prensa moderada⁹, así lo ponen de manifiesto. Y no son, desde luego,

7 “L’arbitraire, qui a des effets très positifs, est pourtant une chose négative: c’est l’absence des règles, des limites, des définitions, en un mot, l’absence de tout ce qui est précis”. Constant, Benjamin, “De l’arbitraire”, en *Écrits*, pp. 72 ss., 80 y 73.

8 Fernández Sarasola, *Poder y libertad*, p. 603 ss.

9 “Recibimos quejas continuas de la inobservancia de muchas leves dictadas por el congreso nacional, y no solo esto, sino de que en varios puntos de la Península, únicamente se tiene noticias de ellas por los papeles públicos. Dar leyes y no cumplirlas o no hacerlas cumplir es peor que no tener leyes, porque a lo menos en este último caso no se experimenta el grado de desidia, o la incapacidad, o la mala fe de sus agentes subalternos”. *El Universal* de 25 de febrero de 1822, p. 1.

casos excepcionales. Porque, en la práctica, todos los Ejecutivos del Trienio que –con excepción del de San Miguel, por lo demás, el único que siguió lo establecido por la Constitución a estos efectos y que tampoco estuvo exento de críticas en su momento¹⁰–, fueron desempeñados por moderados o personas próximas al moderantismo, incurrieron en mayor o menor medida en este comportamiento. Algunos como el de Bardají-Feliu mediante infracciones o realizando claros actos de inconstitucionalidad que fueron ya denunciados en su época como abuso de poder, y otros, como Argüelles, desnaturalizando pruebas o mintiendo ostensiblemente a la Cámara, por citar únicamente los asuntos sobre los que trata este trabajo.

Con todo, el presidido por Martínez de la Rosa, quien ya había realizado una vigorosa defensa del Ejecutivo en detrimento del Legislativo precisamente en el asunto de la Capitanía General de Galicia en septiembre de 1820 y aún con más intensidad en la defensa del Discurso de contestación al de la Corona en la apertura de las Cortes de 1820, donde incluso se opuso enérgicamente a que, como era lo habitual, se permitiera el acceso de los diputados al texto elaborado por la comisión nombrada *ad hoc* antes de su votación, es paradigmático en este sentido. Durante la legislatura ordinaria de 1822, de mayoría exaltada en la Cámara, fueron constantes los pulsos lanzados contra el segundo poder. De hecho, sus miembros no sólo se mostraron reticentes a presentar los presupuestos de gastos en las preceptivas Memorias departamentales a las Cortes y hasta en un caso se negaron a acudir a las mismas alegando falta de sintonía con algunos de sus miembros, sino que cuando fue interpelado para que explicara la política internacional, ocultó deliberadamente información a la Cámara, limitándose a exponer que todo discurría con la mayor normalidad. Y que las relaciones con Francia eran fructíferas cuando ya era *vox populi* el apoyo explícito del Gabinete francés a los sediciosos que actuaban con impunidad en la frontera y sobradamente conocidas las declaraciones contrarias a la Constitución realizadas por los ministros y hasta el propio Luis XVIII.

En tales circunstancias, la función de las Cortes que, como había dejado sentado en marzo de 1821 en su dictamen la comisión especial nombrada para analizar “el estado político de la Nación”, eran “las principales conser-

10 Romero Alpuente, Juan, *Observaciones sobre la probable disolución del Estado, o lo que es lo mismo, la continuación del actual ministerio*. Madrid, Imprenta que fue de la Viuda de López, 1823, *passim*. La crítica se dirige principalmente a la prolongación de la interinidad del gobierno en tales circunstancias.

vadoras de la Constitución y que como tales deben cuidar de su observancia y de la conservación de sus decretos”¹¹, quedaba seriamente afectada. Sobre todo porque, como con acierto expone Fernández Sarasola, la inexistencia del control de constitucionalidad mermaba considerablemente su eficacia a este respecto, como se puso de manifiesto en diversas ocasiones, entre ellas la mayoría de los supuestos de Riego descritos en los apartados anteriores. Aunque la concepción, y actividad en la Cámara, de los exaltados responde a los requerimientos del parlamentarismo inicial, que este constitucionalista matiza y denomina “monista”¹², en realidad, los diputados debían conformarse con la interpelación a los secretarios del Despacho, lo que con frecuencia solo producía como resultado su consignación en el Diario de Sesiones y su divulgación por la prensa, sin eficacia jurídica real más allá de la publicidad.

En ese contexto, Riego no solo fue, en rigor, objeto de palmarias discriminaciones y abusos de poder por parte de los gobiernos según la coetánea definición de los mismos, sino que, probablemente como el más popular de sus sostenedores en aquel momento, fue víctima no colateral sino directa de las conspiraciones contra la Constitución llevadas a cabo desde las más altas instancias del poder en 1822. Todas ellas cumplían escrupulosamente todos y cada uno de los elementos conformadores de este tipo delictivo según las leyes de 17 de abril de 1821, posteriormente recogidos en el Título I de la Primera parte, “Delitos contra la Constitución y orden político de la Monarquía” del Código Penal del año siguiente. Articuladas y desarrolladas en y desde el Ejecutivo, contaron con el respaldo del rey o con el apoyo de determinados diputados y autoridades intermedias porque “los unos quieren la Constitución

11 “La primera de las precauciones debe ser que las Cortes tengan siempre presente que son las principales conservadoras de la Constitución y que como tales deben cuidar de su observancia y de la conservación de sus decretos. No se crea por esto que la comisión sospecha de la personas beneméritas que SM ha puesto al frente de sus negocios, pero estas mismas personas pueden ser seducidas o engañadas”. Este dictamen fue leído en sesión pública DSC, sesión 20 de marzo de 1821, y mandado imprimir por las Cortes. *Informe presentado a las Cortes en la sesión pública de 20 de marzo por la comisión especial nombrada para examinar el estado político de la Nación*. Madrid, Imprenta de las Cortes, 1821, de donde está extraído el entrecomillado, p. 9. Entre otros aspectos, en él se detallaban todas la conspiraciones e incluía una relación de las múltiples sediciones en curso con especial implicación de Francia, donde los conspiradores, se dice ahí, tenían su sede la calle Richelieu de París.

12 Fernández Sarasola, *Poder y libertad*, p. 603.

con cámaras y otras cosas de la Carta francesa. Los otros quieren lo antiguo como estaba de 1819 y los otros están al ver venir”¹³.

Aunque sus fautores, Fernando VII y sus “consejeros privados”, por una parte, y los *anilleros* –con y sin el rey–, por la otra, recurrieron al disimulo intentado llevarlas en secreto mientras continuaban desempeñando sus cargos y con su trabajo en las Cortes demostrando sus grandes dotes oratorias y manipuladoras, lo cierto es que, sobre todo a partir de 1822, trascendieron al público¹⁴ y se sumaban a los movimientos sediciosos de naturaleza absolutista y a las presiones, diplomáticas o no, extranjeras. En todo caso, conforme a derecho, todos ellos eran reos de traición en la medida que su fin era la derogación de la Constitución para restaurar el absolutismo los unos y, los otros, el modelo bicameral de inspiración doctrinaria por la fuerza; por consiguiente, sin seguir el procedimiento y el plazo de reforma establecido en el texto constitucional por la vía del artículo 375.

La prueba incontestable es el proyecto que elaboraron con la activa participación de Martínez de la Rosa y Toreno, cuya redacción concluyó el 18 de mayo de 1823. En lo que ahora interesa, es particularmente destacable que en el mismo se incluía un *artículo transitorio*, el 5, del siguiente tenor: “5. Todas las decisiones de las anteriores Cortes, posteriores al 30 de junio de 1822, se declaran nulas, y como si no hubiesen existido”.

Es decir, se abolía literalmente la labor de unas Cortes de primacía –aunque no dominio– exaltado que, por lo menos hasta la primavera de 1823, se habían limitado a cumplir esmeradamente la Ley por excelencia. Complejas por su composición, en ellas y en las circunstancias más adversas, una parte de los diputados trató de salvar con dignidad el orden constitucional estable-

13 *Bosquejo del plan de conspiración*, pp. 7 ss.

14 Además de las denuncias en la prensa afín a los exaltados y en marzo de ese año en las Cortes, merece la pena destacarse la señalada obra de Ruiz del Cerro, cuyo inicio es, por demás extremadamente elocuente: “El asunto general de las conversaciones del día es la modificación que quisieran introducir en el pacto político de los españoles los enemigos de la libertad. Por desgracia es innegable la existencia de una facción, compuesta de hijos indignos de la madre España, que proyecta corromper la pureza de la ley constitucional, para aliarse con el despotismo y cargar con las riquezas, los honores y el influjo. También es desgraciadamente cierto que una muchedumbre innumerable de gentes dóciles y sencillas se inclina á tan importante, medida, en la creencia de que con ella conseguiríamos la tranquilidad interior. Unos y otros fijan su mirada en la Carta francesa como un modelo que deberíamos adoptar y al que seria conveniente que nos arreglásemos ‘para asegurar la libertad’. Ruiz del Cerro, *La Carta francesa*, p. 1.

cido luchando sin descanso, y las más de las veces sin éxito, por la aplicación íntegra de una Constitución que la abrumadora mayoría de los gobiernos de ese periodo consideraba inadecuada e infringían a su conveniencia. A este respecto, resulta en extremo elocuente la fecha consignada: exactamente el inicio de los sucesos de julio de 1822 donde la participación del gobierno que presidía a la sazón Martínez de la Rosa, siquiera en comisión por omisión, no ha sido suficientemente resaltada, a pesar de los ministros dimisionarios a raíz de tales sucesos y la apertura del proceso de responsabilidad al secretario del Despacho de Gobernación de la Península e Islas Adyacentes, Garellly. Hecho éste, por cierto, que no produjo mayores consecuencias personales más allá de la promulgación de un Decreto conforme al cual a los ex secretarios del Despacho se le aplicaban las mismas formalidades que a los que estaban en activo en los procesos de responsabilidad¹⁵.

Aunque es obvio que en aquel momento no consiguieron su principal objetivo e incluso buena parte de los miembros de la Sociedad del Anillo de Oro sufrieron el exilio, su *modus operandi* inauguró una práctica característica de la vida política española: la no aceptación del triunfo electoral del adversario político y su hostigamiento cuando no eliminación del mismo a través de todos los medios, ya sean legales o ilegales, con el fin de llegar al poder o impedir que aquellos lo alcancen. Fue ahí, como acertadamente supo ver Gil Novales¹⁶, donde se fraguó ese cainismo tan típico de la vida política española en el que se frustraron todos los intentos progresistas y modernizadores desde entonces, como testimonian el fracaso del Sexenio Democrático y las dos Repúblicas.

A este respecto, merece la pena detenerse y meditar sobre el proceso de desinformación iniciado inmediatamente después de la restauración del absolutismo y la ejecución de Riego que se mantuvo a lo largo del siglo XIX, durante el cual el dominio moderado es incontestable. Conforme al mismo, los defensores de la Constitución y el ordenamiento jurídico son denostados y envilecidos, en tanto que se proclaman héroes a quienes incurrieron en un delito de conspiración contra la Constitución perpetrado desde el mismísimo gobierno, ensalzando lo que en rigor era un golpe de Estado y, jurídicamente, una traición. Un juicio del que fueron también cómplices acérrimos partidarios de Riego en el Trienio. Tales son los casos de, por ejemplo,

15 Decreto 10 de noviembre de 1822. CD, T. X, p. 33.

16 Para quien “nuestra revolución burguesa (tuvo) más de represión que de revolución, por lo menos en las capas más altas del movimiento”. Gil Novales, *El Trienio*, p. 79.

Alcalá Galiano y hasta del que fuera jefe de su Estado mayor y autor de la letra del himno que lleva su nombre, Evaristo San Miguel¹⁷, ambos con una

17 Es, a estos efectos, notable y digno de mención el cambio de opinión manifestado acerca de los “partidos” durante la época. A este propósito, treinta años después del Trienio, Evaristo San Miguel escribe acerca de los moderados: “¿Qué profesaba el partido moderado? Legalidad estricta, observancia exacta de la Constitución, libertad sin licencia; emisión del pensamiento, tanto por escrito como de palabra, sin salir de los límites de la prudencia. ¡Aspiración sin duda noble y generosa! Mas ¿era esto posible? ¿Podían lisonjearse de que hombres que acababan de salir de la opresión, no habían de alborozarse al menos con ruidosas manifestaciones del placer que les causaba respirar en atmósfera mas libre? [...] Las pretensiones de los moderados eran justas, pero irrealizables: la convicción que debían tener por otro lado de que las instituciones políticas eran objeto de secreta enemiga por parte de la corte, y de la hostilidad mas ó menos abierta por las clases poderosas acostumbradas á ejercer tanta influencia en las populares, que favorecía en muchos casos tanto á sus enemigos, como á sus apasionados. La libertad de imprenta, alcanzaba á todo el mundo; la libertad personal, era un sagrado á que todos se acogían; y en la Constitución, se hallaban armas para combatirla”. Una descripción que contrasta vivamente con la otorgada a sus oponentes: “¿Y qué plan era el de los exaltados, que manifestaban sus sospechas con tanto encendimiento, que señalaban tan altamente con el dedo á los enemigos de la nación, que tanto clamaban contra el sistema de indulgencia y tolerancia escrita en el pendón de sus enemigos en política? Ninguno fijo, ninguno determinado que manifestase el fin á que tendían. Se abandonaban ciegamente al impulso de su descontento; lo manifestaban con sobrado ruido, dando á pensar, sin tener tal vez intención, que abrigaban planes de trastorno, suministrando con su conducta argumentos especiosos para acrecentar el odio de sus enemigos. Aspiraciones de trastorno, no entraron en el espíritu de estos exaltados: también concibieron la idea de que la Constitución podía sostenerse, adoptando formas marcadas con el sello de mas severidad y mas dureza; y la prueba mas convincente de este aserto es, que en cuantos alborotos hubo, en cuantas ocasiones se desobedeció al gobierno, acudían siempre en vindicación de sus agravios, á las Cortes, consideradas constantemente como el paladium de las libertades públicas”. Para el que presidió el único gobierno exaltado del Trienio, incluso la Constitución, entonces tan admirada, y cuya aplicación intacta defendía con vehemencia a través de *El Espectador*, es objeto de reproches: “La Constitución de 1812, renació muerta: era imposible su observancia, como la de toda ley que no es querida por el mismo que está llamado á ejecutarla, como toda ley que incurre en la viva enemistad de clases poderosas, cuya influencia no destruye y anonada desde su creación [...] la Constitución de 1812, renació con todos los gérmenes y síntomas de una muerte inevitable. Arrastró tres años de existencia lánguida y permaneció en pie, mientras sus enemigos y declarados rebeldes fueron todos españoles”. San Miguel, *Vida de D. Agustín de Argüelles*, II, pp. 129-131. Claro que escribe esto en 1852, asentado ya en ese pensamiento “comprensivo” hacia el moderantismo inaugurado por el Estatuto Real al que se adhirió rápidamente y que justificaba en una obra publicada en 1837: “En España

brillante carrera profesional durante la etapa isabelina.

Se trata de un procedimiento que afectó asimismo a la historiografía decimonónica de la que se nutrieron los citados Pérez Galdós o Pi i Margall, y tantos otros, cuyo cuestionamiento de la Constitución de 1812, de la visión despectiva de los denominados exaltados y del propio Riego, en definitiva, de la minusvaloración del Trienio, todavía nos alcanza en muchos sentidos. Parece claro, sin embargo, que, en contraposición, aunque aparentemente la ganaron durante buena parte del ochocientos, a la larga perdieron la batalla, fundamental para nuestro sistema en la medida que conforma la base de todo pluralismo, de la opinión pública.

“Como hay innumerables cosas más allá del entendimiento humano usamos constantemente términos simbólicos para representar conceptos que no podemos definir o comprender del todo (porque) el hombre jamás concibe cosa alguna por entero o la comprende completamente“, escribe Jung¹⁸. Y Riego, cuyo nombre va indisolublemente unido a la Constitución de 1812 y su aplicación íntegra, a pesar de las “envidias” y envilecimiento de todo lo que hacía, decía y hasta de su muerte¹⁹, acabó por convertirse en el símbolo del “gobierno de las leyes y no de los hombres”, de la lealtad constitucional y de los avanzados principios y valores que aquella representaba en su época. En resumen, del constitucionalismo moderno.

reina este sentimiento de igualdad por lo menos con tanta fuerza como en Francia. En mi opinión somos por índole, por hábito, por educación el pueblo más democrático de Europa. A fuerza de vicisitudes, de trastornos, de revoluciones; á fuerza de tantos caprichos de la suerte, á fuerza de ver hombres cambiar tan rápidamente de situación y rango. Á pesar de que el estamento de procures pudo estar bien calculado para atraer ciertas gentes al partido liberal, no estaba su institución en nuestros hábitos”. San Miguel, Evaristo, *Aristocracia*. Madrid, imprenta M. de Burgos, 1837, p. 3. Desde esta perspectiva, se entiende no sólo el pretendidamente sutil juicio peyorativo de Riego, radicalmente contrario a la imagen que difundió en el Trienio, sino el hecho de que ni él ni su familia –su hermano fue magistrado del Supremo– sufrieran ninguna de las purgas aplicadas a otros exaltados tras la muerte de Fernando VII, es decir, en plena época constitucional.

¹⁸ Jung, *El hombre...*, p. 17.

¹⁹ “No hablemos del lenguaje de la invidia y del servilismo, llamando á esta accion generosa, á éste noble y patriótico alzamiento con el nombre envileciente de insurrección militar. Nada dice este nombre ni otro que se invente para robar á Riego y á sus compañeros el merito que contraxeron en la empresa, y la gloria de ser los salvadores de su patria, y los libertadores [...]. La palabra insurrección en su boca no significa mas que envidia, emulacion, ó gran interés en la opresion, que destruyen estas beneficas insurrecciones”, escribe alguien tan poco sospechoso de partidismo como Le Brun, *Retratos*, pp. 47-48.

FUENTES

ARCHIVO CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

ACD, *Serie documentación Electoral*: 6 nº 27.

ACD, ES.28079. P-01-000037-0116.

ACD, Sesión de la diputación permanente de 13 de octubre de 1821.

ACD, *Papeles secretos y reservados de Fernando VII*, Acuerdos, disposiciones, resoluciones y manifiestos de las Cortes, H-03-T.57, F.229, 221, 222; H-03-T.41, F.189-190 y 191.

ACD, *Exposiciones de Rafael del Riego en queja del ExMinistro Ramón Feliú*, sig. P-01-000044-0199, 1-2-3.

ACD, *fondo General*, P-01-000044-0199, 1-3-5.

ACD, *Unidad Documental compleja*, A-02-000126-0142 leg. 142-2.

BIBLIOTECA NACIONAL

BN, Mss/20270/176.

BN, Mss/VE/1223/26(2).

BN, Mss/20270/164.

BN, Mss/20270/42.

DIARIO DE LAS SESIONES DE CORTES

Legislatura de 1820 (6 de junio-9 noviembre). T. I y II, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1871; T. III, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1873.

Legislatura de 1821 (20 febrero-30 junio). T. I y II, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1871; T. III, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1873.

Legislatura extraordinaria 1821-22 (22 noviembre 1821-14 febrero 1822). T. I y II, Madrid, Imprenta J. A. García, 1871.

Legislatura de 1822 (15 febrero-30 de junio). T. I y II, Madrid, Imprenta J. A. García, 1872; T. III. Madrid, Imprenta J. A. García, 1873.

Legislatura extraordinaria 1822-23 (1 octubre 1822-14 febrero 1823). T. I, Madrid, Imprenta J.A. García, 1872 y T. II. Madrid, Imprenta y fundición de J. A. García, 1875.

Diario de las Cortes celebradas en Madrid en 1823. Madrid, Imprenta y fundición de los hijos de J. A. García, 1885.

Diario de las sesiones de Sevilla y Cádiz en 1823. Madrid, en la Imprenta Nacional, 1858.

Actas de las Sesiones secretas de las Cortes ordinarias y extraordinarias de los años 1822 y 1823 y de las celebradas por las comisiones permanentes de las mismas Cortes ordinarias. Madrid, Imprenta de J. A. García, 1874.

PERIÓDICOS

Diario político de Zaragoza.

El Cetro Constitucional. Semanario Político.

El Censor.

El Conservador.

El Constitucional, o sea, crónica científica, literaria y política.

El Eco de Padilla.

El Espectador.

El Imparcial.

El Universal.

El Zurriago.

Gaceta de Madrid.

Gaceta Española.

Le Conservateur.

Mercurio de España.

Miscelánea de Comercio, artes y literatura.

Miscelánea de Comercio, Política y Literatura.

Ocios de los españoles emigrados.

TEXTOS JURÍDICOS, DOCTRINALES, BIOGRÁFICOS, MEMORIAS DE LOS CONTEMPORÁNEOS Y OTROS

ALCALÁ-GALIANO, Antonio. *Examen crítico de los bandos del gefe político y capitán general de la provincia de Madrid el 7 de este mes de septiembre y breves reflexiones sobre los sucesos de estos días.* Madrid, Imprenta de Collado, 1820.

ALONSO, José Vicente, *Oración pronunciada el día 17 de septiembre de 1822 en el acto de recibir los grados de Maestro en Artes y Doctor en leyes el ilustre ciudadano general Don Rafael del Riego por el Doctor Don José Vicente Alonso.* Granada, Imprenta del ciudadano Benavides, 1822.

ANDRÉS Y ALMARZA, Vicente, *A los patriotas españoles.* Madrid, Imprenta de Miguel de Burgos, 1822.

ARGÜELLES, Agustín de, *De 1820 a 1824 por –*, con una noticia biográfica del autor por José de Olózaga y un prólogo por Ángel Fernández de los Ríos. Madrid, A. de S. Martín, 1864.

A. T., *Historia de la Revolución en España en 1820.* Cádiz, Imprenta de Carreño, 1820.

BAYO, Estanilao de Kotska, *Historia de la vida y reinado de Fernando VII de España: con documentos justificativos, ordenes reservadas. Y numerosas cartas del mismo monarca, Pio VII, Carlos IV, María Luisa, Napoleón, Luis XVIII, el infante don Carlos y otros personajes.* 3 Tomos. Madrid, Imprenta de Repullés, 1842.

- BENTHAM, Jeremy (Jeremías), *Consejos que dirige a las Cortes y al pueblo español don Jeremías Benthán traducidos del inglés por José Joaquín Mora*. Madrid, imprenta de Repullés, 1820.
- *Principios de la ciencia social ó de las ciencias morales y políticas por el jurisconsulto inglés Jeremías Bentham ordenados conforme al sistema del autor original y aplicados a la Constitución española por D.Toribio Núñez*. Salamanca, Imprenta Nueva por Don Bernardo Martín, 1821.
 - *Carta que el célebre jurisconsulto y hábil publicista Jeremías Bentham dirigió a los españoles en el año de 1822, sobre la reforma proyectada en nuestra Constitución para establecer una Cámara alta. Precedida de un artículo en que se demuestran sus graves inconvenientes, por un español constitucional*, Cádiz, Campe, 1837.
 - *Sistema de la ciencia social ideado por el jurisconsulto inglés Jeremías Bentham: y puesto en ejecución conforme a los principios del autor original por el Dr D. Toribio Núñez, Jurisconsulto español*, Salamanca, Imprenta nueva por Bernardo Martín, 1820.
 - “Sofismas anárquicos”, en *El Censor*, 8 de junio-6 de julio de 1822.
 - *Tratados de legislación civil y penal, obra extractada de los manuscritos del señor Jeremías Bentham jurisconsulto inglés por el señor Esteban Dumont, miembro del consejo representativo de Ginebra y traducida al castellano con comentarios por Ramón Salas, ciudadano español y doctor por Salamanca con arreglo a la segunda edición, revista, corregida y aumentada*. Madrid, Imprenta de D. Fermín Villalpando, 1821.
- BOLINGBROKE, Henry St John, *Idea de un rey patriota*. Barcelona, Busquets, 1820 (edición CEPC, Madrid, 2014).
- BONALD, Louis-Gabriel, *Ensayo analítico acerca de las leyes naturales del orden social o del poder, del ministro y del súbdito en la sociedad*, traducido del francés al castellano por D. Juan Pérez Villaamil. Madrid, Imprenta Real 1823.
- Bosquejo del plan de la conspiración del 7 de julio. Correspondencia importante hallada aquel mismo día en la calle del Arenal nº primero*. Madrid, imprenta de don Antonio Fernández, 1822, 3 vols.
- BOTTON, Emilio, *Causas y remedios de los males de Cataluña*. Barcelona, Imprenta de Narciso Dorca, 1822.
- Breve respuesta del exgefe político de la provincia de Madrid don José Martínez San Martín a lo que dice la Comisión llamada de medidas sobre su conducta en los primeros días del mes de julio último*. Madrid, imprenta de don Mateo Repullés, 1823.
- BURGOS, Carmen de, *Gloriosa vida y desdichada muerte de don Rafael del Riego (un crimen de los Borbones)*. Madrid. Biblioteca Nueva, 1931.

- CALATRAVA, José María, *Respuesta de Don José María Calatrava a un libelo publicado contra él*. Londres, Imp. A. Macintosh, 1825.
- Causa formada en octubre de 1823 a virtud de orden de la Regencia por el Señor Alcalde don Alfonso de Cavia contra don Rafael del Riego publicada por don Vicente de Santos, hijo del defensor del expresado General y destina su producto líquido para los gastos de la presente guerra*. 2ª edic. Madrid, Imprenta de don M. de Burgos, 1835.
- Causa formada contra Juan Antonio Gippini dueño del café de la Fontana de Oro en suposición de haber permitido hablar públicamente en la tribuna de dicho café a algunos individuos de aquella reunión sin conocimiento ni noticia del escelentísimo señor gefe de la capital José Martínez San Martín / y defensa por escrito del mismo Gippini*. Madrid, Imp. de E. Aguado, 1821.
- CARNICERO, José Clemente, *Causas de la división de ánimos y escasez de dineros que hay en España y medios eficaces de repararlas*. Madrid, Imprenta de José del Collado, 1822.
- C de P. y V. *No hay moderados ni exaltados en España. Hay pícaros como siempre. Verdades que todos conocen y nadie ha dicho hasta ahora. Dedicado a los verdaderos amantes de la Patria por un jubilado..* Madrid, Imprenta de don J. Ramos y compañía, 1821.
- CHATEAUBRIAND, François-René, vicomte de, *Congrès de Vérone: guerre d'Espagne: negociations, colonies espagnoles*. Paris/Leipzig, chez Brockhaus et Avenarius, 1838.
- *Mémoires d'Outre-tombe*, Paris, Garnier frères, 1910.
 - “De la Espagne” en *Le Conservateur*, febrero 1820.
- CLAUSEL DE CORSENGUES, Jean-Claude, *Observaciones varias sobre la Revolución de España, la intervención de la Francia y las actuales y antiguas Cortes*, obra escrita en francés por –, traducida al español por un Amigo de la Religión y del Rey. Perpiñan, 1823 (por J. Alzine).
- Colección de decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de 1820 y 1821 desde 6 de julio hasta el 9 de noviembre de 1820 mandadas imprimir por orden las mismas*. T. VI, Madrid, Imprenta Nacional, 1821.
- T. VII, *desde el 25 de febrero hasta el 30 de junio de 1821*. Madrid, Imprenta Nacional, 1821.
 - T. VIII, *desde el 22 de septiembre de 1821 hasta el 14 de febrero de 1822*. Madrid, Imprenta Nacional, 1822.
 - T. IX *desde el 1º de marzo hasta el 30 de junio de 1822 impresa por orden de las mismas* Madrid, Imprenta Nacional, 1822.
 - T. X, *desde el 3 de octubre de 1822 hasta el 23 de abril de 1823*. Madrid, Imprenta de don Tomás Albán y Compañía, 1823.

Colección de las causas más célebres e interesantes de los mejores modelos de alegatos, acusaciones fiscales, interrogatorios y las más elocuentes defensas en lo civil y lo criminal del foro español, francés e inglés por una sociedad de jurisconsultos, parte española. T. I. Madrid, Librería de don Leocadio López Editor, 1863.

Conclusión fiscal, defensa y determinación definitiva del Consejo de Guerra de oficiales generales celebrado en Zaragoza en 11 de abril de 1823 para fallar la causa formada al Teniente Coronel don Fernando de Alcozer en averiguación de la conducta que observó en las ocurrencias de dicha ciudad en el 29 de octubre de 1821 de cuyas resultas se separó de su mando político y militar al brigadier Don Francisco Moreda. Zaragoza, por Roque Gallifa, 1823.

CONSTANT, Benjamin, “De la doctrine politique qui peut réunir les partis en France”, en *Écrits et discours politiques*. Presentation, notes et commentaires par O. Pozzo di Borgo. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1964, T. II.

– “De l’arbitraire”, en *Écrits*, pp. 72 ss.

– “Discurso de 16 de septiembre (30 de fructidor) de 1797”, en *Écrits*, pp. 115 ss.

– “Des principes”, en *Écrits*, 63 ss.

– *Principes de politique applicables à tous les gouvernemens représentatifs et particulièrement à la Constitution actuelle de la France par M. Benjamin Constant, conseiller d’État.* Paris, Chez Alexis Eymery, Mai 1815.

– *Curso de Política Constitucional. traducido libremente al español por Marcial Antonio Lopez.* 3 vols, Madrid, Imprenta de la Compañía, 1820.

Contestación que da Pedro Tomillo Albado al discurso que el ciudadano Juan Romero Alpuente publicó en septiembre último sobre la suprema junta de conspiradores contra el sistema constitucional y acerca de la responsabilidad moral y legal de los Ministros. Madrid, Imprenta de doña Rosa Sanz 1821.

D. L. S. (Coronel), *Manual de la constitución o Compendio razonado de sus leyes fundamentales, y de los derechos y deberes de todos los Ciudadanos.* 2ª edic., León, Imprenta de Miñón, 1820.

Del poder Judicial y de la necesidad urgente de adaptarlo a la Constitución política por el autor del papel suelto la Nación y el Gobierno. Madrid, Imprenta calle de la Greda, 1822.

DESTUTT DE TRACY (Antoine Louis Claude Destutt, comte de Tracy), *Comentario sobre el Espíritu de las Leyes de Montesquieu por Destutt de Tracy con las observaciones inéditas de Condorcet* traducido del francés al español por el doctor D. Ramón SALAS. Burdeos en la imprenta de Lawalle joven, 1821 (incluye el opúsculo Cuales son los medios de fundar la moral de un pueblo, pp. 457 ss).

Dictamen y proyecto de ley sobre señoríos presentados a las Cortes por su comi-

- sión primera de legislación y mandado imprimir por orden de las mismas.* Madrid, en la imprenta de la calle de la Greda, 1820.
- Discurso pronunciado por el Príncipe de Anglona Presidente de la Sociedad Constitucional celebrando el aniversario del restablecimiento de la Constitución Política de esta Monarquía en el día 19 de marzo de 1822.* Madrid, Imprenta de don Leon Amarita, 1822.
- Discours du Roi [Louis XVIII], prononcé le 28 janvier 1823, à l'ouverture de la session des Chambres.* Paris, Impr. royale, 1823.
- Discurso sobre el juramento prestado por Su Magestad en la sesión de 9 de julio de 1820.* Manresa, Imprenta de Martín Trullás, 1823.
- Don Rafael de Riego. Drama popular, en cinco jornadas y en prosa,* original de D. Ramón de Valladares y Saavedra. Madrid: Imprenta de G. González, 1854, publicado recientemente por Gloria Sanz Testón en *Trienio: Ilustración y Liberalismo*, nº 74, 2019, pp. 9-73.
- Don Raphael del Riego's Leben und Hinrichtung. Eine Biographische Skizze für Freunde der Geschichte.* Augsburg Engelbrecht, 1824.
- España triunfante del ocio, del lujo y de ciertas preocupaciones, bajo el gobierno de la constitución política de la monarquía* por un español amante de su patria. Madrid, 1820, en la Imprenta que fue de Fuentenebro, 1820.
- Examen analítico del Dictamen de la Comisión de medidas en cuanto á la responsabilidad que propone se exija al Consejo de Estado, precedido de una carta sobre el mismo asunto.* Madrid, imprenta nacional, 1823.
- Exposicion hecha á las cortes extraordinarias por 66 diputados sobre las causas de los males que afligen á la Nacion.* Madrid, se hallará en la librería de Ranz, Imprenta calle de la Greda, por Cosme Martínez, 1822.
- FELIU, Ramón, "Artículo único", en *El Universal* el 7 de julio de 1822 (posteriormente apareció como publicación independiente).
- FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Fernando, *Mis Memorias íntimas* por el Teniente General don –, Marqués de Mendigorriá. T. I. Madrid, Establecimiento tipográfico Ribadeneyra, 1886.
- FLÓREZ ESTRADA, Álvaro, *Representación hecha á SMC. el señor D. Fernando VII en defensa de las Cortes.* Impresa en Londres en 1818 y reimpresa después varias veces. Madrid, en la imprenta de Villalpando, año de 1820.
- GUIZOT, François Pierre Guillaume, *Du gouvernement de la France depuis la restauration, et du ministère actuel.* Paris, Librairie Française de Ladvocat, 1820.
- Impugnación del discurso del vizconde de Chateaubriand sobre la revolución en España* por D.SM. Madrid, en la imprenta que fue de Fontenebro, 1820.
- Informe presentado a las Cortes en la sesión pública de 20 de marzo por la comisión especial nombrada para examinar el estado político de la Nación.* Madrid, Imprenta de las Cortes, 1821.

- JAUMANDREU, Eudaldo, *Curso elemental de Derecho Público*. Barcelona, en la imprenta del Gobierno Político Superior, 1820. Una segunda edición aumentada, *Curso elemental de derecho público precedido de algunas nociones generales de derecho natural y de gentes*. Barcelona, Imp. de Tomás Gaspar, 1836.
- Le BRUN, Carlos, *Retratos políticos de la revolución de España ó de los principales personajes que han jugado en ella, muchos de los cuales están sacados en caricatura por el ridículo en que ellos se habían puesto [...] con unas observaciones políticas al fin sobre la misma y la resolución de la cuestión de porqué se malogró esta y no la de los Estados Unidos publicados en castellano*. Filadelfia, 1826.
- LEMERCIERE DE LA RIVIÈRE, Pierre-Paul (*L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, 1767, 2 volumes avec une table détaillée pour chacun*). *El orden natural y esencial de las sociedades políticas* traducido con notas por D. Justo Linda Calle y Zócrar. 2 ts. Valencia, Imprenta de don Benito Monfort, 1820.
- Los principios de la Constitución española y los de la justicia universal aplicados a la legislación de señoríos [...] dedicado a las Cortes por un jurisconsulto español*. Madrid, Imprenta de don Mateo Repull, 1821.
- MAC-CROHON, Juan, Carta al general don Rafael del Riego. BN, Mss 20270/42.
- MARTÍN HAASSE, José, *Juicio imparcial y preventivo de la opinión del Señor Moreno Guerra sobre prohibiciones*. Madrid, Imprenta de Espinosa, 1821.
- MARTÍNEZ DE LA ROSA, Antonio, *Breves observaciones de la nota pasada a varios gabinetes por los de Austria, Rusia y Prusia de resultas del congreso de Troppau*. Madrid, imprenta del Universal, 1821.
- MATTHEWES, George, *The Last Military Operation of General Riego: Also de Manner in wich he was Betrayed and Treated Until Imprisoned, a Narrative of the Sufferings of the Author in Prison*. London, Sinipkine and Co Rodwell and Co, 1824.
- Memoirs of the Life of Don Rafael del Riego By a Spanish Officier*. Reed. Anderite Press, 2015.
- Memoria de las operaciones de la columna móvil de las tropas nacionales al mando del Mariscal del Campo don Rafael del Riego publicada anteriormente por el Jefe de Estado mayor de la misma*. Nuevamente corregida y aumentada. Madrid, Imprenta de Collado, 1820.
- Memoria leida á las Cortes en la sesion publica de 5 de marzo de 1822*. Madrid, en la Imprenta Nacional, 1822.
- Memorias de don Antonio Alcalá Galiano dadas a conocer por su hijo*. Prólogo y edición de don Jorge Campos. Madrid, Atlas, 1955.
- MESONERO ROMANOS, Ramón, *Memorias de un sesentón y vecino de Madrid escritas por El Curiosos Parlante (1º) 1808-1823*. Madrid, 1881.

- MIÑANO, Sebastián, *Examen crítico, de las revoluciones de España de 1820 a 1823 y de 1836*. París, Librería de Delaunay, 1837.
- MORENO GUERRA, José, *Manifiesto a la nación española y particularmente a las futuras Cortes de 22 y 23 sobre las causas que han paralizado la revolución y la marcha de las Cortes de 20 y 21 por el ciudadano* –. Cádiz, Imprenta de la Sincera Unión del ciudadano J. G. de la Maza, 1822.
- MÜLLER, Wilhem, “Hymne auf den zod Raphael del Riego’s” en *Griechemlieder*. Leipzig, Brockhaus, 1844. pp. 165-70 (la primera edic. *Neue Lieder der Griechen*. Dessau, C.G. Ackermann, 1823).
- NÚÑEZ, Toribio, *Ciencia social según los principios de Bentham* por el doctor don –, Bibliotecario de la Universidad de Salamanca y diputado á Córtes en las de 1822. Obra impresa de orden del Gobierno. Madrid, Imprenta Real, 1822.
- Observaciones acerca de la administración militar en España* por J. M. B. Madrid, imprenta del Censor, 1821.
- Opinión sobre la Constitución política de la Monarquía española hecha en Cadix a principios del año 1812*. Escribiala un jurisconsulto español en Valencia en enero de 1813.
- PANDO FERNÁNDEZ DE PINEDO, Manuel (Marqués de Miraflores), *Apuntes históricocríticos para escribir la historia de la revolución de España, desde el año 1820 hasta 1823*. Londres, Oficina de Ricardo Taylor, 1834.
- PÉREZ GALDÓS, Benito., *Episodios Nacionales. El Terror de 1824*. Madrid, 1877.
- PI I MARGALL, Francisco, “Rafael del Riego condenado a la horca, Mina se exilia en Inglaterra” en <https://elobrero.es/cultura/historia/43099-el-final-de-rafael-del-riego-o-la-furia>
- Procès du Général Raphael del Riego précédé d’une notice biographique*. Paris, Ponthieu, 1823.
- Proyecto de Código de procedimiento criminal, presentado a las Cortes por la Comisión especial nombrada al efecto*. Impreso de órden de las mismas. Madrid, Imprenta Nacional, 1821.
- Reflexiones sobre la constitución militar*. Segovia, Imprenta de Espinosa, 1820.
- Relación de la solemne apertura de la cátedra de Constitucion Política de la Monarquia Española por los estudios de San Isidro de Madrid en el día 25 de febrero de 1814*. Madrid, imprenta nacional, 1814.
- Representación del Duque del Infantado al Congreso de las Cortes sobre infracciones a la Constitución*. Madrid, Imprenta de don Francisco Martínez Dávila, impresor de Cámara de SM 1821.
- REVILLA, Francisco Manuel, *Impugnación del discurso sobre la urgentísima necesidad de Cortes extraordinarias que escribió el ciudadano Juan Romero Alpuente*. Madrid, Oficina de don Francisco Martínez Dávila, 1821.

- RIEGO, Rafael del, *Carta al Rey de 21 de marzo de 1820*. BN, VE/1223/26(2). También en BDH.
- *Carta de 19 de noviembre de 1822 a Antonio de Andeyro y Aldao, Rector de la Universidad de Granada*. BN, Mss 20270/146.
 - *Exposición dirigida a las Cortes con motivo de la petición de su incorporación al ejército*, 1823. BN, Mss 20270/175.
 - *Representación hecha al Rey y a las Cortes por los generales de ejército de observación D. Rafael del Riego, D. Miguel López Baños y D. Felipe Arco-Agüero*. Mexico en la oficina de D. J. M. de Benavente y socios, 1820.
 - *Vindicación de los extravíos imputados al General D. Rafael del Riego el 7 de setiembre en las Cortes*. Madrid, Imprenta del Censor, 1820.
 - *Carta del General D. Rafael del Riego a sus compañeros de armas, los Generales López-Baños y Arco-Agüero*. Madrid, Imprenta de Collado, 1820.
 - *Representación a las Cortes de 11 de junio de 1822*. ACD.
- ROBERTSON, John, *Riego or the Spanish Martyr: a Tragedy in Five Acts*. Richmond P.D. Bernard con varias ediciones, 1850-1980, 1872, 1857.
- ROMERO ALPUENTE, Juan, “Historia de la revolución de España en los años 1820 a 1823, o sea, explicación de las causas por las que se perdió la libertad constitucional, publicada en del mismo, *Historia de la revolución española y otros escritos*, edición a cargo de Alberto Gil Novales, vol. II, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985.
- *Discurso sobre la Suprema Junta Central de Conspiradores contra el sistema constitucional, y acerca de la responsabilidad legal y moral de los ministros*. Madrid, Imprenta que fue de García, 1821.
 - *Discurso sobre el ministerio actual*. Madrid, Imprenta de Don Mateo Repullés, 1822.
 - *Observaciones sobre la probable disolución del Estado, o lo que es lo mismo la continuación del actual ministerio*. Madrid, Imprenta que fue de la Viuda de López, 1823.
- RUIZ DEL CERRO, Manuel, *La carta francesa con notas españolas*. Madrid, imp. Calle de los abades, 1822.
- SALAS, Ramón, *Lecciones de Derecho Público Constitucional*. Madrid, CEPC, 1982, con introducción de José Luis Bermejo.
- SAN MIGUEL, Evaristo, *Aristocracia*. Madrid, imprenta M. de Burgos, 1837.
- *Vida de D. Agustín de Argüelles por D. –*. 4 vols. Madrid, 1850/51. Vol. II, Imprenta de los Sres Andrés y Díaz, 1851.
 - *De la Guerra civil de España*. Madrid, Imp. M. de Burgos, 1856.
- Vida y milagros, muerte, entierro y honras de todos los ministerios que habido en España, desde que resucitó la Constitución en el año de 1820 / lo escribió un amante de su patria, religión y rey*. Madrid, Imprenta de Rita Ribas, viuda de Aznar, 1823.

WHITE, E. WINDUS, B.G., *Letter, 1823 Dec. 10, Ward of Bishopsgate [London], to Madame Riego*. BN, MSS/20270/164.

BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ ALONSO, Clara, “Las bases constitucionales del moderantismo español: El Fuero Real de España”, en FERNÁNDEZ SARASOLA, Ignacio (Coord.), *Constituciones en la sombra*. In Itinere, Universidad de Oviedo/CEPC, 2014.
- ALVARGONZÁLEZ, Manuel, “El pensamiento político de Rafael del Riego y su ruptura con los moderados”, en *El Cuaderno*, febrero 2020, en línea.
- ARNABAT MATA, Ramón, “La prensa del Trienio Liberal en Cataluña (1820-23)”, en *Cuadernos de la Ilustración y el liberalismo*, nº 26, 2020, pp. 641 ss.
- ARTOLA GALLEGU, Miguel, *Partidos y programas políticos, 1808-1936*. Madrid, Alianza Editorial, 1991.
- ARTOLA RENEDO, Andoni, *De Madrid a Roma. La fidelidad del episcopado en España (1760-1833)*. Gijón, Trea, 2013.
- BLANCO VALDÉS, Roberto L., “Álvaro Flórez Estrada teórico de la revolución militar gaditana”, en Varela Suanzes, Joaquín (coord.), *Álvaro Flórez Estrada (1766-1853), política, economía, sociedad*. Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 2004 y también en *Historia Constitucional*, n. 5, 2004.
- “Rey, Cortes y fuerza armada en el Trienio Liberal: hacia una progresiva parlamentarización de la Monarquía constitucional”, en J. Cano Bueso, *Materiales para el estudio de la Constitución de 1812*. Madrid, Tecnos, 1989, pp. 75 ss.
- BOBBIO, Norberto, *Estudios de Historia de la Filosofía: de Hobbes a Gramsci*. Barcelona, Debate, 1991.
- BUSTOS, Sophie, “Francia y la cuestión española, el golpe de Estado del 7 de julio de 1822”, *Ayer*, nº 110, 2018, pp. 179 ss.
- CAÑAS DE PABLOS, Alberto, “Riego. Imagen pública y mito”, en *VI simposium internacional de hispanistas del siglo XIX*, en línea.
- “Riego después de Riego: la pervivencia póstuma de un mito heroico liberal en España, Reino Unido, Francia y Rusia (1823-1880)”, en *Historia y Política*, nº 45, 2021, pp. 143-173.
- CARANTOÑA ÁLVAREZ, Francisco, “Las elecciones de 1821, primer ensayo de competición de “partidos” en el constitucionalismo liberal español”, en *Historia constitucional* n. 21, 2020, pp. 63-105.
- “El difícil camino hacia la monarquía constitucional: 1820, del pronunciamiento a la revolución”, en Marieta Cantos Casenave, Alberto Ramos Santana (eds), *Conspiraciones y pronunciamientos: el rescate de la libertad (1814-1820)*. Universidad de Cádiz, 2019, pp. 113-147.
- “1820, una revolución mediterránea. El impacto en España de los acontecimientos de Portugal, Italia y Grecia”, en *Spagna contemporanea*, nº 46, 2014.
- CORONAS GONZÁLEZ, Santos M., “La responsabilidad de los Ministros en la

- España Constitucional”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, 1986, pp. 543 ss.
- CRUZ VILLALÓN, Pedro, *El Estado de sitio y la constitución: la constitucionalización de la protección extraordinaria del Estado (1789-1878)*. Madrid, CEC, 1980.
- CUENCA TORIBIO, José Manuel, “En los orígenes de la Historia peninsular contemporánea: Ejército y liberalismo”, en *Revista de Derecho Político*, nº 83, 2012, pp. 294 ss.
- DÍAZ, Andrés, “John Rawls y el contractualismo”, *Revista española de control externo*, pp. 159 ss.
- DIPPEL, Horst, *Constitucionalismo moderno*. Madrid, Marcial Pons, 2009.
- DUFOUR, Gérard, “Rafael del Riego dans la poésie de circonstance du Triennat libéral”, en *Bulletin d’Historire Contemporaine de l’Espagne*, nº 54, 2020, en línea.
- ELORZA, Antonio, “La ideología moderada en el Trienio Liberal”, en *Cuadernos Hispanoamericanos*, nº 288, 1974.
- FERNÁNDEZ SARASOLA, Ignacio, “Los partidos políticos en el pensamiento español (1783-1855)”, *Historia Constitucional*, nº 1, 2000, pp. 97-163.
- “El diseño de un parlamento alternativo durante el Trienio constitucional”, en *Revista de las Cortes Generales*, nº 108, 2020, pp. 41 ss.
 - *Proyectos constitucionales de España (1786-1824)*. Madrid, CEPC, 2004.
 - *Los primeros parlamentos modernos de España (1780-1823)*. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
 - (Coord.), *Constituciones en la sombra. In Itinere*, Universidad de Oviedo/CEPC, 2014.
 - “Dirección política y acción de gobierno en la Historia Constitucional”, *Historia Constitucional*, nº 4, 2003, pp. 151-195.
 - “Opinión pública” y “libertades de expresión” en el constitucionalismo español (1726-1845)”, en *Historia Constitucional*, nº 7, 2006.
 - El primer liberalismo en España (1808-1833), en *Historia Contemporánea*, nº 43, 2011, pp. 547-583.
 - *Reglamentos Parlamentarios (1810-1977)*. Madrid, Iustel, 2012.
 - “Las primeras teorías del senado en España”, en *Teoría y realidad Constitucional*, nº 17, 2006, pp. 169 ss.
 - “Valor normativo y supremacía jurídica de la Constitución de 1812”. Puede consultarse ahora en Biblioteca Virtual Cervantes.
 - *Poder y Libertad: Los Orígenes de la responsabilidad del Ejecutivo en España (1808-1823)*. Madrid, CEPC, 2001.
- FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier, “Liberalismo en España (1810-1850). La construcción de un concepto y la forja de una identidad política”, en *La au-*

- rorra de la libertad. Los primeros liberalismos en el mundo iberoamericano.* Madrid, Marcial Pons, 2012.
- FERNÁNDEZ SOSPEDRA, Manuel, “El camino a la guerra civil. La política de orden público”, en *Historia constitucional*, nº 21, 2020, pp. 27-62.
- FUENTES, Juan Francisco, “‘Yo nada valgo’. Rafael del Riego y la revolución liberal española”, en Manuel Pérez Ledesma e Isabel Burdiel (eds), *Liberales eminentes*. Madrid, Marcial Pons, 208, pp. 25 ss.
- GARCÍA MONERRIS, Encarna y GARCÍA MONERRIS, Carmen, *La Nación Secuestrada. Francisco Javier Elío, Manifiesto y Correspondencia*. Valencia, Universitat de Valencia, 2008.
- GIL NOVALES, Alberto., “Rafael del Riego personificación de la libertad”, en *Clío: Revista de historia*, nº. 18, 2003, p. 85 ss.
- *Ejército, pueblo y Constitución. Homenaje al General Rafael del Riego. Actas del Coloquio Internacional celebrado en la Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid, los días 9, 10 y 11 de abril de 1984. Anejo a Trienio: Ilustración y liberalismo*, 1987.
 - “Prisión y muerte de Riego”, en *Trienio: Ilustración y liberalismo*, nº 27, 1996 pp. 27 ss.
 - *Las sociedades patrióticas (1820-23). Las libertades de expresión y reunión en el origen de los partidos políticos*. Madrid, Tecnos, 1975.
 - *La sociedad patriótica del café de Lorencini*. Madrid, Maestre, 1971.
 - *Textos exaltados del Trienio Liberal*. Madrid, Júcar, 1979.
 - “Exaltación liberal y republicanismo en España”, en *Revista de Historia Moderna*, nº 12, 1993, pp. 249-58.
 - *El Trienio Liberal*. Madrid, Siglo XXI, 1980.
 - (ed.), *La revolución liberal*. Madrid, Ediciones del Orto, 2001.
 - *Rafael del Riego. La revolución de 1820 día a día: Cartas, escritos y discursos*. Madrid, Tecnos, 1976.
- HABERMAS, Jürgen, *Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública*. 2ª edic., Barcelona, Gustavo Gilli, 1981.
- JUNG, Carl Gustav, *El hombre y sus símbolos*. Madrid, Paidós Ibérica, 1995.
- KANTOROWICZ, Ernst H., *Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval*. Madrid, Akal, 2012.
- LAKOFF, George, *No pienses en un elefante. Leguaje y debate político*. Madrid, Editorial Complutense, 2007.
- LA PARRA LÓPEZ, Emilio, “1820: ruptura entre la Jerarquía eclesiástica y el Estado Constitucional”, en *Historia constitucional*, nº 21, 2020, pp. 5-26.
- “Cultura católica: confesionalidad y secularización”, en Miguel Ángel Cabrera y Juan Pro (coords.), *La creación de las culturas políticas modernas, 1808-1833*. Madrid/Zaragoza, Marcial Pons/Prensas Universidad de Zaragoza, 2014, pp. 140-148.

- MARTÍNEZ DE LAS HERAS, Agustín, “La prensa liberal del ‘Trienio’ vista desde El Universal”, *Historia y Comunicación Social*, nº 5, 2000.
- “La práctica periodística a través de El Universal (1820-1823)”, en Alberto Gil Novales (ed.), *La revolución liberal*. Madrid, Ediciones del Orto, 2001, pp. 401-418.
- MORANGE, Claude, *Una conspiración fallida y una constitución nonnata (1819)*. Madrid, CEPC, 2006.
- *En los orígenes del moderantismo decimonónico. El Censor (1820-1822). Promotores, doctrina e índice*. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2019.
- PALMA GONZÁLEZ, Eric Eduardo, “El estado de sitio en las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal”, *Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea*, 21, 2001, pp. 181 ss.
- PELOSI, Hebe Carmen, “La política exterior de España en el Trienio Constitucional, 1820-1823”, en *Cuadernos de Historia de España*, nº XLIX-L (1969), pp. 214-293 y LI-LII, pp. 316-443.
- PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio. *Milicia Nacional y Revolución Burguesa*. Madrid, CSIC, 1978.
- PETIT, Carlos, “Españolas gaditanas. En recuerdo de Antonio Hespanha”, en *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, nº 49, 2020, pp. 419 ss.
- “Los Códigos del Trienio Liberal. Una exégesis del artículo 258 de la Constitución de Cádiz”, en *Historia Constitucional*, nº 21, 2020, pp. 106-137.
- “Derecho civil e identidad nacional”, en *InDret. Revista de análisis del Derecho* 3/2011.
- *Un Código civil perfecto y bien calculado. El proyecto de 1821 en la historia de la codificación*. Madrid, Dykinson/Universidad Carlos III de Madrid, 2019, “Proyecto de Código civil, 1821”, pp. 267-378.
- RAMÍREZ, Pedro J., *La desventura de la Libertad. José María Calatrava y la caída del régimen constitucional español, 1823*. Madrid, la Esfera de los Libros, 2014.
- RAMOS OLIVER, Francisco, “La trayectoria militar de Rafael del Riego”, en *Revista de historia militar*, nº 112, 2012, pp. 297 ss.
- RAWLS, John, *El Liberalismo político*. Barcelona, Crítica, 1996.
- REVUELTA, Manuel, *Política religiosa de los liberales en el siglo XIX. Trienio Constitucional*, Madrid, CSIC, 1973.
- ROMEO MATEO, María Cruz, “Del principio de legitimidad a la defensa de la libertad de la Nación: la revolución de 1820 y las relaciones internacionales”, en *Hispania*, 48-168, 1988, pp. 201-226.
- RUIZ JIMÉNEZ, Marta, *El Liberalismo exaltado: La confederación de comu-*

- neros españoles durante el trienio liberal*. Madrid, Editorial Fundamentos, 2007.
- RÚJULA, Pedro, *Constitución o muerte. El Trienio liberal y los levantamientos realistas en Aragón. (1820-1823)*. Zaragoza, Edicions del'Astral, 2000.
- SALINAS GUIRAO, Miriam, "El liderazgo de Rafael del Riego en el Trienio Liberal: símbolo y trascendencia", en *Revista internacional de Historia de la Comunicación*, nº 16, 2021, pp. 300-322.
- SÁNCHEZ i CARCELÉN, Antoni, "La formación de la Milicia Nacional en Lleida (1820-1821)", en *Cuadernos De Historia Contemporánea*, 30, 251-271.
- SÁNCHEZ MANTERO, Rafael, *Las Cortes de Sevilla en 1823*. Parlamento de Andalucía, 1986.
- SÁNCHEZ MARTÍN, Víctor, "El héroe revolucionario en el Parlamento. La labor como Diputado de Rafael del Riego (1822-23)", en Repeto García, Diana (coord.), *Las Cortes de Cádiz y la Historia Parlamentaria*. Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2012.
- *Rafael del Riego. Símbolo de la Revolución Liberal*. Universidad de Alicante, 2016.
- STITES, Richard, *The Four Horsemen: Riding to Liberty in Pos-Napoleonic Europe*. Oxford/New York, Oxford U.P., 2014.
- TEIJEIRO DE LA ROSA, "Las ideas de Juan Camuñas para un proyecto de Constitución Militar" en Fernández Sarasola, Ignacio (ed.). *Constituciones en la sombra (Proyectos constitucionales españoles, 1809-1823)*. Oviedo, Seminario Martínez Marina, "In itinere", 2014 (en línea).
- TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel Teruel, *Obispos liberales. La utopía de un proyecto (1820-1823)*. Lleida, Milenio, 1996.
- TORRE DEL RIO, Rosario de la, "El falso tratado de Verona de 1822", en *Cuadernos de Historia Contemporánea*, 2011, vol. 33, 277-293.
- URQUIJO GOITIA, José Ramón. *Diccionario Biográfico de los Ministros Españoles en la Edad Contemporánea (1808-2000)*, en línea.
- VARELA SUANZES, Joaquín, "Álvaro Flórez Estrada. Un liberal de izquierda", en *Progresistas. Biografías de reformistas españoles (1808-1939)*, ed. Javier Moreno Luzón, Madrid, Taurus, 2006, pp. 15-58.
- "Retrato de un liberal de izquierda", en *Historia Constitucional*, 5 (2004).
- (Coord.), *Álvaro Flórez Estrada (1766-1853). Política, economía, sociedad*, Oviedo, Junta general del Principado de Asturias, 2004.
- "El debate sobre el sistema británico de gobierno en España durante el primer tercio del siglo XIX", en José María Iñurritegui y José María Portillo (eds.), *Constitución en España, orígenes y destinos*. Madrid, CEPC, 1998, pp. 79-108.
- *La monarquía doceañista (1810-1837)*. Madrid, Marcial Pons, 2013.

- *La teoría del Estado en las Cortes de Cádiz. Orígenes del constitucionalismo hispánico*. Madrid, CEPC, 2^a edic., 2011.
- *Política y Constitución en España (1808-1978)*. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014, (2^a edición corregida y aumentada).
- “La Monarquía imposible: La Constitución de Cádiz durante el Trienio”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº LXVI, 1996, pp. 653 ss.
- “El primer constitucionalismo español y portugués (un estudio comparado)”, en *Historia Constitucional*, 13 (2012).

PROGRAMA HISTORIA DEL DERECHO
PUBLICACIONES
ISSN: 2255-5137

1. Luis Grau, *Orígenes del constitucionalismo americano. Corpus documental bilingüe / Selected Documents Illustrative of the American Constitutionalism. Bilingual edition*, 3 vols., Madrid 2009, 653+671+607 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/5669>
2. Luis Grau, *Nosotros el pueblo de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos y sus enmiendas. 1787-1992. Edición bilingüe / We the People of the United States. The U.S. Constitution and its Amendments. 1787-1992. Bilingual edition*, Madrid 2010, 338 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/8517>
3. Carlos Petit, *Fiesta y contrato. Negocios taurinos en protocolos sevillanos (1777-1847)*, Madrid 2011, 182 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/10145>
4. Pablo Mijangos y González, *El nuevo pasado jurídico mexicano. Una revisión de la historiografía jurídica mexicana durante los últimos 20 años*, Madrid 2011, 110 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/10488>
5. Luis Grau, *El constitucionalismo americano. Materiales para un curso de historia de las constituciones*, Madrid 2011, xxii+282 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/11865>
6. Víctor Tau Anzoátegui, *El taller del jurista. Sobre la Colección Documental de Benito de la Mata Linares, oidor, regente y consejero de Indias*, Madrid 2011, 175 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/12735>
7. Ramon Llull, *Arte de Derecho*, estudio preliminar de Rafael Ramis Barceló, traducción y notas de Pedro Ramis Serra y Rafael Ramis Barceló, Madrid 2011, 178 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/12762>
8. Consuelo Carrasco García, *¿Legado de deuda? A vueltas con la Pandectística*, Madrid 2011, 158 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/12823>
9. Pio Caroni, *Escritos sobre la codificación*, traducción de Adela Mora Cañada y Manuel Martínez Neira, Madrid 2012, xxvi + 374 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/13028>
10. Esteban Conde Naranjo (ed.), *Vidas por el Derecho*, Madrid 2012, 569 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/13565>
11. Pierangelo Schiera, *El constitucionalismo como discurso político*, Madrid 2012, 144 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/13962>

12. Rafael Ramis Barceló, *Derecho natural, historia y razones para actuar. La contribución de Alasdair MacIntyre al pensamiento jurídico*, Madrid 2012, 480 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/13983>
13. Paola Miceli, *Derecho consuetudinario y memoria. Práctica jurídica y costumbre en Castilla y León (siglos XI-XIV)*, Madrid 2012, 298 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/14294>
14. Ricardo Marcelo Fonseca, *Introducción teórica a la historia del derecho*, prefacio de Paolo Cappellini, Madrid 2012, 168 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/14913>
15. Alessandra Giuliani, *Derecho dominical y tanteo comunal en la Castilla moderna*, Madrid 2012, 134 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/15436>
16. Luis Grau, *An American Constitutional History Course for Non-American Students*, Madrid 2012, xx + 318 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/16023>
17. Antonio Ruiz Ballón, *Pedro Gómez de la Serna (1806-1871). Apuntes para una biografía jurídica*, Madrid 2013, 353 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/16392>
18. Tamara El Khoury, *Constitución mixta y modernización en Libano*, prólogo de Maurizio Fioravanti, Madrid 2013, 377 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/16543>
19. María Paz Alonso Romero/Carlos Garriga Acosta, *El régimen jurídico de la abogacía en Castilla (siglos XIII-XVIII)*, Madrid 2013, 337 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/16884>
20. Pio Caroni, *Lecciones de historia de la codificación*, traducción de Adela Mora Cañada y Manuel Martínez Neira, Madrid 2013, 213 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/17310>
21. Julián Gómez de Maya, *Culebras de cascabel. Restricciones penales de la libertad ambulatoria en el derecho codificado español*, Madrid 2013, 821 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/17322>
22. François Hotman, *Antitriboniano, o discurso sobre el estudio de las leyes*, estudio preliminar de Manuel Martínez Neira, traducción de Adela Mora Cañada, Madrid 2013, 211 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/17855>
23. Jesús Vallejo, *Maneras y motivos en Historia del Derecho*, Madrid 2014, 184 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/18090>
24. María José María e Izquierdo, *Los proyectos recopiladores castellanos del siglo XVI en los códigos del Monasterio de El Escorial*, Madrid 2014, 248 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/18295>

25. Regina Polo Martín, *Centralización, descentralización y autonomía en la España constitucional. Su gestación y evolución conceptual entre 1808 y 1936*, Madrid 2014, 393 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/18340>
26. Massimo Meccarelli/Paolo Palchetti/Carlo Sotis (eds.), *Il lato oscuro dei Diritti umani: esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giuridica dell'individuo*, Madrid 2014, 390 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/18380>
27. María López de Ramón, *La construcción histórica de la libertad de prensa: Ley de policía de imprenta de 1883*, Madrid 2014, 143 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/19296>
28. José María Coma Fort, *Codex Theodosianus: historia de un texto*, Madrid 2014, 536 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/19297>
29. Jorge Alberto Núñez, *Fernando Cadalso y la reforma penitenciaria en España (1883-1939)*, Madrid 2014, 487 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/19662>
30. Carlos Petit, *Discurso sobre el discurso. Oralidad y escritura en la cultura jurídica de la España liberal*, Madrid 2014, 185 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/19670>
31. Jean-Étienne-Marie Portalis, *Discurso preliminar sobre el proyecto de Código civil*, Madrid 2014, 53 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/19797>
32. Cesare Beccaria, *Tratado de los delitos y de las penas*, Madrid 2015, 87 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/20199>
33. Massimo Meccarelli/Paolo Palchetti (eds.), *Derecho en movimiento: personas, derechos y derecho en la dinámica global*, Madrid 2015, 256 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/20251>
34. Alessandro Somma, *Introducción al derecho comparado*, traducción de Esteban Conde Naranjo, Madrid 2015, 193 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/20259>
35. A. F. J. Thibaut, *Sobre la necesidad de un derecho civil general para Alemania*, Madrid 2015, 42 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/21166>
36. J.-J.-R. de Cambacérès, *Discursos sobre el Código civil*, Madrid 2015, 61 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/21254>
37. Ramon Llull, *Arte breve de la invención del derecho*, estudio preliminar de Rafael Ramis Barceló, traducción de Pedro Ramis Serra y Rafael Ramis Barceló, Madrid 2015, 233 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/21406>

38. F. C. von Savigny, *De la vocación de nuestra época para la legislación y la ciencia del Derecho*, Madrid 2015, 130 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/21520>
39. Joaquín Marín y Mendoza, *Historia del derecho natural y de gentes*, Madrid 2015, 40 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/22079>
40. Rafael Ramis Barceló, *Petrus Ramus y el Derecho. Los juristas ramistas del siglo XVI*, Madrid 2016, 250 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/22197>
41. Emanuele Conte, *La fuerza del texto. Casuística y categorías del derecho medieval*, edición de Marta Madero, Madrid 2016, 194 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/22261>
42. *Constituciones españolas: 1808-1978*, edición de Javier Carlos Díaz Rico, Madrid 2016, 259 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/22905>
43. Giacomo Demarchi, *Provincia y Territorio en la Constituyente española de 1931. Las raíces europeas del Estado integral*, Madrid 2016, 362 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/22906>
44. Miguel Ángel Ladero Quesada/César Olivera Serrano (dirs.), *Documentos sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo*, Madrid 2016, xx + 1446 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/23015>
45. Gustavo César Machado Cabral/Francesco Di Chiara/Óscar Hernández Santiago/Belinda Rodríguez Arrocha, *El derecho penal en la edad moderna: Nuevas aproximaciones a la doctrina y a la práctica judicial*, Madrid 2016, 217 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/23021>
46. Lope de Deza, *Juicio de las leyes civiles*, estudio preliminar de Víctor Tau Anzoátegui, edición de María José María e Izquierdo, Madrid 2016, 136 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/23228>
47. Henrik Brenkman, *Historia de las Pandectas*, estudio preliminar, traducción y notas de Juan Lorenzo, Madrid 2016, 426 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/23317>
48. Massimo Meccarelli (a cura di), *Diversità e discorso giuridico. Temi per un dialogo interdisciplinare su diritti e giustizia in tempo di transizione*, Madrid 2016, 287 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/23792>
49. Beatrice Pasciuta, *El diablo en el Paraíso. Derecho, teología y literatura en el Processus Satane (s. XIV)*, Madrid 2017, 264 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/24439>
50. Maximiliano Hernández Marcos, *Tras la luz de la ley: legislación y justicia en Prusia a finales del siglo XVIII. Un modelo de Ilustración jurídica*, Madrid 2017, 184 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/24488>

51. Eleonora Dell'Elicine/Paola Miceli/Alejandro Morin (comps.), *Artifícios pasados. Nociones del derecho medieval*, Madrid 2017, 307 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/24514>
52. Eva Elizabeth Martínez Chavéz, *Redes en el exilio. Francisco Ayala y el Fondo de Cultura Económica*, Madrid 2017, 145 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/24715>
53. Pierre de Jean Olivi, *Tratado de los contratos*, estudio preliminar de Rafael Ramis Barceló, traducción de Pedro Ramis Serra y Rafael Ramis Barceló, Madrid 2017, 171 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/25200>
54. Daniel Panateri, *El discurso del rey. El discurso jurídico alfonsí y sus implicaciones políticas*, Madrid 2017, 284 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/25377>
55. Joaquín Costa, *El problema de la ignorancia del derecho y sus relaciones con el estatus individual, el referéndum y la costumbre*, Madrid 2017, 85 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/25578>
56. Massimo Meccarelli (ed.), *Reading the Crisis: Legal, Philosophical and Literary Perspectives*, Madrid 2017, 224 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/25705>
57. Pablo Ramírez Jerez/Manuel Martínez Neira, *La historia del derecho en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Los concursos de derecho consuetudinario*, Madrid 2017, 322 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/25809>
58. Thomas Duve (coord.), *Actas del XIX Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, 2 vols., Madrid 2017, 1681 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/25729>
59. Víctor Saucedo, *Conspiracy. A Conceptual Genealogy (Thirteenth to Early Eighteenth Century)*, Madrid 2017, 350 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/26095>
60. Aurora Miguel Alonso (dir.), *Doctores en derecho por la Universidad Central. Catálogo de tesis doctorales 1847-1914*, Madrid 2017, 571 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/26198>
61. François Hotman, *Francogallia, o la Galia francesa*, estudio preliminar y traducción de Tamara El Khoury, Madrid 2017.
<http://hdl.handle.net/10016/26321>
62. Rafael Altamira, *Spain. Sources and Development of Law*, estudio preliminar y edición de Carlos Petit, Madrid 2018, lxxxvi + 126 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/26322>

63. Jesús Delgado Echeverría, *Joaquín Costa, jurista y sociólogo. Derecho consuetudinario e ignorancia de la ley*, Madrid 2018, 174 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/26335>
64. Rubén Pérez Trujillano, *Creación de constitución, destrucción de Estado: la defensa extraordinaria de la II República española (1931-1936)*, Madrid 2018, 367 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/27108>
65. Eugenia Torijano Pérez, *Los estudios jurídicos en la universidad salmantina del siglo XIX*, Madrid 2018, 625 pp. + apéndices complementarios.
<http://hdl.handle.net/10016/27392>
66. Laura Beck Varela/María Julia Solla Sastre (coordinadoras), *Estudios Luso-Hispanos de Historia del Derecho. Estudos Luso-Hispanos de História do Direito*, Madrid 2018, 543 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/27751>
67. Manuel Martínez Neira/Pablo Ramírez Jerez, *Hinojosa en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas*, Madrid 2018, 279 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/27810>
68. Rudolf von Jhering, *La lucha por el derecho*, estudio preliminar y edición de Luis Llorredo Alix, Madrid 2018, 137 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/27845>
69. Enrique Roldán Cañizares, *Luis Jiménez de Asúa: Derecho penal, República, Exilio*, Madrid 2019, 406 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/28236>
70. José María Puyol Montero, *Enseñar derecho en la República. La Facultad de Madrid (1931-1939)*, Madrid 2019, 486 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/28286>
71. Pedro L. López Herraiz, *Formar al hombre de Estado. Génesis y desarrollo de la École libre des sciences politiques (1871-1900)*, Madrid 2019, 333 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/28313>
72. Emiliano J. Buis, *El juego de la ley. La poética cómica del derecho en las obras tempranas de Aristófanes (427-414 a.C.)*, Madrid 2019, 442 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/28358>
73. Virginia Amorosi/Valerio Massimo Minale (ed.), *History of Law and Other Humanities: Views of the Legal World Across the Time*, Madrid 2019, 588 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/28459>
74. Carlos Petit, *Un Código civil perfecto y bien calculado. El proyecto de 1821 en la historia de la codificación*, Madrid 2019, 409 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/28678>

75. Eduardo de Hinojosa, *El elemento germánico en el derecho español*, Madrid 2019, 82 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/28877>
76. Carlos Petit (ed.), *Derecho ex cathedra. 1847-1936. Diccionario de catedráticos*, Madrid 2019, 491 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/28916>
77. Manuel Ángel Bermejo Castrillo (ed.), *La memoria del jurista español. Estudios*, Madrid 2019, 416 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/29108>
78. Elisabetta Fiocchi Malaspina/Simona Tarozzi (ed.), *Historical Perspectives on Property and Land Law. An Interdisciplinary Dialogue on Methods and Research Approaches*, Madrid 2019, 236 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/29290>
79. Daniel J. García López, *La máquina teo-antropo-legal. La persona en la teoría jurídica franquista*, Madrid 2020, 121 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/29463>
80. Concepción Arenal, *Las colonias penales de la Australia y la pena de deportación*, Madrid 2020, 99 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/29667>
81. Cristina Morales Segura, *Galeotes de mercurio. El caso de Mateo Alemán: la interacción entre el derecho y la literatura en el informe de la mina de mercurio de Almadén y El Guzmán de Alfarache*, Madrid 2020, 276 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/29888>
82. Eduardo de Hinojosa, *La condición civil de la mujer en el derecho español antiguo y moderno*, Madrid 2020, 50 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/30043>
83. Eduardo de Hinojosa, *Influencia que tuvieron en el derecho público de su patria y singularmente en el derecho penal los filósofos y teólogos españoles anteriores a nuestro siglo*, Madrid 2020, 146 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/30052>
84. Eva Elizabeth Martínez Chávez, *España en el recuerdo, México en la esperanza. Juristas republicanos del exilio*, Madrid 2020, 343 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/30520>
85. Rafael de Ureña y Smenjaud, *Una tradición jurídica española: La autoridad paterna como el poder conjunto y solidario del padre y de la madre*, estudio preliminar y edición de Carlos Petit, Madrid 2020, 174 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/30550>
86. Carlos Petit, *Derecho por entregas. Estudios sobre prensa y revistas en la España liberal*, Madrid 2020, 311 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/30841>

87. Massimo Meccarelli/Cristiano Paixão/Claudia Roesler (ed.), *Innovation and Transition in Law: Experiences and Theoretical Settings*, Madrid 2020, 352 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/31394>
88. Fernando Martínez-Pérez, *Posesión, dominio y Registro. Constitución de la propiedad contemporánea en España (1861-1944)*, Madrid 2020, 286 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/31430>
89. Fernando Liendo Tagle, *Prensa jurídica española. Avance de un repertorio (1834-1936)*, Madrid 2020, 235 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/31583>
90. Rafael Ramis Barceló, *El nacimiento de la Filosofía del derecho. De la Philosophia iuris a la Rechtsphilosophie*, Madrid 2021, 248 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/31704>
91. Eugenia Torijano Pérez, *Ser (de nuevo) doctor por Salamanca. Las tesis doctorales de la Facultad de Derecho en el Sexenio Revolucionario (1868-1874)*, Madrid 2021, 441 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/31694>
92. Víctor Saucedo, *The Poulterers' Case (1611): A Landmark in the History of Criminal Conspiracy*, Madrid 2021, 302 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/31790>
93. Albert Venn Dicey, *¿Puede enseñarse el derecho inglés en las universidades?*, estudio preliminar y traducción de Javier Carlos Díaz Rico, Madrid 2021, 134 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/31912>
94. Cristina Nogueira da Silva/Margarida Seixas (coordinadoras), *Estudos Luso-Hispanos de História do Direito. Estudios Luso-Hispanos de Historia del Derecho*, vol. II, Madrid 2021, 648 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/32002>
95. Giacomo Demarchi, Francesco Di Chiara, Elisabetta Fiocchi Malaspina, Belinda Rodríguez Arrocha (eds.), *Las fronteras de la Ilustración. Itinerarios entre historia y derecho*, Madrid 2021, 313 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/32201>
96. Manuel Ángel Bermejo Castrillo (ed.), *Temporalidades inter/disciplinares (Derecho, Filosofía, Política)*, Madrid 2021, 246 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/32263>
97. Julius Hermann von Kirchmann, *La falta de valor de la jurisprudencia como ciencia*, Madrid 2021, 43 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/32336>
98. Víctor Tau Anzoátegui, *Casuismo y sistema. Indagación histórica sobre el espíritu del Derecho Indiano*, Madrid 2021, xi + 617 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/32572>

99. Vicente Ángel Álvarez Palenzuela, *Documentos de Benedicto XIII referentes a la Corona de Castilla*, Madrid 2021, 3673 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/32581>
100. Jesús Bogarín Díaz, *Formación léxica y conceptualización jurídica: el vocablo «excepción»*, Madrid 2021, 193 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/33149>
101. Eduardo Esteban Magoja, *La obediencia a la ley como coraza del pueblo: la defensa de las instituciones jurídicas en el texto del Anónimo de Jámblico*, Madrid 2021, 141 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/33227>
102. Javier Carlos Díaz Rico, *El acceso a la cátedra. Inventario de oposiciones a cátedras jurídicas 1859-1983*, Madrid 2021, 1119 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/33711>
103. Clara Álvarez Alonso, *Rafael del Riego. Una vida por la Constitución*, Madrid 2021, 232 pp.
<http://hdl.handle.net/10016/33721>